ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
UNIDAD CHIHUAHUA

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

TRADICIONES SELECTIVAS, CONCEPCIÓN DE LA TIERRA Y FORMACIÓN DEL ESTADO

La formación del Estado mexicano como una revolución cultural

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

P R E S E N T A

ALONSO DOMÍNGUEZ RASCÓN

DIRECTORA DE TESIS: DR. CARLOS GONZÁLEZ HERRERA

CHIHUAHUA, CHIH. **NOVIEMBRE DE 2007**

Índice

Introducción 1

Capítulo I. Apropiación, dominio, control territorial y las tierras de los pueblos 25

Las colonias militares 34

Las tierras de Villa López 72

Capítulo II. La reforma agraria: formas culturales y rituales de dominación 88

Marbete núcleo agrario 96

Los formatos de solicitud de ejidos 102

Los pueblos y la dominación del Estado 104

Las solicitudes de restitución 112

Capítulo III. La resistencia a la dominación 129

Janos y Casas Grandes 129

Namiquipa, Cruces y Galeana 158

Capítulo IV. La época de la intervención francesa en la tradición selectiva de los pueblos de Chihuahua 198

La llegada de Benito Juárez a Chihuahua 198

La tradición selectiva de los rarámuri 204

La rebelión de los rarámuri 211

La Comisión Deslindadora de la Alta y Baja Tarahumara 237

Capítulo V. Benito Juárez y las tradiciones selectivas entre los pueblos mestizos 250

La defensa de la república en la tradición selectiva de las colonias de Croix 269

San Antonio de los Arenales (Cuauhtémoc) 276

Conclusiones 290

Fuentes 309

Anexo 313

Introducción

El presente trabajo aborda la problemática relación de los pueblos norteños con el Estado desde la época colonial hasta el proyecto modernizante del Estado de la Revolución. Sirve de propósito para probar y proponer las relaciones de asociación y tradición selectiva como conceptos explicativos de las formas y rasgos culturales que muchos pueblos de Chihuahua desarrollaron en el contexto de los procesos de larga duración y de la compleja relación de dominación y resistencia entre los pueblos y el Estado en su proceso de formación. El eje articulador de la discusión y que recorre todo el trabajo es el agrario.

Los estudios de Corrigan y Sayer, así como de James Scott, han brindado enfoques y herramientas teóricas novedosas e interesantes para explicar la formación del Estado. Los dos primeros en *The great arch* reconstruyeron el proceso cultural de formación del estado inglés basados en las formas, rutinas, rituales y discursos del gobierno. Así Corrigan y Sayer ven la formación del Estado como una "revolución cultural." Para estos dos autores el "triunfo de la civilización capitalista moderna implica también una revolución cultural masiva – una revolución tanto en la manera en que los bienes eran producidos e intercambiados." El proceso que se da en la manera en que los súbditos del Estado elaboran sus experiencias como en la manera en que se elaboran las actividades del Estado por medio de las formas, rutinas y rituales con lo cual se constituyen y regulan las identidades sociales. [1]

Para Corrigan y Sayer las formas del Estado deben explicarse en relación a aquello contra lo que se ha formado. Tomar solo una parte oscurece el entendimiento de formas alternativas de poder, identidad, movimiento y acción que

[1] Phill Corrigan y Derek Sayer. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, Londres, Basil Blackwell, 1985. pp. 1-2.

crean las culturas opositoras. El Estado ha sido entendido sin referencia a estas culturas opositoras y estas últimas bajo la cuadrícula de las diversas "tradiciones selectivas" impuestas como si fueran todo lo que se puede decir o saber acerca de la cultura.[2] Así, Roseberry apoyado en Corrigan y Sayer afirma:

> "Ese control (del Estado) es al mismo tiempo jurídico y político (como entenderíamos ordinariamente 'la historia de los Estados y de los grupos de Estados'), y moral y cultural (cuando consideramos las complejas tensiones entre grupos dirigentes y entre grupos subalternos en las relaciones entre estado y sociedad civil). Todo estudio de la formación del estado debería, según esta formulación, ser también un estudio de la revolución cultural."[3]

The great arch deja de lado las preocupaciones y enfoques tradicionales de los científicos sociales acerca de la formación del Estado como proyecto de las élites modernizantes o sobre los orígenes del Estado como aparato de poder. El enfoque y acento está puesto en los procesos mediante los cuales se construyen las identidades de los subordinados del Estado por medio de la regulación moral, de los medios de difusión, de la administración cotidiana y ritual, lo mismo que a través de la opresión concreta y manifiesta.[4] La acción del Estado también se organiza a partir de clasificaciones individualizadas de la sociedad materializadas en categorías que son títulos impositivos como: ciudadano, causante fiscal, jefe de familia, ejidatario, etcétera, que están estructurados por ejes de clase, ocupación, género, edad, etnicidad y lugar.[5]

---

[2] Ibid. p. 7.
[3] William Roseberry. Hegemonía y lenguaje contencioso. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. p. 218.
[4] Nugent y Alonso. Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: Cultura popular y formación del estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua. en, Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. p. 176.
[5] Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent. Cultura popular y formación del Estado en el México revolucionario. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. pp. 48-49.

En un serio y bien logrado intento por analizar la formación del Estado mexicano en su aspecto relacional con la cultura popular, los autores de *Aspectos cotidianos de la formación del Estado* insisten en ver en "movimiento histórico" la hegemonía, la cultura, la conciencia y la experiencia motivada por "la estrecha vinculación que guarda con la conceptualización de la formación del Estado como un proceso cultural con consecuencias manifiestas en el mundo material." El supuesto básico de principio a fin de la obra es que la cultura popular y la formación del estado solo pueden entenderse en "términos relacionales." [6]

Hegemonía

El concepto de hegemonía es útil para explicar esos términos relaciónales. A Florence Mallon en sus estudios de "arqueología política" le parece particularmente útil el concepto de hegemonía. Pero prefiere verla como el ejercicio del poder a partir de una combinación de coerción y consentimiento. Otra parte importante de su definición la ve como un proceso. Ella define este concepto de dos maneras diferentes aunque a veces relacionadas. En la primera la hegemonía es un conjunto de procesos incubados, constantes y en curso, por medio de los cuales las relaciones de poder son debatidas, legitimadas y redefinidas en todos los niveles de la sociedad. Para Mallon esta definición resulta ser un proceso hegemónico. Se da y existe en todo tiempo y espacio. En su segunda definición, la hegemonía es un punto final real: la consecuencia de un proceso hegemónico. Se llega a un equilibrio siempre dinámico o precario, un contrato o acuerdo entre fuerzas disputantes. Entonces, quienes tienen el poder rigen a través de la coerción y el consentimiento.[7] Aunque Corrigan y Sayer no incluyen en su aparato teórico este concepto como herramienta explicativa

[6] Ibid, p. 41, 43.
[7] Florence Mallon. Reflexiones sobre las ruinas: formas cotidianas de formación del estado en el México decimonónico. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002, pp. 105-106.

podemos inferir que para ellos el poder del Estado no se basa en el consenso de los dominados, sino en las formas, los ritos, los registros; pues detrás de ellos hay una autoridad formal que con sus órganos coercitivos registra, preserva y devuelve "hechos", lo cual tiene el poder de definir realidades.[8]

The great arch sostiene que el "Estado afirma" (states state), es decir, a los subordinados se les recuerda y afirma repetidamente su identidad como subordinados mediante rituales y medios de regulación moral y no solo bajo formas concretas y manifiestas de opresión.

> "Entre la vasta gama de capacidades sociales humanas –posibles maneras de vivir la vida social- las actividades del estado 'estimulan' algunas de manera más o menos coercitiva, mientras suprimen, marginan, desgastan y socavan otras. Escolarización por ejemplo, viene a querer decir la educación; la vigilancia, orden; voto, participación política. Las clasificaciones sociales fundamentales, como las de edad y sexo, están sacralizadas por la ley, arraigadas en las instituciones, vueltas rutina en los procedimientos administrativos y simbolizadas en rituales del estado.[9]

En el libro *Aspectos cotidianos de la formación del estado,* Derek Sayer presenta un ensayo donde reconoce lo problemático de explicar cómo se logra la dominación y reconoce que en este punto es cuando se tiene que recurrir a los planteamientos sobre hegemonía. Sin embargo, argumenta en contra de los usos normales de este concepto. Es totalmente crítico de las concepciones de hegemonía que ponen de manera tácita el logro de la dominación con el inculcar creencias o asegurar un consentimiento. Para Sayer, la hegemonía es más profunda, penetrante e insidiosa que eso. El ritual de poder es importante en Sayer para explicar la dominación: "Este poder opera organizando, y dividiendo,

[8] Corrigan y Sayer, op cit., pp. 4, 21. Cfr. Roseberry, p. 216.
[9] Corrigan y Sayer, 1985. p. 3, 4.

por la fuerza a las subjetividades, y con ello produce y reproduce formas de sociabilidad bastante *materiales*."[10] Afirma Sayer que en The great arch argumenta, junto con Sayer, que los rituales son una dimensión crucial de ese poder representándose asimismo en el Estado y a la sociedad como miembros de un cuerpo político. Por sus mismas acciones los participantes afirman el poder del Estado, creyentes o no, de lo que es santificado.

Sayer difiere de Max Weber en su distinción clásica entre poder y autoridad, viendo al primero como autoridad legítima. Gran parte del discurso sobre la hegemonía se ha construido sobre esa distinción. Para Sayer es el poder puro y simple lo que en sí mismo autoriza y legitima. Lo anterior no se basa tanto en la manipulación de las creencias, sino en la definición de los límites de lo posible. El poder impone los términos en relación a que debe hacerse en los niveles más cotidianos. La individualidad se vive a través de la organización de los tiempos y los espacios y es profundamente coercitiva se viva o no como tal.[11]

Por su parte, James Scott es especialmente crítico del concepto gramsciano de hegemonía. Ha lanzado fuertes cuestionamientos contra aquellos teóricos que entienden la hegemonía como "consenso ideológico." Scott señala la falta de consenso en situaciones sociales de dominación, ya que los dominados tienen conciencia de que guardan esa situación, saben cómo y por quién. Es así como logran desarrollar modos de soportar, hablar, resistir, socavar y hacerle frente a la dominación.[12] William Roseberry propone que se utilice el concepto de hegemonía no para entender el consenso sino la lucha o sea: "las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las

[10] Derek Sayer. Formas cotidianas de formación del estado: algunos comentarios disidentes acerca de la "hegemonía." en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. p. 235.
[11] Ibid, p. 236.
[12] Véase Weapons of the weak. Everyday forms of the peasant resistance. New Haven, Yale University Press, 1985 y del mismo autor Los dominados y el arte de la resistencia. Era, México, 2000.

formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella." Bajo esta óptica, la hegemonía en Roseberry no es una ideología compartida sino: "Un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos."[13]

Marco discursivo común

Lo importante en Roseberry, para aplicar en este trabajo, es que ve ese marco común material y significativo constituido en una parte como discursivo, es decir, se conforma un "marco discursivo común." Cuando Corrigan y Sayer señalan que las formas del Estado han sido entendidas dentro del propio lenguaje univerzalisante de la formación de Estado,[14] es porque el Estado establece un marco discursivo común con el cual se expresa tanto la aceptación como la negación.

Al afirmar pareciera que el Estado ha establecido exitosamente un marco discursivo común:

> "El marco discursivo común proporciona un lenguaje articulado lo mismo mediante licencias de conducir, lemas o banderas, que mediante palabras. Además... este marco discursivo opera no sólo en términos de palabras y signos sino que también implica necesariamente un proceso social material, es decir, relaciones sociales concretas y el establecimiento de rutinas, rituales e instituciones que 'operan en nosotros.'"[15]

[13] Roseberry, op. cit., p. 220.
[14] Corrigan y Sayer, op. cit., p. 7.
[15] Joseph y Nugent, op. cit., p. 49.

Es decir, las formas o lenguajes de protesta o resistencia deben asumir las formas y los lenguajes de la dominación para poder ser registrados y escuchados.[16] La aceptación pero también la protesta, la negación, la disidencia, la ironía, las reclamaciones contra el Estado se expresan en los propios términos del Estado. En la medida en que un orden dominante establece formas legítimas de procedimiento y formas prescritas, no un consenso, para expresar tanto la aceptación como el descontento establece un marco discursivo común; es decir, "un lenguaje común o manera de hablar sobre las relaciones sociales que establece los términos centrales en torno de los cuales (y en los cuales) pueden tener lugar la controversia y la lucha."[17]

Así a través de sus órganos coercitivos, regulaciones morales, formas, ritos de poder y registros el Estado establece un marco discursivo común que crea categorías y clasificaciones socialmente aceptadas para establecer relaciones sociales y formas de comunicación que los dominados tienen que utilizar para ser escuchados y registrados por el propio Estado. El poder del Estado se ejerce y se palpa culturalmente cuando define realidades y crea identidades. Por ejemplo, los colonos militares que desarrollaron relaciones de propiedad privada con la tierra y una relación autónoma con el Estado mexicano anterior a la revolución, en sus relaciones con el Estado, cuando son restituidos de ejidos no pueden seguir refiriéndose a sí mismos como pequeños propietarios o labradores sino como ejidatarios. Así cuando el régimen ejidal es impuesto en Namiquipa (no por la fuerza militar, política o jurídica del estado, sino por mecanismos culturales como lo veremos posteriormente) y cuando el recalcitrante antiagrarismo de los namiquipenses es vencido y tienen que dirigirse al Estado identificándose como ejidatarios, el Estado ha logrado imponer en esta estratégica población un marco discursivo común. Cuando los orgullosos e insometibles namiquipenses se definen

[16] Roseberry, op. cit., p. 224.
[17] Roseberry, op. cit., p. 220, 224.

como ejidatarios, es cuando se reconocen como hijos del Estado. Así el ejido es símbolo que revela el poder del Estado y contiene un conjunto de relaciones sociales de dominación-subordinación. Ejidalización no es un proceso justicialista, que es el discurso público, sino hegemónico de dominación que es su discurso oculto.

Tradición selectiva

Corrigan y Sayer son claros al mencionar que las culturas opositoras han sido entendidas bajo las variadas tradiciones selectivas impuestas por el orden dominante, lo que ha impedido comprender la dimensión cultural de la formación del Estado. Pero más allá, el marco discursivo común no solo crea categorías sociales uniformizantes, sino también formas uniformes de pensamiento. El marco discursivo común actúa como una especie de molde definiendo patrones sociales del pensamiento. Llega un momento en que todos los integrantes del ejido de Namiquipa se asumen como ejidatarios un sus relaciones ante el Estado. Para Raymond Williams la tradición la constituye el "pasado significativo", es un aspecto de la organización social y cultural y lo refiere al interés de la dominación de una clase específica. Es una versión del pasado que se pretende conectar con el presente y ratificar. Además, la mayoría de las versiones de la tradición pueden demostrarse en su modalidad radicalmente selectiva. Dentro de una cultura particular, a partir de un universo posible del pasado y del presente, ciertos significados y prácticas son seleccionados y acentuados y otros son rechazados o excluidos.[18]

Nugent y Alonso afirman que el ejido es un elemento crucial de la tradición selectiva con el cual el Estado de la revolución construyó su legitimidad y se aseguró la hegemonía. A la vez esconde el control que el Estado ha adquirido sobre el campesinado y su producción. El Estado populista se apropia de lo

[18] Raymond Williams. Marxismo y literatura. Península, Barcelona, 1980. p. 138.

popular para construirse una imagen de verdadero representante de la nación y del pueblo como sus verdaderos hijos.[19] Aquí es donde encontramos mayor operatividad de la definición de Williams de tradición selectiva como: "una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social."[20] Pero Nugent y Alonso también afirman que el Estado no es el único autor de una tradición selectiva, como tampoco lo sería una clase social. Proponen que hay tradiciones selectivas alternativas, como la de Namiquipa, que ve al ejido y la relación entre campesinos y Estado en formas que contrastan con la épica populista de la historia oficial de México y se opone al poder del Estado.[21]

Nugent y Alonso ven la historia de la formación del Estado mexicano y de la resistencia popular ante los diferentes proyectos nacionales desde:

> "...la perspectiva de los intentos del estado por cooptar o socavar aquellos particularismos que desafían su poder al servir como bases alternativas para imaginar una comunidad política... Pero entre los campesinos chihuahuenses nacionalismo y localismo coexisten como modos de imaginar la comunidad, facetas de una 'conciencia contradictoria' que en la práctica son actualizadas de manera selectiva en respuesta a circunstancias históricas concretas. Esa aseveración de 1928 de que Namiquipa 'había quedado fuera del dominio de la nación' desde ciento cincuenta años antes estuvo motivado por el localismo, por el temor de que la ley agraria socavara la soberanía de la comunidad; pero también estuvo motivada por la percepción de que el proyecto nacional incrustado en esa ley incrementaría la subordinación de los campesinos al estado."[22]

Efectivamente el Estado no es el único creador de una tradición selectiva, lo es todo conjunto social o conjuntos sociales en un tiempo y espacio, como los pueblos. Sin embargo, la oposición de Namiquipa al ejido no es porque lo conciba en una forma que contraste con la épica populista del Estado como lo afirman

[19] Nugent y Alonso, op. cit., pp. 177-178.
[20] Williams, op. cit., p. 137.
[21] Nugent y Alonso, op. cit., pp. 178-179.
[22] Ibid, pp. 202-203.

Nugent y Alonso, sino por que lo ve como algo ajeno; Namiquipa no es parte o participe de una tradición selectiva ejidal, sino de una tradición selectiva de colonia militar. Su confrontación con el Estado no es porque los dos tengan una concepción diferente del ejido, sino porque el estado pretende imponer y suplantar en Namiquipa su tradición selectiva de colonia por la de ejido.

Por otra parte, el caso de Namiquipa y su rechazo al ejido y su antiagrarismo es explicado por Nugent y Alonso también como un particularismo y localismo, pero esas expresiones culturales difícilmente se puede entender así, más que nada Namiquipa es participe de una tradición selectiva de colonización y colonia con características de uso, apropiación, concepción y relación con la tierra regional que chocan con las características del régimen ejidal que el Estado creó, (esas características se desarrollarán más adelante). La colonia es un elemento crucial de la tradición selectiva de los pueblos del norte de México, de la cual Namiquipa posiblemente sea uno de los casos más radicales. Asimismo, las expresiones autonómicas del pueblo no creo que se traten o basen en la existencia de una conciencia contradictoria. Los namiquipenses estaban claros y resueltos en cuanto a lo que querían, no intervención del Estado en sus propiedades, no hay pues contradicciones sino el enfrentamiento de dos tradiciones selectivas, una enarbolada por el Estado y otra por los pueblos. Efectivamente, lo que más temían los namiquipenses y tenían claro del régimen ejidal del Estado de la revolución era la subordinación que la aceptación o imposición de él traía consigo.

Esas expresiones, formas y visiones de los namiquipenses, su posición de baluartes de la civilización, de defensores del Estado y su desafío hacia el mismo, se explicarán a partir de las relaciones de asociación y su tradición selectiva de colonos. Un componente muy importante en la tradición selectiva de las colonias fue la autonomía en sus relaciones con el Estado, la cual tuvo un proceso de gestación histórica de larga duración y contextualizada por las amenazas que

representaban las tierras de frontera: el peligro constante por el avance de potencias extranjeras y la guerra contra los indios, principalmente apaches, lo cual fraguó relaciones de asociación con el Estado. Las relaciones de asociación son esa disposición y esencia como identidad autonómica de los colonos que se establecen a partir de la configuración de alianzas para enfrentar un enemigo común y lograr una apropiación real del espacio territorial. Nacen y se desarrollan opuestas a las relaciones de tutelaje que tiene como esencia una relación de subordinación con el Estado. Trata de afirmar una dignidad, una identidad y una forma de vida. Así los colonos en su relación con el poder estatal se definen en términos de “defensores del Estado y de últimos baluartes de la civilización”

Comprender las relaciones de asociación con el Estado es fundamental para entender el choque y rechazo de muchos pueblos del sistema ejidal creado por el Estado; sus especificidades culturales y los mecanismos que el Estado echó a andar para vencer la resistencia y la revolución cultural que esto trajo consigo. Las relaciones de asociación son un rasgo fundamental en la tradición selectiva de las colonias. Aunque encontramos operatividad en el concepto de tradición selectiva de Raymond Williams no alcanza a dar elementos profundos y contundentes sobre la compleja relación del Estado y los pueblos, de los procesos de dominación y resistencia, por eso es que entendemos la tradición selectiva como: un cúmulo de símbolo que remiten a un pasado, se actualizan selectivamente en el presente para proyectar un futuro. Así pues a través de la tradición selectiva se reafirma la identidad para en términos y argumentos propios definir, justificar y hacer prevalecer o tratar de cambiar un presente, enfrentar una amenaza o proyectar un futuro.

Cuando los colonos militares de los cinco poblados del noroeste del estado (Namiquipa, Cruces, Galena, Casas Grandes y Janos) evocan su pasado de autonomía con el Estado colonial y del siglo XIX para exigir el mismo trato del

Estado de la revolución lo fundan en una tradición selectiva de relaciones de asociación. Uno de los primeros aspectos que actualizan y en el cual fundan su proceder, actuar y derechos estas cinco colonias son sus mitos fundacionales materializados en el bando de Teodoro de Croix. En sí el bando pasa a ser más que un papel, refiere a significados y códigos que inician en 1778 (fecha de expedición del bando) como determinadas formas de relación con el Estado, con la sociedad en general, con el enemigo con que disputa la apropiación del territorio, con formas de apropiación, uso, relación con la tierra que conforman una carga de símbolos. Conforme el tiempo discurre estas formas y tradiciones se actualizan selectivamente para enfrentar amenazas, justificar procedimientos o una forma de obrar reforzando la esencia e identidad del grupo social. Esos significados y códigos recuperados del pasado, por su gran carga histórica y cultural, constituyen símbolos densos. Lo mismo sucede cuando los colonos mencionan la guerra contra los apaches: evocan épocas de aguda crisis, de disputa por la apropiación real del territorio, de poblamiento, de la forja de un sistema de relación social intragrupal y extragrupal, de un tipo de relación con el Estado, de orgullo guerrero, del surgimiento de usos y concepciones sobre la tierra; por eso la expresión “guerra contra los apaches” es un símbolo denso.

Los espacios para la resistencia a la dominación

Sayer afirma que la autoridad define de forma rutinaria e insistente la cotidianidad en la que estamos constreñidos a vivir y lo realiza de múltiples maneras. Pero también: “Los individuos y los grupos pueden adaptar y utilizar de manera creativa las formas a través de las cuales, en otro nivel, son confinados y constreñidos.” Cuando se tratan cuestiones de poder y resistencia hay algo que es profundamente contradictorio, el Estado no se encuentra aquí y la resistencia allá. La contradicción reside en el seno de las subjetividades y sociabilidades que el

orden dominante busca regular, pero que nunca se logra completamente.[23] Aunque la dominación se manifiesta con efectos reales éstos no son ni todo poderosos ni exhaustivos diría Stuart Hall.[24]

Ya vimos como Sayer y Corrigan dan especial importancia a los aspectos relacionales entre el Estado y aquello contra lo que se ha formado, o las culturas opositoras, para entender el proceso de construcción del Estado; pero también son indispensables para entender los aspectos de la resistencia a la dominación. Mallon maneja los conceptos de hegemonía y contrahegemonía: si los dos conceptos están siempre ligados, cada impulso hegemónico implica otro contrahegemónico. Los autores de *Aspectos cotidianos de la formación del estado*, llaman regularmente cultura popular a eso contra lo que el Estado se ha formado esbozado por Corrigan y Sayer. Para Nugent y Alonso la cultura popular "es contradictoria puesto que incorpora y elabora símbolos y significados dominantes pero también los combate, los desafía, los cuestiona, los rechaza, los revalúa, los reacentúa y ofrece alternativas frente a ellos."[25] Pero también el Estado se apropia de los símbolos y significados elaborados por los pueblos como lo hace notar Mallon al decirnos que el éxito del Estado de la revolución se debió a que llegó al nivel local. Lo anterior también lo apuntan Nugent y Alonso al manifestar que el Estado populista al tomar el ejido como proyecto de reforma agraria se apropia de lo popular para hacerse de una imagen como verdadero representante de la nación y del pueblo, o sea sus hijos.[26]

Sin embargo, hay que llamar la atención en algo que pone de manifiesto Roseberry sobre no caer en el error de ver mecánicamente el aspecto relacional

[23] Sayer, op., cit. p. 236.
[24] Stuart Hall. "Notes on Deconstructing The popular", en Raphael Samuel (comp.), People´s history and socialist theory. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1981. p. 233. Citado en Nugent y Alonso, op ,cit., p. 175.
[25] Nugent y Alonso, op. cit., p. 176.
[26] Ibid, p. 178.

como un simple modelo de poder de oposiciones binarias: dominante contra subordinado, Estado contra lo popular. El asunto se vuelve más complejo cuando el Estado pretende afirmar con sus leyes, preceptos, programas y procedimientos en regiones particulares que se caracterizan por diversos patrones de desigualdad y dominación. Además, son productos sociales de procesos históricos que incluyen relaciones y tensiones previas entre centro y localidad.[27] Si bien el ejido como símbolo de acceso, uso y apropiación del la tierra se encuentra presente, pero no con el mismo significado y extensión que en otras partes de la república. Pero sobre todo porque la tradición selectiva predominante en Chihuahua eran las colonias agrícolas. Aquí el Estado enfrenta un regionalismo y se empeña en vencerlo. Veremos que la aplicación de la ley agraria, si bien da ciertos parámetros y sobre todo, pone candados y frenos a los pueblos para apropiarse, por sí mismos, de la tierra y en muchos casos se aplica de forma particular según las circunstancias regionales o locales.

La operación del concepto de cultura en la dominación y la resistencia

En *The great arch* Corrigan y Sayer nos hablan de la formación del Estado como una revolución cultural. Ponen de manifiesto la necesidad de entender las formas del Estado culturalmente y la dominación cultural como un elemento primordial de su construcción. Pero, ¿qué entienden ellos por cultura? El Estado domina no solo a partir de formas jurídicas, políticas y militares, sino también culturales. Nos hablan de formas, ritos, registros y rutinas, lo cual parece que nos ayuda a comprender lo que manejan como cultura. Entonces la cultura sería una serie de formas concretas y manifiestas de dominación a través de prácticas cotidianas, repetitivas, vueltas rutina y que se hacen ver como algo natural; es decir, constitutivas y esenciales de la vida social para el buen orden y funcionamiento de la sociedad cuando son formas de poder. Pongamos por ejemplo el asunto tan llevado y traído de las licencias. Esto es, todos debemos de portar una licencia de

[27] Roseberry, op. cit., p. 226.

manejar y será muy raro el caso de que alguien cuestione o no su uso, sino la atribución del Estado para expedirla y reglamentarla. Por qué el Estado, por qué no un consejo ciudadano, por qué no las agencias automotrices, o mejor por qué no los padres de familia.

La cultura como formas de dominación nos lleva a una de las definiciones que alguna vez planteara Clifford Geertz sobre la cultura como "un conjunto de mecanismos de control –planes, recetas, reglas, instrucciones- para gobernar la conducta." Pero la definición de Geertz fue variando hasta llegar a una concepción simbólica de la cultura, aspecto en el que sin duda es el teórico más destacado, siendo su definición más madura la siguiente: "El concepto de cultura que expongo...es esencialmente semiótico. Creo, junto con Max Weber, que el hombre es un animal suspendido en telarañas cuyo significado él mismo ha construido; imagino la cultura como esas telarañas, y su análisis no es una ciencia experimental que busca la ley, sino que es interpretativa y busca el significado." [28]
En general, en los estudios que tratan sobre cultura se pueden distinguir dos posiciones dominantes: la materialista y la mentalista; la primera resalta los aspectos materiales de la cultura y la segunda pone el acento en sus aspectos mentales o ideacionales.[29] En la primera vertiente se sitúan las perspectivas marxistas y ecologistas, y en la segunda el estructuralismo, la etnociencia y aquellas escuelas que resaltan los aspectos simbólicos y los interpretativos de la cultura. Jhon Thompson caracteriza concepción simbólica de la cultura como sigue: "la cultura es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas –entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y

[28] Clifford Geertz, "Descripción densa: hacia una teoría intepretativa de la cultura", en Bohannan P. Y M. Glazer, Antropología. Lecturas, McGraw-Hill, Madrid, 1992, p. 548.
[29] Ino Rossi, Edward O´Higgins. Teorías de la cultura y métodos antropológicos. Anagrama, Barcelona, 1981. p. 148. El estudio de la cultura como sistema ideacional tiene sus premisas a partir de la segunda guerra mundial. Sus principales exponentes son los miembros de las escuelas estructuralista, la etnocientífica, la de antropología simbólica, y la de antropología interpretativa. Ibid, p. 120.

comparten sus experiencias, concepciones y creencias."[30] Por su parte, Rossi y O´Higgins ponen más claro el asunto: "Lo que los antropólogos simbólicos tienen entre sí en común es la concepción de las culturas como sistemas de símbolos y significados compartidos, si bien difieren entre sí en su definición de símbolo." [31]

Para Thompson el concepto de cultura elaborado por Geertz es el más importante que ha acuñado la antropología. "Ha reorientado el análisis de la cultura hacia el estudio del significado y del simbolismo, y ha puesto de relieve la centralidad de la interpretación como enfoque metodológico."[32] Sin embargo, una de las debilidades de los planteamientos teóricos sobre cultura en Geertz, es la utilización variada que hace de ella. La forma en que Geertz ha usado el concepto de cultura no ha sido consistente, así lo manifiesta el mismo Thompson. En un momento la define "como un patrón, trasmitido históricamente, de significados que se incorporan en símbolos." En otro momento ve a la cultura como un conjunto de mecanismos de control. Según esta visión la cultura representa un patrón o plano para organizar los procesos sociales. Pero en esta relación de reglas, planes, recetas no queda claro su relación con la concepción de la cultura como patrones de significados agregados a las formas simbólicas. Tampoco queda claro en esta última definición cómo abordar la explicación interpretativa del significado.[33]

La influencia de Parsons se deja ver en otra definición de Geertz sobre cultura: "un sistema ordenado de significado y símbolos [...] en cuyos términos los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios."[34] Según Kuper, en los primeros ensayos, Geertz estaba preocupado por responder a los críticos que argumentaban que la cultura explicaba muy poco, incluso que era un lujo, una evasión de la vida real." Algunos de los argumentos iban dirigidos en el

[30] John Thompson. Ideología y cultura moderna. UAM-Xochimilco, México, 1994, p. 145.
[31] Rossi, op. cit., p. 133.
[32] Thompson, op. cit., p. 146.
[33] Ibid.
[34] Adam Kuper. Cultura. La versión de los antropólogos. Paidós, España, 1999. p. 119.

sentido de que el análisis cultural era propenso a ser seducido por las cualidades estéticas; rehuía los problemas de la supervivencia y el poder entre otros.[35]

En general, los autores de Aspectos cotidianos de la formación del Estado toman la concepción simbólica de la cultura, pero asumiendo el gran reto de ver, analizar y explicar los aspectos del poder:

> "Entendemos la cultura popular como los símbolos y significados subyacentes en las prácticas cotidianas de los grupos subordinados. A la vez que constituida socialmente... y socialmente constituyente... la cultura popular no es una esfera autónoma, auténtica y acotada, ni una versión en pequeño de la cultura dominante. En cambio, la cultura popular y la cultura dominante se producen una en relación con otra, a través de una "dialéctica de lucha cultural" que ocurre en contextos de poder desigual y entraña apropiaciones, expropiaciones y transformaciones recíprocas. La reciprocidad no implica igualdad en la distribución del poder..."[36]

Insistamos en este aspecto de que la cultura popular y la cultura dominante se producen una en relación con otra a partir de una dialéctica de lucha cultural. Es el aspecto relacional del que Corrigan y Sayer nos han estado hablando. El asunto es que la definición del término compuesto cultura popular equivale a la definición semiótica de cultura de Geertz. Pero entonces nos queda el problema de qué es lo popular. No es el objeto de este trabajo solucionar dicho asunto pero sí apuntarlo. Lo popular visto simplemente como opuesto a lo elitista no esclarece mucho. No está por demás el escepticismo de Alan Knight hacia un término tan "amplio y abarcante." Para él, gran parte de lo que se designa como cultura popular es

[35] Ibid. p. 120.
[36] Nugent y Alonso, op . cit., p. 175. También Joseph y Nugent, op. cit., p. 46. En esta elaboración los autores le deben a Hall, op. cit.

compartido por grupos no populares como ciertos símbolos, prácticas nacionales y religiosas.[37]

El Estado mexicano y las formas culturales de dominación

Bajo los lineamientos capitalistas modernizantes del Estado de la revolución el ejido representaba todo un obstáculo porque impedía la libre circulación de la tierra en el mercado y retenía mano de obra y la producción se orientaba a las necesidades comunales o locales. Pero principalmente porque al estilo de los liberales decimonónico se pensaba que generaba formas culturales precapitalistas, esto es, productores sin iniciativa, sin sentido empresarial; las formas comunales de tenencia de la tierra eran el sinónimo del atraso. En *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*, Nugent y Alonso lo notan: "El discurso oficial de la reforma agraria está imbuido de una caracterización de los campesinos como ignorantes, analfabetas, tradicionalistas, fundamentalmente indígenas y subdesarrollados en lo económico por carecer de espíritu empresarial."[38] Más allá de la consideración de las nulas virtudes del campesinado como productores, había una descalificación en términos raciales. Así, por ejemplo, se mencionaba que en el estado de Puebla los agraristas habían repartido 44 mil hectáreas que antes cultivaban "hombres aptos y ricos" y ahora estaban en manos de "indígenas ineptos y pobres", de los cuales se decía que carecían de "iniciativa, de esfuerzo individual."[39] Para Álvaro Obregón la desigualdad social era parte de un orden natural, pensaba que había hombres preparados física e intelectualmente unos más que otros y esos serían los que tendrían que sacar mayores ventajas a sus esfuerzos en la lucha por la vida"[40]

---

[37] Alan Kight. Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. p. 58.
[38] Op. cit., p. 192.
[39] Luis Aboites Aguilar. Norte precario, poblamiento y colonización en México (1760-1940). El Colegio de México / CIESAS, México, 1995. p. 150.
[40] Arnaldo Córdova. La Ideología de la Revolución Mexicana. Era, México, 1973. p. 271. Véase

Pero entonces ¿por qué el Estado crea y diseña una gran reforma agraria a partir del ejido? Porque son formas de control y dominación tanto en el "marco discursivo" como ideológico y material. El objetivo era ponerle un freno a la reforma agraria que amenazaba con salirse de los causes institucionales del Estado. Ideológico para frenar la opinión pública a favor de los agraristas y material para justificar la intervención del ejército ante la toma de tierras por los propios campesinos.

> "Aunque el Estado rechazaba el reparto agrario y la organización agrarista, impedido para poder evitarlo, lo institucionalizó. Toda demanda social debía pasar y canalizarse por medio de las nacientes instituciones de gobierno, nada debía desarrollarse independiente del Estado, aún las dimensiones más cotidianas de la vida social. Era la idea de un aparato de Estado omnipresente en todas las dimensiones de la vida política, económica y social del país. El impulso a la organización de los agraristas tenía por objetivo meter por los conductos de gobierno un movimiento que inevitablemente surgía y cuyo desarrollo independiente hubiera sido de gran peligro para el nuevo régimen."[41]

A pesar de que el Partido de Estado se embarcó en una gran reforma agraria a partir del ejido, el fin último de la tenencia de la tierra, en el campo mexicano, era la pequeña propiedad. La propiedad privada también se recreó e impulsó, siempre cuidando que no representara obstáculo o desafío para el Estado.

En general, el ejido formaba parte importante de la tradición popular de uso y relación con la tierra del campesinado mexicano, tradición muy arraigada en el centro y sur de México. Pero en el norte, aparte del ejido, había arraigado fuertemente otra tradición de uso y relación con la tierra: la colonia.

---

también Alonso Domínguez Rascón. La política de reforma agraria en Chihuahua, 1920-1924: sus efectos hasta 1940. Plaza y Valdés / CONACULTA, México, 2004. p. 55.

[41] Domínguez, op. cit., p. 56.

Las formas de uso, relación y concepción de la tierra tenían variantes de carácter regional, étnico e histórico. El Estado mexicano tomando elementos de la tradición agraria ejidal, mezclándolas con formas políticas, creó un modelo uniforme de ejido que plasmó en disposiciones legislativas.

Allí radica en gran medida la formación y consolidación del Estado mexicano, en la imposición política, jurídica, militar, pero principalmente cultural de una reforma agraria a través de un modelo de ejido enraizado en la tradición popular, pero refuncionalizado por el Estado y muchas veces a contrapelo de otras tradiciones como las colonias. Aquí concordamos totalmente con Mallon al afirmar que la construcción del Estado mexicano tenía sólidos cimientos en la cultura popular. Pero lo argumentado anteriormente nos da un rasgo importante para entender la formación del Estado mexicano en cuanto a dar acceso a la tierra al campesinado, su reforma fue uniformizante y homogeneizante. Así pues, el estado inventa el ejido.

Pero más que lo militar, lo jurídico o lo político, otro de los aspectos que en este trabajo nos interesa es ver la formación del Estado mexicano como una "revolución cultural." Pero es un proceso de larga duración y no solo un hecho que surge de la Revolución, sino desde la época colonial. Lo anterior implica ver esa formación de Estado en forma relacional con las culturas rurales subalternas. Para Corrigan y Sayer la base del poder del Estado no está en el consenso de los dominados, sino en las formas y órganos normativos y coercitivos del propio Estado que definen y crean cierto tipo de sujetos e identidades mientras niegan y excluyen a otros. Lo anterior no solo se da a través de la policía o el ejército, sino por medio de funcionarios y sus rutinas, sus procedimientos y formularios, impuestos y licencias.[42] Lo que nos interesa aquí es analizar los procesos agrarios como ritos de poder.

[42] Véase Corrigan y Sayer, 1985. Cfr. Roseberry, op. cit., p. 216.

En el capítulo I se analiza el proyecto de formación del estado colonial en su accionar en el norte de la Nueva España en el contexto de tierras de frontera, caracterizada por una apropiación virtual del territorio. Un aspecto fundamental en la formación del Estado es pues lograr la apropiación efectiva del espacio territorial. En concreto en la Nueva Vizcaya ante la reocupación real del territorio por los grupos étnicos se instrumenta una agresiva política de poblamiento, que en este caso será más que nada lograr una mejor redistribución de la población interna en lugares estratégicos. Para lograr lo anterior se fundan o refundan poblaciones, como las cinco colonias de Croix, dando como principal incentivo la propiedad de la tierra y la excepción de impuestos. Las nuevas poblaciones se sostienen prácticamente solas en una feroz lucha contra los grupos étnicos dando lugar al surgimiento de relaciones de asociación que serán parte de la tradición selectiva de esas poblaciones.

En el capitulo II se discute la formación del Estado a partir de la Revolución de 1910. Una de los aspectos fundamentales en la formación del Estado de la revolución fue la puesta en marcha de un programa de reforma agraria. Hábilmente el Estado se insertó en la tradición agraria ejidal con el objetivo de repartir tierras a cambio del control político de los beneficiarios. En el norte el estado se enfrenta al rechazo del ejido dada la existencia de una tradición selectiva basada en la posesión de la tierra vía colonias cuya principal característica era la propiedad privada de la tierra. Otro punto fundamental de dichos colonos era que habían desarrollado relaciones de asociación, es decir una posición de autonomía ante el Estado. Dado lo anterior, para lograr imponer su proyecto ejidal el Estado a través de sus procedimientos, registros, rutinas y funcionarios va socavando esas formas autonómicas logrando establecer un marco discursivo común a partir del cual se hace palpable la dominación del Estado.

En el capítulo III se desarrollan con detalle los casos de las colonias de Croix: Janos, Casas Grandes, Namiquipa, Cruces y Galeana. Aunque la dominación del Estado se vuelve fuerte hasta volverse asfixiante los pueblos siempre de forma creativa buscan la forma de resistir. En los casos anteriores vemos como el Estado trastoca las relaciones de asociación que sostenían con él los pueblos del bando de Croix. Si embargo, surgen formas sutiles de resistencia como ignorar a las instancias agrarias, la ironía, el disimulo y el sarcasmo.

En el capítulo IV se aborda el mundo indígena de la Sierra Tarahumara en concreto de los rarámuri. Se analizan las formas propias de dominación del Estado en esa región y en específico con esa etnia. La Sierra se presenta como un lugar incomunicado y con poca presencia del Estado. La población mestiza hostiliza a los rarámuri despojándolos de sus animales y tierras por lo que se crea un ambiente extremo de descontento y se suscita un alzamiento armado. Los rarámuri enfrentan al Estado más que con las armas con sus tradiciones selectiva donde principalmente esgrimen la figura de Benito Juárez como un personaje que los benefició dándoles las tierras de las que están siendo despojados.

El capitulo V describe el caso de la colonia militar surgida en el siglo XIX de Cuchillo Parado en el contexto de la estancia de Benito Juárez en Chihuahua cuando se daban los meses más críticos de la defensa de la república. En ese contexto forma parte de los pueblos que enfrentan la invasión francesa y toman parte en la guerra contra los apaches y más tarde se insertan en las filas de Francisco Villa en la Revolución. En ese sentido también desarrollan relaciones de asociación con el Estado. Posteriormente se les intenta cambiar su régimen de colonia a ejidos entrando en un proceso de resistencia.

El interés por los temas planteados anteriormente surge porque a pesar del paso de la reforma agraria en la actualidad existen en Chihuahua algunas colonias agrícolas y ganaderas. Parecía que de ese carácter de colonos y pequeños propietarios surgían en determinados pueblos rasgos culturales de autonomía frente al Estado y que sus habitantes habían tenido papeles destacados en la lucha armada contra los grupos étnicos, contra las fuerzas republicanas de Benito Juárez, contra el segundo imperio y la invasión francesa o la Revolución. Era pues importante analizar el surgimiento de sus expresiones culturales y su desarrollo. Una de la preguntas iniciales fue ¿Qué tipo de relación, concepción y uso de la tierra se desarrolló en los diversos sectores rurales de Chihuahua?, ¿Qué aspectos se desarrollaron en cuanto a la posesión de la tierra en los pueblos de misión y en las típicas colonias militares del norte de México? En ese contexto se optó por hacer un análisis a partir de las formas de tenencia, uso, relación y concepción con la tierra de los pueblos y grupos étnicos de Chihuahua.

En ese proceso nos dimos cuenta que la relación con el Estado era ineludible tocarlo ya que este precisamente había cimentado su edificación sobre los aspectos agrarios. Entonces surgieron las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido las características concretas del marco discursivo común establecido por el Estado?, ¿Qué categorías clasificatorias han producido las formas de dominación del Estado?, A partir de los proceso de apropiación real del territorio y del control administrativo de la tierra por el Estado ¿Qué tipo de registro, ritos, rutinas y discurso se establecieron en el proceso de formación del Estado? Al leer sobre las formas tan independientes y autónomas de los pueblos como Namiquipa surgían las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los principales elementos histórico-culturales generadores de tradición selectiva y como se vinculan con el Estado?, ¿Cuáles han sido las formas de resistencia de los pueblos? El trabajo sigue la premisa de que la formación del Estado solo se puede ver de forma completa si se le enfoca desde su aspecto relacional por eso surgían otras preguntas: ¿Cuáles

han sido las formas específicas del Estado en su proceso de formación en relación a las culturas opositoras? La pregunta central que da orden toda la investigación es: ¿Cuál fue el proceso cultural de la formación del Estado mexicano? La respuesta provisional fue que después de haber favorecido el establecimiento de relaciones de asociación con los pueblos que combatieron a los grupos étnicos hostiles, el Estado trabajó para socavar esas expresiones autonómicas que se generaron ya que eran vistas como una amenaza en su proceso de formación.

Por otro lado, es importante aclarar que el trabajo no tiene una ordenación cronológica en su capitulado ni en específico en los casos mostrados. En relación a estos últimos se notarán saltos en el tiempo, lo importante no es dar una ordenación estrictamente cronológica sino mostrar lo más detalladamente posible los elementos de tradición selectiva de los pueblos.

Capítulo I: Apropiación, dominio, control territorial y las tierras de los pueblos

El ejido como concepto encierra y contiene una amplia variedad de formas de tenencia y usos de la tierra. El ejido, como superficie de terreno, no ha tenido un uso uniforme en el país, a pesar de la legislación y normatividad referente a ellos. En muchos pueblos las leyes parecen ser una superestructura paralela a los usos reales del ejido, que se sitúa por encima de ellos y que pocas veces tienen puntos convergentes. La misma legislación relativa a la tierra es ambigua. La gran mayoría de las veces corresponde a un proyecto de nación ajeno y alejado de las aspiraciones reales del pueblo. Sobre todo ajeno, pero además agresivo y violento hacia los rasgos y pautas culturales comunales de una gran parte de la población del país. La abigarrada legislación del siglo XIX, empeñada en acabar con la tenencia de la tierra comunal, paradójicamente no abrogó la legislación colonial, que daba sustento a esas formas de posesión, simplemente trató de ignorarla. Cuando la legislación del Estado del Estado de la revolución no dio respuesta a las controversias tuvo que recurrir a ella.

En el siglo XIX se creó un complejo cuerpo jurídico, superpuesto al colonial, contradictorio, con símbolos y formulismos que representan la racionalidad de las elites ilustradas del siglo XIX, difícil de decodificar y tan alejadas de las aspiraciones de las comunidades agrarias; uno de los casos más lacónicos se dio cuando un juez federal, en un litigio en el estado de Oaxaca, para el año de 1881, apoyado en un reglamento, de marzo 25 de 1862, rebatió la segunda parte del artículo 27 de la entonces vigente constitución de 1857 en su disposición de que las corporaciones no podían adquirir y administrar bienes raíces. El juez consideró que las excepciones a la desamortización contenidas en el artículo 8 de la ley Lerdo continuaban en la Constitución, aunque el artículo 27 carecía de la especificidad de la ley Lerdo. Así que declaró que los ayuntamientos podían,

basados en la propia Constitución, adquirir y administrar los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones. El mencionado reglamento de 1862 especificaba que "No se comprenderá en el reparto el terreno que a juicio del Jefe político sea necesario para ejido del pueblo, ni los montes que basten y sirvan para el uso común y exclusivo de los vecinos."[43]

En el año de 1923 se publicó la obra clásica de Robert McCutchen McBride: *The land systems of Mexico*, donde aseguró que el ejido de ser un espacio pequeño y relativamente despoblado en España había pasado a ser en México una gran superficie que incluía todas las tierras comunales del pueblo.[44] Lo anterior lo afirmó McBride basándose en sus análisis del ejido en el norte de la Nueva España. No fue hasta 1998 que Robert J. Knowlton, basado en Raúl Lemus García y analizando la legislación agraria del siglo XIX rebatió a McBride. También Eyler N. Simpson en otra obra clásica titulada *El ejido: única salida para México*, siguió a McBride en el mismo error, aunque notó que algunos autores sostenían que tal como se había dispuesto por las leyes coloniales el ejido no incluía tierras de cultivo, sino que era un término para referirse a los terrenos de pastos comunales, pero terminó su aserto diciendo que cualquiera que hubiera sido la definición jurídica dada a la palabra llegó a tener, con el tiempo, la significación amplia dada por McBride.[45] Posiblemente los dos autores no tuvieron la perspectiva amplia que significó el corte histórico que marcaron los regímenes de la posrevolución, a partir de entonces el ejido, en su definición legal, tuvo el significado incluyente y con ese nombre se denominó a todas las tierras de los pueblos.

[43] Robert J. Knowlton. El ejido mexicano en el siglo XIX. Historia Mexicana, V. XLVIII, No. 1, julio-septiembre, 1998. p. 84.
[44] George McCutchen McBride. The land systems of Mexico. American Geographical Society, New York, 1923. p. 124.
[45] Eyler N. Simpson. El ejido: única salida para México, en Problemas agrícolas e industriales de México, No. 1, Vol. IV, México, 1952. p. 19. el original con el título The ejido. Mexico´s way out se publicó en 1937.

Lo cierto es que antes de la revolución el ejido se convirtió en una palabra genérica con la cual se denominaba a todos los tipos de tierras bajo la tutela de los pueblos. Como lo expresaba La Gaceta Municipal en el año de 1901: "...un pueblo no podrá progresar abiertamente y crear elementos de prosperidad y de riqueza, sino cuando reparta justa y equitativamente sus Egidos (sic) entre los padres de familia y de su población..."[46] Más adelante La Gaceta Municipal especificaba cinco tipos de tierras: 1.- propios, 2.- arbitrios, 3.- de común repartimiento, 4.- de obvenciones y 5.- de parcialidades.

En el año de 1889 la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, a cargo de Carlos Pacheco, publicó una recopilación de disposiciones sobre ejidos dejando por demás claro la diferencia entre ejido y fundo legal, sea de paso, defendiendo la legislación liberal haciendo énfasis en que nunca se había atentado contra los pueblos:

> "Éstas y otras disposiciones posteriormente acordadas para el fundo de los pueblos, [la ordenanza de 26 de mayo de 1567 del Marqués de Falces, Conde de Santiestéban, Virrey de Nueva España y de la real cédula de 1695 de Fernando VI] son el fundamento legal de la existencia y aplicación de esas porciones de terrenos que viene a constituir el ámbito de cada pueblo, y que por consiguiente, bajo el punto de vista territorial, es el mismo pueblo, difiriendo por tanto esencialmente de las porciones de tierras que se nombran ejidos. Fácilmente se comprende, atentas todas estas indicaciones, que ninguna ley antigua ni moderna ha querido autorizar el fraccionamiento y venta del fundo legal, porque esto sería absurdo."[47]

[46] La Gaceta Municipal, t. II, No. 2, México, febrero 28 de 1901.
[47] Carlos Pacheco (comp.). Disposiciones sobre designación y fraccionamiento de los ejidos de los pueblos. Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 1889. p. 5.

Se recalca que mientras que el fundo legal es el mismo pueblo, los ejidos son para los usos comunes del pueblo.[48]

El ejido es una institución de origen español, así los pueblos de españoles e indios en América reprodujeron en diferentes grados la organización, los esquemas y rasgos de uso de la tierra de Castilla. McBride menciona cuatro tipos de tierra que los pueblos castellanos tenían con sus usos diferenciados: a) Un espacio de tierra denominado ejido que tenía diversos usos: allí se localizaba el redil para el ganado perdido, así como las eras públicas y sitios donde los habitantes podían limpiar las mieses al aire libre; se utilizaba como basurero y matadero del pueblo; allí los campesinos podían descargar sus cosechas o tener sus colmenas; otra parte se usaba como parque o sitio de solaz. En el ejido castellano no se podía labrar ni construir allí edificio alguno. b) Los propios eran tierras pertenecientes y administradas por los ayuntamientos, año con año se rentaban para su cultivo y de sus ingresos la autoridad local sufragaba los gastos de la comunidad. c) La dehesa eran las tierras de pastos comunes donde la gente del pueblo pastaba el ganado y d) los montes eran tierras de bosques restringidas al uso exclusivo de la comunidad, no eran para pastar ganado ni para sembrar; de su preservación y cuidado dependía el suministro de madera y carbón para usos domésticos así como para propósitos de construcción.[49]

El anterior era el modelo de las tierras con sus variados usos en los pueblos castellanos de España, mismo que se trató de implantar en los pueblos fundados por los peninsulares en América. Había claras diferencias entre los usos y tipos de tierras que ostentaban los pueblos de españoles y los pueblos indígenas fundados por españoles. En los primeros la zona urbana estaba dividida en solares y en la suerte que a cada uno correspondía. En los segundos también era un lugar

[48] Ibid, p. 6.
[49] George McCutchen McBride. The land systems of Mexico. American Geographical Society, New York, 1923. pp. 106-107.

reservado para que se construyeran las casas del pueblo, pero la disposición del caserío correspondía en la mayoría de las veces a los usos y costumbres de los pueblos. El soporte legal que dio origen a los ejidos en América fue la real cédula de 1573, cuya disposición fue reproducida en 1713. En ella se estipuló que los sitios destinados a la erección de pueblos o reducciones de indios tuvieran aguas, tierras, montes y un ejido de una legua de largo donde pudieran tener sus ganados.[50] Los pueblos de españoles fundados en América fueron una replica en cuanto a las categorías de tierras; el ejido siguió los mismos usos castellanos ya descritos anteriormente. En los pueblos indios el ejido también siguió en mucho a los usos españoles al ser una porción de tierra separada de algunas otras categorías de tierra, común a todo el pueblo, que no se labra ni se planta, pero la gran diferencia con el ejido español era que allí los indígenas apacentaban su ganado, lo cual se sustentaba en la real cédula mencionada.

En los pueblos de españoles fundados en América, como en Castilla, los colonos debían tener dos tipos de terrenos de uso familiar: la suerte y el solar. La primera era la parcela acotada para ser cultivada y el segundo donde el colono debía construir su casa. Antes de que estas asignaciones individuales se realizaran debían apartarse tierras suficientes para los usos comunes del pueblo como tierras de pastoreo (dehesas) y ejidos para el crecimiento futuro del conglomerado social. Posteriormente se le asignaron a estos pueblos tierras para propios que les permitieran sufragar los gastos públicos de la comunidad.[51]

Independientemente de lo que se denomina ejido y fundo legal, y siguiendo el modelo castellano, los pueblos de españoles y de indios ostentaban tierras que se engloban bajo las siguientes categorías: 1.- terrenos de propios, 2.- terrenos de arbitrios (montes), 3.- terrenos de común repartimiento, 4.- terrenos de

[50] Carlos Pacheco, op. cit., p. 6.
[51] McBride. op. cit., p. 108.

obvenciones, 5.- terrenos de parcialidades.[52] y 6.- terrenos para dehesas. Algunas categorías son comunes tanto a pueblos de españoles como a pueblos indios pero con diferentes usos, otras categorías son características solo de uno u otro pueblo.

1.- Los terrenos de propios surgen al establecerse los pueblos a partir de concesiones reales, cartas fundos y algunos con otorgamientos hechos por las audiencias de México y Guadalajara y por mandamientos de los virreyes de la Nueva España. A las poblaciones se les concedieron terrenos y aún edificios ya construidos para destinarse a casas consistoriales, cárceles, hospitales, mercados, cementerios, escuelas, paseos, alamedas, parques entre otros.[53] Tanto en pueblos de españoles como indígenas eran bienes que servían para cubrir los gastos comunales y de atención a los servicios públicos. Se podían otorgar en arrendamiento o censo enfitéutico a particulares, en este caso la renta se aplicaba en la atención de los servicios públicos del grupo; en los dos tipos de pueblo los propios eran propiedad de los ayuntamientos.

2.- Los terrenos de montes (arbitrios) se originan con la misma cédula real de 1573 confirmada por la de 1713, al disponer que los sitios destinados a la erección de pueblos o reducciones de indios tuvieran agua, tierras y montes, y un ejido de una legua de largo donde pudieran tener sus ganados. Esas tierras y montes se destinaron al uso común y al sostenimiento de las poblaciones de modo que les proporcionaran arbitrios y parece ser que no habían quedado bajo las leyes de desamortización ni de nacionalización. La Gaceta Municipal citó una circular para aclarar lo que eran los terrenos de arbitrios; el subprefecto del Partido de Chalco preguntó si los montes de las municipalidades del Partido estaban sujetas a las leyes de desamortización a lo que Lerdo de Tejada respondió:

[52] La Gaceta Municipal, t. V, No. 6, México, junio 30 de 1901. pp. 1-4.
[53] La Gaceta Municipal, t. V, No. 6, México, junio 30 de 1901. p. 1.

> "…no hay duda de que están comprendidos en la excepción del art. 8 de la mencionada ley, LOS MONTES DE LAS MUNICIPALIDADES DE ESA SUBPREFECTURA, en la que la mayor parte de sus usos se hace directamente por los vecinos de cada municipalidad, AUNQUE ALGUNOS DE LOS APROVECHANMIENTOS DE ESOS MONTES, COMO EL CORTE DE MADERA GRUESA, SE CONCEDE EN ARRENDAMIENTO."[54]

Los arbitrios eran pues tierras comunales que servían para el sostenimiento de las poblaciones. La Gaceta Municipal expresaba, pero sin mencionar alguna base, que esos terrenos debían ser asimilados a los de común repartimiento y en consecuencia ser repartidos entre los vecinos de cada pueblo. Los arbitrios parecen ser característicos de los pueblos indios.

3.- Los terrenos de común repartimiento: Según Lucio Mendieta estas tierras fueron dadas mediante disposiciones y mercedes especiales,[55] pero también concedidas por los virreyes y audiencias, según La Gaceta;[56] su soporte legal fue la real cédula de 1560 que dispuso que los pueblos de fundación indígena que tenían tierras ya repartidas entre las familias que habitaban sus barrios y también en los pueblos de nueva fundación, que los indígenas que a ellos fueran a vivir continuaran gozando de las tierras que poseían antes de ser reducidos. Estas tierras, según Mendieta, se llamaron de repartimiento, de parcialidades indígenas o de comunidad, allí los españoles respetaron los usos tradicionales indígenas en cuanto distribución de la tierra.[57] Aunque la misma cédula mencionada expresa claramente a los indígenas como beneficiarios, es extraño que La Gaceta apuntara que estas concesiones eran aquellas que al principio de la conquista, la

[54] La Gaceta Municipal, t. V, No. 6, México, junio 30 de 1901. pp. 1-4. Véase también Knowlton, op. cit., quien cita este ejemplo para argumentar que las tierras de montes o arbitrios habían quedado fuera de las leyes de desamortización. p. 79.
[55] Lucio Mendieta y Núñez. El problema agrario de México. Porrúa, México, 1979. p. 74.
[56] La Gaceta Municipal, t. V, No. 6, México, junio 30 de 1901. p. 2.
[57] Lucio Mendieta y Núñez. El problema agrario de México. Porrúa, México, 1979. p. 74.

Corona concedió a los conquistadores como premio, pero sí señala que también a los indígenas sometidos a la dominación; añade que este tipo de terreno fue utilizado para subvenir las necesidades de determinados pueblos, los vecinos eran los únicos que podían aprovecharlos.[58] Para Raúl Lemus eran los terrenos que se repartían en lotes a las familias de los indios para que los cultivaran y se sostuvieran de sus productos.[59]

4.- Terrenos de parcialidades, como vimos en la categoría de tierras anterior, Lucio Mendieta no hace diferenciaciones entre las tierras de repartimiento, de parcialidades o de comunidad; La Gaceta señalaba que con el nombre de parcialidades se habían establecido ciertas archicofradías que explotaban en común el producto de la tierra que provenían de concesiones especiales.[60]

5.- También es importante distinguir a las tierras de comunidad como un régimen agrario diferenciado de las tierras de común repartimiento y de parcialidades. Felipe II retomó en 1552 el impulso dado por los religiosos a la organización del aspecto económico comunal de las corporaciones indígenas cuando dispuso la formación de un estatuto de "bienes comunales" formado por los sobrantes del tributo real, pero también por tierras, montes y aguas.[61]

6.- Los terrenos de obvenciones fueron aquellos en los que los poseedores estaban obligados a satisfacer ya fuera al clero, al soberano, a determinado colegio, hospital o ayuntamiento con cierto rendimiento o tributo anual, mismo que se estipulaba previamente, que por lo regular consistía en una parte de las

[58] La Gaceta Municipal
[59] Raúl Lemus García, Derecho agrario mexicano, Porrúa, México,1996, p. 74.
[60] La Gaceta Municipal, t. V, No. 6, México, junio 30 de 1901. p. 2. Según las leyes liberales las archicofradías fueron disueltas y se ordenó que las tierras fueran repartidas entre sus poseedores. Hacía referencia a una resolución de 22 de diciembre de 1856 relativa a la parcialidad de Santiago, a una circular del gobierno del estado de Veracruz de 16 de noviembre de 1856 y a una resolución de la Secretaría de Hacienda del 2 de mayo de 1862. Ibid, p. 3.
[61] Luis Vázquez León. Ser indio otra vez. La purepechización de los tarascos serranos. CNCA, México, 1992. pp. 221-221.

cosechas. La propiedad correspondía al soberano, iglesia, monasterio, pero su uso lo podía efectuar un pueblo, un barrio o alguna otra agrupación humana.

7.- La dehesa era el tipo de tierra característico de las poblaciones de españoles, este terreno, acotado, se destinaba para pastar el ganado.[62]

Esas eran las disposiciones formales de los tipos de tierras que hemos mencionado, sin embargo había una gran cantidad de excepciones a ellas según los usos, costumbres y percepciones de la tierra en el ámbito de los pueblos y de las regiones. En una perspectiva de larga duración se generaron dinámicas históricas, culturales o económicas que determinaron que no se siguieran los usos de la tierra que la legislación marcaba. En la época colonial en los alrededores de la ciudad de México el cabildo estaba preocupado por que los ejidos no se ocuparan o se sembraran. Frecuentemente la corporación se enfrentaba con ese problema por lo que se ordenaba que se destruyeran las casas y las milpas de los indios que usaban de tal forma el ejido. En Chiapas, para 1874 se daban casos en que se concedía a individuos porciones de tierras ejidales en calidad de posesión precaria para diferentes fines como la siembra y para cementeras con más tierras para cuatro mancuernas de bueyes y diez vacas regegas. En Valle de Allende, Chihuahua se dio una disputa judicial, resuelta en 1888, por las tierras de la localidad, ya que el presidente municipal amenazaba con castigar a gente del pueblo que sembraban las tierras ejidales, lo que hay que destacar aquí es que los agricultores alegaron que usaban así el ejido desde tiempo inmemorial por arrendamiento de la municipalidad.[63]

Ya fuera por la propia dinámica interna colonial agraria, que propició lo que Eric Wolf denomina Comunidades Corporativas Cerradas,[64] o por formas

[62] Raúl Lemus García. Derecho agrario mexicano. Porrúa, México, 1996. p. 90.
[63] Knowlton, op. cit., pp. 74 -75, 85.
[64] Véase Eric Wolf. Las comunidades corporativas cerradas de campesinos en Mesoamérica y java

prehispánicas que siguieron prevaleciendo sobre otras concepciones y usos de la tierra, en muchos pueblos indígenas los sujetos sociales no habían concebido la posibilidad de la propiedad privada de la tierra y no existían símbolos referentes a una relación individual con ella. Régimen comunal de la tierra y todo lo que se relacione con este término se ha convertido en un símbolo de lo indígena. Un rasgo característico de los pueblos indios fue el uso corporado de la tierra, pero no es algo generalizado que pudiera llegar a convertirse en una ley social. Aclaremos que indígena no equivale a uso comunal de la tierra o para decirlo en términos de la reforma agraria a propiedad social. Un caso a este respecto lo tenemos en Antequera (Oaxaca) donde los ejidos disponibles se habían dividido en pequeñas parcelas y sitios privados de pastoreo desde la década de los cuarentas del siglo XVI.[65]

Existen marcadas diferencias en los procesos históricos y sociales de los pueblos que desde la época prehispánica eran sedentarios, y la base de su sustento era la agricultura, de aquellos que eran grupos nómadas o seminómadas cuyo sostén era la caza y la recolección. Lo anterior marca variaciones en cuanto al uso, relación y concepción de la tierra, pero sobre todo, la diferencia principal era la ausencia de las expresiones clasistas en los segundos.

Las colonias militares

Los españoles se consideraron como portadores y trasmisores de la "civilización," la cual trataron de implantar a los indígenas considerados como "salvajes". Civilizar significaba que los naturales interiorizaran una serie de símbolos que normaran, organizaran y a través de los cuales percibieran e interpretaran su entorno. Todo un sistema simbólico relacionado con la religión, la lengua,

central. Nueva Visión, Argentina, 1977. También Eric Wolf. Una tipología del campesinado latinoamericano. Nueva Visión, Argentina, 1977.

[65] Knowlton, op. cit., p. 75.

costumbres y determinados usos y relación con la tierra se trató de imponer a los naturales de estas tierras; símbolos que eran los referentes culturales de los españoles. Los grupos nómadas y seminómadas del norte se convirtieron en su mayor desafío. Allí los peninsulares se toparon con grupos aguerridos que lucharon por conservar sus propios patrones de uso y relación con la tierra.

Premisa indispensable para llevar a cabo todas las metas mencionadas era el lograr una apropiación real del territorio que fue el objetivo principal de la política del Estado virreinal, lo cual se acentúa con la llegada de los borbones al poder en España. Al realizarse la expansión colonial hacia el septentrión los españoles fundaron explotaciones agrícolas, ganaderas y reales de minas que siempre estaban amenazadas por los ataques de los grupos étnicos; en la disposición geográfica esos centros poblados quedaban casi siempre como lunares en medio de grandes espacios territoriales dominados por los indígenas. Aunque esos territorios habían sido declarados propiedad de la Corona no se tenía control y dominio propio, su posesión era pues virtual, por lo tanto la Corona impulsó y creó los mecanismos necesarios para lograr una apropiación real del territorio, esto es: un espacio controlado administrativa y socialmente donde las tierras están enmarcadas en jurisdicciones políticas, dan su fruto y generan impuestos y donde los habitantes se reconocen como súbditos del rey o más tarde, en el siglo XIX, como ciudadanos. ¿Cómo lograrlo si se trataba de núcleos humanos no agrupados en asentamientos compactos como en Mesoamérica?

El primer paso fue el poblamiento con españoles, criollos, mestizos e indígenas asimilados al sistema colonial; el segundo fue lograr que los naturales de las tierras a dominar asimilaran los símbolos que los españoles referían como civilizatorios. Tres fueron los instrumentos concretos que entraron en acción para lograr controlar territorios, el primero se relaciona con la necesidad de reducir a asentamientos compactos a las naciones que no lo estaban: la misión, el segundo

con la fuerza militar para obligar a la sumisión y obediencia a la corona: el presidio[66] y más tarde entró otra institución cuya eficacia ya había sido probada en Europa por los romanos: la colonia militar. Pero, ¿Cómo funcionaron las tierras en las típicas colonias militares del norte? ¿Qué tipo de relación y concepción con la tierra nació en el norte a partir de la política de apropiación del territorio?

El modelo de asentamiento y de organización social relacionada con aglomeraciones humanas compactas y sus usos de la tierra también se basó en el pueblo castellano. Ya hemos señalado que el uso de la tierra de los grupos étnicos norteños al ser nómadas y no clasistas define una concepción diferente de la tierra con relación a los pueblos sedentarios del centro y sur del país; la organización en ambos casos fue de tipo castellana pero con variantes. McBride notó diferencias substanciales en cuanto a la organización social y uso del suelo: según las disposiciones coloniales los ejidos de los pueblos debían tener una legua cuadrada (un sitio de ganado mayor equivalente a 1755 hectáreas), pero señala que en California y Sonora y otras partes del noroeste de la Nueva España se fundaron pueblos con superficies territoriales de hasta cuatro leguas cuadradas que equivalían a 16 sitios de ganado mayor o 28 080 hectáreas; por otra parte, blancos e indios habitaron en el mismo pueblo pero en secciones separadas.[67] Concesiones considerablemente menores ante las otorgadas por Teodoro de Croix de 64 sitios, más de 112 mil hectáreas. Pero ni aún éstas fueron las más grandes que se otorgaron en el septentrión; la misma Villa de San Felipe el Real de Chihuahua, convertida por Teodoro de Croix en la sede de la Comandancia General de las Provincias Internas en 1778, había recibido una concesión aún más grande. El virrey de la Nueva España Juan Francisco de Guemes y

[66] Luis Navarro García. Don José de Gálvez y la comandancia general de las provincias internas del norte de Nueva España. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla, 1964. Tanto la misión como el presidio se fundaron en el siglo XVII, algunos presidios se establecieron más tardíamente en la primera mitad del siglo XVIII. Las reformas borbónicas que conllevaban cambios en lo militar los modificó.
[67] McBride, op. cit., p. 108.

Horcasitas, por Mandamiento de 18 de agosto de 1747, le había concedio 5 leguas por viento (100 sitios de ganado mayor, 175 500 hetáreas).[68] McBride señala que para las regiones de Texas, Coahuila y Nuevo México la tierra fue distribuida bajo un plan diferente. Aunque el pueblo todavía era la unidad del sistema de tenencia de la tierra como en toda Nueva España, en las regiones mencionadas éstos no eran centros agrícolas sino asentamientos de "colonias de pastores." En consecuencia la tierra se mercenaba por la cantidad de pasto necesario de la actividad más que por el área a ser cultivada. Da de ejemplo la merced que se otorgó en Rancho de Dolores por los años de 1749-1755 a un pequeño grupo de colonos por 50 sitios de ganado mayor.[69] Extensiones que se quedan cortas ante las que se otorga en la Villa de Chihuahua y después en las cinco colonias de Croix.

Sin embargo, para la época la afirmación de McBride es anacrónica. La competencia entre tierras agrícolas y ganaderas es un factor importante de la organización de la sociedad rural y fuente de serios conflictos, además de un aspecto importante en la formación del Estado que tiene que ver con la administración y el acceso de los potenciales recursos territoriales y su explotación. Los recursos naturales: metales preciosos, maderas, cuencas fertiles, litorales, más tarde el petróleo etc. son potenciales reservas de riqueza y poder, así que son vistas por los Estados como esenciales en su propia formación. Pero son solo eso potenciales, y no pasarán a formar parte esencial de los procesos de formación hasta que no se tenga el control total y la infraestructura necesaria para el acceso, mientras son bienes en disputa. Para esta época era difícil en la Nueva Vizcaya, como en el septentrión, sostener sobre todo negocios basados en ganadería extensiva debido a los ataques y constantes rebeliones indias. Previo a lo anterior es necesaria la consolidación del poblamiento y la apropiación real del

[68] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 143-153.
[69] McBride, op. cit., p. 109.

territorio. Así que las grandes mercedes de tierras en el norte responden principalmente al proceso de formación del Estado virreinal español.

En los últimos 30 años del siglo XVIII se dio lo que Margarita Urías denomina la "segunda avanzada civilizatoria,"[70] enmarcada por profundas reformas sociales, económicas, militares y administrativas que tenían por objeto central la apropiación real del territorio, convertir a las posesiones de ultramar en verdaderas colonias y extraer de ellas todo su potencial de plusvalía. La apropiación real del territorio conllevaba sobre todo el uso de la fuerza militar junto con el poblamiento, repoblamiento y redistribución de la población bajo el impulso de la pequeña propiedad y la carga simbólica que conllevaba.

La historia de la apropiación del territorio y el poblamiento del actual estado de Chihuahua se sucedió en etapas de impulso a la pequeña propiedad como forma de concentrar y estimular más individuos en la ardua tarea de la lucha contra los indígenas y tratar de aumentar la densidad de población en determinadas regiones. La propiedad de la tierra como premio era la forma de arraigarlos para que se sostuvieran en medios hostiles y aislados. Para entender lo anterior debemos ubicar los procesos históricos que generaron las reformas borbónicas, las cuales tenían por objetivo político final cancelar una forma de gobierno e imponer otra. En sentido real, las reformas provocaron que Nueva España tomara su estatuto de colonia. Los borbones buscaron remodelar la situación interna de la colonia como sus relaciones con las colonias. "Estos propósitos respondía a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea retomar los

[70] Margarita Urías Hermosillo. Rarámuris en el siglo XVIII. en Derechos culturales y derechos indígenas en la Sierra Tarahumara. UACJ, Cd. Juárez, 1994.

atributos del poder que antes se habían delegado en grupos y corporaciones, y asumir la dirección política, administrativa y económica del reino." [71]

La política que los borbones decidieron aplicar en América a partir de 1760 incluía reformas del aparato administrativo, transformación económica, mayor participación de las colonias en el financiamiento de metrópoli y el impulso a la propiedad individual. El nuevo Estado avizoró estos aspectos como medulares en su formación. José Campillo y Cossío en su escrito *Nuevo sistema económico para la América*, escrito desde 1743 y publicado en 1789, proponía la supresión del monopolio de Cádiz, el reparto entre los indígenas de las tierras comunales en forma individual, el impulso a la minería y la ampliación del mercado americano para las manufacturas españolas. Se reorganizó el aparato administrativo de la Nueva España dotándolo de un cuerpo de funcionarios profesionales dependientes del monarca. Se intentaron crear unidades político-administrativas llamadas intendencias, eran jurisdicciones territoriales importadas de Francia, lo anterior requirió la división del reino. La cabeza de las nuevas unidades territoriales era el intendente o gobernador general. Las facultades de este personaje eran amplísimas, tenía todos los atributos del poder: justicia, guerra, hacienda, fomento de actividades económicas y obras públicas.[72]

Las reformas correspondían pues a la imperiosa necesidad de controlar el territorio y sus pobladores. El septentrión había dado grandes dificultades a la Corona española debido a los levantamientos de la población indígena sedentaria y por los ataques de los grupos nómadas que se hicieron fuertes a finales del siglo XVII. Después de los levantamientos se dio paso a la formación de un costoso

[71] Enrique Florescano y Margarita Menegus. La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808), en Historia General de México, El Colegio de México, México, 2000. p. 366.
[72] Ibid, pp. 365-372.

sistema de defensa basado en presidios y columnas volantes.[73] El asunto aquí será analizar qué repercusiones tuvieron, en cuanto a los usos de la tierra estas disposiciones, en el norte de México.

El mandamiento del virrey Juan Francisco de Guemes de 1747 para la Villa de Chihuahua da una excelente descripción de la situación precaria del Estado en cuanto a su formación en el septentrión. Ante la indefinición de las tierras del pueblo y su adjudicación a particulares, en lo que debían ser los ejidos del pueblo, el 16 de febrero de 1747 el Síndico Procurador, Salvador de Lemus, de la villa inició una consulta para determinar la posible solución al problema. El fiscal de la Corona española respondió:

> "... que el vecindario de dicha Villa es numeroso y que para abastecerlo aún en la presente constitución y prescindiendo de la racional y bien fundada esperanza de su aumento y mayor opulencia necesita de Ejidos, Dehesas y pastos de una considerable extensión, en que puedan mantenerse los ganados del abasto y el copioso número de bestias que demandan el comercio y beneficio de las minas y haciendas de metales, no tiene el Fiscal por monstruoso y exorbitante el que se le asignen cinco leguas por cada viento, a que parece aspira el Procurador Mayor y con que se contenta, mayormente en un país de tan vasta largura de tierras, que mercenadas rendirán muy poca utilidad a la Real Hacienda, no siendo justo ni conforme a equidad y buena política que por un corto interés de ella y el privativo de algunos particulares, que apetecen tener haciendas por sus comodidades, casi dentro de las canales de las Villas y lugares, se abandone la subsistencia, conservación y aumento de una Villa como la de San Felipe el Real de Chihuahua..."[74]

[73] Luis Aboites Aguilar. Norte precario. Poblamiento y colonización en México (1760- 1940). p. 34.
[74] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 147-148.

Quedaba claro en la sentencia que ante la gran cantidad de tierra disponible el Estado no debía obrar con tacañería, sino fomentar el crecimiento de las villas. El acaparamiento de tierras por las elites locales podía llegar al grado de asfixiar a las poblaciones por lo que en este sentido eran vistas como una auténtica amenaza en la misma formación del Estado. Al fiscal no le parecía "monstruosa" la extensión de cinco leguas por viento para la villa. ¿Cuáles eran los argumentos que se daban para dar tal extensión de tierra a la Villa de Chihuahua?:

> "... siempre será conveniente que dicha Villa se conserve en su propio ser y número de vecinos, para que sirva de reparo, sin contar sobre su minería para el caso, por ser frecuentísimo, el que emborrascándose las vetas o bajando de ley los metales o inhabilitándose las minas por aguadas, se desierten y despueblen los reales, retirándose de ellos los operarios y mercaderes y el lograr que aviven este evento fatal, pero contengible se conserve, pende única y precisamente de que tenga tierras bastantes que repartir a sus vecinos, quienes con las labores y crías de ganados podrán sustentarse y contenerse para no meditar la ausencia y diserción."[75]

Se tenía pues clara la situación de la precariedad de las poblaciones septentrionales. La minería había sido un factor importante para impulsar las expediciones, pero no habían funcionado en cuanto a la consolidación de pueblos. Se veía pues la necesidad de crear pueblos agrícolas para que pudieran sostenerse en medios tan apartados y hostiles. Pero ni la creación de pueblos prósperos con agricultura desarrollada y numerosos habitantes era suficiente para consolidar la presencia del Estado; se requería que la misma población participara, un nuevo tipo de colono agrícola involucrado en la actividad militar como propietario agrícola - miliciano avecindado. El mismo mandamiento muestra las dificultades de la situación que la frontera demandaba:

[75] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 148-149.

> "...dicha Villa exige especial atención para su conservación y aumento, no solo por lo que toca a la Nueva Vizcaya, sino a todo el Reino, pues siendo la última población de sustancia y estando tan avanzada y expuesta a las incursiones y hostilidades de las naciones de indios bárbaros del Norte y del Sur y aún a la entrada de extranjeros que desde sus colonias, puede ir penetrando e introducirse con su comercio..."[76]

En el último tercio del siglo XVIII una serie de rebeliones indias, que llegaron a conformar coaliciones multiétnicas, contra los colonizadores sacudieron la Nueva Vizcaya, situación que tomó visos de una reconquista y reapropiación del territorio y llevó nuevamente a los indígenas a tomar el control y dominio de grandes espacios geográficos, situación que ponía en grave crisis al Estado. En la Sierra Tarahumara el diseño y control de la guerra estuvo encabezada por los rarámuri y en algunos casos compartieron la dirección de las bandas guerreras con algunos españoles o europeos no españoles, naturales de otras naciones, con negros, mulatos, coyotes y lobos.[77] Para 1750 la población septrentional se calculaba en poco más de 350 mil habitantes de la cual 64 % era india. La Nueva Vizcaya con 124 mil era de lejos la provincia más poblada; la seguían Sinaloa y Sonora con 90 mil. A pesar de su mayor población la Nueva Vizacaya adolecía de graves problemas debido a la población rebelde. En 1765 el márquez de Rubí inició una larga travesía por el septentrión para evaluar y reformar el sistema de defensa. En 1777 Felipe de Barri, como gobernador de la Nueva Vizcaya, envió una carta a su sucesor Teodoro de Croix, dándole a conocer lo difícil de la situación y los estragos provocados por los ataques de los rebeldes en cinco años: 1674 muertos, 154 cautivos, 116 haciendas y ranchos abandonados, 66 355 cabezas de ganado mayor y 1901 de menor robadas.[78] Pero hay que insistir en el importante

[76] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 143-153.
[77] Urías, op. cit., p. 89.
[78] Aboites, op. cit., pp. 36-37. El gasto militar en el septentrión aumentó de 251 mil pesos anual en 1701 a 495 mil en 1764. Ibid.

planteamiento de Urías de que se trataba de coaliciones multiétnicas, lo cual hacía la situación en extremo complicada.

Los procesos de acaparamiento del territorio en contextos de "tierras de frontera" y de constantes rebeliones indígenas no habían permitido su apropiación real. La gran propiedad había probado su incapacidad para lograr tal fin. Por eso, como lo refiere Urías, en la segunda mitad del siglo XVIII, en el contexto de las reformas borbónicas y en un gran esfuerzo del Estado para que la apropiación del territorio pasara de lo virtual a lo real, se dio otro gran impulso a la colonización utilizando como baluarte a las colonias militares. El régimen de tenencia de la tierra en dichas colonias asumió características y símbolos propios del contexto de las tierras de frontera y guerra con los naturales de la región. Las reformas poblacionales se dieron a través de colonizadores de nuevo tipo:

> "Pero sin lugar a duda la modalidad más importante fue la política de población, combinada con la práctica colonialista tendiente a fortalecer el mestizaje y castellanizar a los indios convirtiéndolos en pequeños propietarios y jefes de familia nuclear, bajo el estatuto legal de propietarios agrícolas-milicianos avecindados en los pueblos de nueva creación o mediante el repoblamiento de lugares que se despoblaron entre los años de 1740 a 1780 por la reconquista de los territorios que lograron realizar las bandas pluriétnicas de indios guerreros mediante una nueva cultura guerrera."[79]

La avanzada civilizatoria, en su expresión más cruenta en cuanto a la guerra sin tregua y cuartel, también encontró su vértice de apoyo en las reformas que los borbones aplicaron al aparato militar. Si podemos resumir la política aplicada por los borbones diríamos que fue anticorporativa, pero sus baterías se enfocaron contra las corporaciones tradicionales y buscaron favorecer algunos grupos que adquirieron la forma de nuevas corporaciones como el caso de los mineros y del

[79] Urías op. cit., p. 75.

ejército. Las fuerzas militares pronto se convirtieron en una corporación privilegiada con sus propios fueros, tribunales y jurisdicción. Cuando los borbones lanzaron sus ataques contra la iglesia, antes llamaron al ejército, fortalecieron a este cuerpo y a las milicias regulares para que sustituyeran el poder que antes había tenido dicha institución.[80] Aunque el Márquez de Rubí se propuso reformar el aparato militar en el septentrión, sería el visitador José de Gálvez, quien crearía una perspectiva de largo alcance. Confiaba en el potencial minero de Sonora y las Californias para obtener recursos suficientes y organizar el sistema de defensa, erigir nuevas poblaciones y abrir caminos y puertos.[81] La misión de Gálvez era fortalecer la débil presencia del Estado en el septentrión, la apropiación del territorio tenía que pasar a ser real y efectiva ante la reetnización del mismo y la latente amenaza de potencias europeas.

En este punto es cuando se hace necesaria una comparación, con las formas de apropiación territorial para un periodo temprano de la colonia, que nos ayude a trazar ciertas líneas de continuidad y ruptura en la perspectiva de larga duración relativa al uso, relación, concepción de la tierra y la formación del Estado de forma por demás somera, ya que son escasos los trabajos sobre el tema.[82] La zona temprana de apropiación del territorio por los españoles se dio en el sur del actual estado de Chihuahua en lo que se conoció como la provincia de Santa Bárbara. Las primeras mercedes en esta provincia fueron otorgadas a soldados colonos a quienes los jefes de las expediciones trataban de fijar en las regiones recién descubiertas. La primera etapa de colonización, en palabras de Cramaussel, se da mediante el impulso de la pequeña propiedad a finales del siglo XVI y principios del XVII. La expansión y apropiación del territorio fue prácticamente una empresa privada, pero estaban enmarcadas en las estrategias del Estado para su propia

[80] Florescano y Menegus, op. cit., p. 371.
[81] Aboites, op. cit., pp. 37-38.
[82] Chantal Cramaussel. Evolución de las formas dominio del espacio colonial. Las haciendas de la región de Parral. Actas del segundo congreso de historia regional comparada, Cd. Juárez, UACJ, 1990.

formación. La oligarquía local impulsó el poblamiento repartiendo y cediendo tierras a labradores para garantizar su permanencia y apoyo en el combate a los indios infieles. Aún así, en el contexto de colonización temprana, en tierras de frontera y guerra el dominio y control del territorio se torna precario y como consecuencia la tierra no es la base del estatus social, no es símbolo de poder y dominio: "Los conquistadores y pobladores de la Nueva Vizcaya, en sus relaciones de meritos, se presentan siempre como encomenderos y criadores de ganado, o como mineros, jamás como estancieros o labradores porque la tierra sola, a la cual en un principio todos tienen acceso, no daba ningún prestigio en particular." [83]

Pero las tierras de los primeros colonos, que debieron haber sido de las mejores para la agricultura y la ganadería, fueron asediadas por la oligarquía local y terminaron por apoderarse de ellas, dándose un proceso de concentración. Las ventas de tierras fueron una de las vías de concentración, pero también a través de los arrendamientos se dio pie a las usurpaciones, ya que al vencerse los contratos no fueron devueltas a sus dueños.[84]

Ante la pérdida del control y dominio de grandes regiones de la Nueva Vizcaya se hizo patente la urgencia de una reforma militar y el decidido apoyo a la fundación y refundación de pueblos que propiciara el poblamiento, la redistribución de la población y un verdadero control territorial. La reforma militar contempló la necesaria reubicación de los presidios alineados entre sí con poblamientos y

[83] La base comparativa serán los trabajos de Chantal Cramaussel, principalmente el trabajo Evolución de las formas de dominio del espacio colonial: las haciendas de la región de Parral. Actas del segundo congreso de historia regional comparada, Cd. Juárez, Uacj, 1990. Esta autora refiere la siguiente periodización de historia agraria de la provincia de Santa Bárbara: de 1563 a 1620 se repartieron las tierras, de 1620 a 1700 la oligarquía local se apoderó de ellas y de 1700 a 1760 se formaron los grandes latifundios, p. 130. Por otra parte, Urías toma en su trabajo Rarámuris en el siglo XVIII como primera etapa de colonización y poblamiento la esbozada por Cramaussel y como segunda la ya mencionada, agrega otra expansión o avanzada civilizatoria para 1830, p. 75. Con los riesgos que se corren al tomar grandes lapsos de tiempo, debemos añadir otra gran etapa de poblamiento y colonización en la época de la reforma agraria, asunto que retomaremos más adelante.

[84] Cramaussel, op. cit., pp. 119-120.

repoblamientos cuya normatividad se estableció posteriormente en el *Reglamento de presidios de 1772.*[85] "Dadas las condiciones específicas del noroeste de lo que hoy es Chihuahua –zona de guerra prolongada contra tribus nómadas y de concurrencia y confrontación con otros poderes imperialistas y estados expansionistas-..."[86] En 1776 Gálvez ascendió al Ministerio de Indias y obtuvo del rey la aprobación para la creación de la Comandancia Militar de las Provincias Internas cuyas facultades en hacienda, guerra, administración y vicepatronato la convertían virtualmente en un virreinato. Ese mismo año el rey expidió el decreto al primer comandante Teodoro de Croix en el que se aclaraba que su primer objetivo debería centrarse en la defensa, fomento y extensión de los vastos territorios encomendados a su mando. Fue hasta 1778 cuando Croix asumió el mando de las Provincias Internas.[87] Su principal estrategia fue involucrar a la población existente en la actividad militar, así como lograr una mejor distribución de la misma fundando y refundando pueblos pero bajo la organización militar. La actividad política y energías que Croix desplegó para lograr lo anterior no pudieron ser menos que agresivas. Ese mismo año expidió el bando para formar las cinco colonias en el noroeste de la Nueva Vizcaya dándoles como mayor incentivo 112 359 hectáreas para cada una y la tierra en propiedad bajo ciertas condicionantes.

Las colonias militares resolvieron para el Estado problemas estructurales sin los cuales no se hubiera podido iniciar una avanzada para la recuperación del territorio, a saber: se carecía de recursos para el abastecimiento de armamento y equipo. Así los militares reformistas solucionaron los problemas del financiamiento de cuerpos regulares y del abastecimiento de los insumos básicos como alimentos ya que al integrarse contingentes militares y presidios aledaños a los pueblos o dentro de ellos se creó una modalidad que obligaba a cada vecino a ser un miliciano con armas, caballos y bestias de carga. Lo anterior originó un modelo de

[85] Navarro García, op. cit., pp. 209-273.
[86] Lloyd, op. cit., 2001. p. 9.
[87] Aboites, op. cit., pp. 38-39.

relación militar con la tierra que marcó un uso, una relación y una concepción con la misma hasta entonces inédita en las colonias americanas de España. Estos pueblos funcionaban como centro de abasto agrícola - ganadero-militar cuya concepción de la tierra se enfocaba desde la perspectiva de su defensa y sostenimiento con las armas por ellos mismos. Lo anterior propició el nacimiento de relaciones de asociación que en un principio fueron importantes para la misma formación del Estado.

Pero para el poblamiento y repoblamiento el primer gran problema no eran precisamente los actos hostiles de los rebeldes, sino de donde sacar pobladores. La situación era complicada debido a la disminución de la población en el septentrión. Sobre todo la población indígena era la que había descendido considerablemente ya que la española no había dejado de crecer; pero el mismo poblamiento español había traído la disminución de la población indígena mediante la extinción, asimilación y mezcla de grupos como los chichimecas, tobosos y conchos. La disminución de la población hacía más evidente la dispersión y debilidad de los asentamientos caracterizados por las grandes distancias que los separaban, lo cual representaba un gran problema en el aspecto militar.[88] El abandono de pueblos, haciendas, ranchos y minas provocaba la reconcentración de la población en las villas más pobladas y seguras. La gran tarea del poblamiento no era pues traer colonos de fuera de la provincia, empresa que requería de un gran esfuerzo financiero, sino de lograr una mejor redistribución de la escasa población existente. La creación de las cinco villas del noroeste nos ha mostrado que los incentivos eran por demás atractivos y poderosos al grado que se corría el riesgo de disminuir las poblaciones más consolidadas y debilitarlas o definitivamente despoblarlas.

[88] Aboites, op. cit., p. 35. Lo anterior se hacía más evidente al rebasarse el paralelo 30. En algunos casos como en el Bolsón de Mapimí la frontera estaba mucho más al sur del paralelo 30, Ibid.

En el repoblamiento de San Jerónimo de los 53 pobladores que se registran para la década de los ochenta del siglo XVIII, solo cuatro provenían de España, uno de otra parte del reino y todos los demás parecen provenir de la Nueva Vizcaya. Principalmente de la Villa de Chihuahua y San Bartolomé, (Véase Anexo I, poblamiento de San Jerónimo)

La redistribución de la población existente no solo llevaba implícito la dificultad de sostenerlas con las armas, sino a la oposición de los hacendados de crear poblaciones en las tierras que les pertenecían pero tenían abandonadas. Antes de expedir el bando de la fundación de las cinco colonias Croix se vio obligado a declarar, mediante dictamen, que las tierras de la hacienda del Torreón pertenecerían a la que sería la villa de San Juan Nepomuceno (hoy Galeana). Se argumentaba que “además de tenerlas sus dueños desamparada y desierta de más de 18 años a esta parte sin haber verificado el cumplimiento del principal que se impuso para la fundación de una Capellanía, se interesa en ello todo el público de una provincia, la religión y el Estado.” Tres días antes de que Croix expidiera el bando mandó carta al capitán Nicolás Gil, encargado de llevar a cabo la empresa de poblar Galeana, instruyéndolo para que no obstante diera tierras a los que habían sido sus dueños, los herederos de Pedro González de Almoyna. Lo anterior se debía realizar antes de que distribuyera en suertes la hacienda y mediante evaluación de la situación en que se encontraba la propiedad. Si la hacienda estaba en condiciones de producir algo lo autorizaba para que en el caso de que quisieran ir a vivir allí se les diera preferencia dándoles la sexta parte que eligieran de la hacienda distribuida en tres clases de tierra: buena, mediana y mala. Las condiciones para tal eran “avecindarse, poblarla y cultivarla y radicarse en la nominada hacienda” al término de tres meses después de haber sido notificados de la resolución. En caso de no cumplir quedarían sin derecho sobre la

propiedad.[89] Por otro lado se expresa la dificultad del traslado de población al nuevo poblado:

> "Desde luego convengo en que practique Ud. las diligencias que insinúa para reclutar familias de los Valles de Basuchil y San Buenaventura, pero con la restricción de que no han de sacarse mas que aquellas que no tengan, casa bienes ni arraigo alguno, pues las que están bien establecidas, es muy perjudicial el moverlas y de ningún modo puedo permitirlo, en cuya inteligencia prevengo a Ud. que todas las que en los dos señalados parajes se alistaren me ha de dirigir certificación de los justicias que acrediten no poder subsistir en ellos y serles propicio el pasar a poblar la nueva Villa. Al pueblo de Paso del Norte, no es posible tocarlo por las atenciones a que están sujetos sus habitadores, según el real reglamento de presidios, sobre cuyos puntos tomaré breve providencia, pero no por eso dejará de poblarse la nueva Villa respecto a que para atraer vecindario para ella y las otras cuatro que voy a disponer se funden, he mandado publicar bando de que acompaño copia, obligando a todos los que no tuviesen casa a pasar a ella, por las buenas proporciones de los terrenos, privilegios y auxilios que les facilitaré lo que creo que les servirá bastante incentivo para la población."[90]

Croix estaba resulto a llevar a cabo su agresivo plan de redistribución de la población de lo que pretendía fuera el inicio de un consistente proceso de reapropiación del territorio. También expresaba en su carta a Gil la necesidad de que acudieran a la nueva villa maestros de obra y carpinteros, así como el envío de reos para que se les ocupara en las obras materiales. Le comunicaba que vería la posibilidad de reforzar el puesto con más tropa, pero le advertía: "...del mismo modo que ha de procurar lo sólido y útil establecimiento de la Villa de San Juan Nepomuceno, debe cuidar la permanencia del Valle de San Buenaventura, pues si se despuebla haré a Ud. responsable de las resueltas y así puede Ud.

[89] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 11-13.
[90] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 11-13.

comunicarlo a aquel justicia y vecindario, comunicándolo con las penas correspondientes si desamparan la población."[91] Después, en el mismo bando, expresó que algunos emisarios pasarían a los pueblos a reclutar familias y los ayudarían en sus necesidades para el traslado. Los objetivos mencionados eran lograr la "pacificación, pueble y fomente" de estas tierras pues: "...con la posesión de Bienes Propios, y atraerán, todas las demás ventajas consiguientes a unos bien fundados establecimientos cuales son las de dar incremento al comercio, fomentar la agricultura y hacer conocer la industria; he resuelto, y así lo declaro, se creen y funden cinco poblaciones..."[92] Los lugares eran en Villa de Santa Cruz (Las Cruces), Villa de Namiquipa en la antigua región abandonada de San Pedro de Alcantara de Namiquipa (Namiquipa), Villa de San Antonio (Casas Grandes), Villa de Santiago en el antiguo presidio de Janos (Janos) y Villa de San Juan Nepomuceno en el sitio de Chavarría o Valle del Torreón (Galeana).

Para las cinco poblaciones se medirían cuatro leguas por viento, lo que significaba establecer una unidad territorial cuadrada de 64 sitios de ganado mayor (112 mil hectáreas). Las disposiciones en cuadro tenían que ver con la mejor administración y mercedación de la tierra. En la colonización temprana, por ejemplo, el sitio de estancia para ganado era una aparente paradoja, una unidad de superficie que no tenía límites fijos. En los siglos XVI y XVII los sitios de ganado estaban representados por un círculo y solo se conocía el centro de estos sitios y a veces el "ancón de tierra" donde se reunía el ganado durante el rodeo. A menudo, como en las explotaciones agrícolas, el aguaje o la casa eran las únicas referencias geográficas. Los colonos dejaban ganado marcado con sus fierros en un ojo de agua o en el río donde abrevaban pero el terreno no estaba deslindado. El abrevadero o la casa, si la había, era el centro del sitio. Para evitar que las mismas tierras se mercedaran más de una vez se medía la distancia que

[91] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 11-13.
[92] Archivo Histórico del Registro Agrario Nacional, (en adelante AHRAN) restitución de tierras a Casas Grandes, 100.2/23 también en 24: 397, Toca, ff. 118-127 del AHRAN.

separaba el centro del sitio mercedado de los centros de otras mercedes colindantes, es decir, la referencia era pues la distancia entre dos abrevaderos. En esas circunstancias los sitios tenían que adoptar una forma circular porque permitía atribuir otro sitio en merced en cualquier lugar de los alrededores quedando fija la distancia entre los centros de las mercedes. Fue hasta el siglo XVIII, con la política de composiciones, que la corona se empeñó en "reducir a cuadro" los sitios de ganado: entonces los huecos entre las mercedes quedaron en la categoría de tierras que se denominó demasías y fueron reclamadas.[93]

Croix publicó el bando y se especificó que luego que llegarán los pobladores se les repartieran solares, tierras y aguas por iguales partes y a cada uno la suerte de tierra que pudiera sembrar, cultivar para su cómoda subsistencia. Una vez levantada la cosecha los pastos deberían de aprovecharse en común hasta llegado el tiempo de volver a sembrar. Asimismo, se debían señalar las tierras para ejidos y dehesas comunes.

Los incentivos que ofrecía Croix en el bando eran por demás atractivos y con las suficientes precauciones para garantizar su sobrevivencia: 1.- Todos los colonos recibirían dos reales diarios durante un año. 2.- Por diez años gozarían de la excepción por el pago del diezmo por el producto de siembras y ganados, también por tributos, alcabalas y tampoco estarían obligados, por el término señalado, de la pensión o canon enfitéutico a la real hacienda. 3.- La gran extensión de las tierras. 4.- Los productos de su trabajo tendrían mercado seguro en las propias guarniciones y vecinos colindantes. 5.- Las villas estarían guarnecidas, Cruces y Namiquipa con dos piquetes de 30 soldados; Casas Grandes con la cuarta compañía volante; Janos por la compañía presidial destacamentada allí; y Galeana se erigiría al abrigo del presidio de la Princesa.

[93] Cramaussel. op. cit., pp. 124-125.

Las obligaciones que se imponían a los nuevos pobladores aseguraban la solidez y permanencia de las nuevas villas. Los colonos no podían cambiar de residencia por un término de diez años: ni podían dividir la suerte de tierra ya que siempre debía mantenerse indivisa y en una sola persona. A los vecinos españoles se les imponía la obligación de tener armas, municiones y caballos; a los indios carcajes, arcos, flechas y lanzas para defender las villas y atacar a los enemigos.[94]

La fundación de estos asentamientos siguió el típico modelo de pueblo castellano, pero con una nueva modalidad que significó su supervivencia e introdujo otros usos y costumbres en la concepción y relación con la tierra: "que a fin de que desde luego empiecen a disfrutar el bien posible se sembrará por los vecinos una *milpa grande de Comunidad*, dándoseles semillas, rejas de arar, coas, carretas, y algunas yuntas de Boeyes..." *La milpa grande de comunidad* era sembrada comunalmente y se repartían las cosechas entre todos." De la primera cosecha se debían repartir los frutos entre los nuevos pobladores, una parte serviría para cubrir los gastos que generaba en sí el proyecto y de la parte que le quedaba a cada vecino, de semillas, debía guardar lo necesario para la siembra particular de "sus propias tierras" en el año sucesivo y con lo restante de lo cosechado debía atender su subsistencia. La *milpa de comunidad* también fue conocida como *terrenos de defensa* y servía para sufragar los gastos de operación del municipio y a subvenir las urgencias del pueblo en los años difíciles.[95]

La milpa grande de comunidad sustituía algunos de los usos de los *propios* y *arbitrios*:

> "Que todo o parte del terreno que se destine para la expresada *milpa*, no se repartirá en las suertes del vecindario, pues ha de quedar para que sembrándose y cultivándose todos los años a costa y trabajo del común, se

[94] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 5-7. También 24 / 432, Local, ff. 163-166.
[95] Lloyd, op. cit., 2001, pp. 8-9.

> destinen sus productos para subvenir a las urgencias de los mismos vecinos en los años calamitosos y para que sirvan de propios y arbitrios de cada población." [96]

El cultivo de la *milpa grande de comunidad* se organizaba por faenas y cada jefe de familia tenía la obligación de contribuir aportando su propia fuerza de trabajo, semillas y aperos de labranza. En las épocas en las que se intensificaba la guerra con los apaches la *milpa de comunidad* se usaba para sostener al pueblo, para eso se había abierto cerca del núcleo de población y los hombres acudían a cultivarla en grupo sin alejarse mucho del asentamiento, además otro grupo de vecinos armados y alertas cuidaban y protegían a los que desempeñaban las labores agrícolas.[97]

En los contextos de guerra de frontera, la apropiación real del territorio los procesos de distribución y acceso a la tierra no son centralizados por el Estado. El gobierno jurisdiccional y económico de las nuevas Villas corría a cargo de los capitanes de los presidios y comandantes de los piquetes destinados a guarnecerlas, hasta que congregados los vecindarios y aseguradas las fundaciones, pudiera procederse a la elección anual de alcaldes.[98] También los capitanes eran los encargados de mercenar solares y tierras a los soldados y vecinos que las solicitaran para fijar su residencia en ellas, por las disposiciones de la real ordenanza de intendentes. El testimonio del capitán Francisco Vásquez del poblado de Namiquipa nos muestra el proceso:

> "...habiéndome retirado el año de 1785 y pensando radicarme en este puesto, pedí se me dieran tierras, según el Reglamento de Presidios y el Capitán que era entonces Don Juan Antonio Arce me mercenó las que poseo, y después el

[96] AHRAN, Restitución a Casas Grandes, exp. 100.2.
[97] Lloyd, op. cit., 2001, p. 10.
[98] AHRAN, 100.2 / 23, ff. 5-7, también 24 / 432, Local, ff. 163-166. Así lo expresaba el bando de Croix.

> Capitán Don Alberto Maynes en el de 95 [1795] me dio la posesión conforme a derecho y este es el motivo por que nomino por mías estás tierras y casas y a más de lo que llevo referido el Bando que expidió el Comandante General que fue de estas Provincias Don Teodoro de Croix... sobre las fundaciones de Presidios, concede cuatro leguas por cada biento (sic) para siembras y ganado de los vecinos que se quisieran avecindar en dicho puesto y como quiera que mi lavor 8 (sic) está a un tiro escopeta de la Muralla, me parece que soi (sic) poseedor, como lo son los demás vecinos de las que poseen..."[99]

La historia cultural de la época colonial, a partir de la apropiación del territorio, muestra contradicciones materializadas en la fundación de asentamientos o pueblos y en la trasmisión de un sistema de símbolos que se supone tenía que ser uniforme desde el momento en que se trataba de que los indígenas asimilaran los códigos occidentales que perfilaban una forma específica de percibir, interpretar y actuar; códigos que tenían que ser trasmitidos por los propios españoles. Sin embargo, a través de las líneas anteriores hemos podido ver una oposición en la fundación de pueblos y en los usos de la tierra para españoles y para indios. McBride apuntó, como se señaló anteriormente, que una característica de los asentamientos fundados en el norte tanto blancos como indios habitaron el mismo pueblo pero en secciones separadas. Para la segunda mitad del siglo XVIII la política de separación residencial había cambiado radicalmente. Margarita Urías señala que "se desarrolló, a partir de una utopía... que alimentaba la convicción de materializar en el nuevo mundo la fundación de ámbitos humanos separados en comunidades españolas de las de indios". El ideal anterior fue rigurosamente sancionado a partir de la política y legislación de la separación residencial. En la recopilación de las leyes de indias (1681) la república de indios era el baluarte para garantizar la cristianización y obligar a los naturales a vivir en *policía,* o sea, bajo gobierno, políticamente, en república, en ciudad, en comunidad, en nación o

[99] AHRAN, 24/ 432, Toca, f. 93. También Local, ff. 16-17.

en país;[100] códigos de un sistema de símbolos que se debían interiorizar; indispensables para que el Estado pueda ejercer el dominio y el poder que corresponde; donde los súbditos tienen que ingresar en sus perspectivas de vida el reconocimiento de un Estado-Rey y rendirle obediencia.

Según la visión utópica mencionada los naturales debían vivir alejados de la potencial contaminación del elemento español caracterizado por los misioneros como alguien proclive a la maldad. Lo anterior se tradujo para el norte, desde el siglo XVII, en el pueblo de misión. Pero para la segunda mitad del siglo XVIII la sociedad colonial fronteriza hacia crisis. El nuevo reto fue enfrentado por: "los emisarios de la modernidad y del utilitarismo racionalista;" los encabezaba el visitador José de Gálvez que traía como proyecto realizar una gran reforma en la frontera septentrional para hacer efectiva la presencia del Estado. En 1767 Gálvez suprimió las leyes de separación residencial que, por lo menos, para el actual estado de Chihuahua, logró convertirse en una política colonial. Las reformas sociales que Gálvez pretendía establecer tenían como base la conformación de una sociedad de pequeños y medianos propietarios; laica y secularizada; mestiza y castellanizada.[101] La nueva sociedad tenía que asimilar un sistema de símbolos que lo llevaran a adquirir el sentido de la propiedad privada individual de la tierra y a respetar la propiedad privada ajena, esto es percibir su entorno social y relacionarse con el conjunto social a partir de las bases de percepción y relación individual, no a partir del grupo social o comunidad y sus mecanismos de regulación que los sustentaba como grupos corporados. Era pues la sustitución de un sistema de símbolos que tenía como base las relaciones sociales y percepción de la sociedad a partir de códigos corporados a rasgos que parten de la propia persona y de su individualidad como propietario.

[100] Urías, op. cit., p. 77.
[101] Ibid, p. 77, 78, 102. Para Urías esta política anticipó el proyecto de nación de los liberales decimonónicos, ya cuando México había obtenido su independencia de la Corona española que impulsaba una sociedad con el sentido de la propiedad privada y laica.

El Estado impulsó la apropiación del territorio mediante el establecimiento de la pequeña propiedad privada y toda la simbología que ello conllevaba; el poblamiento tenía también por objetivo el mestizar y castellanizar a los indios y convertirlos en pequeños propietarios. Llevar a cabo las reformas sociales y lograr una apropiación real del territorio no solo implicaba vencer a los indios alzados, sino también batir a una de las corporaciones más poderosas del orden colonial: la iglesia. Así que las reformas se apoyaron en la secularización de las misiones y en la expulsión de los misioneros de la orden de Ignacio de Loyola, los jesuitas, ejecutada en 1767 para definir una nueva organización social, militar y reubicación de los presidios fronterizos, pero sobre todo una nueva reorganización territorial. Para Farris la expulsión de los jesuitas no se debe ver como medida aislada o arbitraria de represión u ostentación de poder. Ante todo se trataba de un plan sistemático para fortalecer al Estado ante cualquier fuerza amenazadora y opuesta.[102] Así pues se dio una recomposición demográfica donde, por lo menos en ciertas acciones, se trataba de dejar de lado la cuestión racial como base del estatus social.[103] Cuando menos así se puede también percibir en el bando de Croix: "hago saber a todos los vasallos de su Majestad estantes, y habientes en esta provincia de la Nueva Vizcaya de cualquiera *clase, casta o calidad* que sean pero que no tengan, casas ni otros bienes raíces; que el que quiere trasferirse y establecerse en algunas de las mencionadas villas…"[104] (las cinco poblaciones referidas anteriormente).

Urías señala que la vigencia de la separación residencial y la obligatoriedad de los matrimonios entre iguales (prohibición de matrimonios desiguales) desaparecieron de la vida real y cotidiana en el actual territorio del estado de Chihuahua. Hubo casos de jefes de familia indios que llegaron a tener como sirvientes a españoles

[102] Nancy Farriss. Crown and clergy in colonial Mexico 1759 - 1821. The crisis of ecclesiastical privilege. The Athlone press Londres, 1968. p. 136. Citado en Aboites, op. cit., p. 37.
[103] Ibid, op. cit., p. 103.
[104] AHRAN, 100.2 / 23, ff. 4-24. Restitución a Casas Grandes, Bando de Teodoro de Croix.

europeos que padecían de extrema pobreza.[105] Lo anterior fue una política general pero no consistente; el caso de San Gerónimo (hoy Aldama, Chih.) nos muestra otra dinámica aunque es fundada como colonia militar, cuyo objetivo era al igual que las cinco colonias del noroeste la apropiación del territorio, sigue patrones de una refundación de pueblo para indios con los rasgos propios que asumían estos para el norte. Era también un proyecto de Teodoro de Croix que continuó su sucesor Felipe de Neve.

La separación residencial en San Gerónimo no solo se dio entre indígenas y españoles o blancos, sino también entre grupos étnicos. Gutiérrez de la Cueva informó que a los indios chinarras les había dado solares en la calle por donde se entra a mano izquierda, viniendo de Chihuahua, y a los tarahumaras a mano derecha frente a los chinarras "nombrando cada nación su gobernador."[106]

San Gerónimo antes de despoblarse fue una misión jesuita para indios chinarras denominada Santa Ana de Chinarras. Al organizarse la refundación en 1783 se le denominó San Gerónimo; el comisionado para llevar a cabo la empresa fue el ayudante de inspector Juan Gutiérrez de la Cueva, quien había previamente establecido 37 colonos con sus respectivos solares. Las instrucciones del capitán señalaron una reorganización de la distribución del agua para regar más superficie y tener más tierra irrigada que repartir a los vecinos en cuanto se hubieran recogido las cosechas de maíz y fríjol sembradas por el "viento sur." Realizado lo anterior se verificarían las suertes que pudieran regarse y se repartirían a los vecinos, "no excediéndose de tres al que haiga mayor gracia," a los cuales daría posesión Gutiérrez de la Cueva tomando en cuenta que cada suerte se compondría de 400 varas de largo por 200 de ancho y para ejidos quedaría lo que

[105] Urías, op. cit., p. 103.
[106] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 8. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.

hay desde la nueva población hasta el lindero de Tabalaopa.[107] Pero aquí seguía vigente la separación en secciones:

> "(Los Yndios Chinarras que están en Santa Ana se han de reunir con los de Sn. Gerónimo y así aquellos como estos les he repartido solares cuya lista incluyo) siendo conveniente que los indios tengan sus aguas y sus tierras, separadas de los españoles (para quitar desavenencias con los riegos) señalará V. M. a los Yndios sus suertes en la otra banda del río a donde hoy tienen las siembras los de San Gerónimo y que el único vecino que hay en la otra banda llamado Felipe López se pase a esta luego que halla recogido su cosecha."[108]

Las posibilidades de riego era el fundamento de la población ya que despertaría el deseo de pobladores de solicitar tierras y su gran producción los anclaría en el lugar. Asimismo, esa producción tendría fácil y rápido acomodo en la cercana Villa de Chihuahua y Real de Santa Eulalia.[109] Parece que la distribución del agua había sido un factor determinante para la separación residencial. El trabajo de los ingenieros y militares fue fundamental, los linderos siguieron los reconocidos como los de la extinta misión, excepción de límite del viento norte, donde se integraron tierras abandonadas por particulares desde hacia tiempo atrás. El 29 de octubre de 1783 se declararon suprimidas las misiones de Santa Ana y San Gerónimo.[110] En las cinco colonias militares del noroeste el uso de las *tierras de defensa* seguían las de los propios y arbitrios, subvenir los gastos de la comunidad, en estos casos los de la guerra con los indios como Croix dispuso, pero el uso y la concepción de estas tierras era diferente como ya vimos su uso era de tipo comunista. Lo anterior se posibilitó por la reorganización social que se llevó a cabo

[107] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 9. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama. Véase también AHRAN, exp. 48.1/23 restitución a Aldama.
[108] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, ff. 9-10. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.
[109] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 12. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.
[110] Urías, op. cit., p. 108.

donde no se hacían distinciones raciales y todos tenían las mismas oportunidades de acceso a los recursos territoriales, la base y símbolo del estatus social no lo daba directamente el factor racial, ahora la base y símbolo del estatus social era la cuestión militar, por eso a los capitanes les tocaban más suertes de tierra. Así pues, la organización social de los pueblos en ámbitos humanos separados imponía usos, concepciones y relaciones diferentes con la tierra como en la nueva colonia militar de San Gerónimo:

> "Divididas las suertes de tierras, señalará V. M. de las más útiles e inmediatas a la población y amojonará quatro para fondo de propios, y otras quatro en la otra banda del río para la comunidad de los Yndios. Para que no haya disputas ni desavenencias en el repartimiento de tierras, hará V. M. se sorteen las que a cada uno le señale, así los españoles como los Yndios."[111]

Las diferencias que hemos señalado se debían a dos procedimientos normativos: las cinco colonias del noroeste siguieron las disposiciones del bando de Teodoro de Croix, mientras que San Gerónimo las *Instrucciones extendidas por el auditor de guerra Pedro Galindo Navarro para la población del Pitic* para la fundación de villas de españoles (hoy Hermosillo, Sonora).[112] No fue hasta 1785 que el ayudante de inspector Juan Gutiérrez de la Cueva señaló los ejidos y dehesas del pueblo. Para el ejido se daban quinientas varas por cada viento midiéndose desde el centro de la plaza principal. Para *dehesa* o *prado bueyal* señaló "las tierras que hay desde la Boquilla a donde estaba la población antigua de San Gerónimo, hasta donde se ha reconocido por tierras pertenecientes a los Pueblos de los Yndios y Misión de Santa Ana, desde el tiempo que administraban dicha misión los Jesuitas expatriados (que es hasta el Árbol del Pixuan) y después han reconocido los arrendatarios con sus rentas a la comisión de San Jerónimo, en

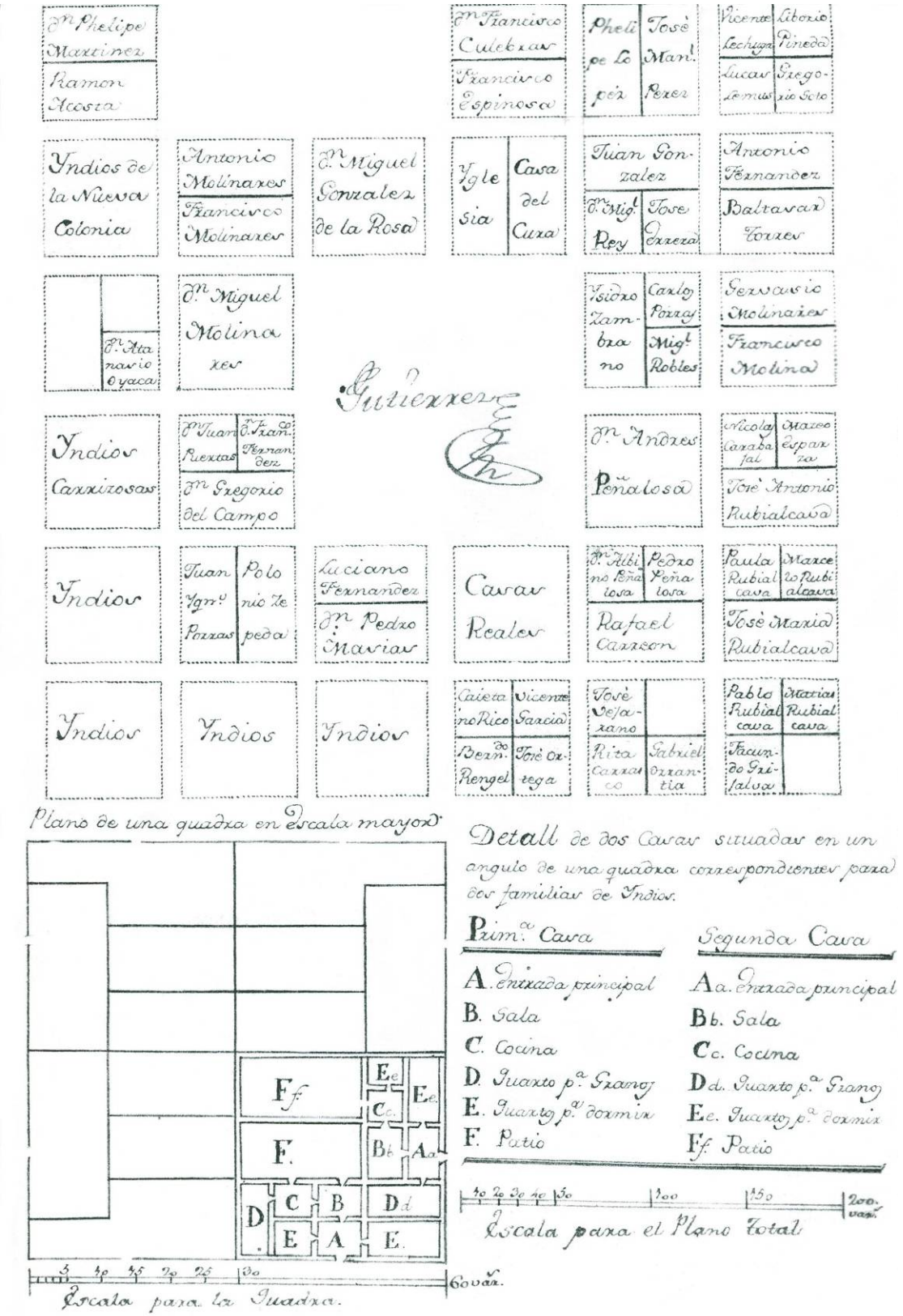
[111] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 10. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama. También en AHRAN, exp. 48.1/23 restitución a Aldama.
[112] Urías, op. cit., pp. 105-106.

cuyas tierras han de pastar los ganados de labor, y las que hubiere para el abasto de la Nueva Villa."[113]

El sistema de símbolos en los ámbitos del poder, la política, la apropiación del territorio, la producción y la organización social que llevaba la fundación y refundación de pueblos eran occidentales-españoles. Es significativo que en las instrucciones del inspector Gutiérrez de la Cueva se menciona el levantamiento de cosechas de maíz y fríjol, pero posteriormente los documentos e historiadores mencionan los cultivos que corresponden a las de la cultura española: el trigo y la cebada así como las técnicas agrícolas de la coa y el deshierbe a mano son sustituidos por las europeas como el arado y la yunta de bueyes o de caballos.[114] Las instrucciones de Galindo Navarro contenían todo lo relativo al otorgamiento de mercedes de tierras para labores agrícolas y solares para casa habitación y huertas familiares; para la urbanización el trazo de calles, plaza, edificios públicos e iglesias. El diseño del poblado era cuadriculado cuidando el justo reparto de la tierra y del agua, la libre y armoniosa convivencia; el modelo de casa para indios contenía sala, cocina, cuarto para granos, dos cuartos para dormir y patio. Los accesos y calles debían asegurar la comunicación y el tráfico de hombres, tropas y ganados, (véase Figura 1.1). Los pastos, montes, tierras realengas y baldíos, caza, pesca, piedra, maderas, árboles frutales dentro y fuera de la población eran de aprovechamiento común a españoles e indios. Debía además delimitarse la dehesa o prado bueyal para el libre pastoreo de los ganados de labor y reconocerse las tierras adecuadas para trigo y granos, para legumbres y frutales integrando tierras de temporal, además de las de riego. Así pues la Instrucción mencionada y el caso de San Gerónimo son una síntesis de los referentes

[113] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, ff. 19-20. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama. También en AHRAN, exp. 48.1/23 restitución a Aldama.
[114] Lloyd, op. cit., 2001, p. 11.

Figura 1.1



Plano de una quadra en Escala mayor

Escala para la Quadra.

Detall de dos Casas situadas en un angulo de una quadra correspondientes para dos familias de Indios.

Prim.a Casa	Segunda Casa
A. Entrada principal	Aa. Entrada principal
B. Sala	Bb. Sala
C. Cocina	Cc. Cocina
D. Quarto p.a Trastos	Dd. Quarto p.a Trastos
E. Quarto p.a dormir	Ee. Quarto p.a dormir
F. Patio	Ff. Patio

Escala para el Plano Total

simbólicos que los españoles trataban de hacer fueran asimilados por los nativos en el contexto fronterizo.[115] Todo iba encaminado a la consolidación del Estado.

Las instrucciones de Galindo Navarro fueron expedidas el 22 de diciembre de 1782 en Arizpe, cuatro años después de que Croix publicara su bando. Las disposiciones son radicalmente diferentes a las del bando, podría decirse más flexibles, pero con una concesión de tierras mucho menor. Mientras que el bando Croix representa una decidida y agresiva política de apropiación o reapropiación del territorio adecuada al contexto regional, las instrucciones de Galindo Navarro son reglas generales adaptadas a las disposiciones de las leyes del reino español para la fundación del Pitic (hoy Hermosillo, Sonora) pero, según lo establece la misma Instrucción también aplicable a toda nueva población que se intentara formar. Según la premisa anterior a las nuevas poblaciones se les concedería como extensión territorial "quatro leguas de término o territorio en cuadro o prolongado según la mejor disposición del terreno"[116] Aquí está la primera y gran diferencia con el bando de Croix que estableció para las cinco poblaciones 4 leguas por viento, o sea, 8 leguas cuadradas y la Instrucción fijaba 4 leguas cuadradas que equivalía a 16 sitios de ganado mayor ó 28 080 hectáreas. Los nuevos Estados emanados de la independencia o de la revolución en lo futuro utilizarían esta disposición para tratar de reducir las tierras de los pueblos que tenían más de esta última extensión.

En lo referente a las tierras se sigue el modelo del pueblo castellano como lo describió McBride, por los cuatro frentes se dejarían ejidos suficientes para recreo de la población, para que pueda salir el ganado sin perjudicar y para que hubiera espacio para el aumento de la población. Se demarcaría la dehesa o prado bueyal para que pastaran los ganados de labor y de abasto de la población, los pastos y

[115] Urías, op. cit., pp. 105, 107-108.
[116] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 2. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.

montes serían usados comunalmente.[117] Las suertes medirían 400 varas de largo por 200 de ancho (era lo que comúnmente ocupaba una fanega de maíz de sembradura). Para los propios se debían dejar ocho suertes. El aspecto más importante de este tipo de poblaciones y cada uno de sus habitantes era su estatus miliciano que se le daba a la tierra a nombre del rey "perpetuamente para siempre jamás y por juro de heredad para sí, sus hijos y descendientes." La condición era esencialmente la misma exigida por Croix: "mantener armas y caballos, y estar prontos a defender el País de los insultos de los enemigos que le hostilizaren y a salir contra ellos siempre que se les mandare." Pero a diferencia del bando solo exigía cuatro años de residencia para preservar los derechos otorgados y obtener el "verdadero dominio de las tierras y solares que se les hubiera repartido."[118] Posteriormente Gutiérrez de la Cueva informaba que demarcó 64 suertes de tierra de 400 por 200 varas y las repartió por sorteo. Para fondo de propios dejó cuatro suertes y verificó que a los indios se les dieran sus suertes en la otra banda del río, los cuales quedaron satisfechos, según de la Cueva, por tener tierras suficientes tanto particulares como de comunidad, por tener agua para riego "y estar separadas o independientes de las de los españoles."[119]

La instrucción de Galindo Navarro se aplicó en las nuevas poblaciones y en gran medida normó y cambió procedimientos ya establecidos. En cuanto a las cinco colonias de Croix definió los procedimientos que no habían quedado especificados en el bando respecto a la solicitud y mercenación de solares y suertes. Pero también sustituyó algunas de las disposiciones que marcó Croix. En 1813 el soldado retirado Gregorio Trujillo solicitó al capitán y comandante del presidio de Janos la regularización de un solar que había adquirido. Se le concedió la petición

[117] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 3, 13. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.
[118] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 5. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.
[119] AHRPP, Cuaderno Nº 21, 1783, f. 14. Ordenanzas municipales y egidos de la Villa de Aldama.

a nombre del rey, perpetuamente, por juro de heredad, para él, sus hijos y descendientes. En cuanto a su obligación de defender y pelear se plasmaba exactamente como se disponía en la instrucción de Galindo Navarro, debía de mantener armas, caballos y estar siempre dispuesto al combate. En contravención del bando de Croix que imponía diez años como mínimo para poder adquirir la posesión plena y poder vender, ahora de acorde con la Instrucción eran solo cuatro años. [120]

Todavía para enero de 1821 el capitán retirado José Ronquillo, del presidio de Janos, sancionó la venta de una casa y solar con todos los rituales de poder del Estado virreinal que conllevaba la Instrucción. El capitán dio al comprador Agustín Esparza "la posesión jurídica y real de la Casa y Solar que ha comprado," con la condición de "mantener armas y Caballo, y estar pronto a defender al país de los insultos del enemigo." Tenía que avecindarse cuatro años para "adquirir el verdadero dominio."[121]

Otra de las grandes contradicciones del gran proyecto reformador se inscribe en el impulso a la creación de pequeños propietarios privados, pero también en tener que fortalecer ciertos rasgos comunales impuestos por la particularidad de la guerra contra los indios y la amenaza externa de potencias sedientas de nuevos territorios. Dale Lloyd señala que aunque en este tipo de dotación se reconocía "la propiedad personal e individual se hacía dentro de los límites de una organización corporativa que la regulaba y la sostenía."[122] Aún más allá, este tipo de comunidad combinaba rasgos de apropiación del territorio de tres dimensiones: privada, comunal y comunista.

[120] AHMJ-FPJ, f03001005, Sección Civil. El solar solicitado era de 15 varas de frente y veinte de ancho. El comandante asentó el acta que "lo tomé de la mano y le di Posesión Real, usando de las formalidades acostumbradas de dar botes, tirar piedras, Ibid.
[121] AHMJ-FPJ, f03001008, Sección Civil.
[122] Lloyd, op. cit., 2201, p. 9.

En palabras de Cramaussel fue en el siglo XVIII que se multiplicaron los conflictos por la tierra y cuando la misma se volvió el sostén esencial del poder político.[123] Lo anterior derivó de la aplicación decidida, por la Corona, de una política de composiciones que en el discurso tenía como meta la regularización de la tierra; que su pleno dominio y control se convirtiera en verdadero pilar y símbolo del poder del Estado. El dominio y control pleno de la tierra era la principal forma del ejercicio hegemónico hacia los súbditos y vasallos. Los borbones estaban decididos a recuperar todo el poder que se había depositado, no siquiera en el ejército, sino en la sociedad civil. Fue en este siglo cuando la ostentación de tierras se convirtió en símbolo de riqueza, estatus, posición social y prestigio.

En la colonización temprana la apropiación de la tierra se daba a partir de la cantidad recibida de agua para regar, del número de ganado marcado y de la disponibilidad de mano de obra indígena para laboreo. La concepción del dominio territorial se dio a partir de los elementos que se necesitan para hacer producir la tierra y no a partir de la tierra en sí. La tierra por sí misma no simboliza poder, prestigio o estatus; la tierra en sí misma no es un elemento en disputa; en los horizontes de vida no representa riqueza por sí sola si no se tienen los elementos y la seguridad para hacerla producir, no es la base de las oportunidades. De nada servía pues acumular tierra si no se tenía mano de obra para hacerla producir. Entre los primeros colonizadores eran raros los litigios por la tierra, la disputa se daba por el riego y por los indios.[124]

Lo anterior tiene que ver con las formas cambiantes de la apropiación del territorio y el ejercicio del poder del Estado. En una época temprana de la colonización, en

[123] Cramaussel, op. cit., p. 126, 130.
[124] La tendencia de los miembros de la oligarquía de la provincia de Santa Bárbara, como Martín López de Ibarra, era no acaparar grandes extensiones de tierra. Preferían mercedes moderadas, no importaba que estuvieran dispersas en toda la Nueva Vizcaya, lo importante era que las mercedes tuvieran mano de obra y agua suficiente para hacerlas producir. Cramaussel, op. cit., p. 126.

todo el continente americano, las tierras agrícolas, como los sitios de ganado, no se encontraban deslindadas. Las primeras caballerías se midieron en fanegas, es decir, en superficie cultivable. La ocupación efectiva se daba a partir de la roturación de la tierra yerma por lo que la propiedad se fundaba en el terreno roturado, lo mismo ocurrió en la reconquista española.[125] Fue una aplicación del derecho castellano que fue instrumentado en las colonias en cuanto al régimen de tierras.[126] La composición de tierras trajo un cambio en estas concepciones del uso y la apropiación del territorio, pero también despojos y descontento social generalizado.

La política de composiciones de la Corona en el siglo XVIII tiene su paralelo histórico en la política deslindadora del porfiriato. Épocas diferentes, otro tipo de régimen político, en otros contextos sociales, pero los objetivos políticos eran muy similares, así como lo fueron sus efectos. Tanto las compañías deslindadoras como las comisiones de composición que ejecutaron la enorme labor de tratar de fijar con precisión los linderos de la propiedad (si lograron debe ser un tema de discusión) provocaron gran descontento social, impulsaron la acumulación de la tierra en favor de las oligarquías regionales, generaron reclamos, así como largos, engorrosos y pesados litigios, dio lugar al empobrecimiento de los desposeídos, liberaron mano de obra para las grandes unidades territoriales, provocaron movimientos de población, redefinieron el espacio territorial, provocaron cambios en la concepción y uso de la tierra, pero por supuesto también tienen particularidades en los contextos espaciales y temporales en los que se inscriben.

El asunto de las composiciones, combinados con otros factores, dio lugar a rebeliones y alzamientos indígenas. Asimismo, la expulsión de los jesuitas trajo consigo el asedio a las tierras de los pueblos de misión. En realidad tanto los

[125] Cramaussel, op. cit., pp. 125-126.
[126] Ibid, p. 178.

misioneros jesuitas como los franciscanos habían logrado que los naturales asimilaran todo un sistema de símbolos concretos de uso y percepción de la tierra, para empezar lograron crearles arraigo por la tierra y pelearon por ella en batalla y a veces en las cortes. Los jesuitas promovieron y a veces lograron la titulación legal de las tierras de los pueblos de misión en favor de los indios.[127] Los símbolos asimilados por los naturales crearon:

> "Nuevas experiencias sociales y nuevas tareas empezaron a conformar una nueva cotidianidad: cultivo de la tierra con arado de yunta de bueyes... e introducción de nuevos cultivos, primordialmente caña de azúcar, cereales y trigo, base de la dieta europea; obras de riego y construcción de los sistemas de acequias para distribución de las aguas; construcción y mantenimiento de molinos para obtener harina de trigo...el cuidado y la crianza de chivos y borregos y borregos y del ganado mayor vacuno, caballar, mular y de los bueyes tan apreciados para la nueva agricultura."[128]

Dentro de los nuevos códigos, un aspecto significativo fue pues el arraigo y posesión de un pedazo de tierra individual como la parcela y el disfrute comunal de otras como el ejido, así como tener que reconocer la propiedad individual y privada de la tierra. Esos códigos también contenían una organización social delimitada a un espacio concreto, compacto, acotado y ceñido a sus límites espaciales: familiar relacionada precisamente con la familia nuclear; imbricada con las nuevas tareas y oficios que debía desempeñar: "...cada jefe de familia debía tener su vivienda de adobe y piedra, con huerto familiar, patio, corral, un pequeño granero, parcela de cultivo y pastizales para pastoreo de ganado menor que en

[127] Urías, op. cit., p. 81.
[128] Ibid, pp. 82-83. Los jesuitas también lograron que los rarámuris de diversas comunidades asumieran los símbolos propios de la disciplina, destreza, habilidades y conocimientos sobre como sembrar, cuidar el ganado y percibir un espacio territorial por el cual pelear más que por los recursos naturales que en ellos pudieran cazar o colectar, es decir, ahora se tenían que producir.

muchos casos se trabajaba en forma comunitaria, al igual que las tierras en las cuales se producía la manutención del misionero."[129]

La situación de los pueblos de misión, después de la expulsión de los jesuitas, es bien ilustrada por la siguiente aclaración de Benito Bencomo, protector de los indios tarahumaras, topios, tepehuanes, chinarras y otros establecidos en las misiones:

> "...no hay forma de que trabajen medio ni agusto por decir que las tierras son suyas como lo acreditan los papeles de dichos padres echándonos la culpa a nosotros … lo que yo estoy temiendo es que los pobres que entre ellos vivimos estamos con la vida en un hilo y corren ríos de sangre en todas nuestras familias por sólo cuatro pedazos de tierra que por amor de Dios suplico a vuestra merced escriba al señor virrey se les den tanto porque los jesuitas a su nombre las adquirieron en la Real Audiencia de Guadalajara cuanto porque no entregándoles los bienes ellos mismos los han de acabar y por consiguiente las tierras se han de abandonar como se abandonaron las de Matachi y Sisoguichi y Carichi."[130]

En 1775 la junta provincial de enajenaciones de la ciudad de México resolvió se devolvieran a los naturales todos los bienes raíces, muebles y semovientes pertenecientes a sus pueblos y misiones, que al tiempo de la expulsión de los jesuitas se les quitaron por los comisionados bajo el equívoco concepto de que eran temporalidades de los misioneros expulsados.[131] Los factores mencionados habían provocado una aguda crisis en el orden colonial fronterizo que dio pie a grandes retrocesos en los procesos de apropiación real del territorio. La gran propiedad no era propicia en los contextos de consolidación del Estado, entonces se dispuso dar marcha atrás en el acaparamiento territorial. Los casos de las cinco

[129] Urías, op. cit., p. 82.
[130] Ibid, p. 100.
[131] Ibid, p. 81.

colonias del noroeste y el de San Gerónimo nos muestran particularidades y tendencias de este proceso. Hacía 1813 el comandante general de las Provincias Internas, Nemesio Salcedo en su instrucción reservada resumía lo anterior.

> "…se hace dar cuenta con los expedientes seguidos para verificar el establecimiento de… poblaciones que nada es más perjudicial ni nada se opone con más firmeza y menos justicia a los progresos de las poblaciones de Provincias Internas y por consecuencia a su agricultura al fomento de las artes y a los adelantamientos de su pacificación, que las inmensas posesiones de terrenos que tienen muchos sujetos de su distrito, particularmente los que se hallan viviendo fuera de las mismas provincias… Acerca de este interesante punto de repartimiento y asignación de tierras, se tomaron antes y últimamente diversas providencias que embaracen la adquisición por un individuo de terrenos considerables, que sólo quedan destinados a la cría de animales impidiendo la población y dando motivo a la hostilidad de los indios bárbaros, pero ninguna fueron bastantes, por lo que con tal conocimiento y conforme al espíritu de real orden de 13 de noviembre de 1808, que advirtió la reservación de países a propósito para el establecimiento de nuevos nacionales colonos, que con oportunidad proporcionaría el supremo gobierno en beneficio y utilidad de estas provincias, expedí varias órdenes a las intendencias y gobierno, para que en la materia de denuncio y merceración, se procediera…"[132]

El caso de la Villa de Chihuahua nos da un ejemplo específico de la necesidad de consolidar las poblaciones y con ello el combate a las elites y el acaparamiento territorial. El proceso de consulta que había iniciado el ayuntamiento a través de Lemus se debía a que precisamente en el año de 1718 se erigió a San Francisco de Cuellar como Villa con el nombre de San Felipe el Real de Chihuahua, pero se

[132] Nemesio Salcedo. Instrucción reservada de don Nemesio Salcedo y Salcedo comandante general de Provincias Internas a su sucesor. Introducción y notas por Isidro Vizcaya Canales. Centro de Información del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 1990. pp. 59-60.

omitió señalarle sus ejidos y dehesas respectivas, por lo que en el año de 1720 se solicitó a la Real Audiencia la asignación de dichas tierras. La instancia virreinal asignó media legua por cada viento a la población, un sitio de ganado mayor, (1755 hectáreas) que era lo que las leyes respectivas marcaban, pero no se deslindaron. Lo anterior dio pie a que el Juez Privativo de Tierras y Composiciones con residencia en la Villa de Chihuahua mercenara y vendiera como baldías y realengas todas las tierras inmediatas a su alrededor "dejando a la Villa y minería destituidas de cosa tan necesaria para su subsistencia y aumento... concluye pidiendo se le señale terreno para su población, Ejidos, Dehesas y propios de que carece, el cual amojone y deslinde y se publique por bando, que los pastos, montes y aguas deben ser comunes."

Así lo asentaba el fiscal el 14 de agosto de 1747 y ordenaba al virrey asignar a la Villa de Chihuahua 5 leguas por viento medidas desde la iglesia. El corregidor o cualquier alcalde ordinario debían citar a los vecinos y nombrar peritos para realizar el deslinde. Los propietarios dentro de la extensión mercedada que apelaran o se opusieran se les reemplazarían las tierras con baldías o del "Real Patrimonio."

> "...notificará a los particulares y que tuvieren fundadas Haciendas, Estancias o Ranchos en las tierras comprendidas en la medida de las cinco leguas, que o las dejen libres y desembarazadas o en la inteligencia de que pertenecen a los Propios de la Villa, precisamente en la asignación de que ello se hiciere, se compongan con ella otorgando reconocimiento y obligarse a pagar la pensión que capitularen, lo cual proceda y se entienda dejando siempre extensión bastante de tierra, para pastos y abrevaderos de los ganados del abasto y demás bestias de su tráfico, comercio y Haciendas de Metales, a que se ha de atender con especial cuidado, como también a dejar competente vacío y hueco en el recinto de la Villa, para repartir Solares a todos los vecinos que se fueron agregando en el venidero, porque a esto no se ha de perjudicar en

manera alguna."[133]

El 14 de noviembre de 1807 los sucesores de Pedro González de Almoyna iniciaban lo que sería un largo proceso de disputa por las tierras cedidas para la fundación de las villas de lo que después sería Namiquipa y Galeana. En esa fecha Matiana Salazar, esposa de Juan Antonio Gil de Almoyna, reclamó como suya la hacienda de Aranzazu ante el comandante general de las Provincias Internas y denunciaba el hecho de que el alférez retirado Francisco Vásquez estuviera en su posesión. Solicitaba que el expresado Vásquez informara con qué consentimiento había estado usando la hacienda y que mostrara los títulos o hijuelas que lo justificaran. El comandante de la segunda compañía volante, respondió a nombre de Vásquez que la pretensión de la quejosa "lejos de ser fundada es ridícula." Vásquez por su parte calificó las acusaciones de falsas argumentando que Aranzazu nunca fue hacienda, sino unas lomas áridas y eriazas. Afirmó que la hacienda en la que vivieron los Almoyna era la hacienda del Medio en donde todavía subsistían las casas y eran ocupadas por los vecinos del lugar. Además que la hacienda de Aranzazu no estaba en los límites de su posesión.[134] El comandante de las Provincias Internas Nemecio Salcedo declaró no haber lugar a la solicitud de los herederos de Almoyna el 1 de junio de 1808.[135] Acorde con la política de formación del Estado en un momento donde se necesita la distribución de la tierra, en esta ocasión las elites fueron ignoradas. Por último Matiana Salazar solicitó tierras como cualquier súbdito a Salcedo y su asesor

[133] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 149-150. Lemus había solicitado que se publicara por bando que los pastos, montes y aguas eran del común de los súbditos del rey para que no cesara en la villa el abasto de maíz, harina, leña y carbón que se traía desde 18 y 50 leguas de distancia. En la respuesta del fiscal se asentaba que algunos individuos valiéndose de denuncios en el juzgado privativo habían conseguido tierras en las "inmediaciones y circunferencia de la villa incomodando al vecindario, mercaderes, mineros, arrieros y traficantes. Ibid. pp. 145-146, 148.
[134] AHRAN, 23 / 432, Toca, ff. 92- 93. También Local, ff. 15-17.
[135] AHRAN, 23 / 432, Local, f. 12.

general terminó consultando al comandante de la segunda compañía volante de Namiquipa la viabilidad del pedimento.[136]

Para el poblamiento la división de la tierra es fundamental, su concentración va en detrimento de los procesos de población. Gracias a la política de apropiación territorial real por el Estado y el poblamiento se fundaron y refundaron pueblos, otros lograron sobrevivir. En los procesos de larga duración los sistemas políticos y regímenes cambian las modalidades políticas y administrativas propias. Cada régimen ha de hacer ver y sentir a los pueblos, súbditos o ciudadanos, según el caso, que están sujetos al poder estatal. Por eso, los títulos de posesión de la tierra no son de una vez y para siempre. El título es un fetiche utilizado por el Estado para ejercer el control sobre la tierra y sobre los que estén sobre ella. Para Salvador Álvarez la esencia de las composiciones fue ese constante legitimar la posesión de la tierra. Además, en los códigos del poder político y administrativo se inscribe en el ejercicio del poder estatal:

> "Una de las características más importantes de los sistemas de propiedad territorial de la América española, es que un título de tierras rara vez era definitivo, siempre fue necesario para los poseedores reafirmar una y otra vez la legitimidad de su ocupación, por lo que pueden existir numerosos títulos para una misma unidad territorial... Los únicos títulos que podían considerarse en verdad legítimos eran los expedidos por el rey mismo."[137]

Las tierras de Villa López

El caso de Villa López nos da una perspectiva de muchas de las líneas planteadas anteriormente. Villa López, el antiguo San Buenaventura de Atotonilco, nació como

[136] AHRAN, 23 / 432, Local, ff. 19-20.
[137] Salvador Álvarez. Tendencias regionales de la propiedad territorial en el norte de la Nueva España siglos XVII y XVIII. en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada, Cd. Juárez, Chihuahua, 1990. p. 145.

misión franciscana. Atotonilco fue un intento de concentrar a las tribus más bárbaras del desierto, antes de 1604, en una comunidad cristiana. Sin embargo, siguió un periodo de conflictos que se extendió durante más de un siglo.[138] La misión tuvo un franciscano residente desde 1619, y además una historia azarosa: fue saqueada y abandonada en varías ocasiones. Primero fue asentamiento de indios conchos y tobosos y posteriormente de tarahumaras. Como sea, los franciscanos tuvieron bajo su jurisdicción la misión hasta después de la independencia.[139]

Situado en la margen derecha del río Florido, allí se abrieron algunas de las labores que hoy se contarían entre las más antiguas en el estado. Para finales del siglo XIX estaba rodeado por las haciendas de Santa María Catarina de Corrales por el lado sur, Santa María de Atotonilco por el norte, por la de San Pedro en el oeste y la de Salaices por el este. A través de su larga historia, el pueblo libró varias batallas contra sus vecinos por lograr conservar intactas las tierras que desde 1708 les había regularizado el Estado español, cuando se inició la composición de tierras en la Nueva Vizcaya. Hasta que en el año de 1853 los dueños de la hacienda de Corrales lograron despojarlo de la mayor parte de sus ejidos.

Después de que a los “naturales” de Atotonilco se les entregaron las tierras, fue un arduo luchar por no ser despojados y al concretarse esto, en el año mencionado, por recuperarlas. Antes del parteaguas que abrió la revolución mexicana para que muchos pueblos recuperaran sus tierras, los “vecinos” de Villa López iniciaron un proceso jurídico, que puede ser de los más destacados en Chihuahua, por la reivindicación de sus ejidos. Uno de los problemas que tendremos en el presente caso es que en ninguno de los documentos manejados se precisa la extensión original de los ejidos, así como la de los usurpados.

[138] Peter Gerhard. La frontera norte de Nueva España. UNAM, México, 1996. p. 298.
[139] Ibid. p. 300.

En el año de 1885 José María Luján escribió al gobernador del estado manifestándole que la Junta Municipal que presidía había acordado pedir la restitución de su antigua y justa posesión de tierras que en agosto de 1853 les habían sido despojadas.[140] El principal problema para Atotonilco, como lo fue para muchos pueblos del estado, era la carencia de los títulos primordiales.

Para tratar de demostrar el despojo, que se había realizado con la complicidad de las autoridades de la jefatura política y el gobierno del estado, la Junta Municipal armó todo un expediente con copias certificadas de instrumentos públicos relativos a las haciendas vecinas e información testimonial de los ancianos del pueblo, y documentos oficiales, de las instancias de gobierno, relativos al asunto.

Al tratar la Corona española de regularizar las tierras en sus posesiones de ultramar llevó a cabo una política de "composiciones". En la Nueva Vizcaya se intentó aplicar por primera vez tal política en el año de 1646, pero la oposición de los propietarios locales hizo que fracasara. Fue hasta 1705 que comenzaron los grandes deslindes de tierras en la Nueva Vizcaya.[141]

En las escrituras de la hacienda de Santa Catarina de Corrales se definía que en el año de 1708, al realizarse la composición de tierras en la región aledaña a Atotonilco, se hizo un reconocimiento de los linderos entre dicho pueblo y la hacienda. Los trabajos fueron realizados por el juez de comisión Francisco Antonio Telles. En ese entonces Corrales pertenecía a Francisco Luján. Así quedaron perfectamente delimitadas sus fronteras reconocidas por tres mojoneras que se colocaron de la siguiente manera: en la falda del Cerro de Atotonilco junto a una cruz, la de Vejar en la falda del Cerro de Corrales, en el punto conocido como las

[140] Archivo Histórico del Registro Agrario Nacional, (en adelante AHRAN) 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 226.
[141] Salvador Álvarez. "Tendencias regionales de la propiedad territorial en el norte de la Nueva España siglos XVII y XVIII." en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, Chihuahua, 1990. pp. 143-144.

Adargas, y la tercera en la Cieneguita junto a un aguaje. La fuente del vital líquido quedó comprendido en las tierras de la hacienda, a la cual se le reconocieron 20 sitios y tres cuartos para ganado mayor, [142] alrededor de 36 416 hectáreas.

La política de composiciones del Estado dio a los influyentes y poderosos terratenientes la coyuntura para hacer crecer sus haciendas a costa de ejidos de pueblos y misiones.[143] Los pueblos y misiones se defendieron apelando a las autoridades. En el año de 1798 se suscitó un conflicto entre los vecinos de Atotonilco y el dueño de la hacienda de Santa María de Atotonilco. A instancias del propietario de dicha hacienda, José Francisco Luján, se practicaron ciertas medidas, ejecutadas por Antonio Rivera, por las cuales los ejidos del pueblo quedaron reducidos. Ya desde el año de 1775 los habitantes de Atotonilco habían sostenido pleito por tierras con Matías Sánchez, el anterior dueño de la hacienda de Santa María. El conflicto fue heredado a Luján. A nombre de los naturales de Atotonilco, Francisco del Valle presentó escrito al comandante general de la Nueva Vizcaya pidiéndole se les restituyeran las tierras. Dicho funcionario resolvió:

> "Conforme a dictamen del señor asesor en escrito presentado por el capitán Don Francisco del Valle a nombre de los naturales del pueblo de Atotonilco, he resuelto por decreto de hoy que inmediatamente que reciba su señoría esta orden [el juez], proceda a reintegrarlos en la posesión de todas las tierras que antes de las últimas medidas practicadas de su término disfrutaban quieta y pacíficamente..."[144]

[142] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 233-236.
[143] Véase Chantal Cramaussel. "Evolución de las formas de dominio del espacio colonial las haciendas de la región de Parral." en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, Chihuahua, 1990. pp. 115-179. Para Cramaussel la aparición del peonaje acasilllado se da por la composición de tierras: "Pequeños colonos, mestizos e indígenas, que cultivaban sus tierras sin tener propiedad legal debieron integrarse a la hacienda, bajo pena de expulsión". Ibid. p. 127.
[144] Archivo Histórico Municipal de Jiménez. Expediente de solicitud de restitución de ejidos de los naturales de Atotonilco, 1798.

Parece ser que Atotonilco salió bien librado de los intentos de despojo en la época colonial. Pero, en el siglo XIX no correría con la misma suerte. En el año de 1831 la Junta Municipal permitió al vecindario abrir una labor; para regar las tierras se construyó una presa sobre el río Florido y una acequia. Todo dentro de los ejidos del pueblo. Fue precisamente esa labor la que más tarde acrecentaría la ambición de sus vecinos, los dueños de la hacienda de Santa Catarina de Corrales, por esas tierras.[145]

Para mediados del siglo XIX la hacienda de Corrales pertenecía a los Urquidi, una poderosa familia de políticos y terratenientes de Chihuahua. Entre los miembros de dicha familia se contarían dos gobernadores del estado –precisamente el primero y el vigésimo séptimo-.[146] Los Urquidi eran propietarios de las haciendas de La Concepción y San Francisco Javier del Río Florido (hoy cabecera municipal con el nombre de Villa Coronado), San Isidro de Iturralde y Santa Catarina de Corrales. Las dos últimas las habían adquirido en 1774, mismas que habían sido expropiadas a los Jesuitas.[147] Por los años de 1842 y 1843 Francisco de Urquidi invitó al vecindario y a sus autoridades para hacer un reconocimiento de los linderos que separaban al ejido del pueblo con los de su hacienda de Corrales. Además del hacendado estuvieron presentes algunos vecinos, la autoridad local y el párroco. El punto de reunión fue en la mojonera del Cerro de Atotonilco. Uno de los vecinos de Atotonilco, Juan Casas, que presenció los acontecimientos describió el acto de la siguiente manera:

> "Que al salir el sol del día sitado (sic) ya estaban reunidos y que poco después llegó el Sr. Francisco Urquidi, acompañado de Don Manuel Ojinaga,

[145] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 227 y 229-233.
[146] Véase Francisco R. Almada. Diccionario de historia, geografía y biografía chihuahuenses. UACH, Chihuahua, 1968.
[147] María Urquidi. "Agustín de Urquidi, un hombre del siglo XVIII en Chihuahua. Semblanza política, económica y social". en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, Chihuahua, 1990. pp. 241-248.

> que después de las ceremonias de costumbre habló el Sr. Urquidi a la concurrencia, Sres. a lo que venimos, venimos, deseo saber hasta donde llega lo mío..."[148]

El mismo Urquidi reconoció que la línea recta desde el Cerro de Atotonilco, en dirección a un punto conocido como las Adargas era el trazo divisorio entre la hacienda y las tierras de Atotonilco, mismo que había sido definido en 1708. La labor abierta en 1831 quedó dentro de los ejidos del pueblo.

Posteriormente Juan Nepomuceno de Urquidi, hermano del anterior, pretendiendo quedarse con la labor solicitó en 1853 a la jefatura política, con sede en Jiménez, se marcaran los linderos del pueblo. En 1852 había dejado la gubernatura de Chihuahua y era uno de los hombres más influyentes en el estado. ¿Acaso sabía el hacendado que sus vecinos carecían de títulos? Las disposiciones vigentes señalaban que a falta de documentos debía medírseles un sitio de ganado mayor (1755 hectáreas). La Jefatura Política, con gran ligereza, autorizó los deslindes e instruyó a su Síndico Silverio Durán para que ejecutara la operación. Dicha acción se efectúa los días tres y cuatro de mayo de 1853. Poco después la jefatura del mismo cantón remitió al gobierno del estado el acta de mesura, la cual aprobó en octubre 7 del mismo año, reduciendo así los ejidos.

Para la mesura, el Síndico argumentó que se habían tenido presentes las efectuadas los días cinco y seis de marzo de 1798 por Antonio Rivera.[149] Dicha mesura como vimos fue invalidada.

El descontento cundió entre los "vecinos e indígenas" del pueblo. El día 13 de julio de 1854 enviaron una misiva de protesta a la Jefatura Política en Jiménez. Poco

[148] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 231. Manuel Ojinaga sería el trigésimo sexto gobernador de Chihuahua, Juan Nepomuceno de Urquidi, hermano de Francisco, se casó con una hermana de Ojinaga: Urquidi, op. cit., p. 246.
[149] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 228 y 236-238.

después, el día 28 del mismo mes, la jefatura viéndose amenazada por un conflicto violento no hallaba como justificarse ante el gobierno del estado. En agosto 18 el secretario de Gobierno amonestó a las autoridades de Jiménez, ya que primero habían buscado y conseguido la aprobación, sin aclarar los pormenores de la situación y las verdaderas pretensiones de Juan Nepomuceno de Urquidi. Añadió que los reclamos de los naturales y vecindario del pueblo daban un carácter litigioso al asunto, lo cual bastaba para haberse abstenido de todo procedimiento. Por lo tanto, el gobierno estatal determinaba que no debió el ayuntamiento de Jiménez haber realizado las medidas y las declaraba como inexistentes.[150]

A pesar de haberse declarado invalidas las medidas realizadas, posteriormente el gobierno del estado admitió el despojo. Mediante acta declaró que la aprobación de las medidas de agosto de 1853 debía entenderse que fueron legales siempre y cuando no se fundaran en errores. Que de haber sido así, de acuerdo a la ley de 31 de julio de 1854, se debía proceder a investigar y reconocer los terrenos usurpados a los pueblos. Mientras se realizaba la investigación era preciso aceptar: “aún cuando sea con el carácter de interino el límite de dichos ejidos para evitar cuestiones y disputas”. A la supuesta falta de mojoneras que fijaron los antiguos linderos del pueblo, debían adoptarse las que señaló el ayuntamiento de Jiménez. Mediante el acta se suspendían temporalmente todo tipo de mediciones.

En el tercer punto resolutivo del acta se especifica que sería el prefecto de Jiménez, quien procedería a realizar la susodicha investigación. El objetivo, determinar los linderos del pueblo de Atotonilco recogiendo los documentos existentes en los archivos y recabando los títulos de los propietarios colindantes. Mas esto último sería hasta que lo autorizara el ministro de gobernación. Punto

[150] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 238.

resolutivo número cinco: entre tanto, las medidas practicadas en agosto de 1853 se declaran legítimas. Punto resolutivo número seis: el gobierno no apoya los derechos que particulares tengan sobre los terrenos; si teniendo algún documento o testimonio para hacerlos valer debiesen ocurrir a los jueces que correspondan para deducir sus derechos; si trataran de usar la violencia o alterar la tranquilidad pública, el gobierno los haría castigar.[151]

Con tal hostigamiento los vecinos de Atotonilco tuvieron que cejar momentáneamente de todo intento por recuperar las tierras usurpadas. A principios del año de 1863 los vecinos de Atotonilco, ahora bajo la jurisdicción del Cantón Hidalgo, volvieron a la carga sobre sus legítimas aspiraciones de justicia en la devolución de las tierras usurpadas. Enviaron una carta al gobernador del estado solicitándole se efectuaran las medidas y amojonamiento de los ejidos del pueblo. El Secretario de Gobierno le contestó, el nueve de marzo de dicho año, al apoderado de los demandantes: “Pase a la Jefatura Política del Distrito de Hidalgo, para que lo más pronto posible se traslade el personal de ella al Pueblo de Atotonilco y proceda a la medida y amojonamiento de los ejidos de dicho pueblo de conformidad con lo que ordena la ley.”[152]

Se decía en el ocurso que el actual gobierno imparte justicia de acuerdo con las leyes y a los pueblos que padecen paternalmente los auxilia con los recursos de que puede disponer y así debía de esperarlo el pueblo de Atotonilco. Mas Juan Nepomuceno de Urquidi con su influencia y argumentando que existía una orden de suspensión de medidas de 1854 ya citada, logró nuevamente evitar que se realizara el deslinde. En abril de ese mismo año la secretaría general de gobierno comunicó a la Jefatura Política del Distrito Hidalgo la disposición del gobernador para que se suspendiera lo dispuesto sobre la práctica de nuevas medidas.[153]

---

[151] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 239-240.
[152] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 240.
[153] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 240.

En el año de 1881, con motivo de un denuncio de tierras baldías en el municipio de Villa López, el ingeniero comisionado Agustín Barbachano expresó que debido a que el pueblo carecía de escrituras primordiales debía medírsele un sitio de ganado mayor. El agrimensor tomó como base la iglesia del pueblo, al igual que lo hizo Rivera en 1798.[154]

Para 1885 “vecinos” y autoridades de Atotonilco insistieron nuevamente en que se hiciera justicia y se les restituyeran las tierras usurpadas. En diciembre del año anterior el presidente municipal José María Luján había solicitado al juez primero de paz, Fernando Zosa, levantar información testimonial para probar los derechos de la municipalidad sobre los terrenos usurpados. Se hiciera comparecer a cuatro de los ancianos del pueblo: Juan Casas, Eulogio Bustillos, Vicente Vega y Victoriano Hernández. Aunque ninguno de ellos había nacido en Atotonilco el que tenía más tiempo de vivir en el lugar había llegado en 1810 y el de menor antigüedad en 1827. Se les preguntó cuales habían sido los linderos de los ejidos del pueblo. Todos reconocieron los que había fijado en 1708 Francisco Antonio Telles. También todos atestiguaron que en el año de 1831 la junta municipal había dado permiso a los vecinos para abrir una labor con su sistema de riego, de la cual, 22 años después, se apoderó Juan Nepomuceno de Urquidi.

Se les preguntó si les constaba que Francisco de Urquidi había invitado a los vecinos del pueblo a reconocer los linderos. Como vimos anteriormente, Juan Casas testificó que había llegado acompañado de Manuel Ojinaga. Por su parte, Eulogio Bustillos mencionó que él mismo, junto con Pablo Caballero, habían leído las escrituras de la hacienda de Corrales practicadas en 1708 por Francisco Antonio Telles. El mismo Urquidi aceptó y reconoció los linderos fijados en dicho año.

[154] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 220.

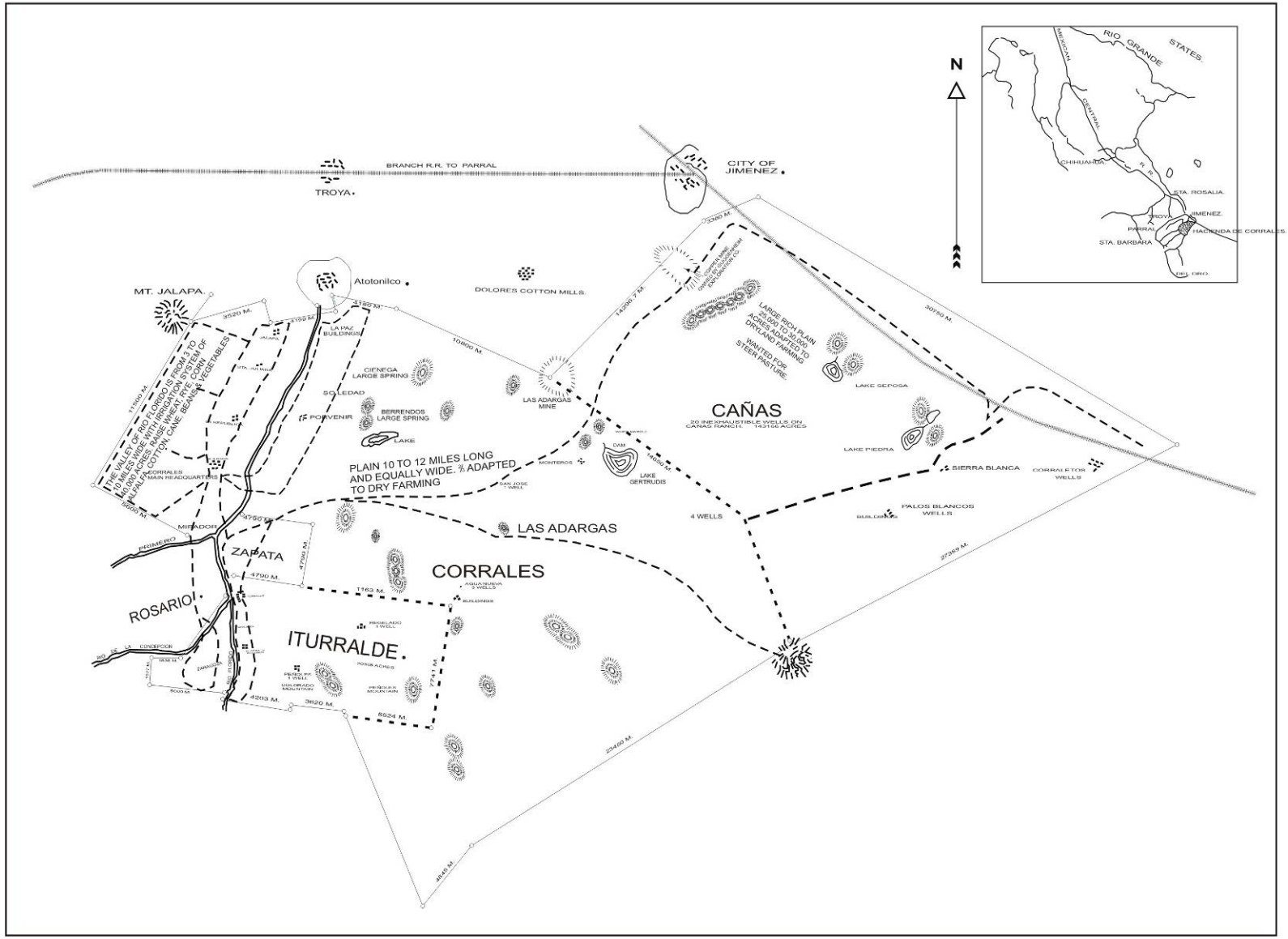
Por otra parte, se les preguntó si antiguamente los gobernadores del pueblo mandaban algunos indios, el tres de mayo de cada año, a las mojoneras a poner luminarias y tirar cohetes para perpetuar sus derechos sobre esas tierras. Todos asintieron como verdadero el contenido de la pregunta. Juan Casas añadió que se mandaban tres indios a cada mojonera; por su parte Vicente Vega, siendo indígena, afirmó que a él mismo le tocó ir una vez y que se procuraba mandar a los jóvenes para que supieran ese deber.[155]

En enero de 1885 José María Luján envió al gobernador un memorial donde narraba todo el proceso de la lucha por la tierra de Atotonilco, anexo los testimonios recabados y la documentación que probaban que los terrenos peleados habían sido de Atotonilco. Parecía que las peticiones de los vecinos de Atotonilco daban frutos. Pronto el gobierno del estado respondió a la Jefatura Política del Distrito Hidalgo que según decreto reciente era conveniente y de utilidad pública que todos los pueblos del estado tuvieran definidos sus ejidos. Se le ordenaba a la jefatura que dispusiera lo necesario para que con la intervención de la autoridad judicial se rectificaran los de Atotonilco. Las medidas serían ejecutadas por la comisión científica. Se argumentaba que no obstante que la municipalidad carecía de títulos, se acreditaba con la documentación enviada que la extensión de sus ejidos era mayor que la señalada por la ley de un sitio de ganado mayor.[156] Para 1885 la hacienda de Corrales había dejado de pertenecer a los Urquidi, siendo el nuevo dueño Juan Faudoa.[157]

El 12 de marzo del mismo año el juez Fernando Zosa citó a los colindantes, requiriéndoles que presentaran sus títulos para el día 23 del mismo mes. Cumplido el plazo se reunieron en el Cerro de Atotonilco (donde Telles fijó una

[155] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 229-233.
[156] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 221.
[157] Juan Nepomuceno de Urquidi murió en 1880: Almada, op. cit. Poco después el hermano menor Francisco de Urquidi vendió lo que quedaba de las propiedades de la familia en Chihuahua: Urquidi, op. cit. p. 246.

Mapa 1.2 Hacienda de Corrales y Anéxos y pueblo de Atotonilco



mojonera en 1708) los contendientes, el juez y el agrimensor Jacobo Mucharraz. El Sindico de Atotonilco, Pablo Gurrola, señaló ese lugar como punto de partida para practicar las medidas. El licenciado Pedro Barroza, como representante de Faudoa, increpó que ese lugar no era ni nunca había sido posesión del pueblo. Ponía como prueba la distancia del centro del pueblo al sitio que eran dos leguas. Según Barroza no obstante la evidencia presentaba al agrimensor los títulos de la hacienda y un plano levantado por el ingeniero Eugenio Castillo. Barroza señalaba otra mojonera como punto de partida para las medidas. Como no había un acuerdo en el lugar que debían de iniciarse las medidas el juez los citó nuevamente el día 25 de ese mismo mes, a lo que Barroza se mostró reacio.

No obstante Barroza se presentó e insistía en su posición argumentando que las ordenanzas de tierras y aguas con fundamento en la Real Cédula dada en el año de 1695 señalaban el centro de la población o la iglesia para las medidas de los fundos legales. No llegando las partes a un acuerdo, el juez los citó una vez más a presentarse al día siguiente. Barroza argumentó que no estaba obligado a concurrir todas las veces que se quisiera y que se oponía a todo lo que se practicara en contra de los títulos de Corrales.[158]

Al día siguiente Barroza no se presentó y el agrimensor Jacobo Mucharraz se negó a efectuar las medidas diciendo que no lastimaría a Faudoa si no estaba presente y conforme la parte de Corrales. Por lo que Pablo Gurrola le solicitó al juez que lo citara a declarar. Anteriormente el agrimensor, al hacer un reconocimiento de una de las mojoneras con un grupo de vecinos del pueblo, había expresado que el Cerro de Atotonilco sin duda era un punto de la línea que separa Corrales de Atotonilco. También él mismo había expresado al propio juez que las prácticas de las medidas debían de iniciar en la mojonera de Vejar (fijada por Telles en 1708). Entre pláticas el agrimensor también manifestó que las

[158] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 223 - 224.

mojoneras que el Síndico había señalado eran las correctas y él mismo lo manifestó al juez y a los vecinos. Pero también en repetidas ocasiones manifestó que mediría para el pueblo una legua cuadrada con sujeción a las ordenanzas de tierras y aguas. El agrimensor fue requerido para declarar, al interrogársele sobre sus indiscretas manifestaciones expresó que no contestaba nada por no sentirse obligado. Ante solicitud del Síndico el juez certificó como verdaderos los comentarios que el agrimensor había expresado.[159]

A pesar de la contundencia de las pruebas no le fueron restituidas las tierras a Atotonilco. El 2 de mayo de 1885 Jacobo Mucharraz informó al gobernador Carlos Fuero que se habían realizado las medidas del pueblo para delimitar un sitio de ganado mayor, las cuales coincidían con las que había señalado Barbachano en 1881. Para reafirmar lo expresado decía: “Los señores Barbachano, Castillo, Barcheske, Urquidi y el que suscribe hemos aceptado de común acuerdo los linderos que marcó por primera vez el Agrimensor Rivera”. Toda una delegación de reconocidos personajes y topógrafos se habían trasladado para medirle a Atotonilco su sitio de ganado mayor. Entre ellos el antiguo dueño de la hacienda de Corrales. Tácitamente Mucharraz y las propias autoridades reconocían que la hacienda de Corrales estaba en posesión de tierras que eran de Atotonilco. Era claro que la confirmación de títulos de la hacienda de 1708 estipulaban claramente los límites con Atotonilco. Mucharraz expresaba que era mejor dejar las cosas como estaban ya que el derecho de la costumbre y la ley lo habían respetado por más de cincuenta años; se debía aplazar la resolución definitiva y que los magistrados determinaran los linderos que llenaran por completo las condiciones de los respectivos títulos.[160]

La situación había sumido en la desesperación e ira a los vecinos de Atotonilco.

[159] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 224 - 226.

[160] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 220 – 221.

El 28 de junio de 1885 Juan Faudoa escribió al presidente municipal José María Luján diciéndole que los vecinos de Atotonilco se habían presentado en la labor de Jalapa a pedir el agua que no utilizarían, la cual habían tomado sin autorización del mayordomo. Además, que no teniendo por donde pasar el agua no admitiría que hicieran uso de las tierras sin antes haberse arreglado con él. Le exigía que como autoridad evitara esa situación y aún más lo hacía responsable y le pedía respuesta con el portador de su carta.[161]

Con la misma fecha con que Faudoa envió su amenazadora misiva, los vecinos de Atotonilco mandaban otra pidiendo al gobernador justicia. No sólo habían sido despojados de las tierras, sino que también pagaban por el agua que antes de llegar a las labores del pueblo tenía que pasar por las de la hacienda de Corrales. Cuando los Urquidi habían sido los dueños se les había impuesto una renta de 60 fanegas de semillas. La dura necesidad obligó a los vecinos a aceptar el gravamen. En 1884 Faudoa les había impuesto una renta de 200 pesos anuales. Los vecinos trataron de negociar con él buscando una renta justa, más por el contrario, les exigió el pago de 700 pesos. Reclamaban que no estaban obligados a pagar tal exorbitante cantidad y sólo las 60 fanegas de semilla y expresaban:

> "Con profundo sentimiento, con dolor insufrible y vemos pasar el agua en las corrientes del río, sin poder aprovecharlas ¿qué hacer? ¿sufrir? ¿hasta cuándo?, lo ignoramos. Hoy podremos sufrir, mañana no. ¿Cuál será el resultado?...El tiempo lo dirá. Pintase en nuestra imaginación la más triste y desoladora idea, triste en verdad, y es que si las cosas caminan en tal estado con respecto a la causa de nuestro Pueblo, el resultado será su desaparición."[162]

Para 1902, no bastando el haber perdido las tierras usurpadas por Corrales, y

[161] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 219.

[162] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, ff. 218 – 219.

teniendo sólo un sitio de ganado mayor, Atotonilco fue invadida por los condueños de la hacienda de Santa María. El gobierno del estado pidió a la Jefatura Política del Distrito Jiménez su opinión con relación a los beneficios y perjuicios que podía recibir la municipalidad de Villa López de aprobarse las medidas efectuadas a sus ejidos en 1854. Como vimos en dicho año se le demarcó al pueblo un sitio de ganado mayor (1755 hectáreas), pero para 1922 tenían en posesión sólo 1133 hectáreas. La jefatura política, en esta ocasión, asumió la filosofía de algo así como que de los males el menor y manifestó que sería benéfico porque:

> "En primer lugar se tendrá una base segura para cumplimentar las Leyes relativas de tierras que aquí se están continuamente infringiendo por carecer de tal aprobación; en segundo, por poder recuperar así de este Municipio cuando menos la cuarta parte del terreno Municipal que por los rumbos Nordeste y Noroeste paulatinamente han ido ocupando los condueños de la Hacienda de Santa María; y en tercero porque muchos pobres agricultores de aquí podrían ampararse bajo las protectoras y liberales leyes, denunciando y sembrando un pedazo de tierra..."[163]

Mas parece ser que nuevamente no se hizo nada. Sería el programa agrario del Estado de la revolución, que en su formación veía necesario hacer reivindicaciones y dar tierras a los campesinos, la coyuntura para que Villa López pudiera recuperar las tierras usurpadas. El 21 de enero de 1921 José Montoya, como su representante, escribió al gobernador del estado solicitándole su ayuda para poder localizar los títulos con que el gobierno colonial dotó de tierras al pueblo de Atotonilco. El presidente de la CLA le escribió diciendo que se haría lo posible por localizarlos, pero que no eran necesarios para solicitar dotación de ejidos.

En octubre del mismo año el agente comisionado de las autoridades agrarias

[163] AHRAN. 23: 384. Local, dotación a Villa López, f. 217.

realizó en el pueblo las diligencias necesarias para formular el proyecto de dotación. El censo general agrario arrojó que el pueblo de Villa López tenía 2008 habitantes agrupados en 401 familias de las cuales 296 carecían de tierras. En marzo 13 de 1922 el gobernador del estado resolvió dotar a Atotonilco con 6264 hectáreas, a parte de las 1755 que se reconoció que ya poseían. El 23 de octubre de 1924 el presidente de la república firmó la resolución presidencial dando en definitiva a Atotonilco 6 085 hectáreas tomadas como sigue: 5975 de la hacienda de Corrales, 55 de la hacienda de Santa María y 55 del predio el Ancón. Mismas que se sumaban a las 1133 que ya estaban en posesión de los vecinos del pueblo.[164]

[164] AHRAN. 23: 384. Toca, dotación a Villa López, ff. 120-123.

Capítulo II: La reforma agraria como reforma cultural: formas culturales y rituales de dominación

Hacer la reforma agraria para evitar la reforma agraria expresó un analista del agro mexicano para aludir al proyecto de reparto de tierras en que se embarcó el régimen de la posrevolución.[165] La expresión está llena de sentido y manifiesta el "discurso oculto" del Estado mexicano con relación a los procesos de construcción de la hegemonía estatal: control del acceso y distribución de la tierra; la centralización de las reformas rurales; la recomposición de la tenencia de la tierra y la reorganización social en el campo; procesos cuyo objetivo real era la apropiación real del poder. Todo debía pasar y ser canalizado por las vías y caminos que el Estado imponía; es decir, no se debía dejar en manos de caudillos, líderes, grupos o políticos independientes el reparto agrario, ni la organización agrarista. Para el presidente Álvaro Obregón el ejido no era un fin, era una necesidad política de la que pronto esperaba librarse.[166]

"La reforma agraria se haría siempre y cuando la presión de las masas no dejara otra salida o cuando fuese necesario su concurso en los momentos de peligro".[167] Es otra frase interesante, pero no significa el surgimiento de un Estado acorralado y ceñido a los deseos de las masas rurales. Cierto que ante la presión de los sectores rurales demandantes de tierras el régimen de la posrevolución tuvo que abrir canales y conductos legislativos e institucionales para darles acceso a la tierra. Pero precisamente esa es la consigna del compromiso social de la revolución, yo te doy tierras pero tú estás conmigo. Así el Estado recupera una de las "tradiciones selectivas" del México virreinal de tenencia de la tierra: el ejido. Se genera una relación dialéctica campesino-acceso a la tierra-Estado-apropiación del poder. La expresión también nos refiere a la reforma agraria dentro del

[165] Véase Arnaldo Córdoba. La ideología de la revolución. Era, México, 1992. p. 287.
[166] Michel Gutelman. Capitalismo y reforma agraria en México. Era, 1974. p. 91.
[167] Córdoba, p. 287.

proyecto general del Partido de Estado (PRI) como un elemento incomodo pero necesario para el populismo y "construcción del poder."

"Uno de los factores que explican la estabilidad del estado mexicano posrevolucionario fue su capacidad de llegar al nivel local" expresó una teórica de cuño más reciente, Florence Mallon. Para ella la consolidación y genio del Estado de la revolución fue que llegó hasta el fondo de las tradiciones populares: "El 'gran arco' que construyeron tenía, por ello, sólidos cimientos en la cultura popular local."[168]

El proyecto general del Estado mexicano fue modernizante bajo las líneas del capitalismo para lo cual la propiedad privada absoluta era indispensable. Cierto que hubo gobiernos que dieron prioridad al ejido en especial el de Cárdenas. Pero, sigo pensando junto con Córdoba que la creación y promoción del agricultor capitalista, en gran escala, era "el verdadero programa agrario de la Revolución."[169] Dicho programa imbricado con la necesidad de impulsar y hasta promover expresiones, rasgos y pautas culturales comunales crearon en el ámbito social y político sofismas y sincretismos. Joseph y Nugent afirman: "Comprender cómo un conjunto regulado de formas sociales de vida –por ejemplo el capitalismo- surgió en México en una modalidad tan fuerte no es tarea fácil, especialmente desde que su consecuencia histórica con frecuencia es disfrazada como el resultado de una guerra popular campesina".[170] Los dos autores se basan en los estudios que para Inglaterra realizaron Corrigan y Sayer donde precisamente argumentan que el capitalismo no es solo una economía, sino también un conjunto regulado de formas sociales de vida.[171]

[168] Mallon, op. cit., p. 108.
[169] Arnaldo Córdoba. La ideología de la revolución. Era, México, 1992. p. 277.
[170] Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent. Cultura popular y formación del Estado en el México revolucionario. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. p. 43.
[171] Corrigan y Sayer, op. cit., pp. 187-188.

La Comisión Nacional Agraria (en adelante CNA) con sus funcionarios, procedimientos y formularios fue parte esencial en la formación del Estado mexicano. El proceso de dotación o restitución de tierras implicaba una gran cantidad de ritos, registros, rutinas, tecnicismos, confección de censos, mapas e inspecciones. Pero el gran culmen de todo este proceso era la instauración o imposición de una estructura administrativa ligada directamente al Estado que era el Comité Particular Administrativo (en adelante CPA) y la figura del Comisariado Ejidal enquistada en la cultura local y totalmente dependiente del Estado. El proceso, según las formas y controles requeridos de la época y contexto social, político o militar se podía acelerar y dar tierras rápidamente o se podía tardar hasta décadas. Así los pueblos de potencial revolucionario fueron atendidos con celeridad mientras otros tardaron mucho tiempo para obtener dotación. La esencia del proceso era el registro de todos los datos históricos, poblacionales, sociales, económicos y políticos de los pueblos y se conformaba un expediente con toda la documentación creada y recabada; los expedientes se dividían en varios sub-expedientes, al sub-expediente generado por la Comisión Local Agraria (CLA en adelante) se le denominó “Local”, al generado por la CNA se le llamó “Toca”, había otros sub-expedientes como el “Informe Reglamentario” donde se hacía un resumen del proceso de dotación que incluía la cronología de la tramitación que también es un índice de los ritos realizados por el Estado (véase el cuadro 1.1).

Pero antes de que la CLA emitiera su dictamen tenían que realizarse las visitas de inspección, se efectuaba un censo agropecuario donde se tenía que demostrar que existían un mínimo de 20 “capacitados” para que el pueblo tuviera derechos a recibir dotación (los capacitados debían ser “jefes de familia” o mayores de 18 años con residencia en el lugar), se efectuaba el deslinde en base al cual se elaboraba el “plano proyecto” de ubicación de las tierras por dotar. Generalmente los afectados por el proceso de dotación impugnaban el censo y se llegaron a dar

casos en que se tuvo que realizar hasta tres veces. La “posesión provisional” y la “entrega definitiva” se llegaron a convertir en ritos sacralizados.

Cuadro 1.1

Solicitud	abril, 1924
Instauración del expediente	abril 29, 1924
Dictamen de la CLA	julio 31, 1929
Remisión del expediente al gobernador	agosto 9, 1929
Fallo del gobernador	septiembre 6, 1929
Posesión provisional	octubre 13, 1929
Remisión del expediente a la delegación	enero 21, 1930
Remisión del expediente a la CNA	enero 19,1931

Una forma concreta y manifiesta de dominación se da a través del control de la tierra y sobre su producción. En la reforma agraria mexicana el culmen de que el Estado “afirma” era la “resolución presidencial” de restitución, dotación o negación de ejidos. La resolución presidencial es la sanción directa que creó el régimen de la revolución donde se manifiesta el poder del Estado sobre los usuarios de la tierra. Un simple papel firmado por el presidente, que sustituía a los títulos, se convierte en un fetiche que muchas veces representa la aceptación de los pueblos a la dominación concreta y manifiesta del Estado.

Cada nuevo proyecto de Estado (virreinal, independiente o de la revolución) se empeña en que los usuarios de la tierra tengan bien presente y plena conciencia de que el derecho a la tierra les viene dada por él. Por eso cada proyecto de Estado debe fijar formas y mecanismos de confirmación de la tierra. Es el caso de las cinco colonias del noroeste de Chihuahua que afirmaban su derecho a la tierra mediante un bando expedido por el gobernador y comandante militar de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en 1778 por el cual fundó las cinco colonias

militares. Los pobladores de dichas colonias esgrimían el bando para afirmar su derecho a la posesión de la tierra que les quedaba y su legítimo derecho a la recuperación de la que les había sido usurpada. Digamos que el bando era el medio de defensa de estos pueblos afirmado o sancionado por el Estado virreinal para oponer las afirmaciones del Estado de la revolución que exige el reconocimiento de sus afirmaciones.[172]

Pero había otros dos elementos también irrecusables para estos pobladores que eran la defensa de esas tierras con las armas en contra de los apaches, haberlas abierto al cultivo y sostenerlas en producción. El proyecto de formación del Estado de la revolución exige de los pueblos la aceptación de que el derecho a la tierra les viene del nuevo proyecto de Estado. El ejemplo de Namiquipa tratado magistralmente por Daniel Nugent nos muestra que los tres elementos mencionados, junto con el bando de Croix son la piedra de toque de los namiquipenses para defender la tierra. El discurso de ellos recurrentemente toca estos elementos y son el contexto bajo el cual ellos piensan y sienten que tienen un derecho irrecusable e incuestionable sobre la tierra y que no necesita la afirmación del Estado de la revolución para poseerlas.[173]

Desde que el Estado dio inicio a la reforma agraria los namiquipenses esgrimieron estos factores en la defensa de la tierra. Además, el Estado prerrevolucionario había reconocido como válido el bando que amparaba la posesión de los namiquipenses. Ellos también usaron el reconocimiento del gobierno prerrevolucionario contra el Estado de la revolución. En 1892 los namiquipenses solicitaron a Porfirio Díaz que repartiera entre ellos las tierras que hasta entonces habían pertenecido al pueblo. Por supuesto que no era una sociedad igualitaria; las distintas familias ostentaban diferentes cantidades de tierra que pedían a Díaz

[172] Váse el Nugent y Alonso op. cit.
[173] Véase Daniel Nugent. Spent cartridges of the revolution. University of Chicago Press, Chicago, 1993. p. 65.

les adjudicara. Cuando se tuvo que pagar los honorarios del abogado que consiguió la aprobación de Díaz en 1893, cada familia contribuyó con una cantidad proporcional a la tierra que ocupaba. Para Katz, Namiquipa se convirtió en uno de los pocos casos, sino el único, en que Porfirio Díaz reconocía los títulos de un pueblo.[174] El bando junto con estos nuevos elementos se convertían y eran usados como tradición selectiva que para ellos era incuestionable en relación a su derecho de posesión de la tierra.

Sin embargo, poco a poco los namiquipenses van utilizando los términos del nuevo proyecto de Estado para defender la tierra. En una asamblea realizada el 19 de febrero de 1928 trataron de armar un alegato en contra del Estado usando sus propias leyes para rechazar el ejido y la ley agraria. Citaron las siguientes disposiciones: una circular del 11 de julio de 1919 de la CNA en la cual se decía que los pueblos eran los propietarios de los ejidos; la ley del 6 de enero de 1915 que restauraba la capacidad jurídica de los pueblo para poseer ejidos; el artículo 27 constitucional que decretaba total respeto a las tierras poseídas en nombre propio o a titulo de dominio por más de diez años cuando su superficie no excediera de cincuenta hectáreas.[175] Al mutar su discurso de defensa el Estado ha logrado que el pueblo responda en sus propios términos; es decir, se está reconociendo y a la vez interpelando el uso legítimo del poder del Estado. “En la medida en que un orden dominante establece semejantes formas legítimas de procedimiento, en la medida en que establece, no un consenso, sino formas preescritas para expresar tanto la aceptación como el descontento, ha establecido un marco discursivo común.”[176] ¿Por qué el pueblo de Namiquipa utiliza las leyes agrarias? porque el Estado al no reconocer los símbolos, códigos y lenguaje regional o local, los namiquipenses no son escuchados, no hay comunicación, no hay un interlocutor o hay desfases en la comunicación, por eso el pueblo es

[174] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, pp. 50-51, 54.
[175] Nugent y Alonso, op. cit., p. 203.
[176] Roseberry, op. cit., p. 224.

obligado a emplear los símbolos y códigos creados por el Estado: “También podemos observar cómo las formas y los lenguajes de protesta o de resistencia deben adoptar las formas y los lenguajes de la dominación para poder ser registrados o escuchados.”[177]

El Estado establece un marco discursivo común en cuanto a que marca procedimientos y regulaciones para que en sus propios términos se exprese tanto la aceptación como el descontento. Lo anterior no implica que se maneje un lenguaje uniforme y único. Dado que el Estado se inserta en las tradiciones selectivas para establecer sus propios términos de dominación tiene que tomar también parte de su lenguaje. Así el ejido, si bien es producto del Estado virreinal, había pasado a ser parte fundamental de la tradición de uso y relación con la tierra de los pueblos. El Estado de la revolución tomó esa carga cultural que implica el ejido para crear una reforma agraria. Así en el contexto del marco discursivo común el Estado retoma parte del lenguaje de las culturas subalternas ya sea en cuanto a las tradiciones rurales, obreras u otras para establecer formas concretas y manifiestas de dominación. Nos dice Roseberry en cuanto a las palabras:

> “El estado se arroga el poder de dar nombre, de crear e imprimir mapas con marbetes sancionados por el estado… las palabras señalan y expresan relaciones y poderes materiales sociales, económicos y políticos. La lucha y la resistencia están relacionados con esos poderes…El estado puede imponer ciertas palabras –para afirmar, para nombrar, para etiquetar.”[178]

Lo mismo ocurre con la palabra ejido que tiene profundas raíces históricas en las culturas subalternas rurales en cuanto a formas comunales de uso y posesión de la tierra. Aunque había una parte de las tierras de los pueblos llamada ejido que por lo general, no en todos los casos, eran tierras para el pastoreo del ganado,

[177] Roseberry, op. cit., p. 224.
[178] Roseberry, op. cit., pp. 220-221.

pero el ejido tenía otra acepción, ya que también funcionaba como una denominación genérica que englobaba a los diversos tipos o categorías de tierras de los pueblos con sus nombres y usos diferenciados. Así para las culturas rurales subalternas el ejido tiene un contexto más amplio, refiere a relaciones sociales internas y externas; a concepciones y formas de relación con la tierra; tiene referentes históricos, tradiciones, códigos y significados, es decir, tiene una carga simbólica densa. Pero hasta ahora no he encontrado en los documentos agrupación humana, ni siquiera un individuo que antes de la reforma agraria se defina como ejidatario o como campesino. Los habitantes de los pueblos no se ubicaban ni se identificaban por el nombre que se le da a cierto tipo de tierras, sino por el trabajo que realizaban con ellas. Los documentos nos dejan ver que por lo general los que ahora llamamos o se autodenominan campesinos o ejidatarios, en Chihuahua, antes se presentaban como "labradores." La reforma agraria nos trae una nueva categoría socio-política que es el ejidatario, así se empezó a llamar a los beneficiarios de la reforma agraria y ellos así lo aceptaron cuando menos en su relación con el Estado.

Por otra parte, la liga fuerte de las tierras de los pueblos junto con el ejido era con los ayuntamientos. El caso de Villa López, que veremos más adelante, nos muestra la tenacidad del ayuntamiento en la recuperación de las tierras que les habían despojado los hacendados colindantes. Los ayuntamientos se convirtieron en la primera línea de defensa de las tierras, pero como bien argumenta Florence Mallon la reforma agraria puso a los pueblos en contacto directo con el Estado.[179] La reforma agraria fracturó esa relación ayuntamiento-pueblo-ejidos al crear una estructura organizativa y administrativa para el ejido desligada totalmente de los ayuntamientos, quienes eran los que más fielmente representaban (no en todos los casos) los intereses del pueblo y muchos estaban constituidos por el mismo pueblo.

[179] Véase Mallon, op. cit..

Para el Estado de la revolución, que llevó a cabo la reforma agraria, las diferencias regionales o locales no importaban en cuanto a dotar de ejidos; a menos que representaran un especial peligro para el proceso de formación del Estado se les ponía una atención diferenciada de otros pueblos o regiones ya fuera para dotarlos de tierras o socavar sus formas o expresiones alternativas de recomposición de la propiedad. Como ya mencionamos, el Estado mexicano a tabla rasa aplicó una reforma agraria que como dice Nugent estaba desprovista de toda referencia local mediante la cual se reconociera a los beneficiarios del reparto agrario, sus comunidades, sus patrias chicas "-paisajes impregnados de trabajo, la lucha y los significados de generaciones-, quedaban reducidas o refundidas como tantas y tantas hectáreas de tal y tal categoría de tierras para tal tipo de uso."[180] La reforma agraria fue uniformizante y homogeneizante sin respetar usos, concepciones y relaciones locales y regionales específicas con la tierra. Por qué en la mayoría de los casos se aceptaron las afirmaciones del Estado, más adelante veremos esto.

Marbete núcleo agrario

Las palabras expresan relaciones y poderes materiales, nos dice Roseberry, en este sentido también el Estado puede imponer ciertas palabras para *afirmar*, para nombrar, para etiquetar. Pero además puede utilizar ciertas palabras para no reconocer o para ocultar símbolos densos de relación y uso con la tierra de las culturas subalternas. Así a los pueblos se les empezó a etiquetar y a referir con el impersonal y frío marbete de "núcleos agrarios." ¿Por qué el Estado se refirió a los pueblos y en general a cualquier tipo de asentamiento humano con ese nombre? Lo anterior es clave en el proceso de formación del Estado mexicano. La ley del 6 de enero de 1915 dio inicio en su parte jurídica a la reforma agraria. El artículo 3º estipulaba que los pueblos que carecieran de ejidos o no pudieran por diversas

[180] Nugent y Alonso. op. cit., pp. 193-194.

circunstancias lograr la restitución de sus tierras podrían conseguir que se les dotara de los terrenos suficientes para las necesidades de la población. Así pues, la ley habla en general de pueblos y también hace referencia a las rancherías, congregaciones o comunidades.[181] En 1917 la anterior ley fue elevada a rango constitucional plasmada en el artículo 27 que también habla del derecho a la dotación de tierras de pueblos, rancherías y comunidades carentes de ellas. Así en los acalorados debates del constituyente de 1917 había quedado claro que todo tipo de asentamiento rural carente de tierras tenía derecho a obtenerlas, ya que las categorías mencionadas las englobaban a todas. Pero el agrarismo creció como bola de nieve cuesta abajo y amenazaba con salirse de los cauces institucionales del Estado.

Los dos primeros años de gobierno de Obregón fueron de intenso radicalismo agrario, empresa llevada a su máxima expresión por el titular de la Secretaría de Agricultura y Fomento y a la vez presidente de la CNA, el general Antonio Villarreal. Al decir de José C. Valadés estás instituciones se convirtieron en el centro directivo de la ocupación violenta de tierras y la atrevida empresa de Villarreal rebasó el mismo Plan de Ayala y la ley del 6 de enero.[182] Había nacido el Partido Nacional Agrarista cuyo principal líder fue Antonio Díaz Soto y Gama, de quien Valadés afirma que ejerció un verdadero sacerdocio agrario con tintes de doctrina.[183] La ley agraria de 1915 elevada a rango constitucional en el artículo 27 fue reglamentada por la Ley de Ejidos de 1920. Por otro lado, las élites terratenientes presionaban para que se frenara la reforma agraria. Pronto Obregón viró su política agraria lo que derivó en un conflicto entre él y Villarreal y su consecuente salida de la Secretaría de Agricultura y Fomento y la CNA.

[181] Ley Agraria del 6 de Enero de 1915 y el Decreto del 19 de Septiembre de 1916. Imprenta del Gobierno del Estado de Chihuahua. s/f.
[182] José C. Valadés. Historia general de la revolución mexicana. Ediciones Gernika, México, 1985. pp. 87.
[183] Valadés, op. cit., pp. 186-187.

Tres eran los grandes desafíos internos que en este momento amenazaban el naciente Estado de la revolución: la presión de las élites; el agrarismo radical y la disidencia de los generales de la revolución. El Estado no podía parar la reforma agraria ni verse como un obstáculo, pero a su vez no podía permitir su radicalización ya que ponía en peligro el proyecto modernizador capitalista y al mismo Estado de la revolución. Por eso se hacía necesario hacer la reforma agraria para evitar la reforma agraria. Para los arquitectos del naciente Estado su formación implicaba no permitir ser rebasados por el agrarismo y los agraristas y que los pueblos por sí solos, o guiados por líderes regionales o generales, se hicieran justicia por sí mismos tomando las tierras. Había que satisfacer pues las demandas del pueblo. Pero tampoco estaban dispuestos a permitir que la “masa ignorante” del campo se apoderara de las mejores tierras ya que argumentaban que no las podrían hacer producir. El marco discursivo del Estado varió de un lenguaje radical a uno moderado racionalista que tenía dos componentes básicos: se aludía a aspectos técnico- científicos y a la falta de preparación agrícola de la gente del campo; lo anterior llevaba implícito un discurso oculto. En el primer componente del discurso racionalista el Estado manejó que se tenía que hacer un estudio sereno del problema agrario, medir las tierras, ver las posibilidades de producción, establecer el crédito agrícola, tecnificar el campo, que no se debía proceder por apasionamientos. En el segundo componente se manejó la necesidad de la educación agrícola. Los símbolos del discurso oculto refieren a una percepción de la cultura rural subalterna como no apta para manejar y hacer producir la tierra: racista.

Roseberry, al retomar los ejemplos de los estudios de caso de Namiquipa de Nugent y Cuchillo Parado de Koreck, comenta que los namiquipenses rechazan el marbete ejido que les quiere imponer el Estado y con ello invocan una historia anterior de orgullosa autonomía; en el caso de Koreck los habitantes de Cuchillo Parado siguen refiriéndose a su pueblo con este nombre a pesar y en contra del

Estado que trata de imponerle otro nombre el de Veinticinco de Marzo "…ambos emplean un "discurso oculto" con el cual hablan acerca de su dominación. Pero los discursos públicos y ocultos están íntimamente entrelazados. Existen dentro de un marco discursivo común que le da sentido tanto a Cuchillo Parado como a Veinticinco de Marzo."[184]

Asimismo, el Estado maneja un discurso oculto con el cual habla de sus dominados y le da sentido y estructura al proceso hegemónico. Así pues, al hablar de aspectos técnico-científicos y de la falta de educación de los agricultores habla de no dar tierras, de no dotar, de no restituir; habla de que el Estado impone el ritmo, la intensidad y los tiempos de la reforma agraria; habla de que el Estado elige, registra, selecciona; habla de que el Estado impone rutinas, ritos, funcionarios y procedimientos.

Lo mismo ocurre cuando en el nivel jurídico, en el político y en el lenguaje de las instituciones agrarias se empieza a denominar a los pueblos, comunidades, rancherías o condueñazgos como "núcleos agrarios." Dada la presión agraria que había de demanda de tierras jurídicamente se pusieron candados. Así la Ley de Ejidos de 1920 fue abrogada y sustituida por el Reglamento Agrario de 1922. La primera ley reconocía como sujetos a dotación los estipulados en el artículo 27 constitucional: pueblos, comunidades, condueñazgos, congregaciones o rancherías (artículo 1º). Los pueblos debían probar su categoría política con documento oficial o con el hecho de que así lo hubieran considerado las "autoridades políticas superiores," en las relaciones oficiales, pero se estipulaba que: "...de no existir un documento oficial, bastará para que un núcleo de población sea considerado como poblado agrícola, para los efectos de esta ley, un censo oficial en el que se anoten más de 50 vecinos, jefes de familia (artículo 3º). Las rancherías, congregaciones y comunidades podían probar su personalidad

[184] Roseberry, op. cit., pp. 220-221.

política con información proporcionada por el ayuntamiento a que pertenecieran (artículo 4º).[185]

El Reglamento Agrario reconocía las categorías aludidas en la Ley de Ejidos y agregaba "núcleos de población existentes en las haciendas abandonadas..."(artículo 1º). Pero solo tenían el derecho a solicitar dotación o restitución las poblaciones que acreditaran debidamente tener alguna de las categorías mencionadas (artículo 2º). Las poblaciones ubicadas en las haciendas sin ninguna de las categorías políticas enumeradas en el artículo 1º y cuyas casas se hubieran construido con el fin de alojar a los trabajadores de las mismas no tenían derecho a solicitar ejidos (artículo 3º).[186] Quedaba eliminada la disposición de que cualquier población agrícola pudiera solicitar ejidos. La exigencia de un reconocimiento como entidad política o administrativa dejaba fuera de los derechos de la reforma agraria a una enorme gama de poblaciones sin ningún reconocimiento o estatus legal por el Estado de la revolución,[187] así como las que teniéndolo habían perdido sus títulos fundacionales. En algunas ocasiones para corroborar la categoría de los pueblos solicitantes se acudió a los registros, entre ellos a los anuarios estadísticos. Las formas jurídicas también forman parte de un discurso oculto que conlleva a hacer efectivo el control y dominación del Estado. Como se dijo anteriormente, en Chihuahua se hizo una campaña expresa para que los pueblos solicitaran ejidos, lo anterior estaba enfocado a los pueblos revolucionarios, por lo demás, las leyes expuestas se aplicaban a los pueblos que sí solicitaban pero que no era conveniente dotarlos de tierras.

[185] Manuel Fabila. Cinco Siglos de Legislación Agraria, 1493-1940. CEHAM / SRA, México, 1990. p. 296.
[186] Véase esta ley en Recopilación agraria de las leyes y disposiciones referentes a restituciones y dotaciones de tierras para ejidos. Comisión Nacional Agraria, México, 1924. También en Fabila, op. cit., pp. 327-328.
[187] Domínguez, op. cit., pp. 63-64.

Como nos recuerdan Corrigan y Sayer acerca de los registros: “El poder ejercido al registrar, preservar y devolver “hechos” –definir realidades- aumenta rápidamente al ser utilizado; detrás de los registros individuales hay una autoridad formal que establece rutinas y rituales que se refuerzan entre sí.”[188] Las disposiciones jurídicas son una de las grandes expresiones de que el Estado afirma. Por eso los pueblos fueron referenciados con el marbete de núcleos agrarios, referirse a los pueblos en sus propios términos, es decir, llamarlos como ellos mismos se autodenominaban implicaba un reconocimiento tácito de categoría política o administrativa. Así el Estado afirma al reservase el derecho a registrar, a otorgar o reconocer tal o cual categoría política o administrativa. Al llamar a las poblaciones simplemente como “núcleos agrarios” significaba despojarlos o no reconocer sus símbolos densos de existencia, es decir, su memoria histórica, sus tradiciones, su identidad, sus anhelos y aspiraciones u horizontes de vida.

Cuando el Estado de la revolución plasma en el artículo 27 de la Constitución que la propiedad originaria del territorio nacional corresponde a la nación, no servirá de nada a sus afirmaciones si la sociedad no está dispuesta a reconocer el poder omnímodo del Estado en cuanto a la tierra que pisan y trabajan. Digamos que hay una apropiación virtual del poder, pero hay entonces fuerzas que desafían la formación del Estado, es entonces que el Estado tiene que iniciar un proceso de apropiación real del poder.

El Estado mexicano se empeña en que los pueblos que demandan tierras aludan a la benevolencia paternal del Estado. Los términos en que toda población debe de solicitar tierras debe de ser en los términos del Estado, es decir, el Estado afirma. Así los pueblos deben solicitar ejidos aludiendo, en primer lugar, a las disposiciones jurídicas emanadas de la revolución para dotar a las poblaciones

[188] Corrigan y Sayer, op. cit., p. 21.

desprovistas de tierra o restituir a las que hubieren sido despojadas. En segundo término está la necesidad de "obtener los elementos más indispensables de vida sembrando un pedazo de tierra." Así acudirá el Estado paternal y benevolente dispuesto a proteger a sus hijos desamparados.

Los formatos de solicitud de ejidos

Los formatos de solicitud de ejidos son también clave para entender los procesos cotidianos de formación del Estado. Al llenar o guiarse por un simple formulario siempre se tenía que aludir a los fundamentos legales de la ley del 6 de enero de 1915, a las reglamentaciones agrarias y a las necesidades de subsistencia. Al hacerlo así se aceptaba tácitamente el reconocimiento del Estado, de su autoridad; se aceptaba la sujeción paternalista. El asunto era que las poblaciones aludieran a su necesidad de tierras para su subsistencia y no a ningún tipo de tradición, derecho o fuerza no reconocido o enarbolado por el Estado de la revolución para pedir la dotación o la reivindicación de la tierra. Así los formularios de llenado de solicitud de tierras que se supone, igual que la invención del marbete núcleo agrario, promueven u organizan las demandas agrarias de los pueblos contienen un discurso oculto que conlleva el dominio o sujeción al Estado.

Por todo el estado se distribuyó un formato de solicitud de ejidos que, además de promover la reforma agraria como lo veremos más adelante, conllevaba los objetivos anteriores. El escrito debía dirigirse al gobernador tomando la siguiente estructura y elementos:

> "Los que suscribimos, mayores de edad, originarios y vecinos de (el pueblo, o ranchería, comunidad o congregación) de (el nombre que tenga), perteneciente a la Municipalidad de (aquí el nombre de la Municipalidad), del Estado, con el debido respeto exponemos:"

> Que desde tiempo inmemorial (o desde la fecha que sea) existe el pueblo de nuestra vecindad, compuesto ahora de (aquí el número de habitantes que tenga el pueblo, ranchería, etc., de que se trate) según el padrón que acompañamos al presente escrito (se acompañará el padrón del pueblo).
>
> En la actualidad carecemos de los elementos más indispensables para nuestra subsistencia y desarrollo, pues estamos reducidos a la más completa miseria, debido a que, (aquí se expondrán las causas o motivos que determinaron este estado de cosas) y no tenemos ejidos (sea porque nunca los haya tenido; por falta de títulos, por imposibilidad de identificar los terrenos, o porque legalmente hubiera sido enajenados. En caso que tengan tierras dentro de la jurisdicción del pueblo o fuera de él, dirán que extensión tienen).
>
> En virtud de todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, 7º, 8º y 9º, del Decreto de 19 de septiembre de 1916 y, 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
>
> A Ud. C. Gobernador del Estado, con respeto pedimos que: previos los trámites de la ley correspondientes, se dote a nuestro pueblo (aquí el nombre del pueblo), del terreno suficiente pasa (sic) tener los ejidos necesarios conforme al número de habitantes del mismo pueblo, (ranchería, comunidad o congregación) expropiándose por cuenta del Gobierno Nacional el terreno indispensable para ese efecto."[189]

Asimismo, las solicitudes de tierras que no fueron hechas con los formatos o machotes que distribuía la CLA o no siguieron las instrucciones de los ingenieros y empleados de las instancias agrarias nos muestran los desafíos que los pueblos imponían a la formación del Estado. Los términos propios con que los pueblos demandaban respeto o la reivindicación de sus posesiones; pero también las formas de resistencia local y regional que el Estado combate, por qué las combate y cómo las combate.

[189] Archivo Historico Municipal de Batopilas, Caja 195, exp. 21.

Los pueblos y la dominación del Estado

A propósito de lo que se ha venido planteando las cinco colonias militares formadas en el noroeste del estado de Chihuahua por Teodoro de Croix nos darán la pauta para analizar y mostrar lo expuesto. Cuando se trata de defender o recuperar la tierra todo pueblo alude a derechos que consideran irrecusables como a la “quieta pública y pacífica posesión” que había tenido o tiene de ellas; otros pueblos aluden a haber sido los primeros en poblar el lugar que implica también haber sido los primeros en abrir las tierras al cultivo y haberlas hecho producir; otro derecho es el haberlas defendido con las armas; y otro son los mismos títulos, actas o decretos de posesión de la tierra expedidas por los diferentes proyectos de Estado.

Las cinco colonias militares basaron sus derechos particulares sobre la tierra en los elementos anteriores y también en el bando expedido en la época virreinal, en el año de 1778, por el Gobernador de las Provincias Internas de la Nueva España Teodoro de Croix. Cuando el Estado de la revolución quiso meter a estos pueblos al régimen ejidal, con el consiguiente control político, los pueblos de Namiquipa y Cruces enarbolaron el bando contra las afirmaciones del nuevo Estado. Importante para la formación del Estado de la revolución era que las poblaciones tenían que reconocer que de él provenían las garantías y derechos de posesión de la tierra, basarse en las afirmaciones del Estado antiguo era desafiar al nuevo proyecto de Estado. Por otra parte, estos pueblos aluden a su lucha contra los apaches y la defensa de la tierra con las armas, así como al hecho de haberlas abierto al cultivo para hacer valer sus derechos sobre la tierra. Todos los elementos a los que Namiquipa y Cruces refieren haciendo alusión a sus tradiciones, memoria histórica, luchas estoicas son símbolos densos que conforman una tradición selectiva que quieren hacer valer en contra de las afirmaciones del Estado que se

empeña en no reconocer las tradiciones alternativas al verlas como una amenaza para su formación.

En febrero de 1905 el entonces gobernador de Chihuahua, Enrique Creel, decretó la ley sobre medidas y enajenación de terrenos municipales mediante la cual se autorizaba el deslinde y fraccionamiento de los terrenos municipales en el estado. Según las palabras del propio Creel la ley buscaba dos objetivos primordiales: a) promover la formación de un fuerte sector de pequeños propietarios en el estado, b) intentar aumentar los ingresos municipales para dar a los municipios autonomía presupuestaria en relación al gobierno estatal y realizar obras públicas. Mediante esta ley también se daba paso al fraccionamiento de tres tipos de terreno: los solares para casa habitación, terrenos agrícolas y de pastizales

> "...la ley constituyó el último embate de la oligarquía chihuahuense para modernizar la estructura de la tenencia de la tierra en el estado, pues afectaría los rezagos de los ejidos coloniales, los llamados terrenos municipales y convertiría a los restos de los fundos legales y los terrenos de común repartimiento en mercancías que convergieran en el mercado, fomentando la especulación de la tierra justamente en las zonas de mayor desarrollo agrícola y ganadero del estado."[190]

La ley de 1905 tenía también por objetivo eliminar algunas restricciones que las leyes liberales del siglo XIX no habían podido eliminar. No dejar al gobierno federal como arbitro supremo en un gran número de cuestiones agrarias; también que no solamente se vendieran las tierras de los pueblos en lotes individuales a sus mismos habitantes, sino también a forasteros; que ya no hubiera protección

[190] Jean-Dale Lloyd, "Rancheros y revoluciones en el noroeste de Chihuahua." en, Historia de la cuestión agraria mexicana. Siglo XXI, México, 1988. t. III. Creel arguía que la ley brindaría facilidades para la adquisición de bienes y la entrada de ellos al concierto de los negocios. Además, que aceleraría la subdivisión de la tierra en beneficio de la clase trabajadora, pero sus efectos fueron totalmente contrarios, Ibid, pp. 84-85.

para la expropiación de tierras municipales. Para sobrevivir, los que antes fueron prósperos rancheros tuvieron que practicar la agricultura de subsistencia.[191]

La ley de 1905 no logró el objetivo de crear un sector de pequeños propietarios como había expresado Creel que sucedería. Pero sí creó una feroz especulación de terrenos municipales sobre todo por parte de los comerciantes y rancheros ricos, quienes tenían la capacidad económica para adjudicarse las tierras de cultivo y pastoreo. En el proceso de privatización de los terrenos municipales los altos costos provocaron la exclusión de los beneficios de los sectores medios y bajos de los pueblos. Fueron los comerciantes y rancheros adinerados locales los que se hicieron de los terrenos que por otra parte integraban los ayuntamientos y eran los que llevaban a cabo la privatización.[192]

En 1921 Pío Fuentes de Galeana escribía a la CLA que precisamente mediante esa ley había sido despojado de un terreno que él había abierto al cultivo y poseído por más de veinte años: “aprovechando las garantías que solo dava (sic) a los individuos que tenían dinero la ley sobre medida y enajenación de terrenos de 1905 fui despojado de dicha tierra por el Sr. Braulio Nevares Presidente municipal en aquella época que no tuvo ningún escrúpulo para despojarme de él pasándolo en venta como terreno municipal a los Sres. Francisco Nevares y Manuel Zúñiga, quienes actualmente lo poseen.” A continuación se le pidió informes al representante agrario, quien contestó que efectivamente Fuentes

[191] Katz, op. cit., 1998, p. 44. Además, esta ley transformó a muchos rancheros en jornaleros sin tierras, forzados a buscar trabajo fuera de sus pueblos para poder sobrevivir. Para Katz lo anterior puede haber sido una de las razones para que Creel emitiera tales disposiciones, ya que en las épocas de auge faltaba mano de obra en el estado. Ibid.

[192] Jean-Dale Lloyd. Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros del noroeste de Chihuahua, 1886-1910. Universidad Iberoamericana, México, 2001. pp. 244-245. Fue así como esta ley causó un proceso de empobrecimiento de rancheros y medieros menos favorecidos económicamente, quines hasta antes de la instrumentación de la ley usufructuaban terrenos que eran parte fundamental de su economía doméstica. Ibid.

había sido despojado del terreno por 1906 ya que fue denunciado en base a la ley de 1905.[193]

Por otra parte, los ayuntamientos aceptaron en gran medida el deslinde y fraccionamiento de sus terrenos dada la precariedad de los ingresos que percibían y el aumento de su déficit presupuestario. Uno de los ejemplos es Galeana, que con la venta de sus terrenos pudo sanear sus finanzas. En Janos el ayuntamiento se opuso al fraccionamiento de sus ejidos y logró retrasar el proceso hasta mediados de 1909. La defensa de las tierras se organizó a partir del que sería un importante líder revolucionario: Porfirio Talamantes. Cuando el jefe político ordenó el deslinde de los terrenos municipales en 1905 el ayuntamiento se opuso y mandó a la ciudad de México a Talamantes para protestar contra la puesta en práctica de la ley. La persistencia del gobierno estatal de fraccionar los ejidos continuó y en 1907 nuevamente Talamantes salió, en representación del ayuntamiento, a la ciudad de México para tratar de obtener de la Secretaría de Fomento el reparto gratuito de los ejidos entre los vecinos más pobres de Janos. En los primeros meses de 1908 la Secretaría de Fomento y el gobierno del estado desecharon la petición y se dio paso al fraccionamiento y enajenación de los terrenos municipales.[194] El presidente municipal, que había nombrado Creel, estaba vendiendo la mayor parte de las tierras a forasteros y a algunos ricos del pueblo. Talamantes trataba de ampararse en el gobierno federal aduciendo que el reparto de tierras comunales era precisamente competencia de orden federal. Lo que el líder rural buscaba era que los beneficiados fueran los habitantes del

[193] AHRAN, 24 / 399, Local, f. 12 y 23, expediente de restitución de Galeana. En su carta Fuentes mencionaba que Nevares era dueño de más de 100 hectáreas de riego y más de 300 de monte, Ibid.

[194] Lloyd, op. cit., 1988, p. 85, 90. Las penurias de Galeana se debían a la fuerte concentración de los recursos básicos en unas cuantas personas y a que carecía de un desarrollo comercial como Casas Grandes que contaba con explotaciones mineras de donde podía obtener impuestos. Además, la ley representó una coyuntura importante para ciertas autoridades municipales para extender sus posesiones particulares. Ibid.

pueblo y no los foráneos.[195] En octubre del mismo año el ayuntamiento suspendió los trámites de denuncia argumentando que todavía no estaba determinada la zona para usos comunes. Ante la situación intervino directamente el gobernador, quien autorizó se continuara con los deslindes.[196]

La Secretaría de Fomento puso oídos sordos a la petición de los jamenses. Creel decía a los funcionarios federales que Talamantes perturbaba el orden público y había ofendido al presidente municipal de Janos tildándolo de cobarde y ruin, por lo que se le multó con 30 pesos. También mencionó que Talamantes no representaba al pueblo de Janos, cuyos habitantes estaban de acuerdo con el reparto de las tierras municipales. La Secretaría de Fomento respondió a Talamantes que dado que no hablaba en nombre de los habitantes de Janos no podía atender sus peticiones, además de aceptar éstos el reparto que se llevaba a cabo. Pocos días después los jamenses enviaron una carta con cien firmas desmintiendo a Creel, protestaron por los repartos y apuntalaron a Talamantes como su legítimo representante. La Secretaría analizó la ley de Creel y la declaró anticonstitucional y que todos los títulos expedidos basados en ella eran ilegales. El gobernador se defendió argumentando que todos los títulos de propiedad en Chihuahua se basaban en los principios de dicha ley y que aproximadamente 10 mil personas se habían beneficiado de ella. La Secretaría capituló y no volvió a impugnar la ley de Creel. Los habitantes de Janos esperaban la llegada de un funcionario que la Secretaría les había prometido mandar a escuchar sus agravios, pero primero llegó con Creel, quien le dijo que no era conveniente que fuera a Janos, ya que la gente del pueblo crecería al ver que se les ponía oídos. El

[195] Katz, 1998, op. cit., pp. 51-52.
[196] Lloyd, op. cit., 1988, pp. 90-91. Porfirio Talamantes poseía varías labores irrigadas por el río. A finales de 1908 se descubrió la conspiración magonista de Casas Grandes y Talamantes fue acusado de participar en ella teniendo que huir hacia los Estados Unidos.

funcionario se regresó y a los jamenses ni siquiera se les avisó que se había cancelado la visita.[197]

En mayo de 1910 los habitantes de Janos escribían que el presidente municipal era “un funcionario sin corazón humano, injusto y cruel sobre quien pesan terribles acusaciones, y que a pesar de eso, aún existe un nuestro arruinado pueblo”. Manejaba el pueblo a su antojo, les cortaba el agua, les cobraba por el uso de pastos y leña.[198]

La ley también tuvo repercusiones en nuevo Casas Grandes. Para 1904 contaba con su fundo legal y ejidos. Las tierras se arrendaban a los medieros y rancheros pobres del pueblo, pero para 1910 el fundo legal estaba totalmente privatizado, exceptuando la plaza municipal y los edificios públicos. Los terrenos municipales habían sido enajenados a particulares y de los ejidos solo quedó una pequeña porción.[199] Lo que el Estado esperaba del proceso de fraccionamiento de los ejidos lo vemos claramente cuando el jefe político del Cantón Francisco Matus señalaba sobre Janos:

> “... es necesidad apremiante se practique el deslinde y fraccionamiento de los ejidos de aquel pueblo tanto porque esa propiedad municipal está convertida en una comunidad de que todos hacen uso sin provecho para el estado ni el municipio, cuando porque habiendo dentro de estos ejidos, que según sus títulos les dan dos leguas por viento, muy pocas propiedades particulares, tendrá una entrada de mucha consideración el Erario municipal y podría realizar muchas mejorías que les demanda el estado atroz de la población y que no puedan iniciarse por la falta de recursos.”[200]

[197] Katz, op. cit., pp. 54-55.
[198] Katz, op. cit., pp. 54.
[199] Lloyd, op. cit., 2001, p. 256. En marzo de 1905 se dio paso al deslinde de las tierras de Casas Grandes, se lotificaron terrenos con una medida de 750 hectáreas en la margen izquierda del río y una parte de ellos pasó a ser usado en forma comunal por los pobladores, ibid.
[200] Lloyd, op. cit., 2001, p. 280.

Los pueblos de Chihuahua no solo fueron víctimas de la ley Creel, sino también de su visión modernizante que lo llevó a reorganizar el gobierno estatal. Generalmente las solicitudes, peticiones y quejas de los pueblos habían sido firmadas por sus autoridades municipales, pero Creel eliminó a los funcionarios electos y puso a sus secuaces en los cargos municipales.[201]

Las disposiciones liberales atacaron las relaciones de asociación que los pueblos habían sostenido con el Estado mexicano. La base de esas relaciones era el control y dominio pleno de la tierra; siendo el control de la misma la forma primera de ejercer dominio. El Estado se empeñaba en minar esta base material de los pueblos. El acaparamiento de terrenos por comerciantes y rancheros ricos relajó su unidad interna; es parte de un proceso que inicia con la llegada de foráneos al final de la guerra con los apaches. Es conveniente al Estado resquebrajar la cohesión interna para debilitar, intervenir y afirmar.

En el contexto de la reforma agraria en el norte de México, Namiquipa parece ser un caso único y contradictorio, hasta llegar a lo extraño o raro. En sí la presentación de una solicitud de restitución de ejidos de los namiquipenses es paradójica principalmente por dos aspectos: rechazaban enérgica y rotundamente el régimen ejidal y la consiguiente intervención del Estado en el manejo de sus tierras; al decir de Nugent, “En contraste con sus vecinos, los namiquipenses nunca perdieron el control de sus tierras ante las compañías deslindadoras o las haciendas después de las guerras contra los apaches...[202]” y en las propias palabras de los namiquipenses “no existe un despojo real.” [203] Otro aspecto de la solicitud que llama la atención es que es prácticamente idéntica a la de Cruces, la

[201] Katz, op. cit., p. 49.
[202] Nugent y Alonso, op. cit., p. 181.
[203] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 2. (expediente de restitución de ejidos a Namiquipa).

organización de las dos solicitudes es igual, están redactadas en los mismos términos y con la misma fecha: 18 de noviembre de 1922.[204]

Más aún, la lucha agraria de Namiquipa había estado coronada de victorias. Al poco tiempo de su refundación Namiquipa, como Cruces y Galeana empezaron a tener problemas con los que antes habían sido los propietarios de las tierras en las que esos poblados se edificaron. Para la fundación de los pueblos Pedro González de Almoyna donó 33 sitios. No obstante que el rey de España había dado su aprobación al establecimiento de las cinco colonias en 1789,[205] en 1808 los herederos de González reclamaron la devolución del predio rústico denominado Nuestra Señora que Aranzazú que ocupaba Namiquipa, pero al hacer el reclamo también manifestaron haberlo cedido al gobierno español para la fundación de este pueblo y el de Cruces. Los 33 sitios donados también comprendían tierras de la hacienda del Torreón. En junio de ese mismo año el Gobernador de las Provincias Internas, Nemesio Salcedo, declaró improcedente la solicitud de los herederos de González Almoyna.[206]

El pleito lo siguió Enríque Muller que en 1863 compró la hacienda del Carmen de Namiquipa junto con el rancho de Aranzazú que habían sido de los herederos de González Almoyna.[207] De la nueva dificultad los namiquipenses salieron nuevamente airosos, ya que el año de 1889 Porfirio Díaz declaró legales las concesiones hechas por Teodoro de Croix.[208] Continuando el pleito en la misma época de la posrevolución, el nuevo Estado tenía que dictar sus propios términos. Para esta ocasión los pueblos de Namiquipa, Cruces y Galeana y los herederos de Enrique Muller convinieron en designar un juez arbitrador para que resolviera el

[204] AHRAN, 24 / 434, Local, f. 2. (expediente de dotación a Cruces)
[205] AHRAN, 156 / 23 f. 343. (expediente de restitución de ejidos a Namiquipa).
[206] AHRAN, 156 / 23 f. 343, también en 24 / 432, Informe Reglamentario, ff. 7-8. (expediente de restitución de ejidos a Namiquipa).
[207] AHRAN, 156 / 23 f. 342. (expediente de restitución de ejidos a Namiquipa).
[208] AHRAN, 24 / 432 f. 40. Ibid, Informe Reglamentario, f. 7. Ibid, 153 / 23, f. 344.

pleito. Las partes acordaron en pedir al gobernador de Chihuahua, Ignacio C. Enríquez, que fungiera como tal, mismo que dictó sentencia a favor de los pueblos declarándolos legítimos poseedores de 64 sitios de ganado mayor según el bando de Croix.[209]

Las solicitudes de restitución

Las solicitudes de Cruces, Namiquipa y Galeana son verdaderas síntesis de la tradición selectiva de cada pueblo. En las de los dos primeros pueblos se hace referencia al laudo arbitral de Enríquez a su favor pero con mucha mayor fuerza en la de los cruceños, ya que éstos afirmaban categóricamente que habían sido despojados en dos ocasiones por Enrique Muller:

> "Por el año de 1871 Don Enrique Muller dueño de las Haciendas de Santa Clara y Ortega, ajustó Composición de dichas Haciendas con la Secretaria (sic) de Fomento, para adquirir los baldíos que resultaren, resultando una adjudicación viciada en comparación a lo que la Ley de Tierras de aquella epoca (sic) concedia, (sic) y más que cuando con ella viene a invadir nuestros ejidos en proporción de una mitad. El año de 1884... adquirió 19 lotes con titulos (sic) parciales, en el punto del TINTERO dentro de los Ejidos de Nuestro pueblo, bajo el mismo concepto de terreno Nacional, quedando con esta Segunda invación (sic) totalmente privados de montes para los usos de la comunidad."[210]

También los namiquipenses mencionan que a propósito de la composición solicitada por Muller en el año mencionado "…extendió sus dominios hasta invadir nuestros Ejidos, y desde aquella epoca (sic) hemos tenido continuas molestias con estos vecinos que nos han impedido deslindar y amojonar nuestro predio

[209] AHRAN 24 / 432, f. 40. Ibid, Informe reglamentario, f. 3, también 156 / 23, f . 341.
[210] AHRAN 24 / 434, Local, f. 2.

común."[211] Pero a continuación solicitaban al gobernador y a la CLA "en la via (sic) de restitución, no obstante que no ha existido un despojo real, pero existe o ha existido una cuestión que nos afecta en nuestros Ejidos, pedimos, se marquen conforme nuestros titulos (sic) y se nos restituya lo que resultare afectado."[212]

En realidad los namiquipenses habían permanecido en la posesión de las tierras que ellos consideraban eran las que se les habían cedido por el bando de Croix, pero como nunca se había realizado un deslinde que marcara con certeza los 64 sitios tenían la expectativa que la colonia pudiera extenderse más allá de las tierras que tenían bajo su control. En el año de 1886 el gobierno del estado comisionó al ingeniero José Lino Ramírez para hacer un estudio de los problemas que por tierras disputaba Galeana y los herederos de Enrique Muller. El enviado llegó a la conclusión de que el bando de Croix era título legítimo de Galeana y debían prevalecer sobre otros, incluyendo los títulos de la hacienda de Santa Ana del Torreón, dado que la hacienda había permanecido abandonada por espacio de 18 años, lo cual constituía nulidad de la concesión que se le había otorgado. Asimismo, dado que el bando se refería a cinco poblaciones era aplicable también a Namiquipa. Solo que en relación a la extensión de las colonias interpretó las cuatro leguas por viento como una superficie de 16 sitios de ganado mayor.[213]

Por otra parte en la resolución presidencial se hace constar que en el año de 1908 "el Ingeniero Julio Posado [en realidad es Posada] comisionado de la Secretaría de Fomento, practicó un deslinde del ejido del pueblo y en su informe respectivo demuestra que la extensión del mismo es de sesenta y cuatro sitios de ganado mayor."[214] Ese año el ingeniero expidió un certificado a la organización local que tenía bajo su jurisdicción las tierras del pueblo autodenominada Sociedad Civil

[211] AHRAN, 24 / 432, Local. f. 2.
[212] Ibid.
[213] AHRAN, 156 / 23. f. 344; ibid 24 / 432, Informe Reglamentario. ff. 6-7..
[214] AHRAN, 156 / 23 f. 345.

Particular (en adelante SCP) donde hacía constar que determinó los linderos conforme a los títulos y que "se vé (sic) que constan de 64 sitios de ganado mayor." Pero al describir los trabajos solo menciona que:

> "Para medir el lindero Sur partí de la iglesia del Pueblo de Namiquipa con rumbo Sur magnético y medi (sic) por triangulación 4 leguas que terminaron 393 metros al sur de un antiguo cerco de alambre de la Hacienda de Santa Ana, de ese punto medi (sic) cuatro leguas al Oriente y cuatro al Poniente. Una comisión de vesinos (sic) de Namiquipa vió los lugares donde quedaron las mojoneras esquinas."[215]

Posada llegó al lugar para deslindar un terreno baldío localizado en el lindero sur de Namiquipa. Los namiquipenses aprovecharon y a decir de ellos mismos "el vecindario le pagó para que nos determinara las tres mojoneras del sur."[216] En realidad no se hizo un deslinde total de los 64 sitios como se afirma en la resolución presidencial. Posada lo infirió de la medición del lindero sur y del bando que Namiquipa poseía. De hecho al realizar la CLA la llamada visita de inspección, el ingeniero Garza determinó que si se medían los 64 sitios de Namiquipa y Cruces se superponían, es decir, dada la cercanía de los pueblos y de casi estar alineados de norte a sur no había suficiente espacio para que se les midiera cuatro leguas del centro de la iglesia en dirección al pueblo contrario.[217] Además, los mismos namiquipenses expresaron en su solicitud que "hemos tenido continuas molestias con estos vecinos (los descendientes de Enrique Muller) que nos han impedido deslindar y amojonar nuestro predio común..."[218]

Pero parecía que el Estado de la revolución estaba empeñado en convencer a los namiquipenses que sí habían sufrido algún despojo. Las solicitudes de restitución

[215] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 94.
[216] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 91.
[217] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 345.
[218] AHRAN, 24/ 432, Local, f. 2.

de Namiquipa y Cruces son muy tardías (18 de noviembre de 1922) en relación a las otras tres colonias. Galeana solicitó restitución el 9 de abril de 1921, Janos el 25 de enero del mismo año y Casas Grandes el 18 de mayo también de 1921.[219] Estos tres últimos pueblos habían sufrido despojos reales al grado de que Galeana solo tenía en su dominio absoluto 10 240 hectáreas.[220] El caso más agudo se daba con Casas Grandes donde se habían establecido las colonias mormonas de Dublán y Juárez además de otras colonias con mexicanos. Así que estos tres pueblos no avizoraron otro camino y asumieron que el Estado de la posrevolución podía reintegrarles las tierras invadidas.

No eran los casos de Namiquipa y Cruces que habían logrado que permaneciera bajo su control gran parte de los 64 sitios. En el caso de Namiquipa todos los que ellos consideraban como los otorgados por el Bando de Teodoro de Croix, entonces por qué solicitar restitución de ejidos. Los dos pueblos fueron embarcados en un proyecto de régimen ejidal que no querían. Los procesos históricos de Namiquipa y su lucha por la defensa de la tierra habían derivado en formas locales autónomas de uso y manejo de la tierra. En 1906 protocolizaron una asociación llamada Sociedad Civil Particular (SCP) para manejar y defender la tierra. El Estado mexicano veía en esas formas locales independientes norteñas una seria amenaza. Namiquipa y Cruces son casos de pueblos independientes asediados por un Estado decidido a imponerle sus afirmaciones.

Las cinco colonias de Croix, como muchos pueblos norteños, en el contexto de la guerra apache, habían desarrollado formas relacionales de asociación, es decir, opuestas a las de tutelaje, con el Estado Virreinal y con el de la época Independiente. El objetivo de los namiquipenses y de los cruceños al enviar sus solicitudes de restitución tenía como fin terminar con el largo y tedioso pleito con

[219] AHRAN, Galeana 83.2 / 23; Janos 63.1 / 23; Casas Grandes 23 / 397, Toca, f. 140.
[220] AHRAN, 83.2 / 23.

los descendientes de Muller, deslindar los 64 sitios de ganado mayor y solidificar las formas locales de uso y manejo de la tierra; lo anterior significaba el cimentar sus formas de dominio local de la tierra sin intervención de nadie, incluido el Estado, poner de relieve su autonomía, sus formas relacionales de asociación con el Estado; es decir, hacer valer su tradición selectiva y símbolos densos ante el Estado y los vecinos colindantes.

Es por eso que la CLA expresamente convenció a los namiquipenses y cruceños de que solicitaran restitución de ejidos para a través de una serie de procesos hegemónicos sobre la tierra establecer el dominio y control sobre estos pueblos. El asunto de Namiquipa y Cruces se inserta en un proyecto hegemónico del Estado de la posrevolución que viendo el poder de movilización rural que causaban las demandas de recuperación, carencia y lucha por la tierra se incrustó en la tradición selectiva ejidal y sus símbolos densos para hacer una reforma agraria mediante la cual los pueblos quedarían sujetos al Estado. Así lo expresó claramente Plutarco Elías Calles a Ignacio C. Enríquez, al refutar su proyecto de colonias en Chihuahua cuando le comentaba que el asunto ejidal era la mejor forma de controlar a los campesinos, si querían tierras tenían que estar con el gobierno. Calles atacó el proyecto de colonias de Enríquez porque pensaba que ponía en contacto directo a los campesinos con los terratenientes y eso podría debilitar el poder político del gobierno.

El problema era que en Chihuahua parecía que los pueblos no querían solicitar dotación ni restitución de ejidos. Había en el estado un ambiente de desconfianza hacia el proyecto de reforma agraria que iniciaba el Estado de la revolución. Más aún, el ejido era una tradición selectiva manifiesta en Chihuahua pero con respecto a ciertas formas de uso y apropiación de la tierra que podríamos llamar o generalizar como colonia, no tenía la misma fuerza, raigambre, tradición y presencia cultural. Colonia en el imaginario colectivo de uso, relación y

apropiación de la tierra contiene para los chihuahuenses símbolos densos que remiten a tradiciones de apropiación y posterior defensa de la tierra con las armas contra los apaches; a todo un proceso de poblamiento y colonización; a la apertura de tierras al cultivo en medios climáticos difíciles; a aspectos de organización social intracomunales y extracomunales, entre ellas formas autonómicas de relación con el Estado y de posesión privada de la tierra. En relación a este último punto la tradición selectiva de las colonias marca relaciones de asociación con el Estado, de ahí la gran desconfianza inicial al creer y luego experimentar el cambio de tipo de relaciones de asociación, a las cuales los pueblos se negaban a renunciar, ya que eran parte fundamental de su identidad, a relaciones de tutelaje. La colonia era una tradición selectiva del norte de México.

Ante el poco interés del grueso de las poblaciones de Chihuahua para obtener o recuperar tierras por las vías y las formas que el Estado de la revolución imponía, se realizó una campaña expresa en Chihuahua para promover entre los pueblos las solicitudes de ejidos. Atacó y logró socavar el proyecto de colonias del gobernador Ignacio Enríquez. La CLA se estableció en Chihuahua el 20 de julio de 1917[221] y en casi tres años y medio se habían instaurado en la CLA únicamente 33 expedientes de solicitud o restitución de ejidos. Pero en un solo año, 1921, la instauración de expedientes en la CLA se triplicó, ese año la instancia agraria instauró un total de 91 expedientes.[222] La avalancha de solicitudes del año de 1921 se debe en gran parte a una campaña concertada por el Estado. Entre los principales promotores de agrarismo en Chihuahua se contaban médicos, profesores, ingenieros, periodistas, en los inicios de la reforma agraria, pero no a los que el Estado denominaría campesinos. Muy tardíamente se fundó en Chihuahua, marzo de 1919, el Centro Agrarista Chihuahuense, primera organización a favor del ejido que pugnaba por la destrucción de los latifundios. El

[221] Francisco R. Almada. Diccionario de historia geografía y biografía chihuahuenses. Impresora de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, 1968. p 108.
[222] Domínguez, op. cit., p. 47.

primer presidente fue el doctor Ángel G. Castellanos, quien se desempeñaba como médico y era catedrático en el Instituto Científico y Literario, de origen oaxaqueño; otro de los principales líderes del agrarismo fue el parralense e ingeniero agrónomo Gustavo L. Talamantes, quien fue presidente de la CLA durante el gobierno de Ignacio C. Enríquez, así como el profesor Ramón Vargas Flores.[223] El centro trató de formar filiales bajo la figura de clubes agraristas en los pueblos del estado como el Club Agrarista Aldamense.

El pueblo de Aldama fue utilizado por la CLA como ejemplo-modelo para difundir, promover y convencer para que los pueblos solicitaran ejidos. A finales de 1921 el pueblo había solicitado dotación de ejidos. Había un interés desmedido en este pueblo por autoridades y líderes agraristas; en abril de 1921 el periódico *La Patria* anunciaba que Talamantes, en compañía de los diputados Victoriano Sáenz Trejo, Octavio F. García, José Quevedo (hijo) y el representante del periódico la *Voz de Chihuahua*, J. Martínez Quintana, visitó el pueblo donde fueron recibidos por José Greco y Ángel Martínez presidente y secretario respectivamente del Club Agrarista Aldamense. En abril de 1921 los agraristas de Aldama invitaban a los pueblos en el estado a solicitar dotación de ejidos: “El Club Agrarista Aldamense, actualmente formado por más de 400 miembros, ha girado una circular a todos los pueblos del Estado, invitando a los labradores a unirse en clubes que persigan como finalidad hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución General de la República ...”.[224]

Poco después de que Talamantes visitara Aldama se dirigió al Distrito de Galeana para establecer clubes agraristas en Casas Grandes, Janos, Ascensión, Galeana y Valle de San Buenaventura. El objetivo era que los mencionados pueblos

[223] Pedro Gómez Antillón. Crónicas chihuahuenses. México, 1992. p. 134.
[224] Domínguez, op., cit., p. 46.

adoptaran los estatutos del pueblo de Aldama por ser uno de los más organizados. En Galeana se organizó el Club Agrarista *Juan Mata Ortiz*.[225]

El Estado para vencer la resistencia y socavar las culturas subalternas utiliza a sus propios miembros, esos personajes son como *elementos cuña,* ya que son miembros del pueblo pero que según intereses específicos o personales actúan como agentes estatales. En el caso de Namiquipa y Cruces se dio una tarea expresa a un agente de este tipo para colectar firmas.

Había pueblos que se habían caracterizado por su acendrado villismo y cuyo control resultaba estratégico en relación a los procesos locales y regionales de la formación del Estado. Entre esos pueblos se contaban las cinco colonias militares del noroeste y en especial Namiquipa y Cruces. En estos casos el estado aprovechó las circunstancias conflictivas que se presentaban por los pleitos de tierras entre estos pueblos y los hacendados vecinos. Además, utilizó a un personaje llamado Reyes Ortiz como elemento cuña que hacía las veces de agente e interlocutor entre el Estado y los pueblos de Namiquipa y Cruces. Poco después de que se había enviado la solicitud de restitución de los dos pueblos, Reyes Ortiz le escribió a Talamantes que: “Por un olvido involuntario de un comisionado de colectar firmas en el escrito de solicitud de Namiquipa, se dejó de acompañar a dicho escrito la copia autorizada de la parte resolutiva de la sentencia arbitral a que se refiere la solicitud.”[226] Así pues, sabemos que Reyes Ortiz tenía el encargo expreso de que los dos pueblos solicitaran restitución de ejidos. La CLA registra como instaurado el expediente de restitución de Namiquipa el 11 de diciembre del mismo año de la solicitud. Namiquipa no estaba compuesta por una sociedad monolítica e igualitaria, había marcadas diferencias de clase que se expresaban más claramente en la desigual cantidad de tierra que cada familia

[225] AHRAN, 24 / 399, Local. f. 21.
[226] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 23.

poseía, así como en la diferenciación y derechos sobre la tierra que disputaban originarios y foráneos, pero al fin de cuentas estas diferencias solo eran una de las tantas brechas existentes al interior del pueblo. Las divisiones internas abrieron las posibilidades "para atacar las estructuras y derechos tradicionales del pueblo."[227]

Reyes Ortiz no era originario de Namiquipa, pero había sido aceptado por los namiquipenses como tal. Fue presidente municipal del lugar durante los años de 1921 y 1922. Pero desde hacía una década había sido representante legal de Namiquipa y Cruces (en 1880 tuvo un conflicto personal con el que sería el primer presidente de la SCP, Cornelio Espinosa). En su periodo como presidente municipal trató de asumir el control de las tierras del pueblo en detrimento de la SCP e inició a expedir permisos para explotación agrícola; reconocer o negar posesiones individuales. Además, empezó a cobrar renta por las tierras municipales. Las facultades que Ortiz asumió merecieron el desapruebo de muchos namiquipenses. El conflicto entre Ortiz y la SCP fue dirimido por el diputado Mariano Irigoyen y el 30 de julio de 1921 el Consejo Municipal acordó respetar la autoridad de la SCP para administrar las tierras concesionadas. No obstante, continuó ejerciendo su propia política sobre la tierra. Ortiz renunció a la presidencia municipal el 24 de junio de 1922.[228] Al decir del propio Talamantes, él había luchado mucho porque se respetaran los ejidos de Cruces y Namiquipa desde antes de la promulgación de las leyes agrarias, obteniendo con sus gestiones el juicio arbitral donde Enríquez falló a favor de los pueblos,[229] juicio en el que Ortiz fungió como representante de Namiquipa y Cruces.

La desconfianza hacia el proyecto estatal de reforma agraria vía ejido y a aquellos que la promovían localmente no tardó en surgir. Fue muy rápida la atención que

[227] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, p. 51.
[228] Daniel Nugent. Spent cartridges of the revolution. Chicago, University of Chicago Press, 1993. pp. 86-87. Cornelio Espinosa murió en 1922, ibid.
[229] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 132.

se le daba al poblado e inmediatamente se comisionó al ingeniero Antonio Garza para hacer la visita de inspección. El 27 de diciembre de 1922 un prestigiado miembro de la SCP, José Casavantes, escribió a Ignacio C. Enríquez comentándole que los pueblos de Namiquipa y Cruces saldrían perjudicados con las mediciones que se estaban practicando a petición de: "unos cuantos ambiciosos que pretenden quedarse con el Rancho del Toro." Con copia de la solicitud en la mano cuestionó su legalidad ya que expresaba que solo la habían firmado 103 personas cuando en el pueblo eran como 700 las que tenían representatividad. Los que habían mandado la solicitud trataron de incorporar a Casavantes al proceso de petición y parece que sin su consentimiento ya lo habían nombrado presidente de la instancia que el Estado creaba en cada ejido para administrar las tierras, pero que dependía totalmente de la CNA, el Comité Particular Ejecutivo (en adelante CPE). El 23 de diciembre fue citado en la presidencia, parece que ya estaba en manos de Anastasio Tena, "para el nombramiento conforme a la ley nueva de Presidente." Casavantes rechazó el ofrecimiento y arremetió contra los solicitantes: "manifesté al Presidente que no tenía ningún derecho de estar nombrando gente que no abía (sic) echo (sic) ningún pedido de medida."[230]

El 18 de enero de 1923 Ortiz tratando de refutar a Casavantes, le envió al gobernador carta donde lo ponía como ignorante de las leyes agrarias y de estar azuzando al pueblo contra el gobierno:

> "La actitud del señor Casavantes no ha dejado de sembrar la desconfianza en el pueblo así como que el gobierno federal se reserve el dominio directo de los terrenos ejidales concediéndoles a los vecinos el dominio útil les ha causado mala impresión sirviendo esto de arma para hacerles creer que se trata de

[230] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 49-51.

> despojarnos de los terrenos y que este fin persigue el gobierno culpándome a mí que aunque trato de disuadirlos de tal error ya llegan a juzgarme traidor."[231]

Las palabras del propio Ortiz expresan muy bien el temor y desconfianza, no solo de Casavantes, sino de muchos namiquipenses, de que el Estado asumiera el control de las tierras del pueblo. Ahora bien, las 133 firmas en la solicitud y la participación de algunos de los líderes de la SCP nos habla de que Ortiz había logrado obtener la confianza de esos namiquipenses sobre la base de que el Estado no controlaría las tierras, sino que, como siempre había sucedido, fallaría a favor de Namiquipa contra los vecinos contendientes y se conseguiría el deslinde de los 64 sitios. Así pues, es muy probable que las solicitudes de los dos pueblos hayan sido redactadas por Ortiz recogiendo el sentir de sus habitantes.

En febrero de 1923 un personaje de nombre Pedro Barrera envió a la CLA los nombres de nueve personas para que el gobernador Enríquez designara a los integrantes del CPE. Los enlistados eran los siguientes: José Ángel Antillón, Felipe Tena, Francisco Antillón, José Rascón, Cristóbal Vásquez, José Muñoz González, José Varela, Pedro Rascón e Isidro Gómez. El gobernador eligió a Ángel Antillón, quien era el líder de las defensas sociales de Namiquipa.[232] Como se vio, poco después de hacer el registro oficial de la solicitud de Namiquipa con la instauración del expediente se daba lugar al primer rito del proceso hegemónico estatal, que tenía que conllevar a que los namiquipenses reconocieran que su derecho a la tierra les venía del Estado, la "visita de inspección" que realizó Antonio Garza. El objetivo era convencer a los namiquipenses de que sí habían sufrido un despojo. El 31 de mayo de 1923 Ángel Antillón, ya como presidente del CPE, envió una carta a Talamantes que tenía como objetivo mencionar que a

[231] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 90.
[232] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 42. Las defensas sociales fue una organización paramilitar que creó Enríquez para acabar con las guerrillas villistas en el estado. Véase Martha Rocha Islas. Las defensas sociales en Chihuahua. México, INAH, 1988.

partir de la visita de inspección se había comprobado que sí se había dado en Namiquipa un despojo de tierras por parte de los hacendado colindantes de Santa Clara y Babícora. Menciona Antillón que la primera había invadido al predio de Namiquipa en una proporción de más de la mitad en una línea recta de norte a sur. Lo anterior lo determinaron a partir del plano que presentaron los descendientes de Muller, dueños de Santa Clara según la composición de 1871 que había realizado Carlos Marión. Pero otra vez en forma contradictoria se expresaba en la carta que:

> "Esta invasión no ha llegado a constituir un despojo, pero hemos resentido las consecuencias de una prolongada y molesta cuestión…" [233] [Pero en relación a la segunda mencionan que] La segunda invasión que citamos por los propietarios de Babícora en el ángulo Sur-Oeste de los ejidos del pueblo si constituye un despojo en una parte considerable como lo confirmará el informe del señor Ingeniero Garza…hoy nosotros en la forma que nos autoriza la Ley, pedimos la restitución de nuestras tierras por considerar que procede la acción reivindicatoria"[234]

En junio del mismo año Talamantes le comunicó a Enríquez que se le había presentado el vicepresidente de la junta directiva de la SCP para denunciar que la Babícora había establecido un corte de cáscara en los puntos denominados El Toro y El Potrillo, terrenos comprendidos en los 64 sitios de ganado mayor y que ese era precisamente el terreno por el que se había pedido la restitución.[235] Lo anterior nos muestra dos aspectos: el posible extrañamiento de Enríquez ante la solicitud de ejidos y el consenso y acuerdo de algunos namiquipenses en solicitar la restitución, claro en los términos señalados. Pero conforme los registros, ritos e intervenciones del Estado fueron avanzando la mayoría de ellos confirmó su gran

[233] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 91.
[234] Ibid.
[235] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 310.

temor de que el Estado asumiera el control de las tierras y se le opusieron rechazando su intromisión y la ley agraria.

A pesar del conflicto entre la SCP y Ortiz el sucesor de éste, Anastasio Tena, continuó rentando la tierra municipal, inclusive emitió permisos para cultivar en los terrenos de común repartimiento sobre los cuales la SCP había tenido jurisdicción total. Además, Tena nombró a Ortiz como representante del pueblo ante el conflicto con los descendientes de Muller, quienes habían ignorado el laudo de Enríquez.[236] Posiblemente desde entonces Ortiz se dedicó a convencer y promover la solicitud de restitución de ejidos que se presentó como se apuntó el 18 de noviembre de 1922.

Como agente estatal los servicios que Ortiz brindaba a los dos pueblos y al propio Estado tenían su factura. En Cruces, por sus servicios, había logrado que lo pusieran en posesión del Rancho Colorado con tierras de riego; en Namiquipa posteriormente conseguiría que una minoría lo eligiera presidente del Comité Particular Administrativo (CPA); que era el pago del propio Estado a su agente; pero además, lo compensaba directamente ya que a su vez era sub-agente del ministerio público en Namiquipa. A finales de 1926 el presidente del CPA de Cruces, Israel Loya, presentó feroz batalla contra Ortiz y el Estado que lo defendía para quitarle la posesión. Loya se expresaba en términos duros contra Ortiz: "...ha sido siempre un explotador del Pueblo como Tinteretillo y actualmente es Sub-Agente del Ministerio Público, siendo a la vez, presidente del CPA de Namiquipa, de donde es vecino, más no de este lugar, en donde estas tierras del ejido de este Pueblo las tenía dadas al partido (EL NO LAS SIEMBRA PORQUE ES PROPIETARIO EN NAMIQUIPA)."[237]

[236] Nugent, op. cit., 1993. p. 87.
[237] AHRAN, 24 / 434, Toca, f. 126.

En otro escenario, los habitantes de Galeana, antes de mandar su solicitud de restitución de ejidos, organizaron una asamblea y constituyeron lo que ellos llamaron *Junta Directiva Representante del Pueblo* cuyo presidente fue Felipe Piña y estaba conformada bajo los siguientes puntos:

> "3/a La Junta obrando de conformidad con la ley presentará, ante el C. Gobernador la solicitud de restitución del tereno (sic) de mancomún que hace varios años se encuentra afectado.
>
> "6/a Si la resolución es favorable y se le restituye al pueblo su terreno, la Junta será la única capacitada para representar el Mancomún, y poner en posesión a los solicitantes que deseen tierras para cultivar siendo de preferencia los vecinos que en la actualidad no poseen ningunas, atendiendo especialmente a los nativos del Pueblo."[238]

El naciente Estado no estaba dispuesto a permitir la consolidación de formas regionales o locales autónomas de apropiación de la tierra como era el caso de la SCP de Namiquipa. Los dos casos anteriores no son formas locales excepcionales ni casos aislados en cuanto a sus expresiones culturales de uso, concepción y relación con la tierra. Forman parte de un contexto cultural regional caracterizado por la apropiación privada y autónoma de la tierra; su defensa con las armas; tierras de frontera; relaciones de asociación con los anteriores proyectos de Estado. Elementos culturales que perfilaron rasgos corporados de organización social de las colonias militares sobre todo ante amenazas externas como la guerra apache y la falta de desarrollo de las relaciones capitalistas que deriva en la inexistencia de un mercado de tierras.

Así cuando el Estado enfrenta a Namiquipa y a Cruces y no acepta los términos de organización social perfilada en la solicitud de Galeana; el objetivo no es solo el

[238] AHRAN, 24 / 399, Local, f. 3.

dominio y control de estos pueblos, sino socavar expresiones, rasgos, pautas culturales regionales que conforman una tradición selectiva que es percibida como una latente amenaza para la formación y consolidación del naciente Estado. Pocos meses después de que los galeaneses constituyeron la Junta Directiva Representante del Pueblo enviaron al gobernador de Chihuahua la solicitud de restitución de ejidos en los términos que eran exigidos por las afirmaciones del Estado, haciendo alusión a la benevolente disposición paternalista de justicia y sus disposiciones jurídicas:

> "Pues hasta nosotros como nuestras familias carecemos (sic) hasta de los más indispensable para nuestra subsistencia y desarrollo y hemos sido obligados a sufrir una verdadera esclavitud y vejaciones así como atropellos de parte de nuestros usurpadores de nuestros ejidos debido a las circunstancias aflictivas porque atravesamos de no estar en posesión de nuestras tierras para atender a nuestras mas urgentes necesidades.
>
> En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º 4º y 6º de la ley agraria de 6 de enero de 1915 y 8º y 9º del decreto de 19 de Septiembre y 27º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos de 1917 ante Ud Señor gobernador del Estado con respeto pedimos...nos sean restituidas nuestras tierras de que hemos hecho mención."[239]

A diferencia de Galeana, como habíamos dicho, Namiquipa y Cruces permanecieron en posesión de grandes extensiones de tierra. Habíamos visto el empeño del Estado por demostrarle al propio pueblo que sí había sufrido despojo de tierras y a los namiquipenses insistiendo en que por parte de los dueños de la hacienda de Santa Clara no habían sufrido despojo alguno. Es una ironía pero tendremos que utilizar los informes de los mismos ingenieros de las instancias agrarias para determinar la cantidad aproximada de tierras que conservaban estos

[239] AHRAN, 24 / 399, Local, f. 2.

pueblos. Al realizar el ingeniero Garza la visita de inspección y efectuar las medidas de los 64 sitios de ganado mayor de Namiquipa determinó que el pueblo tenía bajo su control total 52 566 hectáreas, tenía invadidas 4 592 por los dueños de la hacienda de Babícora y 40 879 de la hacienda de Santa Clara.[240] Expresó Garza que los propietarios de esta última hacienda reclamaban como suya la extensión de terrenos mencionados pero "sin que hasta la fecha hayan llegado a poseerlos."[241] Por otra parte parece que tampoco los namiquipenses tenían una posesión real de ellos y por eso insistían en que no habían sufrido ningún despojo. En el proyecto de restitución se apuntaba que estas superficies junto con 862 hectáreas que se les quitaban a pequeños propietarios conformaban una restitución de 46 333 hectáreas que sumadas a las 52 566 que ya poseía el pueblo daban 99 050 hectáreas.[242] Ya que no había espacio suficiente entre Namiquipa y Cruces no alcanzaba para las 112 359 que marcaba el bando de Croix. Quedaban fuera de las 99 050 hectáreas únicamente tres predios que sumaban 150 que se respetaban como pequeñas propiedades. Así el Estado aumentaba las tierras del pueblo de Namiquipa a cambio de sujeción y obediencia, pero muchos namiquipenses preferían su autonomía y rechazaban las afirmaciones del Estado.

En el proyecto de dotación de Cruces se menciona que debido a que no hay ocho leguas entre éste y Namiquipa, el segundo había quedado con la superficie de tierra ya mencionado y el primero con 83 196 hectáreas. El proyecto de restitución para Cruces contemplaba 1884 hectáreas de la hacienda de San José de Babícora; 3 996 de la hacienda de las Bocas; 714 de un predio de Julio Muller (se le dejaban 50 como pequeña propiedad) y se le reconocían al pueblo 37 906 hectáreas en litigio con los dueños de la hacienda de Santa Clara. De lo anterior

[240] AHRAN, 24 / 432, Informe Reglamentario, f. 13.
[241] Ibid, f. 5.
[242] Ibid, f. 13. Las pequeñas propiedades eran tres y se respetaron para cada una 50 hectáreas a la testamentaría de Julio Muller se les quitaron 160 a Pedro Loya 257 y a José Casavantes 445, ibid.

inferimos que Cruces había tenido en dominio absoluto alrededor de 38 646 hectáreas, pero a diferencia de Namiquipa sí acusaban a los propietarios de Santa Clara de despojo.[243]

Galeana había sufrido despojos por media docena de propietarios colindantes.[244] Los descendientes de Enrique Muller, a partir de su hacienda de Santa Ana del Torreón, (que eran los propietarios de la hacienda de Santa Clara y sostenían los litigios con Namiquipa y Cruces) eran afectados con 53 161 hectáreas; a la propiedad denominada Ojo de Arrey con 17 859; hacienda de Santiago 15 518; haciendas El Carmen y San Luis 12 077; y la hacienda de San Miguel de Babícora con 3 471 hectáreas, para un total de 102 118 más las 10 240 que eran las que permanecían en posesión de Galeana daban la cantidad de 112 359 hectáreas que era la cantidad que debían poseer según el bando de Croix.[245]

[243] AHRAN, 24 / 434, Informe Reglamentario, f. 11.
[244] Nugent, op. cit., 1993, p. 92.
[245] AHRAN, 23 / 83.2.

Capítulo III: La resistencia a la dominación

Janos y Casas Grandes

El proceso hegemónico para los casos de Janos y Casas Grandes presentaba otro tipo de complicación al Estado de la revolución, dificultad de carácter internacional. Parte de los 64 sitios de cada uno de estos pueblos eran de la Compañía de Corralitos, propiedad de estadounidenses. Pero sobre todo porque se habían establecido, dentro de los 64 sitios de cada pueblo, colonias de ciudadanos estadounidenses: los mormones. Las resoluciones presidenciales para los dos pueblos mencionan a los propietarios afectados pero no con qué superficie. Curiosamente los pobladores de Janos no habían solicitado restitución, sino dotación. La resolución presidencial, firmada el 30 de diciembre de 1926, niega la dotación pero da la restitución afectando a la compañía mencionada, y a los hermanos Mápula, a los dueños de la hacienda de Chaparrales, Ojo de Federico y Rancho la Palotada.[246] Pero en la resolución ni se menciona a la colonia de origen mormón denominada Fernández Leal ubicada dentro de los 64 sitios.

En el año de 1923 se recrudecían las relaciones entre Estados Unidos y México cuando el Estado de la revolución buscaba a toda costa el reconocimiento diplomático de este país y se trataba evitar afectar intereses de sus ciudadanos. El 29 de junio de 1922 Ignacio Enríquez había firmado el llamado “mandamiento” (que era un dictamen previo a la resolución presidencial) con el cual se restituían a Janos solo 16 sitios de ganado mayor resultando que afectaba intereses extranjeros.[247] Para Casas Grandes el gobernador Enríquez había dictado resolución un 27 de marzo de 1923 restituyéndolo con 64 sitios de ganado mayor

[246] AHRAN, 23 / 63.1. La resolución presidencial la firmó Plutarco Elías Calles el 30 de diciembre de 1926.
[247] AHRAN, 23 / 63.1, f. 727.

afectando también a la compañía estadounidense,[248] y a colonos mormones. Posteriormente Obregón había dispuesto la suspensión total de cualquier afectación a propietarios extranjeros. En el año de 1923 Enríquez, ante el rumor de que se habían activado resoluciones agrarias que afectaban intereses extranjeros, tenía que aclarar a Obregón que esas noticias eran falsas.[249] En junio del mismo año y a propósito del asunto de Corralitos y la restitución a Casas Grandes, Enríquez informaba a Obregón que: "...por el expediente formado sobre dicha restitución y que ya se remite a la Comisión Nacional Agraria, podrá Usted fácilmente darse cuenta del estado actual del mismo asunto, el que he procurado detener cuanto me ha sido posible, poseído de la necesidad que Usted indica en su carta referida, pues la solicitud correspondiente fue elevada a este Gobierno desde el 18 de Mayo de 1921."[250]

Pocos días después de firmada la resolución presidencial de Janos se firmó la de Casas Grandes, coincidencia o no con la emisión de la ley de Carranza del 6 de enero de 1915, se firmó con la misma fecha pero del año de 1927. La resolución menciona como afectados a: "Compañía de Corralitos, Rancho de Tapiecitas y anexos, hacienda de San Diego y anexos, Rancho Espindoleño, Fracción "A" del señor Geo R. Look, Rancho de Arroyo Seco, (propiedad de la Compañía Corralitos, Anexo a la hacienda de San Luis, pero no menciona las superficies."[251] Tampoco se menciona las tierras que ocupaban las colonias mormonas.

El plano de la propiedad privada y ejidal del estado de Chihuahua marca una superficie para Janos de 85 224 hectáreas y para Casas Grandes 98 855.[252] Pero las resoluciones presidenciales restituían 112 359 para cada pueblo. Después de

[248] AHRAN, 23 / 100.2.
[249] Martha Eva Rocha Islas. Las defensas sociales en Chihuahua. México, INAH, 1988. p. 125.
[250] AHRAN, 24 / 397, Informe Reglamentario. f. 2.
[251] AHRAN, 23 / 100.2. También en AHRAN, 23 / 397, Toca, ff. 118-127.
[252] Plano "Que muestra la propiedad privada y ejidal hasta 1971", director técnico: Jesús Heiras Arzolarza.

las restituciones los dos pueblos se embarcaron en una serie de solicitudes, peticiones y reclamos al Estado para que cumpliera su dictamen y los pusiera en posesión de los 64 sitios, asunto que nunca se realizó. Pareciera que vemos a un Estado, que se presume paternalista y garante de los derechos de los ciudadanos mexicanos, incapaz de afirmar, pero no es así, es solo parte de sus procesos cotidianos de formación. La gente de Janos y Casas Grandes exige al Estado cumplir su compromiso, tú me das tierras y yo estoy contigo.

En el año de 1969 los jamenses escribieron al gobernador del estado de Chihuahua:

> "...de acuerdo con el mismo decreto presidencial... se reconoció la legitimidad y autenticidad de los derechos de propiedad del Ejido del Pueblo de Janos a la superficie de 112, 359 –04 Hs. y a cuya propiedad ningún otro título puede oponerse, por medio del presente escrito venimos a solicitar la total restitución de dichas tierras, o sea una superficie de 27, 135-38-54 Hs. que unidas a las 85 223-65-46 Hs. ya restituidas dan el de las hectáreas de terreno que se ha reconocido como indiscutible propiedad del mismo Ejido..."[253]

Décadas después de su primera solicitud agraria los jamenses solicitaban restitución de ejidos, que más que nada era una exigencia para que se cumpliera cabalmente la restitución de las 112 354 hectáreas. Pero ahora se apoyaban totalmente en el escenario ritualizado de poder agrario creado por el Estado basándose en los tres principales ritos constitutivos: la resolución presidencial, el acta de posesión definitiva, y el plano de ejecución:

> "Los Ejidatarios de Janos, en pleno uso de sus derechos nos estamos dirigiendo a ud. (delegado de la SRA en Chihuahua) a fin de que conozca las irregularidades que se han venido cometiendo dentro del área que nos

[253] AHRAN, 23 / 63.1, ff. 746-749.

> corresponde pidiendo a Ud. su intervención para que se regularice el área de que fuimos Dotados y que... Tomando como base la documentación que justifica el derecho que nos asiste sobre el área que nos fue Restituida o sean los tres documentos básicos Resolución Presidencial, Acta de posesión y Plano de ejecución."[254]

Los jamenses basan sus derechos sobre la tierra en los ritos de poder creados por el Estado. El bando de Croix es mencionado solo como dato. Así al hacerse parte de los ritos mencionados tácitamente reconocen que su derecho les proviene del nuevo Estado. Al imponer el Estado sus afirmaciones ha moldeado y transformado la identidad local; la tradición selectiva del pueblo con referencia al Estado ha mutado así como sus símbolos densos. El Estado ha logrado una imposición en las relaciones sociales internas, en el uso, concepción y relación con la tierra de los jamenses y a partir de ello con el conjunto social y con el propio Estado; su cultura se ha transformado, por lo tanto los procesos cotidianos de formación del Estado implican la imposición de un modelo cultural, de formas de identidad y símbolos densos.

Los jamenses solicitaron la restitución de las tierras que ocupaban los siguientes predios y propietarios: Colonia Fernández Leal y Pedro Sáenz; los hermanos Sáenz en la Loma Blanca; Fernando Orvañanos en las Laborcitas; Josefina Quevedo Vda. de Villareal en Salto de Ojo; Francisco Azcárate en el Ojo de San José. En su solicitud citaron textualmente y completos los considerandos cuarto y quinto de la resolución presidencia donde el Estado afirma, es decir, justifica y aprueba el derecho de los jamenses a los 64 sitios y establece irrecusablemente que ningún otro título puede oponerse a la propiedad de los ejidos perfectamente determinados en el bando de Croix. Por último citan el punto resolutivo segundo en el que se expresa: "Es de restituirse y se restituye al pueblo de Janos...los 64

[254] Ibid, f. 172.

sitios de ganado mayor a que tiene derecho de acuerdo con el Bando expedido por el Caballero de Croix." La pomposa expresión es parte de la solemnidad que el Estado da e imprime a sus ritos. Así el estado sanciona en sus propios términos el bando buscando y logrando que los supuestos beneficiarios tengan presente y consciente que el derecho a la posesión de la tierra emana del nuevo Estado.

La tradición selectiva de Janos se orienta ahora a los decretos del Estado de la revolución. En 1974, 1976 y 1979 los habitantes del pueblo insistieron ante el Estado para que completara la restitución. Las cartas, a excepción de la de 1979, invariablemente se refieren a la resolución presidencial como fuente justificativa de sus demandas. La de 1976 se dirige al secretario de la reforma agraria recordándole otra carta que habían enviado en el 74 para que acomodara a un "grupo campesino" en el predio San Antonio y su anexo la Virgen que tenía 10 mil hectáreas, mismas que deberían estar en posesión del ejido por estar dentro de los 64 sitios, decían en la solicitud: "Por lo que si se toma en cuenta la tantas beses (sic) mencionada Solisitud (sic) se ará (sic) para dar cumplimiento total al Decreto Presidencial Restitutario (sic) de 30 de diciembre de 1926."[255] Basaban su solicitud en la resolución presidencial y en otras palabras las 10 mil hectáreas serían a cuenta de las que les debía el Estado.

Los procesos hegemónicos en Casas Grandes traían al Estado, aumentadas, las complicaciones de Janos. Dado que dentro de los 64 sitios de ganado mayor habían surgido varias poblaciones, tanto de mormones como de mexicanos, como Nuevo Casas Grandes que se había convertido en cabecera municipal. En realidad las tierras que se restituyeron a Casas Grandes fueron entregadas a varias poblaciones, entre ellas a dos cabeceras municipales, excluyendo a las mormonas. Con el correr de los años, grandes conflictos se presentarían entre mormones y mexicanos, pero también entre las distintas poblaciones de

[255] AHRAN, 23 / 63.1, carta de 1976 ff. 754-757; carta de 1979 ff. 989-991.

mexicanos, contexto en el cual surge una gran rivalidad entre Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Casas Grandes es un pueblo dispuesto a reconocer al nuevo Estado y apoyarlo con tal de que le restituya las tierras que están en poder de hacendados y colonos extranjeros. Como ya dijimos, el Estado impone ritmos y tiempos en la reforma agraria según sus prioridades en su proceso de formación. El caso de Casas Grandes es la cara opuesta del de Namiquipa, mientras en este último el Estado se centra en vencer la resistencia de los namiquipenses para que acepten la restitución de tierras y reconozcan que su derecho a ello proviene del Estado, en el caso de Casas Grandes crea formas para frenar, retardar y a pesar de afirmar la entrega de las 112 354 hectáreas no entregarles las que ocupaban las colonias mormonas.

Desde un principio Casas Grandes reconoce al Nuevo Estado y expresa su decisión de defenderlo con las armas con la esperanza de que les restituyan todas las tierras. La gente de Casas Grandes sabe que el asunto es complicado para el nuevo Estado, pero a pesar de todo la historia del ejido es la historia de sus exigencias al Estado de llevar a cabal cumplimiento la resolución presidencial, posiblemente por eso desde un principio reconoce al nuevo Estado y está dispuesto a defenderlo con las armas. Será por eso que Casas Grandes nunca abandona en su tradición selectiva; el bando de Croix seguirá siendo uno de sus argumentos para afirmar sus derechos, pero también incorpora las resoluciones y leyes del nuevo Estado. Por otra parte, la afirmación del Estado en este caso será, a pesar de la resolución presidencial, no entregarles las tierras que poseen los colonos mormones. El Estado no expresa un no categórico, pero crea formas o procesos culturales envueltos en un discurso oculto para lograr su objetivo. El Estado parece que se diluye, es decir, se pierde en un sinnúmero de instituciones,

oficinas, empleados, procedimientos, registros, tiempos, ritmos, racionalismos técnicos y también raciales.

Después de haber solicitado la restitución el pueblo de Casas Grandes inició una insistente y sistemática presión al Estado para que se acelerara la restitución de los 64 sitios expresados en el bando de Croix. Uno de los primeros argumentos del nuevo Estado para no dotar era la falta de agua, a través del mismo pueblo lo avizoramos ya que el 10 de noviembre de 1922 así lo expresaban: “Debemos manifestar a Ud. que después de mucho tiempo de haberse terminado el proyecto de dotación solicitado por nosotros, el c. gobernador Constitucional del Estado y el c. Presidente de la Comisión Local Agraria, indicaron a nuestros representantes que una causa muy esencial para no resolver provisionalmente el proyecto; era la falta de agua para regar tanto terreno.”[256] Para rebatir lo anterior el pueblo escribió al procurador de los pueblos del estado de Chihuahua argumentando que en dos años habían obtenido excelentes resultados con los temporales; además que su solicitud para surtirse de agua había estado tramitándose con lentitud. Por último, expresaban que: “en ningún caso como en el presente tenemos más derechos a las franquicias que la ley nos concede, las cuales creemos no sean un mito.[257] En octubre del mismo año el presidente del CPE, Toribio Ontiveros, viajó a la ciudad de México para llevar un ejemplar del bando de Croix, el cual debía ser dictaminado por un paleógrafo. Poco después el paleógrafo informó a Ontiveros que ya había terminado el estudio del bando y que solo faltaba mandar el informe a las autoridades agrarias. Ante la falta de noticias, en junio de 1923, Ontiveros pedía al secretario general de la CNA le informara sobre el resultado de su petición.[258]

[256] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 5.
[257] Ibid.
[258] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 46.

Un mes más tarde los habitantes de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes unían fuerzas para exigir la restitución. Con el conocimiento de que el gobernador del estado, el 31 de marzo de 1923, había mandado la restitución y que la Compañía Corralitos se había amparado contra el dictamen, asunto que junto con otros casos afectaba intereses estadounidenses, lo cual derivó en orden presidencial de suspensión del proceso de dotación a Casas Grandes. Ante las circunstancias los dos pueblos manifestaron al presidente de la república y al de la CNA:

> "...de improviso y sin tomar en consideración que están por medio los intereses de todo un pueblo, formado por mexicanos que están siempre listos para defender y sostener en caso dado, las leyes de que se enorgullece el país; de improviso como antes decimos, se deja pendiente la entrega provisional...venimos a protestar contra cualquier disposición que venga a afectar lo que creemos que nos corresponde conforme a derecho y que por lo tanto debe ser llevado a cabo, a menos que las leyes y disposiciones actuales, para cuyo establecimiento, nuestra clase ha dado el mayor contingente de su sangre, puedan ser conculcadas."[259]

El párrafo anterior nos muestra la incorporación a la tradición selectiva de los dos pueblos de un elemento que no se ve en la relación temprana de las otras cuatro colonias militares con el Estado de la revolución: la participación en la revolución mexicana. El derramamiento de sangre se yergue como un símbolo denso que muchos pueblos han de tratar de hacer prevalecer ante las afirmaciones del Estado, es decir, cuando éste no cumpla con los compromisos sociales contraídos en la Revolución. Al mencionar los pobladores su esperanza de que las leyes no sean un mito, se presenta como un fuerte cuestionamiento al Estado, la expresión lleva un discurso oculto con el cual se habla de dominación y resistencia que

[259] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 68-69. Ahora sus peticiones las hacían apoyándose en la Liga de Campesinos del Distrito de Galeana.

expresa que si no cumplen con la petición, el mismo Estado es un mito y la sangre derramada ha sido en vano.

El juicio de amparo de la Compañía Corralitos en contra del mandamiento del gobernador siguió el supuesto curso que debía llevar; los habitantes de Casas Grandes fueron notificados por el juzgado de distrito de Ciudad Juárez que la audiencia se había suspendido hasta el 7 de diciembre de 1923. Para octubre de ese año Ontiveros envió una carta más, esta vez al presidente de la CNA, donde le solicita que ponga todo lo que esté de su parte para que el caso se resuelva a favor de Casas Grandes según las garantías que les concedía la ley del 6 de Enero de 1915 ya que es "un pueblo que por años ha estado bajo el yugo del caciquismo. Pero que ahora confiado en la buena administración de sus gobernantes y en la leyes tan liberales que han sabido expedir, cree obtener un lugar de donde pueda sacar el sostén de sus desventuradas familias..."[260] Lo que queda oculto atrás del juicio de amparo es la determinación del presidente de la república de parar la entrega de las tierras.

La aparente falta de respuesta del Estado provoca que los pobladores de Casas Grandes no dejen fuera de su tradición selectiva el bando de Croix y expresan que se ha probado con títulos legales que las tierras en disputa con Corralitos son ejidos que pertenecen al pueblo según el "Bando del Caballero de Croix."[261] Lo que no perciben los pobladores de Casas Grandes es que lo anterior no es un proceso por el cual se deban fundamentar y dirimir derechos, sino un proceso de formación del Estado que no quiere afectar intereses o poderes que lo amenacen. El juez falló negando la suspensión del mandamiento del gobernador solicitada por el representante de Corralitos, como consecuencia el mismo representante de la Compañía, Houghton, pidió que se fijaran los límites. Dando los antecedentes

[260] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 129-131.
[261] Ibid.

anteriores, en diciembre de 1923, Ontiveros solicitaba al secretario general de la CNA que se resolviera en definitiva la restitución del pueblo y hacía un nuevo reclamo al Estado: “Es verdaderamente de lamentarse que, cuando los intereses extrangeros (sic) entran en pugna con los de los Nacionales, no se proceda con diligencia y energía necesarias para la aplicación de nuestras leyes en vigor...” Exigían nuevamente su derecho en base a su participación en la Revolución: “Pedimos... se nos haga eco de nuestra ansia justísima de disfrutar los beneficios de las leyes conquistadas en terrible pasada lucha, convencidos de que esa tardanza perjudica altamente los intereses de la Comunidad no solo materialmente, sino también bajo el punto de vista moral...”[262]

La Liga de Comunidades Agrarias del Estado insistía ante el presidente de la república de que se llevará a cabo la restitución de las tierras a Casas Grandes. En agosto de 1924 los representantes de Galeana y Casas Grandes, Roque Gómez y Toribio Ontiveros, ante solicitud del delegado de la CNA en Chihuahua, enviaron al secretario general de la CNA un original del Bando de Croix, que se encontraba en poder del primer pueblo, y pedían que se anexara una copia debidamente autorizada al expediente de cada una de las poblaciones y se les devolviera el original.[263]

El año de 1924 se fue sin que la población de Casas Grandes y las otras poblaciones existentes dentro de los 64 sitios recibieran su posesión. Pero si el Estado se obstinaba en no entregar las tierras, los peticionarios se empecinaban cada vez más en su demanda. El 30 de enero de 1925 se celebró en la ciudad de Chihuahua una Convención de Obreros y Campesinos, la cual fue presidida por el diputado Francisco García Carranza. El funcionario, a nombre de la convención, dirigió carta al presidente de la CNA para solicitarle que girara la orden

[262] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 135.
[263] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 331.

correspondiente que pusiera al pueblo de Casas Grandes en posesión de las tierras que como ejidos les pertenecía indicados en el plano que ya se había levantado y se siguiera con el deslinde. Recordaba el diputado que los trabajos se habían suspendido porque la Compañía Corralitos interpuso un amparo, mismo que había sido negado por la Suprema Corte de Justicia y no obstante no se había reanudado el proceso de restitución. En marzo del mismo año la Confederación Chihuahuense del Trabajo, por medio de su secretario general, transcribía la carta al presidente de la CNA agregando que no se había obtenido ninguna respuesta y pedía que la institución dictara su resolución.[264]

El 14 de febrero de 1925 Ontiveros escribió al jefe de la sección de paleografía para recordarle que desde agosto de 1924 había estado en esa área, es decir, había viajado hasta la ciudad de México, con el fin de presentar el bando de Croix, que era llamado por los pobladores de Galeana y Casas Grandes como "los títulos originales" y solicitaba se les hiciera saber el resultado, además de pedir que se les regresaran.[265] Por fin, siete días después Ontiveros recibió contestación de Tomás Alarcón, jefe de paleografía, donde le comunicaba que el estudio de los títulos había quedado terminado y únicamente faltaba "rendir el informe correspondiente;" Por su parte, Ontiveros le pedía que en su informe agregara la gran necesidad que tenía el pueblo de Casas Grandes de recibir la restitución, ya que dentro del ejido había un gran número de habitantes, "en su mayoría agricultores."

En agosto de 1925 la Confederación Chihuahuense del Trabajo nuevamente escribía a la CNA, esta vez al secretario general, muy cortésmente, como en su comunicado anterior, pedían se dictara la resolución definitiva ya que "desde hace bastante tiempo ha quedado en suspenso en su tramitación el expediente de

[264] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 394, 399. El secretario general de la Confederación Chihuahuense del Trabajo era Francisco González.
[265] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 397.

restitución de ejidos"[266] La presión de los habitantes de Casas Grandes para la resolución encontraba punto de apoyo en los mandamientos que el gobernador había dictado para Janos y Galeana; el primer pueblo obtuvo el fallo del gobernador el 29 de junio de 1922 con los 64 sitios de ganado mayor; el segundo pueblo lo obtuvo el 4 de abril de 1923 aunque con solo 16 sitios de ganado mayor.[267] El de Casas Grandes fue emitido un 27 de marzo de 1923 restituyendo los 64 sitios, pero quedaron suspendidos los trabajos de deslinde como ya vimos. Casi todo 1926 paso sin novedad, en cuanto a la entrega de tierras, pero a finales de ese año Plutarco Elías Calles firma la resolución de Galeana el 11 de noviembre; la de Janos el 30 de diciembre y la de Casas Grandes el 6 de enero del año siguiente. El punto resolutivo segundo dice:

> "Es de restituirse y se restituye al pueblo de Casas Grandes, de la Municipalidad del mismo nombre, ex-Distrito de Galeana, del Estado de Chihuahua, dentro de los 64 sitios de ganado mayor a que tiene derecho de acuerdo con el Bando del caballero de Croix, expedido el 15 de noviembre de 1778, la superficie de terreno que invaden sus ejidos y los cuales son: Compañía de Corralitos; Rancho de Tapiecitas y anexos; Hacienda de San Diego y anexo; Rancho Espindoleño; Fracción A del señor Geo R. Look; Rancho de Arroyo Seco, propiedad de la Compañía de Corralitos; Anexo a la Hacienda de San Luis; superficie que se tomará con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres y se localizará de acuerdo con el plano que forme el Departamento Técnico de la Comisión Nacional Agraria, aprobado por quien corresponda."[268]

A diferencia de Janos y Galeana la resolución presidencial significó nada. El fallo quedó en el papel. El Estado no quería dar a Casas Grandes los 64 sitios, pero como la base de la restitución era el bando de Croix no podía restituirse 64 a las

[266] AHRAN 24 / 397, Toca (tomo 1), f, 6.
[267] AHRAN para Janos 23 / 63.1. f. 724, para Galeana 23 / 83.2. f, 816.
[268] AHRAN, 100.2 / 23.

restantes colonias y señalar menos para Casas Grandes. Así que la afirmación del Estado fue que aunque se señalaban 64 sitios en la resolución no entregar las tierras ocupadas por las colonias mormonas. Aún así, los pobladores de Casas Grandes debían reconocer que el derecho a la tierra que poseían antes de la resolución y a la que sí les habían quitado a los propietarios colindantes provenía del Estado de la revolución. Así, después de reconocer el bando de Croix como título legítimo del pueblo en el punto resolutivo quinto se establecía "Esta resolución debe considerarse como título comunal, para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma resolución comprende."

Más tarde, en el año de 1935, Harold W. Pratt escribió al jefe del Departamento Agrario[269] (en adelante DA), Gabino Vazquez, mencionando las negociaciones que los mormones sostuvieron con Obregón para no ser afectados:

> "Que antes de resolverse, en definitiva, la restitución al pueblo de Casas Grandes, una comisión integrada por varios vecinos de las dos colonias mormonas "Dublan" y "Juárez", vinieron a esta capital para tratar con el señor Presidente de la República y con las autoridades agrarias respectivas, que sus propiedades no fueran afectadas, en vista de las razones alegadas antes, habiendo ofrecido tanto el entonces señor Presidente de la República, como las autoridades agrarias, que dichas colonias no serían afectadas, puesto que la obra que el Gobierno se proponía desarrollar era la de establecer explotaciones agrícolas más o menos semejantes a las establecidas por los mormones en el Estado de Chihuahua."[270]

[269] En enero de 1934 el presidente Abelardo L Rodríguez emitió decreto creando el Departamento Agrario, se dejaba así atrás a la CNA, las características del nuevo órgano iban encaminadas a acelerar el proyecto de la revolución de formación del Estado. El DA dependía directamente del ejecutivo federal. Para remachar lo anterior en abril de 1934 Rodríguez expidió el primer Código Agrario y en el artículo 2ª se asentaba que el presidente de la republica era la "suprema autoridad agraria" y sus resoluciones definitivas en ningún caso podrían ser modificadas. Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria, 1493-1940. CEHAM / SRA, México, 1990. pp. 478-482.
[270] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 367-368.

El punto resolutivo sexto afirmaba que el Comité Particular Administrativo recibiría los terrenos mencionados y organizaría su explotación comunal. Así se afirmaba un nuevo régimen de posesión de la tierra y una forma subordinada de relación con el Estado que en este caso se expresa paradójicamente en las constantes suplicas y exigencias de la población en la entrega total de las tierras y del Estado que asume formas para nunca dar un no rotundo o directo pero que lo encubre en las instituciones, sus funcionarios, sus rutinas que pueden tomar tiempos y ritmos tan largos como se quiera, sus registros, sus legalismos y racionalismos técnicos, todo forma parte de un discurso oculto que expresa un no rotundo.

A partir de lo anterior la intervención del Estado a través del CPA o directamente con los ingenieros de la CNA se vuelve algo cotidiano. En 1929 cinco miembros de la Colonia Enríquez (era una de las poblaciones que recibió ejidos con la resolución de Casas Grandes) Santiago Holguín, Norberto Morales, Agustín Galaz, Manuel Contreras y Ángel González acusaban, ante el presidente de la CNA, al ingeniero Luis Carrasco de haberles expropiado sus parcelas. Asentaban que ninguna jurisdicción tenía, ya que solo le competían al CPE esas atribuciones. Los quejosos asumían una identidad de hijos de la revolución y fundaban totalmente su derecho a la parcela en sus meritos revolucionarios:

> “Que como revolucionarios de ideas y principios que fuimos, la mayor parte de los suscritos, para reivindicar los derechos de todos los Ciudadanos Mexicanos, conculcados indebidamente por un Gobierno pasado, sacrificamos nuestra vida y por consiguiente la de nuestras familias en bien de la clase humilde del pueblo, sacrificio que sufrieron estas ultimas, (sic) mediante las vejaciones hechos que traen consigo, a los cuales los suscritos estaban expuestos, en su condición de miembros del Ejercito Libertador...el Sr. Santiago Holguín fue uno de los primeros revolucionarios, tanto que por sus

> ideas, estuvo reculido (sic) mucho tiempo en el Castillo de San Juan de Ulua (sic) ubicado en territorio de Veracruz."[271]

Haber restituido los 64 sitios a Casas Grandes sin definir la situación de los colonos mormones tarde que temprano traerían serios conflictos. En la década de los años 30 haría crisis el recelo y rivalidad entre los pueblos de mexicanos y mormones. De entre la enorme cantidad de poblados o colonias que se formaron dentro de los 64 sitios tenemos a la de Guadalupe, misma que parece no habían asimilado el estatus del régimen ejidal. Para febrero de 1935 le pedían al presidente del CPA, Fernando Flores, que ya que carecían de tierra y agua suficientes y sabiendo que en el lugar había pequeños propietarios, extranjeros y sin títulos solicitaban se revisara su situación y que debidamente deslindadas las tierras que ocupaban se les diera en calidad de parcelas ejidales. Decían que de una vez por todas querían saber cuáles eran las tierras pertenecientes a pequeños propietarios y cuáles al ejido. Pero también solicitaban que se deslindaran las tierras pertenecientes a la colonia Guadalupe.[272]

En septiembre del mismo año Harold W. Pratt, vecino de la colonia mormona Dublán, escribía al jefe del DA dándole los antecedentes de la formación de las colonias mormonas y le mencionaba de la entrevista que sostuvieron con Obregón para no salir afectados con la restitución de Casas Grandes; asimismo enfatizaba que el punto resolutivo segundo expresa clara y precisa las propiedades afectables excluyendo las de las colonias Juárez y Dublán por lo que pedían autorización para levantar cercos:

> "Que deseando cercar los terrenos pertenecientes a estas colonias, como estuvieron cercados desde la fundación de las mismas hasta poco después de 1912, y tratando de evitar dificultades con los elementos agraristas de Casas

[271] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 296-297.
[272] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 362.

> Grandes, deseamos que ese Departamento Agrario a su digno y merecido cargo, nos resuelva si, como lo previene el resultado segundo de la mencionada resolución presidencial, las propiedades pertenecientes a dichas colonias, no deben ser afectadas, pues, además de lo expuesto en el punto resolutivo ya varias veces citado, creemos que la misma Ley Agraria considera inafectables los terrenos pertenecientes a las colonias con contratos debidamente perfeccionados, como lo es el nuestro, que fue firmado el 7 de septiembre de 1893, y que, de ningún modo, puede considerarse que haya sido hecho con propósitos de eludir alguna ley agraria"[273]

En febrero de 1936 el secretario general del DA le envió un oficio a Pratt en el cual le hacía saber que la oficina jurídica opinaba que no debían considerarse afectadas las colonias Dublán y Juárez en la restitución de ejidos de Casas Grandes. Lo anterior generó la protesta del pueblo. En septiembre del mismo año Enrique Acosta y José Ontiveros, presidente y secretario del comisariado ejidal respectivamente, protestaron por la determinación anterior y pidieron al jefe del DA que aclarara la situación. Le dieron vuelta a la tortilla argumentando que si bien el punto resolutivo segundo menciona de manera clara las fincas afectadas en la restitución sin mencionarse los terrenos de las colonias Juárez y Dublán, "pero que tampoco se decía que los terrenos quedaron excluidos de la afectación y en cambio sí están comprendidos en el plano que se levantó con motivo de la restitución. Por lo anterior, lo pobladores consideraban las tierras ocupadas por los mormones como parte del ejido y acusaban a las autoridades agrarias de haber sido engañados:

[273] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 367-368. Pratt menciona que de acuerdo al artículo 28 de la ley de 15 de diciembre de 1883 se dio autorización a la Compañía Mexicana de Colonización y Agricultura para establecer varias colonias agrícolas, mineras e industriales en los terrenos que las mormones adquirieran en el estado de Chihuahua. Así nacieron las colonias Dublan y Juárez. Para apoyar su petición mencionaba que la mayoría de los mormones, para 1935, eran ciudadanos mexicanos por nacimiento o naturalización y que solo estaban en trámite unas cuantas solicitudes de nacionalización que por distintas razones no habían sido resueltas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

> "...deseamos se nos informe cuál ha sido la causa por lo que se nos ha tenido en la creencia de que los terrenos a que hacemos mención pertenencen a nuestro Ejido y en cambio al Representante de las Colonias Mormonas se le informa en el Oficio... que conforme a la Resolución Presidencial no se tuvo la idea de afectar sus terrenos, atropellando con esto nuestros derechos que nos corresponden conforme al artículo que ya citamos y además ser motivo de angaños (sic) por parte de las Autoridades Agrarias, que no lleva mas objeto que impedirnos reclamar nuestros derechos oportunamente, motivando dificultades innecesarias y tenernos en un estado de ignorar lo que nos pertenece legalmente."[274]

Finalmente pedían que se les restituyeran las tierras mencionadas e insistían en que al habérseles entregado los ejidos fueron objeto de engaño y no se había cumplido con exactitud con lo que les correspondía. Para octubre de 1937, o sea un poco más de un año, los habitantes de Casas Grandes no habían obtenido respuesta. Ahora decidieron hacer a un lado el discurso del engaño y trataron de hacer una defensa con argumentos jurídicos. La asamblea general decidió que sus representantes nuevamente se dirigiran al jefe del DA para hacer defensa de las tierras alegando que el mandamiento del gobernador había estipulado que solo se respetaran las propiedades menores de 50 hectáreas amparadas por algún título o por posesión pacífica de más de diez años. Bajo estas circunstancias aseguraban que muchos mormones tenían extensiones de hasta 400 hectáreas y que eso era bien conocido por la delegación del DA en Chihuahua. Solicitaban que se revisaran todos los terrenos con régimen de propiedad privada, se les respetara solo las 50 hectáreas y se les entregaran los excedentes. En noviembre de 1937, en los mismos términos insistieron ante Lázaro Cárdenas.[275]

[274] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 397-398.
[275] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 399 y 409.

Es interesante presentar los mecanismos por medio de los cuales el Estado imponía sus términos dándole largas al asunto, imponiendo ritmos, tiempos envueltos en un aura de legalismo y necesidad de estudios para aclarar la situación. El 19 de noviembre de ese año el Estado se dignaba a responder. El DA se comprometió a mandar un ingeniero para realizar un estudio de los terrenos que dentro del ejido tenían los mormones. El 28 de enero del siguiente año el Comisariado Ejidal tenía que recordar al jefe del DA, Gabino Vázquez, del ofrecimiento y de su incumplimiento.[276]

En septiembre de 1941 miembros de la colonia Juárez, Cuauhtémoc, San José y Enríquez se quejaban, ante el presidente de la república, Miguel Alemán, de una protesta que interpusieron los mormones David E. Johnson, David Brown y Guy Taylor se quejaban de que los miembros del ejido de Casas Grandes no respetaban la pequeña propiedad. Los quejosos después de asentar que los mormones siempre habían sido objeto de consideraciones por el Estado, asumían una posición conciliatoria asegurando que siempre habían sido respetados en sus propiedades haciendo así un reconocimiento y aceptación del Estado en cuanto a no perturbar a los mormones "ya que así lo ordena terminantemente, la Resolución." Solo pedían que se deslindaran los terrenos de los mormones y se les diera el visto bueno, es decir, que se definiera qué pertenecía a cada quien.[277]

Lejos de suavizarse el problema, se exacerbó cuando los mormones empezaron a levantar cercos. Cuando los pobladores entraban en pláticas con las autoridades agrarias en la ciudad de México se aceptaban sus demandas y prometía ayudarlos, pero en la práctica apoyaban y autorizaban las acciones de los mormones. La gente de Casas Grandes acudió a la influencia del general de división Rodrigo M. Quevedo, quien fuera nativo de este pueblo:

[276] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 415.
[277] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 451-453.

> "...a pesar de las vuenas (sic) noticias que trajimos de México no ha sido pocible (sic) el que nos den oido (sic) el delegado del departamento Agrario en Chihuahua, tal parese (sic) que se complase (sic) en demorarnos los asuntos con el fin de que seamos nosotros altamente perjudicados en nuestros intereses, a pesar del telegrama del Jefe del departamento Agrario este Sr. No ha tenido la gentileza de ordenar al comisariado ejidal de Casas Grandes para que suspenda los cercos por lo cual los señores Mormones ya acabaron de cercar y aora (sic) tienen unos pocos de soldados cuidando el cerco..."[278]

El Estado no solo no oyó las demandas de la gente de Casas Grandes sino que protegió a los mormones otorgándoles las famosas Concesiones de Inafectabilidad Ganadera (en adelante CIG). Esto es, ninguna demanda agraria, de cualquier pueblo, podía afectar a un predio que tuviera una. Las CIG se contextualizan en la necesidad del Estado de controlar los procesos de demanda agraria. En el año de 1943, durante el gobierno de Miguel Alemán, se les dieron estas concesiones a los mormones. El expediente agrario de Casas Grandes contiene una gran cantidad de cartas dirigidas en un lapso de tiempo largo a los diferentes presidentes de la república denunciando y reclamado el hecho. Los poblados de los 64 sitios mencionaban las siguientes CIG: Charles Wehtten: 4 905 hectáreas, Roy J. Adams: 3 627, Claudius Bowman: 4 182, Irving R. Romney: 3 115 y Samuel Robinson: 4 336, un total de 20 111 hectáreas.[279]

Catorce años después de otorgadas las CIG el Comisariado Ejidal de Casas Grandes, a cargo de Fernando Flores Beltrán y José Aguilera, presidente y secretario respectivamente, envió una carta al jefe del DA, Cástulo Villaseñor, mencionando que de los 64 sitios del pueblo, durante la época del porfiriato debido a los despojos, solo les habían quedado 17 sitios y que entre los años de 1940 y 1950 se había realizado otro despojo por poco más de 20 mil hectáreas.

[278] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 466.
[279] AHRAN, 24 / 397, Toca, Carta de 1957 f. 52; carta de 1960, f. 272, carta de 1961, f. 301.

Mencionaron que después de que se concedieron las CIG se presentó ante las autoridades judiciales una demanda reivindicatoria obteniendo dos fallos favorables en primera y segunda instancia, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación les concedió a los propietarios amparo bajo el argumento de que ninguna autoridad judicial de toda la nación era competente para resolver asuntos agrarios, por lo que fueron nulificados los fallos que a favor del ejido se dieron en el estado de Chihuahua. El Comisariado Ejidal reclamaba en los términos del Estado y en base a sus propias resoluciones que ya acumulaban tres decretos: A).- La resolución presidencial firmada por Plutarco Elías Calles; B).- Un acuerdo de expropiación de 1923 en contra de las compañías "Palomas y Ganados S. A." y a Dublán de Aguas y Colonización, misma que compró las tierras a la compañía deslindadora que comprendían 29 mil hectáreas del ejido de Casas Grandes, el acuerdo expropiatorio no se realizó; C).- Acuerdo presidencial de nulidad del año de 1924 que declaraba nulos e inexistentes los contratos y concesiones de tierras que fueron dadas a Luis García Teruel. En dicha nulidad estaban comprendidas las tierras del ejido y que fueron adquiridas por la Compañía Dublán. Pedían pues la entrega de las tierras ejidales que estaban en posesión de la Compañía Dublán.[280]

El Bando de Croix era citado como la fuente originaria de sus derechos. Pero su reclamo y argumentación se basaba en los términos del nuevo Estado. A ellos les pareció que no había algo más sólido y contundente que los mismos decretos del Estado para demostrar sus derechos, pero la gente de los 64 sitios nunca entendió que el Estado no quería entregarles esas tierras y que todo lo demás era

[280] AHRAN, 24/ 397, Toca, ff. 52-54. Según el Comisariado Ejidal entre los años de 1882 y 1887 se había dado una invasión de tierras ejidales cuando la Secretaría de Agricultura y Fomento otorgó una concesión a las compañías deslindadoras de Luis García Teruel, Ignacio Gómez del Campo y Roque Jacinto de una superficie de 1 millón de hectáreas en el Distrito de Galeana donde quedaron que comprendían las 29 mil hectáreas de Casas Grandes.

simplemente una teatralización y los procesos judiciales e investigativos mecanismos de control.

También en el asunto anduvo el campeón del agrarismo don Andrés Molina Enríquez, quien en el año de 1955 asistió a una asamblea general del ejido de Casas Grandes. Ese mismo año Molina, Enríquez hizo saber al Comisariado Ejidal que viajaría a Torreón, Coahuila y que trataría el caso con el general Rodrigo M. Quevedo y con el senador Oscar Flores. El Comisariado le hizo saber que no estaban dispuestos a hacer algún convenio que fueran en contra de los derechos del ejido.[281]

En el año de 1967 los miembros del ejido de Casas Grandes determinaron tomar por ellos mismos y por la fuerza las tierras que solicitaban. Pero, reclamaban 68 392 hectáreas que habían sido afectadas por la resolución presidencial y no les habían entregado. El presidente del Comisariado Ejidal, Ramón Villalpando, se encontraba en la ciudad de México y ante las noticias el jefe del DA, Roberto Palancares, le pidió a Villalpando que detuviera el movimiento bajo el compromiso de "arreglar por la vía legal lo que no había sido posible hasta la fecha... prometiéndonos además que si un asunto le interesaba era presisamente (sic) del de nosotros, el del PUEBLO DE CASAS GRANDES." Palancares hizo trasladar en avión a Villalpando, el cual con dificultades logró hacer desistir a sus compañeros de posesionarse de las tierras. Esperanzados en la promesa de Palancares pasó el tiempo y no se veían indicios de que se pretendiera siquiera abordar el asunto. En 1969 decidieron enviar nuevamente un representante a la ciudad de México para entrevistar a Palancares. El 22 de junio el enviado se apersonó en la sede del DA, solicitó audiencia y no fue recibido. Bajo las circunstancias anteriores, el 1 de agosto de 1969, el Comisariado Ejidal escribía al presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz, dando un ultimátum:

[281] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 117.

"Dándonos cuenta, de que el mencionado Ing. AGUIRRE PALANCARES Jefe del Departamento Agrario, no ha llevado a la realidad la promesa que nos hizo de arreglar este negocio a favor de nuestros intereses,...sin que nos atienda, pues desde la fecha en que iba a estallar el movimiento de posesión, realizado por los mosmos (sic) compañeros ya han pasado dos años 3 meses, sin que se vean trazas de arreglo definitivo a la entrega de la tierra que nos pertenece.

Como el asunto que nos atañe y perjudica ya ha llegado a su CLIMAX de tolerancia, pues como antes decimos ya han pasado 43 CUARENTA Y TRES largos años; toda una vida sin que los Funcionarios Agrarios encargados de ponernos en posesión hagan realidad nuestro anhelo esperado durante mucho tiempo; nos vemos en la necesidad de acudir ante usted Sr. Presidente de la República...dando órdenes a quien corresponda para que se nos restituya de la superficie de sesenta y ocho mil trescientas noventa y dos hextareas (sic)..."

"En vista de lo anterior, enérgicamente protestamos por que no se nos recibió en audiencia para tratar nuestro asunto, en virtud de esa ROTUNDA NEGATIVA de que fuimos objeto a partir de ésta fecha, estamos dando un PLAZO DE NOVENTA DÍAS para que la autoridad competente nos ponga en posesión AL PUEBLO DE CASAS GRANDES, CHIH., de la superficie de terreno Ejidal que nos pertenece, en caso de que no sea así el pueblo de Casas Grandes, en su mayoría compuesto por ejidatarios afectados en sus intereses, nos veremos presisados (sic) a obrar a como de lugar para entrar en posesión de nuestras tierras"[282]

Además, denunciaban que el secretario general del DA, ingeniero Alcerreca, estaba extendiendo Concesiones de Inafectabilidad Ganadera. En relación a los

[282] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 114-115. De las 68 392 hectáreas mencionaban los predios que las tenían dentro de sus superficies y la extensión: de la Compañía Corralitos, una parte de la Hacienda de Corralitos y del Rancho de Arroyo Seco 20 427 y 6 623 hectáreas respectivamente; de la Caja de Prestamos de las Haciendas de San Diego, Tapiecitas y San Luis 11 363, 17 470 y 5 272 hectáreas respectivamente; de la fracción A de Look 6 652 y del Rancho de Tapiecitas de la sucesión Muller 585 hectáreas.

mormones expresaban que estaban dispuestos a recibirlos “en el seno de nuestra organización, y como Ejidatarios con derechos adquiridos.”

Por lo visto nada pasó, en 1972 el Comité Pro Derechos Agrarios de la Laguna[283] escribía al presidente de la república en turno para insistir en la entrega de las tierras. El candidato en su campaña política rumbo a la presidencia visitó el pueblo de Casas Grandes donde los pobladores le explicaron ampliamente el problema y le entregaron documentos, el bando de Croix y planos. El pueblo recibió la promesa de Luis Echeverría Álvarez de que buscaría la solución necesaria. El mismo Echeverría les dirigió una carta el 16 de mayo de 1970 ratificándoles su promesa. Así se lo expresaron los habitantes de Casas Grandes al presidente. El ultimátum que lanzó el Comisariado Ejidal está muy pegado a lo que fue el inicio de la campaña presidencial de Echeverría, quien llegó a la presidencia en 1970. Es muy probable que la visita del presidente a Casas Grandes se haya dado para apaciguar los ánimos ante la amenaza de tomar las tierras con la estrategia que el estado siempre utilizó con ellos: la promesa, nunca cumplida, de arreglar el asunto. Estaba de por medio la palabra del seguro futuro presidente y expresada personalmente, ¿cómo desconfiar? ¿cómo no creerle que resolvería al asunto? Nuevamente la gente de Casas Grandes confió en el Estado y nuevamente fue engañado prolongándose a más de los 43 años mencionados en la carta de 1969 la extensión del asunto.

Expresaron en su carta de 1972, los habitantes de Casas Grandes, que el 20 de febrero de 1971 ocurrieron ante el jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), Augusto Gómez Villanueva y los citó en la ciudad de México para el 15 de marzo del mismo año. Los habitantes de Casas Grandes, a pesar de la enorme distancia, asistieron a la entrevista y expresan que contaron con la

[283] Agrupación que se formó en Casas Grandes y quedó legalmente constituida a principios de noviembre de 1969 con el objetivo de lograr, según lo expresaban ellos mismos, la restitución de más de 40 mil hectáreas de terrenos ejidales.

“magnífica intervención” del secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Alfredo V. Bonfill. El jefe del DAAC ordenó que se conformara una “Comisión Investigadora del problema” que quedó conformada por: Norberto Martínez Álvarez por el DAAC, José Aguilera Aguilera por la CNC, Júpiter Barrera por el gobierno del estado de Chihuahua, Librado Luján por la Liga de Comunidades Agrarias, Ramón Villalpando por el Ejido de Casas Grandes, Fausto Flores y Cuauhtémoc Parada por el Comité Pro Tierras de la Laguna.

El 13 de agosto de 1971 la comisión mencionada entregó la investigación a la consultoría número 5, a cargo del ingeniero Emilio López Zamora, los resultados sobre la situación de la tenencia de la tierra en el Ejido de Casas Grandes. El 11 de diciembre del mismo año fue discutida en “Junta de Consejo” el asunto y se le comunicó a la gente del ejido que el caso había sido resuelto a favor de ellos. Pero eso no significaba que se abría un camino para solucionar el problema porque también se expresó que quedaba pendiente de presentarse un dictamen relacionado con los CIG que ostentaban los mormones Charles Whetten, Roy J. Adams, Claudius Bowman, Samuel J. Robinson y Gordon e Irving Romney para resolver definitivamente el caso. Pero, también se le dijo a la gente del ejido que estando las vacaciones de fin de año tendría que dejarse el asunto pendiente hasta iniciar labores del próximo año de 1972. Por eso con impaciencia el 13 de enero de 1972 escribieron a Echeverría:

> “El tiempo ha transcurrido indefinidamente y todavía no podemos lograr nuestro objetivo y como la gente a quien representamos está perdiendo poco a poco la paciencia y la fé (sic); entre más tiempo transcurre, más difícil es para nosotros poder controlarlos y hacerles ver la necesidad de hacer las cosas por la vía pacifica y no con violencia como algunos pretenden, motivo por el cual estamos solicitando urgentemente su intervención ante el Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización para que acelere un poco nuestro problema y ordenen a los encargados del caso, le pongan un

> poco más de atención, para que con la mayor brevedad posible sea resuelto definitivamente."[284]

Pero no hubo ninguna solución o siquiera intento alguno de conciliación entre el ejido y los mormones. El 30 de julio de 1972, el Comité Pro Tierras de la Laguna presentó una nueva querella ante el agente del Ministerio Publicó Federal en la ciudad de Chihuahua en contra del "Cuerpo Consultivo Agrario" dependiente del DAAC denunciando hechos delictuosos, pero no especificaban cuáles; parece que la gente de Casas Grandes no aprendía del pasado, todos sus esfuerzos serían inútiles. El Comité envió en 1973 una carta a Echeverría Álvarez pidiéndole que se solucionará el problema de la restitución de una vez por todas. Reclamaban la restitución de 40 mil hectáreas alegando que eran parte de las 112 359 con las que Croix creó Casas Grandes. Denunciaron que en 1943 se había llevado a cabo una invasión amparada con las CIG.[285]

Todo lo anterior nos muestra que la burocracia y los ritmos lentos que imponen los órganos del gobierno no solo son la ineptitud y el nepotismo, sino afirmaciones del Estado o formas de dominación.

¿Cómo responde el pueblo de Casas Grandes o los pueblos de los 64 sitios? ¿Cuál es su forma de resistir a estas formas concretas y manifiestas de dominación a través de rutinas y formas culturales creadas como los registros, los procesos técnicos, la burocracia, las instituciones y su infinidad de divisiones y funcionarios? Ante el silencio del Estado, los demandantes empiezan a cuestionar directamente su validez y legitimidad y ante su cinismo despliegan un humor

[284] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 529-531.
[285] AHRAN, 24 / 397, Local, f. 553.

insolente. En relación al juicio reivindicatorio expresaba en 1960 María de Jesús Chávez de Quezada, esposa de un miembro del ejido de Casas Grandes:

> "...el Lic. Jesús Barba Cornejo Juez de Primera Instancia del Distrito Galeana... sentenció a los mormones a devolver mas de veinte mil hectáreas de terreno ejidal y no se que pasó, que el fallo, justamente falló, y los señores Mormones siguen con sus terrenos...y nadie a podido resolver éste problema que ya por esta región le llaman con cierta sorna el pleito de "la vaca lechera", por que se dice que no se resuelve nada por que inmediatamente que comienzan los litigios los mormones se presentan en la Confederación Campesina y en el departamento Agrario ofrecen grandes cantidades de dinero y el pleito queda en silencio... y no puede uno dirigirse a los Departamentos por que para contestar un oficio duran hasta 8 y mas meses por lo que estamos completamente decepcionados y ahora solo en Ud. confiamos..."[286]

En los años setenta pasó a representar al Comité Pro Tierras de la Laguna Velia Muñoz Salcido, quien intentó la vía femenina de persuasión. El 17 de abril de 1975 le entregaron a la esposa de Echeverría Álvarez un expediente del asunto del ejido para que el presidente lo revisara. En agosto de 1975 Velia Muñoz le envió una carta a Echeverría pidiéndole que revisara el expediente que le había entregado a su esposa ya que a la fecha no había tenido respuesta alguna, además de que no se les había devuelto el expediente. Ponía en claro que tenía más de dos años pidiendo audiencia con él sin obtener respuesta. Pero por fin parece que se entendía que la figura del presidente, que en la época del PRI se caracteriza por el presidencialismo, tenía el poder para resolver el asunto: "hemos recibido tantos engaños de cuantos delegados han mandado, que para que este problema quede resuelto en su totalidad, debe ser Ud. el que nos entregue el tan

[286] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 272.

deseado pedazo de tierra." Acusaba a las autoridades agrarias de proteger a los terratenientes, por eso le decía que era urgente que hiciera respetar las leyes.[287]

El 15 de julio de 1976 nuevamente envió otra carta al presidente Echeverría que es un profundo reclamo, pero sobre todo una burla a su persona y al Estado que representa:

> "Con todo respeto y creemos que por última vez, nos dirigimos a Ud. no para pedir justicia, porque mucho tiempo se la pedimos y nos fue negada. Como Ud. vera Sr. Presidente de derecho nos favorece todo, pero de hecho nada... Sr. Presidente, Ud. a dicho no una sola vez sino varias, qué tengamos valor civil para denunciar casos como el nuestro, pero a quien se lo decimos? más de dos años, por oficio y por telegrama, estuvimos pidiendo audiencia y nunca nos fue concedida, que se necesita?"

Expresaba Velia que acompañada de doña Jesús A. Duarte: "viendo papeles y más papeles en los cuales no podemos sembrar, nos fuimos a la ciudad de México sin conocer ni tener nociones de nada, puede estar Ud. seguro señor presidente que pasamos las de Caín, aun así insistimos, pero para nuestra desgracia todas las puertas estaban cerradas." Velia y su acompañante permanecieron por 50 días en la ciudad de México. Pero regresó en el mes de abril: "fungiendo como consejero por el Edo. de Chihuahua el Ing Bueno, lástima de apellido, nos trató con bastante frialdad," Velia le pidió una constancia para comprobar su estancia y trabajos por allá a lo que el consejero le respondió: "Vallance (sic) Uds. a la Villa, se retratan, les enseñan el retrato a sus compañeros y con eso les prueban que si vinieron a México."

[287] AHRAN, 24 / 397, Toca, f. 583.

Velia fue a Los Pinos para tratar de entrevistar al presidente o a su esposa, lo cual le fue imposible. Le dieron una tarjeta para que fuera a Palacio Nacional:

> "pero al pasarnos con un Lic....Nos pidió la resolución presidencial... le mostramos la Resolución del Ejido por el entonces Presidente Don Plutarco Elías Calles y ni ese papel ni otros le fueron suficientes. Si le platico Sr. Presidente cuanta insensatez nos dijeron empleados menores no hay campo suficiente y Ud. no lo creería."
> "Pero si le digo una cosa Sr. Don Luis mientras las puertas de madera se abran y sigan cerradas las puertas de la conciencia, los campesinos seremos únicamente el escalón para que empleados corrompidos se posesionen de un puesto más alto."
>
> "Sr. Presidente, los norte Americanos que tienen invadidas tantas tierras en el Ejido Casas Grandes Por desgracia para los campesinos están apoyados y protegidos por autoridades civiles y agrarias razón por la cual son intocables y ellos sin ningún recato dicen que las autoridades ellos las cargan en la chequera."
>
> "Los campesinos no estamos preparados para esa lucha, porque para nuestra desgracia en nuestro haber hay $0, 000, 000. 00" (y con gran sarcasmo expresaba):
>
> "Nuestros Caudillos pelearon a balazos, hoy se pelea a villetazos, cree Ud. que la revolución término o hay que empezarla? Si resucitara el Sr. Zapata que decepcionado se iría de vuelta y de seguro que se moría de un infarto."[288]

El 22 de enero de 1979, Velia Muñoz envió una carta al presidente José López Portillo, sucesor de Echeverría Álvarez, en los mismos términos de denuncia, queja y sarcasmo que la anterior. Velia narró con humor insolente a López Portillo

[288] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 49-55.

la odisea que pasó en la ciudad de México. En diciembre de 1978 una comisión de Casas Grandes fue a ver al consejero por Chihuahua Roberto Olivares Arellano, al recibir a la delegación encabezada por Velia se mostró duro. Quedaron en que se buscaría la forma de resolver el asunto. El consejero quedó en enviarles un telegrama para que se presentaran la primera semana de enero, pero, para sorpresa del consejero, al ver que no había noticias se apersonaron sin previo aviso la tercera semana de enero. Al estar en el despacho del consejero, quien se portó grosero y déspota, les dijo que no tenía en su poder el expediente de Casas Grandes y quería que Velia y compañía le dieran razón del mismo. Ella le dijo que de la ciudad de México los mandaban con él, entonces allí en la Consultoría debía estar el expediente. El consejero pidió a sus subordinados el expediente y le llevaron el de inafectabilidad, de lo cual le decía Velia a López Portillo: "...ya desde que nos vio le temblaban las manos imagínese como se puso al no llevarle lo que pidió. Si nosotros estábamos descontrolados la secretaría parecía robot."

Velia le recordó la plática que habían tenido y el consejero le respondió que él no se había comprometido a nada porque "este problema de Casas Grandes a parte de viejo era muy difícil de arreglarse." La desesperanza cubrió el corazón de Velia: "Al despedirnos quedó de mandarnos otro telegrama para que nos presentáramos, dudo que lo haga pero en fin hay que esperar...le pedí al consejero una constancia para la conformidad de nuestros compañeros y con este solo hecho ya no pudo reprimirse más y gritando con palabras no apta (sic) para oficios dijo así: Yo no day (sic) constancia a nadie si sus compañeros no tienen confianza en Uds. que vengan ellos ahí conmigo. Lic. (López Portillo) le dije: con bastante trabajo nos dan para venir para venir los Directivos. Ese es asunto de ustedes, a ver como le hacen..."

Le mencionó Velia a López Portillo que cuando quedó legalmente constituido el Comité Particular Ejecutivo Pro Tierras de la Laguna, el secretario de la Reforma

Agraria, Augusto Gómez Villanueva, a petición del ejido y del Comité, mandó a Norberto Martínez Álvarez a que realizara una minuciosa investigación al ejido de Casas Grandes. Cuando Velia estuvo con el Consejero ordenó que se mandara pedir una copia de la investigación. Velia se preguntaba por qué no existía copia de la investigación en la consultoría si Martínez Álvarez la había entregado al antiguo y fallecido consultor López Zamora. Hasta la muerte estaba en contra como lo expresaba Velia:

> C. Presidente, Volviendo al punto de consultoría quiero aclarar esto: Tome nota desde que el que el Ing López Zamora fue consejero, para que vea cuantos años tenemos en Consultoría, después de mucho tiempo por falta de recursos económicos fuimos a la Cd. de México y fungía como consejero por el Estado de Chihuahua el C. Lic. Pérez Ocampo y nos dijo con toda su buena voluntad que de plano le tenía miedo a este enojoso y viejo asunto, al volver ya estaba el Ing. Bueno, Lástima de nombre, nos contestó casi en su totalidad las mismas palabras del C. Lic. Olivares por tercera vez volvimos y no había consejero, pero los que nos han tocado como no están enterados pues tienen que estudiar, actualizar y dictaminar y en este peso está nuestro problema desde 1972. Y no hay consejero alguno que de (sic) por terminado nuestro problema y el único que dijo así: Primero muerto que yo no arregle este asunto, fue el siempre digno López Zamora pero por desgracia se cumplió lo que dijo falleció y todo ha sido un laberinto.[289]

Namiquipa, Cruces y Galeana

Aunque el Estado, a final de cuentas, impone el ejido en Namiquipa y Cruces, formas derivadas de las relaciones de asociación se manifiestan en su interactuar. Por sus servicios al pueblo de Cruces Reyes Ortiz había recibido en premio, por parte de los cruceños, uno de los mejores predios, Rancho Colorado, ubicado

[289] AHRAN, 24 / 397, Toca, ff. 115-117.

dentro del área ejidal restituida. El presidente del Comité Particular Administrativo, Israel Loya, se propuso recuperar a toda costa el predio por su propia mano. Pronto los protectores de Reyes Ortiz entraron en su defensa encabezados por el delegado en Chihuahua de la CNA, pero Israel Loya rechazó, rebatió y refutó las presiones y amenazas del funcionario. Israel Loya se asumía como la máxima autoridad agraria en Cruces. En marzo de 1927 envió un escrito al presidente de la CNA manifestándole que en el caso de Reyes Ortiz se pretendía burlar la autoridad agraria con la que había sido investido por el pueblo. Agregaba que como miembro del pueblo no podría traicionarlos ya que le habían confiado sus humildes intereses.[290] Es decir, la autoridad que tenía la había recibido del propio pueblo y no del Estado y sus instituciones agrarias.

En abril del mismo año, Ignacio Solís envió escrito justificativo aduciendo que al iniciarse los trámites ejidales el presidente municipal de Cruces, de acuerdo con su vecindario, habían pagado honorarios a Reyes Ortiz con dicho predio por los servicios que había prestado al pueblo defendiéndolo, ante las autoridades agrarias, de los hacendados que pretendieron despojarlo de sus tierras. Ignacio Solís decía haber recibido la recomendación del gobernador del estado y del presidente de la CLA para atender las quejas de Ortiz por considerarlo un "buen elemento agrarista." También hacía mención que Gustavo L. Talamantes le informó que Ortiz había luchado por los ejidos de Namiquipa y Cruces antes de que se promulgaren las leyes agrarias y que gracias a sus gestiones se había conseguido el juicio arbitral que el gobernador Enríquez había fallado en contra de los hacendados.[291]

El pleito comenzó a partir de que la CNA fijó una especie de impuesto del 15 % sobre la producción ejidal. Cruces, como otros pueblos, no habían cubierto la

[290] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 126.
[291] AHRAN, 23 / 434, Toca, ff. 129-132.

exigencia y eran presionados. En octubre de 1926 Israel Loya señalaba a la delegación de la CNA que en los ejidos del pueblo se encontraba un predio de regular extensión de riego que era explotado desde hacía tres años por Reyes Ortiz sin posesión legal, además de ser de Namiquipa. Loya hacía ver que la propiedad podía ayudar a solventar con prontitud el adeudo que se reclamaba.[292] La delegación respondió que si Reyes Ortiz había adquirido el predio por pago de honorarios debería exigírsele que presentara su cuenta comprobada para que entre los ejidatarios que se repartiese el predio le pagaran en forma proporcional tanto los honorarios como el valor invertido al abrirlo al cultivo.[293]

Ante tal situación Israel Loya convocó a los miembros del ejido a asamblea a finales del mes de enero de 1927. A principios del siguiente mes Loya le informaba al delegado de lo resuelto. Estuvo presente Reyes Ortiz, el cual alegó que se le debía dinero por compromisos contraídos con él. La asamblea resolvió que no se le debía cantidad alguna y que por el contrario Reyes Ortiz era deudor del ejido y no acreedor. La razón era que las gestiones realizadas por él, tocante a los ejidos del pueblo, fueron innecesarias ya que el asunto se resolvió por medio de las leyes agrarias promulgadas; en consecuencia todas las gestiones de Reyes Ortiz quedaron nulificadas. Mencionaba Israel Loya que en el curso de las gestiones la ley del 6 de enero de 1915 ya había sido promulgada, pero el pueblo lo ignoraba y dolosamente le fue ocultado. Reyes Ortiz mostró algunos documentos de las gestiones que había hecho, pero de la cuenta que reclamaba nada presentó. Loya decía al delegado, Ignacio Solís, que por favoritismo de unas cuantas personas que antes representaron los ejidos de Cruces le dieron el terreno con la inconformidad de la mayoría del pueblo. Por lo tanto, sobre la base de lo resuelto por la asamblea, Loya concluyó que tomando en cuenta los beneficios que el predio le había reportado a Reyes Ortiz en los 5 años de posesión “en

[292] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 134.
[293] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 135.

acatamiento del Art. 11 de la Ley Reglamentaria Sobre Repartición de Tierras Ejidales y Constitución de Tierras de Tierras Ejidales; a continuación giro orden al... Sr. Ortiz, para que ponga en posesión de esta Autoridad Agraria, local, de la propiedad, también, tantas veces aludida, que indebidamente posee y que pertenece a los ejidos de este mismo Pueblo, así como de que haga entrega del 20 % de los productos de la propiedad, pertenecientes al año retropróximo."[294]

Siempre que Loya se refería a sí mismo como autoridad agraria, lo ponía con mayúsculas. Citaba leyes y las aplicaba él mismo como en el caso anterior. Pero aquí está lo grave del problema. Las leyes las formula el Estado para aplicarlas él mismo. Solís le respondió a Loya que la resolución presidencial no mencionaba "en lo absoluto" la restitución de tierras ocupadas por Reyes Ortiz. En consecuencia le pedía que le aclarara la causa por la cual se pretendía suspenderlo de la posesión del predio: a continuación Solís le expresaba la determinación de que la instancia agraria era la que debía sancionar el asunto ya que por tratarse de un caso un poco delicado, debía suspender toda acción en contra de Reyes Ortiz hasta que pasara un empleado del departamento de aprovechamiento de ejidos al pueblo. En asamblea general y ante la presencia del comisionado debía ventilarse el problema, entre tanto podían exigirle una módica renta.[295]

Israel Loya le respondió que le causaba extrañamiento la nota en la cual se denotaba el ignorar la verdad del asunto cuando se había mandado un informe amplísimo. Aclaraba que en la resolución presidencial no se podía hacer alusión al predio de que estaba posesionado Reyes Ortiz, ya que era "bien sabido" esa labor de riego estaba enclavada en las tierras que le fueron expropiadas a los sucesores de los Muller. Agregó que si Reyes Ortiz había estado explotando el predio no

[294] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 136.
[295] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 137.

había sido con un derecho adquirido legalmente. Consideraba injusto que un propietario en Namiquipa llegara a explotar un terreno del ejido cuando sus miembros tenían "derechos sagrados" sobre ella. Le informaba que a los ejidatarios se les había dado el predio para cultivarlo, mientras se lotificaba y se daba a quienes lo merecieran, pagando un 30 %.[296]

Reyes Ortiz se dirigió a Solís diciéndole que el presidente del CPA no había dado cumplimiento a las órdenes que se le habían girado. A mediandos de marzo de 1927 el delegado le envió una amenazadora nota a Loya: "En consecuencia, manifiesto a Ud. que, bajo su más estricta responsabilidad debe atender y cumplimentar las instrucciones que se le giraron.."[297] Lejos de intimidarse, Loya respondió: "manifiesto a Ud. que con mis procedimientos que están dentro de la Ley yo tengo ningunos temores de incurrir en responsabilidades y la propiedad de referencia continúa en posesión de ejidatarios de este lugar porque previamente lo dispuso esta Oficina a mi cargo, basada en la Ley y la Justicia y no permitiré que un extraño y sin derechos penetre a explotarla."[298]

A finales del mes de marzo Israel Loya le envió una carta al presidente de la CNA quejándose de que Reyes Ortiz había influenciado a algunos altos empleados en el estado de Chihuahua. Acusaba en concreto al delegado de la CNA, ya lejos de hacerle justicia a la comunidad agraria de Cruces que favorecía a Reyes Ortiz.[299] Por su parte Ignacio Solís, a principios de abril, hacía defensa de Reyes Ortiz agregando que el gobernador y el presidente de la CLA le habían recomendado apoyarlo. Se quejaba del poco respeto mostrado a su investidura por el CPA: "ha estado procediendo sin tomar en consideración las indicaciones de esta Delegación y hasta rebelándose en contra de ellas; por lo que muy atentamente

[296] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 138.
[297] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 139.
[298] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 140.
[299] AHRAN, 23 / 434, Toca, f. 126.

suplico a Ud. se sirva, si a bien lo tiene, girarle un oficio apoyando las determinaciones de esta Oficina, para que estos Sres. se conduzcan ante ella con el respeto y comedimiento necesario."[300] Claro, ese respeto era imponer el que les quedara claro que si habían obtenido la restitución de tierra debían en adelante acatar las disposiciones de las instituciones agrarias y mostrar obediencia. Por otra parte, ellos no debían de llevar y ejecutar esos procesos de decisión. Las instancias agrarias eran los árbitros supremos y los que decidían en los procesos locales y cotidianos de la administración de la tierra; sus determinaciones eran sacralizadas, por lo tanto incuestionables. Es decir, ahora los ejidatarios son simplemente concesionarios de la tierra y como tal el Estado puede intervenir socavando procesos locales de rebeldía y reforzando aquellos que afirman su presencia y dominio. Esa llamada rebeldía proviene de formas culturales que se establecieron a partir de un largo proceso histórico que fraguaron en relaciones de asociación y que ahora el Estado se empeña en cambiar por una relación tutelar.

Caso similar pasó en Galeana. En las tierras restituidas al pueblo quedó enclavada una propiedad de aproximadamente 800 hectáreas perteneciente a Concepción Castillo viuda de Nevárez. Todo estaba en sana quietud hasta que en 1930 el CPA del ejido pretendió posesionarse del excedente de 50 hectáreas, que eran las que se debían respetar como pequeñas propiedades al dotarse o restituirse de tierras a los pueblos. Las gestiones de Concepción Castillo lograron que no se procediera a desposeerla. Sin embargo, para el año siguiente el CPA logró que la CNA ordenara que solo se respetaran a la propietaria 50 hectáreas, lo que ocasionó una serie de reclamos por parte de la afectada, a la cual se le marcaron 50 hectáreas. El resto se sorteó entre los miembros del ejido más necesitados. En su defensa Concepción Castillo argumentó que la resolución presidencial la consideraba pequeña propiedad incluida en las 10 240 hectáreas que el pueblo poseía antes de la restitución según el considerando séptimo.

[300] AHRAN, 23 / 434, Local, f. 133.

Además, porque no quedaba mencionada entre aquellas que fueron afectadas. En realidad en la resolución presidencial solo se mencionaba que a las 102 118 hectáreas restituidas se sumaban las 10 240 ya poseídas en ejidos y pequeñas propiedades por el pueblo.[301]

Acto seguido Concepción Castillo se amparó y el 15 de julio de 1931 comunicaba a la CNA que tan pronto como el juzgado segundo de distrito en el estado le devolviera la documentación relativa a su propiedad la enviaría a esa institución. Según la quejosa los documentos primordiales fueron expedidos en la época virreinal y a principios del siglo XIX las tierras salieron del dominio del pueblo hasta que pasaron al poder de sus hijos.[302] Para finales de 1933 el presiente del CPA, Nestor Esparza, consultó a la delegación de la CNA si podían tomar posesión de los terrenos de la viuda de Nevárez. En diciembre de ese mismo año Esparza transcribía el comunicado de las autoridades agrarias a los líderes de los que pugnaba por tal acción, Reyes Piñón y Manuel Piñón, la respuesta negativa bajo el argumento de que la resolución presidencial no había afectado a Concepción Castillo.[303]

A principios de 1934 los galeaneses, identificándose como ejidatarios, mandaron a la CNA la resolución dictada por la instancia judicial, que lleva el pomposo nombre de *Suprema Corte de Justicia de la Nación*, en la que se decía que el juicio fue sobreseído y que únicamente se le respetaran a Concepción Castillo 50 hectáreas. También anexaron copia del oficio fechado en agosto de 1924 que se le envió a la afectada, con el cual se le daba un término de 30 días para que presentara sus alegatos con motivo de los trámites de restitución. La finalidad de

[301] AHRAN, 24 / 399, Toca, ff. 304-305 y 23 / 83.2.
[302] AHRAN, 23 / 399, Toca, f. 318.
[303] AHRAN, 23 / 399, Toca, f. 369.

este oficio era evidenciar que si la tierra en disputa no figuraba en la resolución presidencial era porque la afectada no cumplió con el requerimiento.[304]

En base a lo anterior los miembros del ejido procedieron a ocupar parte del predio. A mediados de 1934 la delegación del DA en Chihuahua envió al presidente del CPA de Galeana la orden para que desocuparan las tierras de Concepción Castillo y para que se le pagaran las rentas acostumbradas por el tiempo en que las habían trabajado. El presidente del CPA lo transcribió a los miembros del ejido, los cuales respondieron: "Con pena le manifestamos que ningunas rentas tenemos que pagarle a la mencionada señora Nevárez, por que ningunas tierras de su propiedad poseemos, si bien es cierto que las tierras que estamos cultivando y que dicha señora a ellas se refiere, antes se reconocian (sic) de su propiedad, pero con motivo de la restitución hecha a este pueblo, las referidas tierras fueron de las comprendidas en la restitución hecha al poblado de Galeana..."[305]

El término de la guerra apache brindó nuevas perspectivas en el uso de la tierra, el inicio de un mercado de las mismas, movimientos de población y revaloración de la propiedad territorial que llevó a un cambio en las relaciones sociales en su conjunto. Lo anterior no privó en la interacción entre los pueblos y los hacendados. Durante la guerra apache los colonos militares fueron considerados como héroes. En los corridos se narraban sus hazañas, marchaban triunfantes en las calles de la capital y el propio Estado encomiaba sus hechos. Katz refiere la existencia de un pacto de ayuda previo al fin de la guerra apache entre las dos categorías sociales mencionadas. Al ya no ser necesaria la asistencia de los vecinos de los pueblos para combatir a los apaches, los hacendados iniciaron un proceso de apropiación de la tierra.[306] El fin de la guerra también significó movimientos de población, así entre 1880 y 1890 las juntas populares determinaron la aceptación

[304] AHRAN, 23 / 399, Toca, f. 374.
[305] AHRAN, 23 / 399, Toca, f. 378.
[306] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, p. 31.

de nuevos miembros en Namiquipa. A los recién llegados se les dio la facultad de asumir los mismos derechos sobre la tierra que a los originarios del pueblo. Lo anterior creó la distinción entre los foráneos y los originarios. Los recién llegados eran aceptados con la condición de que colaboraran con los proyectos colectivos como la lucha contra las reminiscencias de los apaches, la construcción y el mantenimiento de canales de irrigación y el trabajo personal de la tierra.[307]

De hecho se originó un mercado de tierras que provocó un incipiente acaparamiento y posicionamiento de los foráneos en el conjunto social. Pronto se dio el rechazo de los originarios a la dinámica social y económica que se empezaba a generar y establecieron y proclamaron que el derecho a la tierra era de los originarios. La repercusión más notable que se estableció localmente fue la inalienabilidad de la tierra.[308]

El término de la guerra apache trae también consigo el impulso del aparato de Estado de modificar las relaciones establecidas con los pueblos de asociación a tutelares. Ya que el Estado ha dejado a los pueblos el proceso de apropiación real del territorio, lo cual le ha devenido en el ahorro del enorme financiamiento de la guerra, bajo el premio de la tierra, ha creado formas de autonomía social y política en estas agrupaciones humanas. Ahora el Estado ve en esas formas un peligro porque fácilmente pueden desafiar sus afirmaciones. Así, poco a poco va socavando esas autonomías para crear sumisión. En 1904 el ganado de Pedro Loya y Julio Weckman, personas que emigraron a Cruces y se convirtieron en terratenientes, destruyó campos agrícolas. Los cruceños elevaron queja ante las autoridades estatales. El Estado determinó que la queja no tenía fundamento.[309]

[307] Nugent, 1993, op. cit., pp. 65-66.
[308] Ibid, p. 66.
[309] Nugent, 1993, op. cit., p. 68.

En Namiquipa para 1904 los foráneos se apropiaron de los cargos municipales con el apoyo de los altos niveles de gobierno. Poco después del término de la guerra apache los emigrantes llegaron a Namiquipa y fueron creciendo. En 1889 de las 195 familias del pueblo 32 eran inmigrantes recientes, pero para 1900 su número aumentó hasta 111. Las divisiones y la presión por la tierra se hicieron patentes entre originarios y foráneos, entonces el presidente municipal preguntaba al gobierno federal si los recién llegados también debían recibir tierras.[310] Así se hicieron del poder necesario para minar los derechos a la tierra de los originarios.[311] En el año de 1905 el gobernador del estado Enrique C. Creel decretó la Ley de Terrenos Municipales que dio lugar a la venta de las tierras de los pueblos. Los efectos de la disposición jurídica se sintieron en Namiquipa donde de 1905 a 1909 se registraron un total de 181 operaciones de ventas de terrenos que representaron más de 5 mil hectáreas. Para responder a la Ley de Creel los namiquipenses formaron la Sociedad Civil Particular (en adelante SCP) para, en mayo de 1906, defender y administrar la tierra del pueblo. El objetivo de la SCP era poner freno a la venta de las tierras del pueblo bajo la ley de Creel.[312]

En el documento que protocolizaron para formar la SCP asentaron que los comparecientes "en unión de otras personas y en las partes que proporcionalmente les corresponde, son dueños en propiedad, posesión, pleno dominio y en común en la actualidad, por diversos títulos, ya como descendientes de los primitivos adquirientes o adjudicatarios, ya por compra o en virtud de otros contratos... de los mencionados sesenta y cuatro sitios de terreno que han llamado de común repartimiento"[313] Se nombró un presidente y un vicepresidente que fueron Cornelio Espinoza y José Rascón y Tena; también tres vocales que fueron Adolfo Delgado, Francisco Lujan y Jorge Trillo.

[310] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, p. 51.
[311] Nugent, 1993, op. cit., p. 68
[312] Nugent, 1993, op. cit., p. 69.
[313] AHRAN, 23 / 432, Toca, ff. 26-36, expediente de restitución de Namiquipa. La sociedad subsistiría 50 años o el tiempo que fuera necesario para obtener la división de los 64 sitios, Ibid.

En la carta de 1908 que los namiquipenses enviaron a Porfirio Díaz, 120 de ellos se quejaban de que el gobernador Creel había vendido lotes y los había despojado de tierras de temporal, pastos y bosques que antes ocupaban con sus siembras y ganados.[314]

Los principales líderes de la SCP fueron Cornelio Espinoza y José Rascón y Tena, quienes pronto fueron puestos tras las rejas por el Jefe Municipal y cacique Victoriano Torres. En el año de 1905 este personaje escribió al jefe político que los líderes de la SCP habían participado en una revuelta agraria una década antes. Como sea la SCP no pudo parar la venta de tierras. En 1905 se realizó 1 venta, 18 en 1906, 80 en 1907, 44 en 1908 y 38 en 1909.

En la carta de 1908 los namiquipenses decían a Porfirio Díaz que ellos habían combatido a los apaches y a pesar de lo duro de la guerra no habían abandonado sus tierras convirtiéndose en el único baluarte de la civilización en esos desolados lugares. Se quejaron de que no obstante que los nuevos emigrantes no sostuvieron esa destructiva guerra se estaban apoderando de la tierra, que ellos estimaban les pertenencia, mediante una simple petición y el pago de unos cuantos pesos.[315]

[314] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, p. 48.

[315] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, p. 27. Nugent, 1993, op. cit., p. 71. Para Katz Namiquipa y otras muchas colonias militares que él llama sociedad chihuahuense de rancheros libres "crearon un tipo de sociedad única en México, limitado al norte de Chihuahua y a unas pocas regiones que eran víctimas de los ataques apaches, en la que se combinaban de manera excepcional el salvajismo y la democracia." No puede evitar Katz la comparación con el historiador Frederick Jackson Turner que describió una sociedad de frontera estadounidense de granjeros autónomos, independientes, autosuficientes. Según Turner esa sociedad carecía de estructuras de clase, y de las estructuras de poder características del este de los Estados Unidos. En este caso el Estado era débil. Recientemente esta hipótesis ha sido rebatida bajo los argumentos de que los especuladores de la tierra, terratenientes ricos y banqueros estuvieron presentes en la colonización, así como el Estado en la conformación del ejército en la colonización de la frontera estadounidense. En el periodo que va de 1830 a 1860 ocurrió lo contrario. El Estado y el ejército federales eran demasiado débiles debido a las disputas internas para tener una presencia significativa en Chihuahua. Los mineros y hacendados ricos huyeron ante el avance de los apaches y los banqueros y especuladores no daban valor alguno a la tierra. Ibid. pp. 27-28.

Anteriormente habíamos visto que en 1908 la SCP contrató a Julio Posada, para practicar un deslinde de las tierras del pueblo, con las circunstancias que se señalaron, y expidió un certificado a la SCP asegurando que la extensión de las tierras debería de ser de los 64 sitios de ganado mayor que los namiquipenses siempre reclamaban. No se hizo esperar el ataque del gobernador de Chihuahua, Enrique Creel, quien en escrito, de 9 de julio de 1909, al gobierno federal enviaba una larga lista de lo que él llamaba "faltas de los namiquipenses," llevadas a cabo durante muchos años al negarse a entregar las tierras que Enrique Muller reclamaba. El reclamo de una extensión de 64 sitios de ganado mayor por parte de los namiquipenses le parecía a Creel "monstruoso." Sobre la ratificación de Porfirio Díaz de los títulos del pueblo en 1893, lo solucionaba negando que hubiera tenido lugar. La instancia federal que manejaba los terrenos nacionales, la Secretaría de Fomento, afirmaba que había enviado de vuelta todos los documentos concernientes a Namiquipa al gobierno del estado. Por su parte, Creel decía que no podía encontrar registro alguno de la resolución del presidente en los archivos de Chihuahua. De todos modos afirmaba que si la resolución existiera negaba la posibilidad de que los actuales habitantes de Namiquipa fueran los descendientes de los colonos originales. Pedía a la Secretaría de Fomento que no se hiciera acción alguna que estimulara a los namiquipenses a seguir el camino de quejas y protestas que realizaban con frecuencia para por sí mismos conformarse en la creencia de que tienen derecho de propiedad absoluta sobre las 112 354 hectáreas que reclamaban.[316]

Al iniciarse la revolución en 1910 los líderes de la SCP, también lo fueron del levantamiento local. José Rascón y Tena, vicepresidente de la SCP, encabezó el asalto a la plaza de Namiquipa el 20 de noviembre de 1910. El hijo del presidente de la SCP, José María Espinoza, guió un contingente de namiquipenses en la lucha armada en el invierno de 1911. En mayo de 1911 muchos namiquipenses

[316] Friedrich Katz. Pancho Villa. Era, México, 1998, t. I, pp. 54-55.

participaron en la batalla que determinaría la renuncia de Porfirio Díaz, la toma de Ciudad Juárez, y en mayo de 1912 el namiquipense Candelario Cervantes comandó más de 500 hombres, la mayoría de Namiquipa, en la campaña contra Pascual Orozco.[317] Después del derrocamiento del gobierno de Díaz los namiquipenses solicitaron a las autoridades revolucionarias que se expropiaran las tierras vendidas a los foráneos por la ley de Creel y volvieran al dominio de los originarios. Como la petición no fue atendida ellos tomaron el asunto en sus propias manos. En julio de 1911 el presidente municipal de Namiquipa, elegido por los revolucionarios locales, prohibió trabajar las tierras a lo que las habían comprado bajo la ley de Creel.[318] También derribaron los cercos que se habían levantado; las autoridades revolucionarias en el nivel distrital ordenaron que las tierras regresaran a los expropiados para que el asunto se resolviera en las cortes. Los namiquipenses simplemente ignoraron la orden.[319]

Namiquipa se caracterizó por su acendrado villismo, pero después esta perspectiva cambiaría en muchos de ellos. En una entrada de Villa a Namiquipa los hombres salieron del pueblo para no recibirlo. Dado el desaire ordenó que juntaran a todas las mujeres de 16 años en adelante y las puso a disposición de la tropa. El asunto ocasionó que los habitantes de Namiquipa respondieran al llamado del gobernador Ignacio Enríquez para constituir las Defensas Sociales y

[317] Nugent, 1993, op. cit., p. 76, 80. José María Espinoza fue hijo de Cornelio Espinoza; en marzo de 1911 mientras sus tropas se encontraban cerca de la hacienda de Rubio, no lejos de Namiquipa, decidió parar en su pueblo para cambiarse de ropa y ver a sus padres. Lo anterior ocasionó que entrara en conflicto con Madero, quien lo consideró una deserción, lo relevó de su cargo y lo mandó encarcelar en ciudad Guerrero. El líder de Namiquipa le dijo a Madero "¿Quién eres tú mocoso para darme órdenes?" Los demás líderes y oficiales revolucionarios, incluido Francisco Villa, solicitaron a Madero su liberación inmediata, a lo cual se negó y Espinoza permaneció por varios meses en la cárcel. Ibid, p. 76. Candelario Cervantes era sobrino de Concepción Cervantes, quien en 1905, como representante de Namiquipa, escribió a Ricardo Flores Magón expresándole la disposición de pelear contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Ibid, pp. 71-72.
[318] Nugent, 1993, op. cit., p. 76.
[319] Nugent, 1993. op. cit., pp. 76 - 77. Cuando Villa asumió el gobierno de Chihuahua y confiscó las propiedades de los latifundistas locales puso a las haciendas de Santa Clara a cargo de los villistas de Cruces y Namiquipa. Ibid, p. 78.

combatir a Villa.[320] En 1916 después de que Villa atacó Columbus la expedición punitiva comandada por Pershing ocupó Namiquipa. En uno de sus informes este personaje decía que por su sugerencia gente neutral de Namiquipa había formado un pequeño destacamento de protección de habitantes pacíficos. El destacamento trabajaba conjuntamente con las tropas estadounidenses dando información, como guías, localizando depósitos de armas villistas.[321] Al partir la expedición punitiva del pueblo el jefe de las Defensas Sociales, José María Espinosa, huyó con ellos. Poco después la defensa de Namiquipa es reorganizada y se nombra a Francisco V. Antillón como su jefe. Enterado Villa del asunto invita al nuevo jefe a unírsele en contra del invasor. En lugar de ello participa en varios combates en contra de los villistas.[322] El pueblo pagaría un alto costo por haberlo combatido, Villa tomó represalias y las enemistades que generó entre la gente del pueblo perdurarían por largo tiempo.[323]

En el transcurso de los primeros meses de 1919 Villa y Felipe Ángeles llevaron a cabo diversas acciones guerrilleras. Ricardo Michel e Hipólito Villa entraron nuevamente en contacto con Francisco V. Antillón proponiendo una alianza entre las defensas sociales y los villistas. Los de Namiquipa sabían que Villa estaba en Cruces con 800 soldados. Las defensas sociales y todas las familias habían abandonado el pueblo y permanecían en la sierra. La comunicación que sostenían los villistas con Antillón les daba esperanza de que no atacarían el pueblo.[324]

El movimiento armado de la revolución solidificó las expresiones locales de asociación de los namiquipenses con los rasgos autonómicos que ello conllevaba.

[320] Rocha, op. cit., p. 76.
[321] Katz, op. cit., p. 196.
[322] Rocha, op. cit., p. 69.
[323] Katz, op. cit., p. 196. En 1933 uno de los guardias locales, José María Espinosa, que participó activamente con Pershing, regresó a Namiquipa y fue emboscado y asesinado por hombres que no habían perdonado su proceder al apoyar a los invasores.
[324] Rocha, op. cit., pp. 102-103.

Durante los años de la revolución los namiquipenses elegían al ayuntamiento y la SCP tuvo el poder de convertirse en un cuerpo administrativo de lo que ellos llamaban las "tierras de común repartimiento". La SCP asignaba, distribuía, sancionaba, dirimía disputas y quitaba lotes de agricultura enmarcados en los terrenos mencionados. Como asociación llevaba su libro de acuerdos donde se registraban las concesiones que se hacían a los foráneos.

En 1923 Catarino Herrera se quejaba ante la CLA y solicitaba su apoyo ante la pretensión de la SCP de desalojarlo de las tierras que había venido sembrando. Contó Herrera que al llegar al pueblo en 1918 se presentó al registro de habitantes del lugar y manifestó su deseo de ser vecino. Solicitó a la SCP "terreno de los ejidales del pueblo", el cual le fue concedido y registrado en el libro de acuerdos. La inscripción especificaba las delimitaciones del predio y las colindancias, y la cláusula primera el permiso a sembrarlo, pero hasta que tuviera lugar el fraccionamiento definitivo, por estar el predio en terrenos de común repartimiento, se le concedía hacer uso del agua de un venero y hacer su casa habitación. En cuanto a la posesión se dejaba claro en la cláusula segunda que:

> "La posecion (sic) o permiso de cultivar el terreno que se concede al interesado no le dará derecho alguno de propiedad, ni podrá hacer transacción por vía de venta alguna, ni traslación de dominio, de ninguna especie, y solo si, podrá trasmitir con las mismas condiciones, a sus descendientes o subsesores (sic) legítimos, por muerte del primitivo pocedor,(sic) sopena de revocarse este veneficio, (sic) y ser nulo todo contrato y de ningún merito." [325]

La cláusula tercera recupera los rasgos y aspectos de una sociedad surgida como una colonia militar y la larga guerra con los apaches, pues se imponía la condición de pelear en el momento que se le requiriera. Se aclaraba que en caso de

[325] AHRAN, 23 / 432, Local, f. 24.

fraccionarse el terreno de común repartimiento, el concesionario no adquiría derechos de propiedad, asunto que se había acordado en 1913 y que tiene que ver con la lucha que se había librado con los foráneos:

> "Finalmente es, condición para el Sr. Herrera, coperar (sic) a los gastos, y cuanto sea necesario, al sostenimiento de la defenza (sic) del terreno de común repartimiento, y además a prestarles servicios personales, que la autoridad local solicite y dado el caso del fraccionamiento, solo tendrá derecho el interesado, a sus postas y alambres, y lo que pueda lebantar (sic), de sus fincas, como está dispuesto, por acuerdo de (9) nueve de Marzo de (1913) mil novecientos trece."

Herrera los sembró hasta que en los primeros días del mes de septiembre de 1923 José Rascón y Tena, como vicepresidente de la SCP, le entregó una orden de desalojo:

> "Por acuerdo de la junta directiva que tengo el honor de presidir en acuerdo fecha tres de Agosto se acordó lo siguiente. Primero, líbrese orden al C. Catarino Herrera que habiéndose resultado en perjuicio de tercero la posesión que es posedor en la parte denominada la Rinconada contigua a la posesión del señor Cristóbal Vásquez quien es posedor por más de treinta años donde resulta que siendo tan antigua dicha posesión dispone que el mencionado Sr. Herrera desocupe el terreno de que es poseedor tan luego como recoja el fruto de dicho potrero."[326]

Lo que hay que destacar es pues el aspecto de total autonomía de la SCP en cuanto a la forma de manejar y ejercer sus derechos corporados sobre la tierra. Pero Herrera apelaba al poder del Estado y pedía su intervención al preguntar a la CLA si debía desocupar el terreno, ya que según él, los terrenos que se habían

[326] AHRAN, 23 / 432, Local, f. 24.

venido llamando de común repartimiento ahora dependían del comité ejecutivo instalado con motivo de la solicitud de restitución de ejidos.

Las formas locales de autonomía serían sistemáticamente socavadas por el Estado, pues veía en ellas un desafío para su formación. Durante los años de 1921 y 1922 Reyes Ortiz fue presidente municipal en Namiquipa y trató de asumir el control de las tierras. En este tiempo dio permisos para cultivo y reconoció o negó las posesiones individuales, lo cual lo llevó a un fuerte conflicto con la SCP. Como anteriormente se comentó, el problema entre la presidencia municipal y la SCP fue dirimido por Mariano Irigoyen, (en ese momento diputado local), en julio de 1921. Por otra parte, la SCP contaba con el respaldo total del gobernador Ignacio C. Enríquez. La presidencia municipal tuvo que aceptar la autoridad de la SCP para administrar la tierra. Pero en la práctica Reyes Ortiz continuó con sus intentos de asumir su control. El presidente de la SCP Cornelio Espinosa murió en 1922 y Reyes Ortiz renunció a la presidencia municipal el 24 de junio del mismo año. A pesar de todo, el sucesor en la presidencia municipal, Anastasio Tena, continuó rentando y dando permisos para cultivo en las tierras de común repartimiento. Además, nombró a Reyes Ortiz como representante agrario de Namiquipa en el conflicto que sostenía por tierras con los dueños de la vecina hacienda de Santa Clara.[327]

Recién había tomado posesión Tena, expidió un permiso de usufructúo de terreno a Gabino Carrasco. El documento de concesión, de agosto de 1922, contiene aspectos diferentes al de la SCP, no hace mención alguna sobre la defensa de las tierras, pero quedaba estrictamente prohibido fincar y su uso era solo para agricultura, debía observar el reglamento de cercos y guardar los límites que el regidor de ejidos le marcara.[328] Pronto se presentó conflicto cuando Eulalio

[327] Nugent, 1993, op. cit., p. 87.
[328] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 8.

Vásquez reclamó que el terreno se lo había concedido la SCP desde 1912 y pidió su desocupación. Pero Tena, por acuerdo del ayuntamiento, negó al quejoso su solicitud argumentando que el terreno era comunal y en virtud de que él ya poseía un potrero de más de 50 hectáreas que no cultivaba.

Tena duró poco en su cargo y no está claro el asunto de su fugaz paso por la presidencia municipal, pero todo parece indicar que el conflicto generado con la SCP por el dominio de la tierra del pueblo fue determinante. La SCP tomó el control del ayuntamiento en sus manos al convertirse Adolfo Delgado, uno de sus fundadores, en presidente municipal. Gabino Carrasco escribió al gobierno del estado, el 18 de julio de 1923, solicitando su amparo y ayuda ya que Vásquez "empezó a gestionar de buelta (sic) con el ayuntamiento y con la junta Directiva de la citada Sociedad que sin formalidad alguna se (sic) a (sic) buelto (sic) a instalar y funcionar apoyada por el Presidente y ayuntamiento con perjuicio de algunos vecinos, pus el 14 del corriente recivi (sic) una orden de desocupación del terreno." Lo que hay que hacer notar es el dato de que la SCP había estado cesante y definitivamente el resaltar la fusión de la misma con el ayuntamiento.

Parece que fueron el mismo presidente municipal y el vicepresidente de la SCP que juntos acudieron con Carrasco para pedirle el desalojo, pues decía el quejoso: "ambos me manifestaron que el acuerdo presentado era nulo que ninguna facultad tenía el Ayuntamiento que me lo concedió y que si no tenía algún arreglo con el quejoso procederían a desalojarme del terreno como quiera que estuviera (sic)." Carrasco le pedía al gobernador que se hiciera respetar el acuerdo que había convenido con el ayuntamiento cesante, ya que en el uso de las facultades en que estaba investido, por quien para ello tenía las facultades, se le había expedido.[329] Apenas tardó ocho días la respuesta del gobernador, que por conducto del secretario general de gobierno le mandaba decir: "manifiesto a Ud. por acuerdo

[329] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 6-7.

del C. Gobernador que deve (sic) arreglarse con el presidente que tiene el régimen de los terrenos de la comunidad, para seguir ocupando el terreno a que se refiere, y si no llega a un arreglo, debe desocuparlo." El 28 de agosto Carrasco nuevamente solicitó el apoyo del gobierno del estado diciendo que el vicepresidente de la SCP le exigía desocupar el terreno argumentando que era propiedad de Vásquez. En septiembre de 1923 nuevamente se le expresó que por acuerdo de gobernador debía entenderse con el dueño del terreno para pago de la renta. [330]

Ignacio C. Enríquez apoyó decididamente a la SCP. El Procurador General de Justicia, Jesús Mucharraz, llegó a expresar que el general Enríquez y la Secretaría de Fomento daban importancia a los acuerdos y resoluciones de la SCP.[331] El apoyo a la organización local se inserta en la necesidad de mantener la lealtad de las defensas sociales del lugar en su acérrimo combate contra el villismo, pero también lo es a una expresión de uso, concepción y percepción de la tierra. Enríquez lo que menos quería era el establecimiento de ejidos en Chihuahua. Cuando manda su repuesta a Vásquez habla de un régimen, en este caso el régimen de colonia. El régimen de que habla tiene rasgos de propiedad privada, pero no un régimen impuesto desde fuera, sino fraguado al interior, que proviene de la tradición selectiva de las colonias. Enríquez respeta y apoya ese régimen y su expresión autónoma.

Al no obtener oídos del gobernador Ignacio C. Enríquez, Carrasco apeló a la CLA que era acudir a la instancia del Estado a nivel federal. El 18 de octubre de 1923 el quejoso remitió todos los ocursos que había mandado y recibido a solicitud de la instancia agraria.[332] Ese mismo mes la CLA agraria solicitó los datos del terreno en cuestión al presidente municipal para resolver el asunto, pero expresaba con

[330] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 6-7.
[331] Nugent y Alonso, op. cit., p. 188.
[332] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 5.

claridad que la resolución del caso la haría el Comité Particular Administrativo, toda vez que se hiciera la entrega provisional de ejidos. Por lo pronto, le pedía al presidente municipal que mientras se instauraba el CPA interviniera procurando que si los terrenos eran municipales los mantuviera en cultivo.[333] Quedaba claro pues la intervención de una tercera estructura organizacional en el manejo de la tierra que dependía del Estado y la cual terminaría por imponerse. El problema para ese entonces era que no había tierras municipales, salvo lo que podría llamarse fundo legal, que por otra parte no había sido delimitado.

El 15 de noviembre de 1923 Adolfo Delgado daba respuesta a la CLA. El documento que el presidente municipal envió junto con el de solicitud de restitución contienen la síntesis de la tradición selectiva del pueblo de Namiquipa. Le explicaba que las tierras en disputa eran de común repartimiento y que se manejaban de la siguiente forma:

> "Hay una Junta Directiva que lleva el nombre de Sociedad Civil Particular constituida el 11 de septiembre de 1906, bajo una escritura Pública que llena las solemnidades eternas de Ley.
>
> Esta corporación funda sus actividades en un bando expedido por el Caballero Don Tiodoro de Cribis, (sic) Gobernador y comandante de las Probinsias (sic) internas de Nueva España, el 15 de noviembre de 1778, en el que se dispuso por decreto... la creación de varios Pueblos y entre ellos el de Namiquipa considerando a cada uno, como menos, con cuatro leguas por cada viento dentro de cuya extensión debería fijarse lo que correspondiera a Egidos y exas (sic) comunes...
>
> En dicho bando, con paternal cuidado se acordaron todas las medidas necesarias para la formación y conserbación (sic) de los mismos Pueblos y su

[333] AHRAN, 23 / 432, Local, f. 9.

> defensa contra las excursiones de los enemigos bárbaros; se dispuso la división y deslinde perfecto de las parcelas de cada uno de los asociados...
>
> Los que han formado esa sociedad son desendientes (sic) de los primeros pobladores, y han estado siempre como estubieron (sic) sus primeros padres, en posesión quieta, pasífica (sic) y pública, de todos los terrenos, tanto de labor como pastales y de los bosques de Namiquipa, dentro de los límites de su conseción (sic) que abarcan 64 sitios de ganado mayor. Todos los propietarios de terrenos colindantes, han respetado esta Conseción; se les ha impuesto el debido respeto ante la Justicia, igual reconocimiento a (sic) habido siempre por los Gobiernos del Estado, desde la época remota de la fundación de Namiquipa.
>
> En 1922 el Ayuntamiento Municipal de este lugar, sin respeto a la propiedad que se funda en el Bando sitado (sic) y sin atender a que una posesión no interrumpida de 143 años, prosedió (sic) a conseder (sic) permisos como si fueran terreno Municipal...”[334]

La base pues de la tradición selectiva es el bando de Croix que se presenta como un mito fundacional; la guerra con los apaches es otro aspecto fundamental, así como la posesión de la tierra por 143 años. El orgullo se nota cuando dice que a los vecinos se les ha impuesto el respeto y si bien al Estado no lo han obligado, ha tenido que reconocer su propiedad, no solo en el porfiriato sino desde la época de su fundación. Pero dentro de todo, el meollo del asunto es el concepto que los namiquipenses tienen de “propiedad”, que es la base de las relaciones de asociación que detenta. Se mezcla entre las concepciones, uso y apropiación de la propiedad individual absoluta y de las formas comunales, pero en la que el Estado no tiene un papel subordinante.

[334] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 17-18.

Pero entonces para los namiquipenses el conflicto más desgastante y peligroso había sido el interno, con las administraciones municipales que no habían respetado las disposiciones del bando de Croix. Lo anterior había dado pie a que los líderes de la SCP estudiaran las leyes en materia de ejidos. Adolfo Delgado hizo un rápido repaso de más de 500 años de legislación agraria en materia de ejidos y citó la real cédula de 1573, la del 15 de octubre de 1713, la real ordenanza del 26 de mayo de 1567, la real cédula del 4 de junio de 1687, la real cédula del 12 de julio de 1695 y la real instrucción del 15 de octubre de 1754, para concluir que señalan como ejidos de los pueblos 1755 hectáreas y que todo el excedente pertenencia a los descendientes de los primeros pobladores en "propiedad indiscutible." Tienen el concepto de la propiedad privada, pero se mezcla con formas corporadas de organización. Agregaba Delgado que el ayuntamiento que fungía de 1920 a 1922 al ingerir en la administración de los terrenos de común repartimiento "ha faltado al respeto que se debe a la propiedad."[335]

Ya hemos visto como se fue introduciendo la idea de la solicitud de restitución de ejidos en Namiquipa, principalmente a través de las argucias de Reyes Ortiz y el propio poder del Estado. Fue José Casavantes, quien libró una confrontación directa con Reyes Ortiz, el primero llamó al otro traicionero y ambicioso, la respuesta fue con el calificativo de ignorante. Como sea, el Estado inició los ritos de costumbre para dar paso a la restitución de lo que sería el nuevo concepto de ejidos y sustituir el régimen de colonia por el nuevo régimen de tenencia de la tierra enarbolada por el Estado.

Como ya vimos, la CLA envió a Antonio Garza para realizar la visita de inspección, en la que también se debía levantar lo que se llamaba "Censo general y agrario." Para tal efecto, el pueblo debía nombrar a un representante, tarea que recayó en

[335] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 17-18.

Fidel Heras, y al final el presidente Adolfo Delgado certificaba la veracidad de los resultados. El censo arrojó 3215 habitantes agrupados en torno a 703 jefes de familia; había encontraban 815 agricultores mayores de 18 años de los cuales 431 no tenían tierras. Se determinó que habían 404 propietarios que poseían 306 hectáreas de terreno de riego; 2969 de terreno de temporal y 30 de pastoreo.[336] Parece pues que esos 431 agricultores sin tierras ostentaban concesiones. Aunque el poder de administrar la tierra del pueblo por la SCP se había fortalecido con el apoyo total del ayuntamiento, poco a poco sería sustituido por el primer presidente del CPA, Ángel Antillón.

También Catarino Herrera acudió a la CLA en su disputa con la SCP. La instancia agraria le solicitó información sobre las tierras contenciosas a lo que contestó, el 14 de febrero de 1924, que la concesión era de siete y media hectáreas, pero que solo trabajaba 5 por habérselo impedido Cristóbal Vásquez y Rafael Muñoz, ya que se decían perjudicados porque sus semovientes no tenían donde pastar. Ya en poder de la CLA una nota decía que se esperaba el informe del CPE para resolver el asunto.[337] A pesar de todo Ángel Antillón reconocía la facultad de la SCP sobre las tierras del pueblo y la apoyaba en contra del quejoso. El 15 de marzo de 1924 Antillón respondió que Herrera procedía de manera inmoral, ya que la SCP le había dado cabida en forma amigable y sostenía su derecho de posesión como si lo hubiera adquirido por compra o legado, como si fuera un título; documento que expresa claramente su incapacidad de adquirir el terreno. Volvía Antillón a expresar los elementos justificativos de la tradición selectiva de Namiquipa que dieron lugar al nacimiento de la SCP: el bando de Croix, la circular del 21 de marzo de 1893 y aclarando que Vásquez era de los sucesores de los primeros colonos y el terreno le provenía desde sus antepasados: "...siendo la

[336] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 298. El censo también determinó que había 8 comerciantes, 3 zapateros, 2 herreros, 1 músico, 2 profesores, 2 artesanos, 1 hojalatero, 2 carpinteros, 1 talabartero y 2 empleados de gobierno.
[337] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 29.

Junta Directiva, quien asta (sic) la fecha lleba (sic) la Administración del Terreno llamado de Común Repartimiento, de este pueblo, entiendo que solo a esta incumbe mantener o revocar los permisos que la misma halla otorgado; pues ésta es una Junta Directiva que lleva el nombre "De Sociedad Civil Particular.""[338] Sin embargo, la expresión "hasta la fecha" deja ver en el pensamiento de Antillón que era un tiempo que tenía que llegar a un fin y empezar el del CPE.

Así se dibujó más claramente cuando el gobernador emitió su resolución. El mandamiento es del 26 de marzo de 1925 y se restituían los ejidos que el bando de Croix le había cedido. No obstante no se reconocen los 64 sitios, sino 57 ya que de otra manera se hubieran invadido las tierras de Cruces. Llegaba de esta forma el primer golpe de muerte a la SCP y con ello a la autonomía y expresiones de asociación del pueblo con el Estado. De hecho, al dictarse la resolución del gobernador para Cruces, el 3 de abril de 1924, fue Ángel Antillón quien ocurrió a verificar que no se afectara a Namiquipa con la restitución que se le hacia al pueblo vecino.[339] El siguiente paso era la elección del Comité Particular Administrativo (CPA), que sustituiría al CPE y recibiría en forma provisional las tierras para su administración. El 29 de agosto de 1925 el presidente municipal convocó al pueblo a asamblea, bajo la amenaza de que quien no asistiera sería castigado por ley, se trataba de elegir al CPA para lo cual se necesitaba que asistiera la mayoría del pueblo, pero acudieron menos de cuarenta.[340] Las actas de deslinde y de posesión provisional se rubrican el 1 de septiembre del mismo año y escasamente podían rebasar los cuarenta firmantes, además en el documento hay repetición de firmas.[341] El CPA quedó integrado por Reyes Ortiz, Teodoro Trevizo y Rafael Muñoz como presidente, secretario y tesorero

[338] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 35.
[339] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 40.
[340] Nugent y Alonso, op. cit., p. 194
[341] AHRAN, 24 / 432, Local, ff. 119-120, 121. Véase nota 42 de Nugent y Alonso, op .cit., p. 255.

respectivamente; como vocales quedaron Eulalio Vásquez, Ángel Antillón y Margarito Reyes.

El primer gran problema se presentó cuando Reyes Ortiz citó a junta general, el 17 de enero de 1926, y pretendió hacer efectiva la circular número 51 de la CNA que ordenaba a los integrantes de los ejidos entregar el 15 por ciento de su cosecha al CPA, lo cual vieron como la imposición de un oneroso impuesto. Los namiquipenses guiados por Pedro Barrera mandaron queja al presidente de la república en la que expresaban que el presidente del CPA había procedido, según instrucciones de la CLA, a formar comisiones para levantar lista pormenorizada de hectáreas sembradas, así como del ganado vacuno, caballar, asnal, caprino y de ovejas, lo cual era visto como una violación a los derechos de propiedad: “Estos hechos señor presidente, vienen a demostrar claramente que los terrenos que estimamos en justicia como nuestros porque los hemos adquirido de padres a hijos y fecundado con el trabajo constante de mucho más de un siglo, ahora se pretende confederarlos.” En su concepto de propiedad, el Estado no tenía derecho a intervenir en el manejo interno de las tierras, la producción, ni dar o girar algún tipo de instrucción relacionada con lo anterior.

La palabra confederarlos, para ellos, significaba que los terrenos pasaban a ser propiedad del Estado. Recalcaban que fundaban sus derechos en el bando de Croix. Además daban su propia interpretación al artículo 27 de la constitución del cual decían consagra los derechos de los pueblos y citaban la circular número 36 de la Secretaría de Agricultura y Fomento argumentando que aclaraba que “los ejidos de los pueblos son propiedad de los pobladores a quienes se les dieron prohibiendo a los ayuntamientos y a cualquier otra autoridad que ingirieran en la administración de los terrenos de los pueblos.” Pedían al presidente que girara sus órdenes para que “se nos respeten nuestros terrenos, como nuestros, y a la vez mandar un ingeniero a nuestra costa para que nos haga entrega prácticamente de

los terrenos que en justicia nos corresponden de conformidad con el título por nosotros invocado."[342]

La forma en que acentúan la propiedad de la tierra es una percepción y una concepción de un derecho inalienable e inherente al individuo, pero también al conjunto social. También nos muestra la confusión que se tenía del nuevo concepto de ejido dado por el Estado como una concesión a cambio de sumisión, pero permanecía la incertidumbre de que el Estado tratara de apropiarse de las tierras, la disposición de la circular les confirmaba ese temor latente. Pero el ejido de la revolución ya estaba incrustado en la estructura del pueblo y había generado poderosos intereses para algunos de sus miembros. Así cotidianamente el Estado recuerda y recalca a los supuestos "beneficiarios" que las tierras que disfrutan es por su paternal bondad; que se ha hecho justicia recuperándolas y al castigar a aquellos que los tenían en la opresión y postración al quitarles las tierras a los usurpadores y regresarlas a sus antiguos poseedores. El mito se construye principalmente en oposición a los terratenientes que en la épica populista son dibujados como los malos sin escrúpulos. Por su parte, aquellos que se resisten a reflejarse en esa teatralidad, que es el socavamiento por el Estado a su autonomía, inician estrategias de resistencia enmarcadas en prácticas cotidianas. No asisten a las juntas, no firman las actas, no participan de las actividades del CPA, no dan, o solo en parte el 15 % de sus cosechas etcetera.

La administración de Reyes Ortiz mantenía en descontento a los namiquipenses. A mediados de 1926 recibió una carta de Manuel Bustillos en la que representando a la Sociedad Agrícola del Valle del municipio de Guadalupe, Distrito de Bravos solicitaba tierras para colonizar en el predio La Guajolota ubicado dentro de las tierras del pueblo. Reyes Ortiz notificó a la CNA y la respuesta del delegado es curiosa. Primero le dice que las tierras de los ejidos en

[342] AHRAN, 24 / 432, Local, ff.48-49.

ningún caso pueden ser materia de arrendamiento a extraños y menos a compañías. Sin embargo, le decía que le informara si las tierras en cuestión no eran necesarias a los ejidatarios y si no podían cultivarlas, de ser así, para que no permanecieran ociosas, se vería alguna forma para que la compañía solicitante las aprovechara.[343]

Más divisiones surgieron al interior de la sociedad de Namiquipa y demuestra claramente cómo el proceso local de autonomía es socavado cuando los disidentes del ejido son compulsados a entrar en la dinámica que impone el Estado. Al ver que se le había hecho entrega en definitiva de las tierras al CPA, el 26 de abril de 1927, 77 namiquipenses escribieron al gobernador del estado reclamando que al nombrarse el CPA, el 1 de septiembre de 1925, no acudieron:

> "...por no estar de acuerdo en que terrenos que hemos adquirido con justo título y los hemos fedundado (sic) con el trabajo constante de 145 años, ahora se declararan terrenos ejidales de lo que resultó que ese Comité fue nombrado por 32 vecinos y apareciendo que con fecha 25 de agosto de 1926, el Ingeniero Talamantes, previa orden del Presidente de la República, hizo entrega definitiva a ese Comité de estos terrenos, a nuestros derechos conviene ocurrir... suplicándole... se sirva ordenar por quién corresponda se proceda a nueva elección, para que así sea nombrado el Comité que debe administrar estos terrenos en la forma que lo ordena la ley de la materia."[344]

Los namiquipenses citaban ciertos artículos que impedían a Reyes Ortiz desempeñar el cargo de presidente del CPA y parece que tenía que ver con que era subagente del ministerio público. Además, lo acusaban de cometer irregularidades y que había hecho reparto de tierras fuera de la ley; así como no

[343] AHRAN, 23 / 432, Toca, f. 116.
[344] AHRAN, 23 / 432, Toca, f. 218.

informar lo relativo a su administración.[345] Antes de decidir integrarse a la nueva estructura de administración de la tierra son pasivamente participes de las afirmaciones del Estado, porque son representados por un grupo de miembros del pueblo que no reconocen, pero a los cuales el Estado les ha dado cierto poder sobre la tierra, lo que es más, quedan como grupos relegados y sin capacidad de interlocución. Eso los obliga a asumir una forma activa en las afirmaciones del Estado, al aceptar la imposición del nuevo concepto de ejido y se añaden a las formas, registros y rituales del Estado que definen la cotidianidad y crea categorías sociales. Expresan la aceptación o la negación en los términos del Estado y se conforma un marco discursivo común. Pero, complejamente, el que se hagan participes no elimina totalmente las formas y expresiones disidentes del pueblo que también se manifiestan cotidianamente en la red de relaciones sociales que entablan unas veces frente y directamente con el Estado y otras frente a otros sectores sociales y a través de ellos indirectamente contra el Estado. Desde el 5 de agosto de 1926 Plutarco Elías Calles, el presidente de la república, había firmado la llamada resolución presidencial, la máxima afirmación del Estado en materia agraria. El considerando quinto de dicha resolución plantea:

> "Que las alegaciones presentadas por los terratenientes afectados no son de tomarse en consideración, porque ha quedado demostrado que con las operaciones de deslinde etc. a que se ha aludido sí hubo despojo: porque en la presente resolución no se mandan restituir 64 sitios de ganado mayor, sino las fracciones de terreno invadidas dentro de esa superficie; y porque el título que presentaron los promoventes, o sea el bando de referencia es auténtico y fue confirmado."[346]

Pero a su vez que en este caso se reconocía el bando de Croix como base para la restitución, pero el punto resolutivo séptimo marcaba: " Esta resolución debe

[345] AHRAN, 23 / 432, Toca, f. 217. Véase Nugent, 1993, p. 99.
[346] AHRAN, 23 / 432, Toca, f. 126.

considerarse como título comunal para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma resolución comprende.” La resolución presidencial también es el decreto de muerte de la SCP y de su base fundadora el bando de Croix explicitado claramente en el punto resolutivo anterior.

Solo 20 días después se realizaba otro de los grandes rituales del Estado: la entrega definitiva. Acudieron los representantes de la CNA, el CPA presidio por Reyes Ortiz, las autoridades municipales, los representantes de los propietarios colindantes y vecinos. Uno de los pasos del rito era el recorrido de los linderos y como expresión poderosa de las afirmaciones del Estado la firma del acta en la que pomposamente se declara: “Que son de recibirse y se reciben los terrenos que en definitiva se restituyen al pueblo.” El CPA las recibía a nombre del pueblo que se afirmaba en el acta había asistido en gran número, pero en realidad asistieron muy pocos. [347]

Para la recepción definitiva de las tierras el presidente municipal, Moncerrate García León había reunido a 200 namiquipenses para repetir el gran rito de posesión de la tierra que daba el Estado como ejido. Entre los comisionados para la entrega acudieron los flamantes ingenieros Gustavo L. Talamantes y Miguel Lizama. No fueron bien recibidos, más tarde el primero escribió que un grupo de namiquipenses dirigidos por los directivos de la SCP manifestaron que no estaban de acuerdo con el ejido. Pero la blasfemia en su máxima expresión fue cuando dijeron que no necesitaban la resolución presidencial para que las tierras siguieran siendo de ellos, ya que gobiernos anteriores habían declarado que las tierras les pertenecían. El segundo enviado de la CNA también se escandalizó de las irreverencias y de la forma que violentaban el ritual los miembros de la SCP. Para Talamantes un desagradable incidente ocurrió, provocado por los miembros de la SCP, al rehusarse a recibir las tierras de acuerdo con la ley agraria. Después de

[347] AHRAN, 23 / 432, Toca, ff. 164-166.

que se anunció que las tierras volvían al pueblo el namiquipense Refugio Licano respondió que él no reconocía la ley agraria. Un antiguo líder revolucionario villista, Arcadio Maldonado, dijo que el ejido era bueno, pero que el pueblo temía su conexión con la ley agraria. El único que habló a favor del ejido fue Francisco Antillón. De acuerdo al reporte de la CNA 118 de los 200 namiquipenses que asistieron estuvieron a favor de aceptar el ejido, pero lo raro era que solo 22 firmaron el acta y algunos lo hicieron dos veces.[348]

Se le habían restituido 45 471 hectáreas que se agregaban a las tierras que estaban bajo su dominio. Namiquipa ganaba en extensión, pero perdía en autonomía. Restitución y dotación solo tienen diferencias técnicas, los efectos y los mecanismos de dominación son los mismos en los dos casos.

Desde ahora la elección del CPA era impuesta o sancionada, en el mejor de los casos, por el Estado. Así se ve en la propia visita que hace al pueblo un enviado de la CNA y consignada en su informe del 15 de febrero de 1928. Al llegar, no le pidió, sino le ordenó al presidente del CPA que convocara a los vecinos a junta; al día siguiente practicó corte de caja y levantó el inventario de los útiles en poder del comité. Los cambios de CPA solo eran válidos si eran sancionados por los comisionados. Así los procesos internos de legitimación se trasladaban a instancias externas como la CNA a través de sus agentes. Estos personajes también fungían como inspectores, supervisores y hasta auditores. Lo anterior era una práctica cotidiana de la CLA y la CNA. Aunque en este caso el comisionado acudía a cambiar el CPA de Namiquipa ante la solicitud de los 77 namiquipenses que lo demandaron, vemos que el proceso interno de manejo de la tierra se había ya convertido en un asunto externo.

[348] Nugent, 1993, pp. 98-99.

Desde el 6 de febrero se había dado la junta y el comisionado apuntó que acudió poco más del 60 % de los “ejidatarios.” Lo que también habla que todavía existía un grupo numeroso de namiquipenses que no querían el ejido y no acudieron a la reunión como una forma de resistencia y muchos de los que acudieron solo querían sacar a Reyes Ortiz del CPA. El comisionado explicó que el objeto de la junta era la elección de un nuevo CPA a solicitud de gran parte de los vecinos, a lo cual no hubo resistencia. Resultó electo Adolfo Delgado, quien como antes se apuntó había sido presidente municipal, fundador y defensor de la SCP. Nuevamente pasó algo muy similar a lo sucedido cuando el rito de entrega definitiva de tierras. El asunto se tornó problemático y volvió a revelar el rechazo a la intervención del Estado en el pueblo cuando se leyó la circular 51 y el comisionado trató de explicarles de que se trataba. El enviado escribió después lo sucedido sobre los namiquipenses:

> “...no querían cooperativas que estaban muy contentos con sus arados y que no aceptaban ni querían la Ley Agraria, siendo los que encabezaban estas expresiones los CC. Antonio Duarte y Arcadio Maldonado, alegando puras barbaridades de las cuales no hice caso, pero en resumidas cuentas lo que decían era que en ningunas de sus formad (sic) querían la Ley Agraria, que estaban mas contentos antes con sus tierras puesto que a últimas fechas habían reducido la superficie de estas y que antes estaban independientes sin tener que pagar renta alguna.”

> “A la hora de firmar el acta y dar sus nombres los que no supieron hacerlo, se negaron terminantemente unos y otros diciendo que ellos estaban conformes con los miembros electos del Comité, pero que no querían firmar asunto alguno relacionado con la Ley Agraria, demostrando de esta manera una inconciencia e ignorancia absoluta, no queriendo estos mismos comprender

> las explicaciones que el suscrito les hacía; algunos de ellos decían que se les había olvidado como se llamaban." [349]

El ingeniero comisionado les explicó que la entrega del 15 % no era una renta, sino un fondo para fomentar cooperativas y pagar las contribuciones. Los namiquipenses contestaron que estaban dispuestos a pagar sus contribuciones a precio de cien pesos oro cada uno si era preciso, ya que después de las condonaciones que les había hecho el gobernador del estado por adeudo de contribuciones quedaron debiendo cerca de 4 mil pesos, pero decían que no el 15 %. El comisionado amenazó a los renuentes a firmar diciéndoles que "esta oposición al cumplimiento de la Ley Agraria les traería perjuicios, máxime que el comité funcionaría sin sus firmas, contestando ellos que lo que querían era que se les retirara de lleno la tantas veces mencionada Ley Agraria."[350]

En el acta que se elaboró, el 15 de febrero, el ingeniero asentó, en consonancia con lo anterior, que los que no sabían firmar se negaron rotundamente a dar sus nombres y otros decían que se les había olvidado como se llamaban. Los que sabían firmar también se negaron a hacerlo diciendo que no querían la ley agraria y que en ninguno de sus actos la aceptarían, aún después de haber elegido a los nuevos miembros del CPA. La irreverencia de los namiquipenses escandalizaba enormemente al comisionado, sobre todo al ver su falta de respeto a la ley agraria, para él se violentaba la sacralidad de la ley: "El suscrito les hizo ver que presentaría ante la superioridad, las expresiones que de la Ley Agraria tenían y de sus disposiciones, manifestando ellos que eso era lo que querían para que se les retirara de lleno."[351]

---

[349] AHRAN, 24 / 432, Toca, ff. 229-230.
[350] AHRAN, 24 / 432, Toca, ff. 229-230. Véase Nugent, 1993, pp. 99-100 y la nota 35 de p. 183.
[351] AHRAN, 24 / 432, Toca, f. 228.

El 19 de febrero de 1928 los namiquipenses realizaron una asamblea para ver el asunto del ejido. Utilizaron las mismas leyes para rechazar al ejido y la ley agraria. Para ellos la aplicación de la ley agraria consistía en el despojar; poner sus tierras bajo el control del Estado. La mayoría de los namiquipenses consideró que con la expedición del bando de 1778 “Namiquipa había quedado fuera del dominio de la nación.” Determinaron que ellos no administrarían la tierra de acuerdo con la ley agraria sino de acuerdo a la concesión que se les había dado en la época virreinal. Querían su autonomía y ser pequeños propietarios.

El 6 de mayo de 1928 el nuevo presidente del CPA, Adolfo Delgado, explicaba al procurador de los pueblos, un funcionario agrario, el por qué los namiquipenses no aceptaban entregar 15 % de sus cosechas al CPA: “Dicen los habitantes que prefieren abandonar el pueblo que entregar el 15 por ciento de sus productos, porque insisten en que ese procedimiento constituye una forma de despojo.” Ese mismo año un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Fomento, Adolfo C. Besson, escribió que Namiquipa era uno de los ejidos más ricos y rebeldes del que el gobierno podía sacar grandes beneficios si tan solo comprendieran que debían obedecer las leyes agrarias. Agregó que era la forma en que se podía obtener algún beneficio del pueblo, ya que de otra manera pasaría el tiempo y los habitantes se enamorarían cada vez más de la idea de ser pequeños propietarios y entonces todos se negarían a reconocer lo que la ley marcaba en relación con ellos.[352] El problema es que desde su nacimiento y en la forma en que se da el poblamiento, los habitantes asumieron una concepción y relación de propiedad privada con la tierra, mezclada con formas corporadas.

La SCP quedaba pues totalmente eliminada y fuera de la administración de las tierras de Namiquipa. El Estado se convertía en el árbitro supremo de los conflictos internos y externos de los pueblos. Al propio Adolfo Delgado le quedaba

[352] Nugent, 2002, pp. 202-204.

ésto muy claro. Para mayo de 1928 se presentaron en el pueblo los ingenieros Rubén Sáenz y José María Aguilar para medir cuatro leguas en dirección a la hacienda de Santa Clara, el oriente, para determinar el lindero con esta propiedad; asimismo lo haría en el lindero sur para definir las colindancias con los terrenos del El Picacho y El Refugio propiedad de Rafael Sáenz. Delgado desconfiaba totalmente de lo que se pretendía hacer, ya que le parecía extraño porque no traían la autorización de lo que Delgado llamó como esa suprema corte, la CNA y añadía: "teniendo presente que los terrenos ejidales están bajo el dominio eminente de la nación nos concretamos a dar cuenta por la vía telefónica a la Comisión Nacional Agraria."[353]

El Estado se consolida en su proceso hegemónico socavando formas de expresión autónoma, minando las relaciones de asociación que los pueblos han establecido con él y que históricamente así las han desarrollado. Conforme el proceso hegemónico avanza la presencia del Estado se hace más fuerte hasta volverse asfixiantemente poderosa. Más sin embargo, no son todo poderosas, los pueblos creativamente crean formas de resistencia que llegan a la ironía, la burla, la simulación, el disimulo y otras. Ya hemos visto el humor insolente que despliega Velia Muñoz o cuando los namiquipenses, a la hora de firmar un acta, les dicen sarcásticamente a los funcionarios de la CNA que se les había olvidado como se llamaban. Los enfrentamientos de Namiquipa, cuando ellos mismos tumbaban los cercos que los vecinos colindantes levantaban, pasan formas más sutiles; o la batalla enérgica que libra Israel Loya con el delegado agrario por el Rancho Colorado. Precisamente es en Cruces que se desarrolla otra forma de resistencia aun más sutil que las vistas anteriormente.

Cuando las instancias agrarias enviaban a sus comisionados a realizar registros y ritos sacralizados de poder generalmente necesitaban de los habitantes del propio

[353] AHRAN, 24 / 432, Toca, f. 246.

lugar para poder llevarlos a cabo. Era de suponerse que no sería difícil conseguir la ayuda puesto que eran los habitantes de los pueblos los más interesados en conseguir la dotación lo más pronto posible. El 12 de diciembre de 1923 el primer vocal de CPE de Cruces, Matilde Rascón, le escribía al presidente de la CLA que padres de hijos mayores de 18 años, (en el censo general agrario que realizaban las instancias agrarias, a todos los mayores de edad solteros se les consideraba con derecho a dotación), se rehusaban a pagar lo que les tocaba por concepto de los gastos generados por la visita de inspección a cargo de Antonio Garza. Se quejaba de que el presidente del CPE no había querido responsabilizarse del asunto a pesar de que el mismo pueblo había aceptado el compromiso de pagar una cuadrilla de trabajadores para apoyar los trabajos del comisionado.[354]

Rascón recibió respuesta del presidente de la CLA seis días después se le dijo que en todos los casos la instancia agraria se había limitado a proporcionar el ingeniero y los vecinos habían cooperado con los gastos de los peones y aportando animales para el trabajo. En sus palabras, los pueblos eran los que tenían que ver la forma de solventar los gastos erogados por contrato de peones y renta de animales.[355]

El asunto del pago por los gastos que erogaban los comisionados agrarios en sus visitas a Cruces se volvió algo recurrente. En febrero de 1925 el presidente del CPA de Cruces, J. C. Alarcón, escribía al presidente de la CLA que él había pagado los gastos realizados con motivo del deslinde y certificación de los ejidos del pueblo que hizo Eustolio Delgado, pero que recuperaría cuando los vecinos cubrieran la parte que les tocaba. Sin embargo, varios vecinos no habían querido pagar la cuota asignada. Preguntaba si podía imponerles una renta hasta cubrir la

[354] AHRAN, 23 / 434, Local, f. 219, expediente de Cruces. El vocal terminaba preguntando que debía hacer ya que no podía cubrir los adeudos, Ibid.
[355] AHRAN, 23 / 434, Local, f. 220.

cuota o en qué forma le podía hacer para que le pagaran.[356] Al siguiente mes Alarcón envió otro escrito, al mismo funcionario, mencionando que con motivo de los trabajos para la restitución tuvieron que erogarse los gastos correspondientes a alquiler de bestias, pago a la cuadrilla de trabajadores y provisiones de boca entre otros. Para lo anterior los vecinos expresaron en asamblea su conformidad, lo cual quedó asentado en el acta respectiva. Los trabajos mencionados se habían llevado a cabo entre octubre y noviembre de 1924 y el costo fue sufragado por Alarcón. La cuota que cada vecino debía reembolsarle era de 2.50 pesos que debían liquidar al ser entregados los ejidos. Habían ya trascurrido cuatro meses y la cuota no había sido cubierta por 40 individuos. Pedía se le apoyara en el cobro y si no accedían se les suspendería su derecho al uso del ejido.[357]

La situación se volvió a presentar cuando los comisionados Salvador Rodríguez y Arturo Sánchez acudieron a Cruces, a mediados de 1926, ha celebrar el pomposo rito de posesión definitiva de ejidos, pero los cruceños no estaba dispuestos a participar. Nadie quiso ayudar y esta vez tampoco hubo quien se ofreciera a cubrir los gastos para los trabajos de campo que debían realizarse. Por primera vez en el estado las instancias agrarias se topaban un caso en el que no se encontraba apoyo o ayuda “de los propios interesados para los trabajos técnicos”. Los comisionados expresaron a Ignacio Solís, delegado en Chihuahua de la CNA, que según las instrucciones que habían recibido, ellos podían pagar gente que les ayudara. Solís no estuvo de acuerdo “pues en este estado no se ha acostumbrado a pagar peones en los distintos trabajos que se han hecho en los pueblos beneficiados por dotación o restitución.” Pero los dos ingenieros comisionados no podían realizar el rito si no encontraban ayuda de los lugareños, por eso Solís comunicaba al oficial mayor de la CNA:

[356] AHRAN, 23 / 434, Local, f. 377.
[357] AHRAN, 23 / 434, Local. f. 379.

> "Los Ingenieros Rodríguez y Sánchez insisten desde el pueblo de Cruces... en que los vecinos no les prestan ninguna ayuda para verificar sus trabajos, y como el pago de peones en este lugar, sería sentar un mal precedente para los demás trabajos topográficos que tengan que verificarse en este Estado, pues de esa manera los demás Ingenieros que fueran comisionados, se creerían facultados a proceder en la misma forma y no sería posible que la asignación mensual que tiene esta Delegación, fuera suficiente para atender estos gastos, he hecho todos los esfuerzos posibles para evitar que se pague en los trabajos topográficos que tengan que llevar a efecto los Ingenieros que comisionó esa superioridad, y al efecto, giré telefonema al Presidente del Comité Particular Administrativo, excitándolo para que diera toda clase de ayuda a los Ingenieros e hiciera comprender a los vecinos la obligación que tienen de contribuir con su trabajo personal para el deslinde de las tierras que se les restituye."[358]

Ante la situación se consultó a Gustavo Talamantes, quien había sido presidente de la CLA, conocía a la gente de la región y sabía claramente la desconfianza y resquemores que tenían los pueblos como Cruces a la restitución o dotación ejidal. Por eso se le giró un telegrama a Solís donde se asentaba la opinión del consultado: "Si Ingeniero Talamantes, conocedor de la región, donde se encuéntranse (sic) comisionados Ingenieros cita, juzga indispensable pago peones para trabajos, autorízasele para liquidarlos." Todavía Solís se negaba a creer lo que leía y contestó que entendía que le fue dirigido como una mala interpretación a un telegrama que él había enviado anteriormente y en el que se refería a la solicitud de los gastos y viáticos para los comisionados por la CNA. Agregaba que con motivo de dicho telegrama giró un telefonema a Talamantes recomendándole que citara a junta a los vecinos y los conminara a ayudar y que solo en caso indispensable les ofreciera pagar peones para el deslinde. Concluía diciendo que creía conveniente que en caso de que no se encontrara ayuda se suspendieran

[358] AHRAN, 23 / 434, Toca, ff. 216-217.

los trabajos de deslinde.[359] El primer día de septiembre Talamantes respondió a Solís que había tenido una junta con más de cien vecinos y los convenció de ayudar y solo pedían se nombrara nuevo CPA.[360]

La negativa de los cruceños de ayudar a los comisionados de la CNA se inscribe en una forma sutil de resistencia a las afirmaciones del Estado. Cuando aceptan ayudar lo hacen bajo la condición de que se cambie el CPA, al cual se le ve en principio por personas que se alían al Estado y buscan beneficios personales. Como vimos algo similar pasó en Namiquipa en 1928 cuando una mayoría pidió se nombrara un nuevo CPA aunque no aceptaban el ejido, sino con la intención de sacar a Reyes Ortiz.

Los habitantes de los cinco pueblos creados por Croix no se referían a sí mismos como ejidatarios, pero tampoco como colonos, tampoco como rancheros. Los formulismos para dirigir escritos como el de los suscritos, los firmantes, los vecinos hacen que las referencias hechas para sí mismos, de estos pobladores, sean escasas. Sin embargo, esas escasas referencias nos llevan a pensar que se definían a sí mismos como labradores. En la carta de 1926 que los namiquipenses enviaron al presidente de la república quejándose de que se pretendía confederar sus tierras iniciaron su escrito así: “Los que suscribimos, todos mayores de edad, labradores, naturales y vecinos del pueblo de Namiquipa.”[361] En 1921 la gente de Galeana escribía a la CLA que los aparceros que sembraban en terrenos que antes pertenecían a los Muller y habían pasado a ser parte del ejido los trataba de despojar de esas tierras y al hacer alusión a si mismos se denominaban labradores.[362] Ese mismo año un grupo de vecinos de Galeana solicitaba al presidente de la república que les diera en ejidos el rancho Espindoleño y decían

[359] AHRAN, 23 / 434, Toca, ff. 216-217, expediente de restitución de Cruces
[360] AHRAN, 23 / 434, Toca, ff. 96, expediente de restitución de Cruces
[361] AHRAN, 23 / 432, Toca, f. 48, expediente de restitución de Namiquipa.
[362] AHRAN, 23 / 399. Local, f. 72, expediente de restitución de Galeana.

que había llegado a ellos "la salvadora Ley Agraria que es para el labrador como un irsi de esperanza."[363] Pero, aunque llaman genéricamente ejidos a las tierras que poseen o de las que han sido despojados, pero nunca se llamaban ejidatarios. Cuando menos para el norte esa palabra que refiere a una categoría social rural, cuya principal característica es sostener relaciones de tutelaje con el Estado es construida, implementada y empieza a operar precisamente con el Estado de la revolución. Es decir, el Estado crea categorías sociales y socava otras. La primera referencia que se encontró en los documentos con relación a que los herederos de Croix se nombraran a sí mismos ejidatarios, la tenemos en 1931 por parte de los galeaneses que al escribir al presidente de la república se identifican como ejidatarios: "Los suscritos miembros del Comité Particular Administrativo de este Pueblo y Campesinos Ejidatarios del mismo" [364] En el periodo presidencial de Cárdenas, de 1936 a 1940, y con el impulso que da al reparto de ejidos la categoría social de ejidatario tiene su consolidación. En 1936 el presidente del comisariado ejidal de Casas Grandes envía un escrito a las instancias agrarias donde se presenta como el representante de los "Ejidatarios" del ejido de Casas Grandes.[365] Por su parte los recalcitrantes antiagraristas de Namiquipa también se empiezan a llamar ejidatarios. En 1936 uno de los antiguos fundadores de la SCP escribía al DA que el juez menor del lugar pretendía devolver las tierras de que les habían dotado a los Muller, el mismo juez levantaba un cerco y pedían que: "dentro del perentorio término que se estime prudente retire el serco (sic) que tiene en construcción en terreno que solo a los ejidatarios corresponde."[366] En otro caso, cuando se quería efectuar un despojo, los hermanos Isidro y Francisco Tena Rivera escribían a Lázaro Cárdenas "ponemos a conocimiento de esa superioridad de su honorable mando que siendo nosotros personas ejidatarios y campesinos

[363] Ibid, f. 175.
[364] Ibid, f. 289.
[365] AHRAN, 23 / 397, Toca, f. 397, expediente de restitución de Casas Grandes.
[366] AHRAN, 23 / 432, Toca, f. 316, expediente de restitución de Namiquipa.

agrarios y poseadores de un rancho de labor de riego... se nos quiere hacer un despojo de dicha labor."[367]

[367] Ibid, f. 321.

Capítulo IV: La intervención francesa en la tradición selectiva de los pueblos de Chihuahua

En los días más críticos de la defensa de la república, Benito Juárez se dirigió al norte refugiándose en el estado de Chihuahua, donde permaneció por espacio de dos años, dos meses y veinte días. Desafortunadamente en la historiografía local el siglo XIX es un gran desconocido y el tema de la estancia de Juárez en Chihuahua se añade a ese cúmulo de falta de conocimiento de un periodo histórico tan importante en el ámbito estatal. Lo que es cierto es que la estancia de Juárez en el estado dejó una profunda huella en muchos pueblos. Las poblaciones que se vieron beneficiadas, sobre todo, con las disposiciones agrarias de Benito Juárez, incorporaron la figura del presidente a sus tradiciones y mitos fundacionales. Así, a través de los expedientes agrarios vemos que para la época del inicio de la reforma agraria los rarámuri, en la defensa y recuperación de las tierras que les habían sido despojadas, actualizan la figura de Juárez para esgrimirla en contra del Estado de la revolución, y exigir el respeto o devolución de sus tierras. Así pues, la actualización de la figura de Juárez se engarza con un pasado significativo para definir, justificar y tratar de cambiar una situación presente. Al recuperar y actualizar la figura de Juárez ponen de manifiesto una tradición selectiva con la cual enfrentan la amenaza del despojo de tierras y quieren hacer prevalecer sus derechos sobre las tierras que les han sido usurpadas.

La llegada de Benito Juárez a Chihuahua

A finales de 1864 la situación de la defensa de la república era desalentadora. Benito Juárez había avanzado hacía el norte encontrando serias dificultades con el gobernador de Nuevo León. Juárez organizó el primer cuerpo de ejército de Occidente para enfrentar a los franceses en Durango y encontrándose en ese

estado, se llevó a cabo la batalla de Majoma el 21 de septiembre de 1864. Las tropas leales a la república fueron derrotadas por lo que el gobierno tuvo que dirigirse a Chihuahua.[368] El 29 de septiembre de 1864 Juárez cruzó los límites interestatales entre Durango y Chihuahua; lo acompañaban Sebastián Lerdo de Tejada, secretario de Relaciones Exteriores y Gobernación; José María Iglesias de Hacienda, Fomento, Justicia e instrucción Pública y Miguel Negrete, ministro de Guerra. Los escoltaban el 2º batallón de Guanajuato y la sección de carabineros de a caballo.[369]

Al ingresar Benito Juárez al estado de Chihuahua su objetivo primordial era establecer el asiento de su gobierno republicano en la capital del estado. Las circunstancias de la entrada de las fuerzas francesas a Chihuahua determinaron que Juárez tuviera que salir en dos ocasiones de la capital para ubicarse en Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez). Terminado el peligro volvió a asentar su gobierno en la capital hasta que la situación fue más favorable para avanzar al sur. Desde su ingreso al estado, en la fecha mencionada anteriormente hasta su salida un 18 de diciembre de 1866, permaneció 1 año, 4 meses y 5 días en la capital; en Paso del Norte 8 meses, 21 días; en tránsito 1 mes y 20 días; en total 2 años, 2 meses y 20 días. Juarez cruzó de sur a norte el estado encontrando en los políticos y pueblos por los que transitó apoyo a la causa republicana, pasó por las siguientes localidades: Coronado, Valle de Allende, Parral, Camargo, La Cruz, Saucillo y Rosales, Chihuahua, Carrizal, Guadalupe y Paso del Norte. Juárez inició su regreso al sur un 10 de diciembre de 1864 desde la ciudad de Chihuahua pasando por Meoqui, pueblo por el que no pasó en su entrada, y nuevamente por La Cruz, Camargo, Valle de Allende y Coronado.

[368] José María Iglesias. Revistas históricas sobre la intervención francesa en México. t. III, Imprenta del Gobierno, México, 1869. pp. 24-34.
[369] Francisco R. Almada. La ruta de Juárez. Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, s/f. p. 59.

El primer sitio donde se alojó a Juárez en el estado fue Río Florido (hoy Villa Coronado). El pueblo, encabezado por el presidente municipal, Antonio Meza, se aglomeró en torno a Juárez y se organizó un desfile cívico.[370] Después se dirigió a Valle de Allende alojándose en la casa de Joaquín Domínguez. La recepción fue presidida por el jefe político, coronel Guadalupe Soto y por el presidente de la Junta Patriótica Pedro González.[371]

El 2 de octubre el presidente llegó a Parral, fue recibido en el salón principal de la Casa Municipal. El jefe del distrito le entregó las llaves de la ciudad. En seguida el presidente de la Junta Patriótica lo felicitó por su feliz arribo a Parral. Juárez, por su parte, dio las gracias a la población por su patriotismo y adhesión al gobierno republicano. En la noche del 3 el ayuntamiento y la junta patriótica ofrecieron un baile en honor del presidente.[372] En Parral permaneció por cuatro días y fue alojado en la casa del doctor Esteban Benítez Lumbier.[373]

José María Iglesias narró de la siguiente forma la llegada de Juárez a Camargo: "Las autoridades y vecinos más distinguidos, que habían salido también a encontrarlo al camino, lo acompañaron también a la mesa, en la que casi todos los brindis se encargaron del tema natural de la manifestación de odio con que se ve la invasión extranjera y del vivo deseo de no omitir esfuerzo para la defensa de la patria."[374] La junta patriótica de Camargo, como en las demás poblaciones del estado, se constituyó para colaborar con las autoridades cantonales y municipales para organizar la recepción de la comitiva presidencial. En esta población Benito Juárez fue hospedado en la casa de Merced Valles, jefe político del Cantón. Después la comitiva presidencial pasó por las poblaciones de La Cruz y Saucillo de las que se dispone tan poca información. En el primero Benito Juárez fue

[370] Iglesias, op. cit., p. 34.
[371] Almada, op. cit., p. 60.
[372] El Republicano, t. II. No. 16, octubre 8 de 1864 (microfilm rollo No. 7)
[373] Almada. La ruta… pp. 60-62
[374] Iglesias, op. cit., pp. 36-37.

hospedado en la casa del Presidente Seccional José M. González y en el segundo en la casa del Comisario Municipal Francisco Rodríguez.[375]

De allí siguió a Rosales a la que llegó un 10 de octubre de 1864.[376] En la noche hubo música con piezas escogidas y con este motivo se improvisó un baile que duró hasta las doce de la noche.[377] Aquí Benito Juárez fue hospedado en la casa de Genaro de la Garza.[378] El 12 de octubre de 1864 entró en la ciudad de Chihuahua.[379] A las tres de la tarde de ese día se situaron en la Alameda de Santa Rita dos compañías de la Guardia Nacional, una de infantería móvil y la otra de caballería sedentaria, formando ambas valla para recibir al presidente. A esa hora salió el general Ángel Trías para el Rancho de Ávalos, donde ya se encontraba Benito Juárez, acompañado de algunos funcionarios, empleados y particulares. Después de abrazar al gobernador el presidente se dirigió a la ciudad y antes de llegar fue recibido por el ayuntamiento que estaba presidido por el jefe político.

Después de permanecer varios meses en la ciudad de Chihuahua, los franceses lanzaron una expedición al estado por lo que Benito Juárez tuvo que avanzar al extremo norte de Chihuahua, con dirección a Paso del Norte, el 5 de agosto de 1865. Se detuvo por cuatro días en El Carrizal donde se hospedó en la casa de Ignacio Domínguez.[380]

El 14 de agosto de 1865 Benito Juárez llegó a Paso del Norte. El Jefe Político y Comandante Militar del Cantón Bravos, José María Uranga, junto con demás

[375] Almada. La ruta… p. 58, 70
[376] El Republicano, Tomos I, III, No. 18, octubre 22 de 1864. (microfilm Ichicult, Rollo No. 7). Para más detalles de la recepción véase Iglesias, op. cit., p. 37.
[377] Iglesias, op. cit., p. 37.
[378] Almada. La ruta… p. 72.
[379] Para los detalles del recibimiento de Benito Juárez en la ciudad de Chihuahua véase: El Republicano, tomo IV, No. 18, octubre 22 de 1864. Archivo Histórico Municipal de Chihuahua, Fondo Intervención Francesa, Sección Secretaría, expediente 15. Iglesias, op. cit., pp. 37-39. También Almada, La Ruta… pp. 73-80.
[380] Almada, op, cit., p. 113.

autoridades, salieron a encontrar al presidente Juárez y lo guiaron hasta el alojamiento que se le había preparado. El 13 de noviembre de 1865 Benito Juárez salió de Paso del Norte para dirigirse a la ciudad de Chihuahua. Habiendo lanzado los franceses una columna hacia la capital del estado, Benito Juárez se retiró nuevamente a Paso del Norte a donde llegó el 18 de diciembre del mismo año. El 10 de junio de 1866 Benito Juárez abandonó nuevamente Paso del Norte y se dirigió a la capital del estado.[381]

Presentándose la situación más favorable a la república, Juárez partió de la ciudad de Chihuahua rumbo al sur de la república el 10 de diciembre de 1866. Agradeció al pueblo de Chihuahua por su adhesión a la causa republicana y por los servicios que había prestado a la nación con recursos materiales y humanos. Muchos ciudadanos lo acompañaron hasta el rancho de Ávalos y el gobernador del estado hasta el límite de la entidad.[382]

Llegó al pueblo de San Pablo, una comisión de vecinos se había adelantado a encontrarlo para invitarlo al pueblo. La pobreza había hecho mengua de la población para recibirlo con arcos triunfales., pero las mujeres de la población prestaron sus chales y rebozos, los cuales ataron de los extremos y colocaron de una acera a otra de las calles en diversos puntos y daban un alegre espectáculo. Allí le fue presentada a Juárez una solicitud pidiéndole que declarara ciudad a la Villa a San Pablo y se le pusiera por nombre el del general Meoqui, quien había muerto combatiendo a los enemigos de la República. En el momento fue promulgado el decreto.[383]

La comitiva llegó nuevamente al humilde pueblo de La Cruz[384] y después a

[381] Iglesias, op. cit., p. 537, 542. También Almada, op. cit., p. 113, 124, 127 y 131.
[382] Almada, pp. 149-150.
[383] Tamayo, op. cit., pp. 80-81.
[384] La República, tomo I, No. 11, marzo 29 de 1867 (microfilm, Ichicult ,rollo 6). El republicano

Camargo. El jefe político leyó un discurso que fue contestado por el presidente. Por la noche se ofreció un baile, para esa época Camargo tenía alrededor de 4 mil habitantes. Al dirigirse a Valle de Allende una comisión de valleros salió a recibir a Juárez, ya en ese momento era reconocido por los rarámuri y había ganado su confianza, la muestra es que doce rarámuri que llevaban sus arcos y flechas escoltaron al presidente, corrían seis de cada lado del carruaje; cien jinetes, que motaban con tal desenvoltura que parecía que habían nacido en la silla y ataviados de gala que daba mayor brillo a su agilidad, galopaban de uno y otro costado de los primeros carruajes y una gran cantidad de gente iba detrás de la comitiva. En el Valle cuando los franceses entraban por un lado de la población, los habitantes salían por el lado opuesto encontrándose los invasores con puertas y ventanas cerradas como si fuera una ciudad desierta. Valle tenía alrededor de 6 mil habitantes.[385] En este pueblo Benito Juárez se hospedó en la casa de Simona Montes ya que Joaquín Domínguez, con quien Juárez se había hospedado cuando entró a Chihuahua, se había pasado a las filas del imperio.[386]

Después llegó a Villa Coronado, la cual, como otras poblaciones del Estado, fue ocupada por las fuerzas francesas cuando éstas ingresaron al estado dejándola en gran pobreza. Ahora el panorama era diferente, el presidente avanzaba al sur conforme las fuerzas republicanas ganaban batallas y los franceses se retiraban. Diez arcos triunfales adornados con banderas e inscripciones hicieron los habitantes del pueblo para festejar. Los habitantes se negaron a recibir el pago de los soldados por las cosas que necesitaban.[387]

---

publicó en la fecha indicada el itinerario que hizo Juárez al avanzar hacia el sur del país, este documentó fue reproducido por Almada, La ruta…pp. 151-154.

[385] Tamayo, op. cit., pp. 82, 84-85.

[386] Francisco R. Almada. “La peregrinación del presidente Juárez a Chihuahua.” Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, t. XI, No. 6, diciembre de 1964 - enero-febrero de 1965. p. 7.

[387] Jorge L. Tamayo. Juárez en Chihuahua. s/e, México, 1970. pp. 86-87.

Su larga estancia en el estado y las disposiciones agrarias que emitió favorecieron a los rarámuri y mestizos. Hubo pueblos que se beneficiaron de las disposiciones agrarias, pero otros fueron perjudicados, en los primeros permanece en la memoria histórica y ha generado una gran cantidad de mitos y leyendas; su actuar provocó que se hiciera parte de sus tradiciones selectivas. Juárez expidió títulos de tierras a pueblos y vendió terrenos nacionales, apoyando así a particulares pero también a hacendados. Sin embargo, hubo pueblos que lo combatieron ferozmente, principalmente los del distrito de Guerrero.

La tradición selectiva de los rarámuri

El 14 de julio de 1919 el ex - presidente seccional de Norogachi de apellido Villalobos escribía al presidente municipal de Batopilas, Ramón Gómez, que había hecho entrega de la presidencia a Guadalupe Loya. El mismo Gómez había pedido a Loya se convocara al vecindario para que seleccionaran y le presentaran una terna de la cual elegiría al nuevo presidente seccional. Los tres aspirantes fueron Loya, Higinio Pérez y otra vez participaba Villalobos, este último expresaba que en la sección había 300 blancos y más de mil rarámuri. El proceso se llevaba a cabo mediante el golpeteo y la rebatinga de los blancos y donde los rarámuri eran utilizados para sus propios intereses. Guadalupe Loya era el favorecido de Gómez, pero Villalobos, el anterior presidente seccional, promoviéndose así mismo le decía del primero:

> “Los pésimos recuerdos que como empleado ha dejado el Sr. Loya son la causa que nadie le tiene confianza y no compareciera a sus llamadas, pues este… se ha apropiado de animales mostrencos… los animales consumiendo las siembras no hay reglamento de autoridad la cárcel y corral del municipio prestados a particulares, los tarahumares no han tenido ningunas garantías se quejan de los abusos y atropellos, estafas, rovos (sic) y fraudes… estos

> miserables son víctimas de toda clase de vejaciones hace ocho años… y así sería cansado enumerar la condición en que pasan las cosas muchísimas tiene el Jefe Militar que hacerse cargo de ellos sin ser de su competencia para dar garantías a tanta víctima y será muchísimo trabajo redificar (sic) lo destruido aquí está destruida la ley y no hay más empleado que el Militar es de donde ha venido el orden de nuevo…"[388]

No obstante lo anterior era solo un caso, de muchos, que reflejaba las relaciones entre los indígenas, la sociedad nacional y el Estado. La situación que privaba entre los rarámuri en la Sierra Tarahumara es descrita por las propias instancias estatales, en concreto por el ingeniero Juan Guevara de la CNA asienta el oprobio e ignominia que sufrían los indígenas de Papajichi, aunque con los juicios de valor propios de la época que calificaban a las creencias y prácticas culturales indígenas impregnadas de ignorancia. Ante la solicitud del pueblo de dotación de ejidos el empleado de la CNA concurrió al lugar para levantar los datos correspondientes al proceso que llamaban de "sustanciación del expediente." En julio de 1925 el ingeniero informó que se encontraba en su mayoría habitado por mestizos, lo cual había provocado un fuerte conflicto:

> "…aquí como en otros lugares es el mismo fenómeno el que se nota que conforme el blanco va estableciéndose en los lugares habitados por los indígenas estos últimos se van retirando rehuyendo el contacto con ellos desaciéndose (sic) de sus propiedades por venta que les hacen a los de razón por precios irrisorios. Este proceder en ellos es perfectamente bien disculpado supuesto que por amarga experiencia tiene bien conocido el resultado desastroso de miseria a que se ven reducidos por las transacciones con los blancos que no se concretan a comerciar con el indígena sino que en su generalidad son verdaderas estafas que se cometen… existen individuos y no uno ni dos sino en alguna proporción que no se les conoce ocupación alguna y

[388] AHMB, Caja 166, exp. 19.

que viven exclusivamente del conocido comercio con los indígenas, y que es como antes digo a base de estafas aprovechándose de la ignorancia y supersticiones propias de la raza…"[389]

Para Guevara la estafa al indígena se había convertido en el medio de vida del lugar y la practicaban el 98 % de los blancos. Añadía el comisionado que tanto blancos como indígenas sostenían una vida precaria y que indefectiblemente se llevaba a cabo la practica de la estafa, ya que el producto de cualquier otra actividad que no fuera ésta, por la pobreza de las tierras, la desventaja del clima y la distancia a los centros de consumo, no les daría para satisfacer los gastos de sus necesidades. Señalaba un caso que para él era curioso:

"Se cuenta de individuos que se presentan desde muy de mañana en casa de algún indígena y permanece según la costumbre indígena en un lugar próximo a la casa por horas y más horas, hasta que el indígena movido por la curiosidad se acerca a él a preguntarle el motivo de su permanencia en aquel lugar, que es la oportunidad que espera para principiar el negocio que llevan; contándoles que ya sea que su padre o su abuelo muertos vinieron a decirles que recogiera tal o cual cosa de su poder, cosa que es muy posible que no crea el indígena a la primera o segunda vez, pero que al día siguiente de recibir la negativa se vuelve a presentar a aquel individuo con el mismo tema y haciéndole cargo porque el padre u otra persona finada de su familia sigue molestándolo en la noche exigiéndole recoja de él los intereses que desde un principio pretendió quitarle al indígena. Otros se presentan con algún muñeco atribuyéndole tal o cual dote y del cual son los únicos poseedores, otros usan canicas atribuyéndoles cualidades de talismanes y que tienen en alto valor entre ellos, sobre todo en las carreras de las que son muy afectos, teniendo la creencia de que quien las trae tiene la influencia benéfica y maléfica para el contrario."[390]

[389] AHRAN, 23 / 497, Local, ff. 21-22.
[390] AHRAN, 23 / 497, Local, f. 22. El censo general agrario que realizó Guevara arrojó un total de

Agregaba Guevara que las autoridades disimulaban ante las quejas de los indígenas y no era raro que en muchos de los casos procedieran contra los propios quejosos. Recalcaba el comisionado que como todos se dedicaban al mismo "negocio" al que le tocaba ser autoridad no le convenía perseguir delitos que él mismo había cometido. Los rarámuri de Papajichi poseían un sitio de ganado mayor, pero como casi todas las comunidades indígenas de la sierra, no conservaban los títulos de las tierras y no había testimonio o indicio de que alguna vez se hubiera realizado algún deslinde que diera los antecedentes de por qué poseían esa extensión de tierras. Tal superficie era reconocida por la empresa latifundista colindante la Compañía Antonio Asunsolo Sucesores. Más no se trataba de un asunto de magnanimidad, sino que en realidad todas las tierras que ocupaba el latifundio de dicha compañía alguna vez les pertenecieron y ahora solicitaban se les restituyeran.

La solicitud tenía que ver con uno de los líderes más reconocidos por los mismos rarámuri llamado José Jaris Siguirichic, quien gozaba de mucha influencia en la región y sostenía que una gran extensión de terreno en la zona cuatro del Distrito Andrés del Río les pertenecía. Ante la carencia de títulos que expresaran la posesión de la tierra Jaris recurría a la tradición selectiva y actualizaba la figura de Benito Juárez, de quien decía se las había cedido. Pero más que pelear porque el Estado les reconociera esas tierras como suyas o se las restituyera, la exigencia de Jaris era mucho más radical, quería que todos los blancos se fueran de la región: "Puede asegurarse que no es la falta de tierras lo que gestiona el indígena, sino su separación con el mestizo que según todas sus manifestaciones quieren que en sus rancherías o pueblos no se avecinen gentes de razón."[391]

344 habitantes con 96 jefes de familia y de ello 103 agricultores mayores de 18 años con derecho a dotación. Para el censo se tomó en cuenta, además de Papajichi, a las rancherías de Sitonachi, Rurochacachic, Sarabeachic y El Cuervo.

[391] AHRAN, 23 / 497, Local, f. 28.

Otro de los muchos casos de la situación social que vivían los rarámuri se registra también por las mismas estructuras institucionales agrarias del Estado cuando los indígenas de Arareco solicitan dotación de ejidos en 1928. En el llamado "Informe Reglamentario" se asentaba que las tierras de los vecinos de Arareco les eran disputadas por los vecinos de Choguita: "que en distintas ocasiones se les han invadido sus terrenos, que ellos han abandonado, sin protestar, pues son naturalmente tímidos; que han sido y continúan siendo víctimas de explotaciones y atropellos por parte de los propietarios y concesionarios vecinos, quienes además de invadirles sus terrenos los contratan en los cortes de leña, pagándoles lo que les parece conveniente y a veces nada." Al igual que los rarámuri de Papajichi afirmaban los de Arareco que las tierras era de su propiedad desde los tiempos de Benito Juárez, quien se las había entregado. El comisionado informó que el levantamiento del censo general agrario había sido difícil, ya que los indígenas huían de los blancos al verlos aproximarse a sus viviendas. Además, por su desconfianza, era difícil que proporcionaran datos personales como el número de hijos o de ganado.[392]

Los rarámuri de Papajichi reconocían, como pueblo, no solo las tierras contiguas a la iglesia sino una comarca extensísima bajo la jurisdicción de un solo "gobernadorcillo" que abarcaba todas las tierras del latifundio Asunsolo Sucesores que eran precisamente las tierras que los rarámuri pretendían se les restituyeran.[393]

El 27 de enero de 1926 tres rarámuri, vecinos del pueblo de Norogachic, enviaron una carta al secretario de agricultura pidiéndole la entrega de los ejidos que habían sido usurpados por el latifundio Asunsolo. El comunicado iba dirigido por

[392] AHRAN, 23 / 486, Local, ff. 2-9. El censo arrojó 571 habitantes de ellos el número de jefes de familia y varones de más de 18 años con derecho a dotación fue de 165. Eran dueños de 598 cabezas de ganado mayor, 1872 de ganado menor y tenían en cultivo alrededor de 300 hectáreas.
[393] AHRAN, 23 / 497, Local, f. 23.

los rarámuri José Jaris, Noris Norogachic y Francisco Cuevas. Expresaron que habían sido "comisionados por todos los indígenas tarahumaras que viven en la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua para que en su representación, hagamos del conocimiento de usted las irregularidades e injusticias que se han cometido con toda la raza a que pertenecemos, con motivo de nuestras propiedades particulares, ejidales y comunales." Mencionaron que Benito Juárez les había extendido títulos de propiedad tanto particular como ejidal, por medio de los cuales les había concedido a los tarahumaras todas las tierras que ocupaban en aquella época.[394] Denunciaban que entre los años de 1891 a 1895 el ministro porfiriano José Yves Limantour había dado concesión a una compañía deslindadora, la que se apoderó de la mayor parte de sus tierras ya que tomaron como lugares despoblados grandes zonas de tierra que les pertenecían. Posteriormente la compañía deslindadora cedió sus derechos a varios particulares y al entonces Banco de Londres perjudicando a los pueblos de Norogachi, Pahuichique, Papajichi, Aboreachi, Tetahuichi, Choguita, además de muchas rancherías, (pueblos que los demandantes afirmaban que existían desde antes de la conquista).

Los invasores exigían a los rarámuri el pago de rentas y derechos por uso de montes, siembras y pastos. Les cobraban un peso por metro de pino, 25 % de las cosechas y dos pesos por cabeza de ganado mayor y agregaban:

> "Por otra parte, como la actual generación carecemos de los títulos originales expedidos por el Gobierno de Don Benito Juárez, y no se le reconocen sus derechos toda la gente blanca de esa región constantemente se apodera de nuestras tierras y van expulsándonos al grado de que hemos tenido que huir a las barrancas o a las partes más altas de la Sierra, donde las tierras son de

[394] AHRAN, 23 / 8687, Local, dotación de ejidos a Paguichique, f. 38. Aunque mencionaban que los títulos se los había entregado Benito Juárez entre 1862 y 1864, lo anterior se debió haber efectuado entre 1864 y 1866, ya que Juárez, perseguido por los franceses, entró al estado un 29 de septiembre del primer año y salió un 18 de diciembre del segundo año mencionado.

tercera y la mayor parte eriazos incultivables y ni aún allí nos dejan tranquilos."[395]

Basados en la ley de terrenos nacionales de 1923 solicitaron a la Comisión Local Agraria que les diera posesión de pequeñas parcelas localizadas dentro de los mismos ejidos de los pueblos mencionados; añadían que no obstante que se habían mandado ingenieros para realizar las visitas de inspección y que habían rendido informes favorables no se había procedido a devolverles sus tierras. Además, que en las regiones de Cuiteco, Distrito de Arteaga, en que si disfrutaban de algunas posesiones se les había exigido altas contribuciones que les era imposible cubrirlas. Agregaban que para colmo en los últimos años se habían perdido las cosechas, llegando al grado de que ni siquiera disponían de semillas para volver a sembrar, sentenciaban: "estamos amenazados de sucumbir de hambre y hay una horrible miseria en toda la sierra;" por lo que pedían:

"PRIMERO.- Se nos dé posesión definitiva de todas las tierras que hemos solicitado como ejidos.
SEGUNDO.- Se tenga en consideración los decretos dados por el Presidente Benito Juárez y se nos reconozcan nuestros derechos en las tierras a que se refieren.
TERCERO.- Se nos dé posesión de los montes y se nos comceda (sic) la explotación de los mismos, de acuerdo con las solicitudes presentadas a la Comisión Local Agraria.
CUARTO.- Se nos condonen las contribuciones que debemos por pastos, etc. o se nos dé prorroga de cinco años para pagarla (sic).
Y por último, se nos nombre un ingeniero o representante de esa Secretaría, para que haga una visita a la Sierra Tarahumara y se entere en forma mas (sic) amplia de todos los asuntos que hemos tratado en este memorial y nos indique el procedimiento legal que debemos seguir para realizar nuestros

[395] AHRAN, 23 / 8687, Local, dotación de ejidos a Paguichique, ff. 38-41.

deseos, pues nosotros desconocemos en absoluto las leyes y reglamentos relativos a las personas de raza blanca a quienes nos hemos dirigido para el arreglo de nuestros negocios, únicamente nos han engañado y explotado valiéndose de nuestra ignorancia." [396]

La rebelión de los rarámuri

La Sierra Tarahumara era como una olla de presión a punto de explotar ante la situación de injusticia y opresión que acontecía a los rarámuri. Pero igual situación se vivía en el ambiente político estatal donde grupos opuestos se disputaban el control de la gubernatura del estado. Las quejas y peticiones no eran atendidas por las instancias gubernamentales y pronto se dieron levantamientos armados. El 3 de abril de 1927 un periódico de la capital del estado, El Correo de Chihuahua, anunciaba que entre los Distritos serranos Andrés del Río y Benito Juárez se había alzado un grupo de tarahumaras en actitud rebelde portando un estandarte de la Virgen de Guadalupe. El levantamiento lo constituían cerca de 100 personas, en su mayoría tarahumaras, pero eran liderados por los mestizos Francisco Lozano, Jesús J. Soto, Marcelo Estrada, Ángel Bailón y Severo Gardea. Inmediatamente el gobierno movilizó a las guardias municipales para localizar el foco del movimiento.

El jefe de las guardias municipales, coronel Miguel Gutiérrez se trasladó rápidamente a Carichí, pero los levantiscos ya eran perseguidos por la guardia municipal de Nonoava, que se encontraba bajo las órdenes del capitán primero Indalecio Olivas. Se trabó un combate en la región de San José Baqueachi donde llevaron la peor parte los alzados, resultando varios muertos y heridos; entre ellos fallecieron los líderes Francisco Lozano y Marcelo Estrada. Fueron hechos prisioneros 17 personas, entre ellos 15 tarahumaras y los jefes Severo Gardea y

[396] AHRAN, 23 / 8687, Local, dotación de ejidos a Paguichique, ff. 38-41.

Ángel Bailón. El resto del grupo fue perseguido durante días por Olivas hasta aprehenderlos. Se recogieron de los rebeldes 12 armas –entre ellas fusiles de tipo mausser y 30-30- un costal con unos 100 cartuchos y se hizo una aproximación sobre el número de personas involucradas: 60 tarahumaras y 5 mestizos, de ellos solo 25 armados con dotación de parque. En realidad resultaba ser toda una aventura sublevarse con tal escasez de armamento. Los líderes mestizos del movimiento fueron rápidamente enjuiciados y fusilados, no se sabe qué destino corrieron los rarámuri capturados. Poco tiempo después, el 22 del mismo mes, las guardias municipales apresaron, cerca de Carichi, a un grupo de tarahumaras bajo el cargo de hacer propaganda sediciosa. Esta vez logró escapar uno de los líderes rarámuri Antonio González que pronto sería de los cabecillas de otro levantamiento.[397]

Desafortunadamente las fuentes no registraron los pormenores del apresurado juicio ni que objetivos y demandas perseguía el grupo rebelde. A simple vista se antoja que el móvil se insertaba en la lucha por el poder de grupos políticos antagónicos, donde parece haber dos grupos poderosos uno de base local estatal y otro con apoyos del gobierno federal donde los rarámuri solo hubieran sido carne de cañón y se les hubiera involucrado en el alzamiento aprovechando su problemática particular.[398] Pero al examinar más detalladamente las fuentes todo parece indicar que es un movimiento netamente local y propio a pesar de que en este levantamiento los líderes son blancos. En el contexto general de la sierra los mismos rarámuri son los que organizaban todo. Los cabecillas Bailón y Severo García declararon “que se lanzaron a la revolución engañados, pues les había hecho creer que todos los pueblos de la sierra estaban de acuerdo para

[397] Mayra Meza. San José Baqueachi: historia de un ejido tarahumara que se resiste al despojo de sus tierras. ICHICULT / CONACULTA, Chihuahua, 2001. pp. 73-76.
[398] Para este aspecto de la política estatal veáse Meza, op. cit.

levantarse en armas."[399] El poco y malo armamento que llevaban trabaja corroborando esta afirmación.

En un informe fechado el 11 de noviembre de 1927 el ingeniero Francisco Salazar hacía saber al gobernador del estado los pormenores de una nueva rebelión que tuvo lugar en septiembre de 1927. Se mencionaba en primer lugar el levantamiento de abril del mismo año y se hacía notar que había quedado un pequeño grupo de descontentos encabezados por un rarámuri que se hacía llamar San Pedro, mismos que habían tenido en constante alerta a los jefes de las guardias municipales en Carichi, Baqueachi y Nonoava. Posteriormente, el 5 de septiembre, el mayor Enrique Dávalos, jefe de las guardias municipales de Batopilas, envió telefonema avisando que el jefe de la guardia municipal de Yoquivo había puesto en su conocimiento que "indígenas en número suficiente están levantados en el Pueblo de Cuchiherachic, pide parte y pide autorización para movilizar gente." El 18 del mismo mes el jefe de la guardia municipal de Nonoava puso el siguiente telefonema: "hoy tuve conocimiento que en Choguita hay reunidos tarahumaras en número de cien se ignora que pretenden, este Pueblo teme sufrir un asalto por parte indígenas, hay versiones pretenden vengarse de lo ocurrido anterior." El 19 del mismo mes el capitán primero Catarino Calderón, jefe de la guardia municipal de Carichi informó: "Jefe Guardia Baqueachic, en conferencia hoy me dice, han llegado dos tarahumaras dando aviso se encuentran en Cerro Guérachic, Campamento Indígenas rebeldes y dieron comisión a 10 indígenas levantando gente a fuerza para anbresarlos (sic) a su cuartel, ignorándose que lugar deseen atacar." El 20 del mismo mes el jefe de la guardia de Nonoava informó "Tarahumaras marchan este rumbo, Pueblo aislado auxilio causa río Grande, sírvase esa Jefatura poner gente en actividad. Urge." Ese mismo día el capitán Calderón de Carichi comunicó que había ordenado al jefe de la guardia de Baqueachi explorara la ranchería de Guérachi

[399] El Correo de Chihuahua, abril 13 de 1927.

pero lo impedía la crecida del río Guajochic. El día 21 el mayor Eligio González desde el pueblo de Creel informaba que había alarma por haber gente armada en Norogachi y Baqueachi. Ese mismo día volvía a enviar otro comunicado: "tarahumaras de Pueblo Norogachi, Nararachic, Choquita y Gueguecherare, están inconformes con algunos vecinos blancos, por razón los explotan, quitándoles animales y perjudicándoles en sus intereses".[400]

Los indígenas de estos pueblos solicitaban al gobernador un comisionado para que hiciera la investigación del caso. El mandatario estatal envió al presidente de la Comisión Local Agraria, Rafael Rico, quien había sido miembro de la Comisión Deslindadora de la Tarahumara para oír a los quejosos. Rápidamente Rico informó que había falsa alarma que los gobernadorcillos y rarámuri de la región aledaña a Creel estaban en paz y solo habían mencionado casos de blancos radicados entre ellos que los explotaban. Pero pronto los recorridos de los militares dieron cuenta de que en realidad sí había una partida de sublevados. El día 25 el capitán Emilio Carrasco informó que se preparaba un movimiento sedicioso en varios pueblos tarahumaras comprendidos en los distritos Andrés del Río, Benito Juárez y Artega y planeaban reunirse en Cusárare; también comunicó que había logrado capturar a los principales líderes. El jefe de la guardia de Baqueachic informó que el cabecilla rarámuri Pedro González se encontraba en Satevó con 25 indígenas. Parece ser que este jefe era el que logró escapar cuando se dieron los sucesos de la rebelión de abril.

En el desenvolvimiento de los hechos se procuró la comunicación con los cabecillas del movimiento para invitarlos a conferenciar en el pueblo de Creel con el coronel Fernando González, jefe de la sección de guerra. Para tal efecto se ordenó que las guardias municipales se concentraran en sus pueblos de origen. Las conferencias iniciaron el 4 de octubre. Llegaron a la cita 300 tarahumaras,

[400] AHRAN, 23 / 447, Dictámenes, f. 16.

pero se comunicó que “el siguiente día llegarían indios de otros pueblos entre los que venían “el famoso General y Gobernadorcillo José Jaris Siguirichi” y Ventura Basigochic, el primero era reconocido con “más ascendiente en toda la tribu tarahumara y aún posiblemente más que San Pedro” por lo que González suspendió las conferencias hasta el día siguiente. El día 5 se reanudaron las Conferencias de Creel llegando los gobernadorcillos esperados. Casi todos los rarámuri iban desarmados y “solo uno que otro con rifle, jaras y hasta alguno con una bayoneta antigua a guisa de lanza.” El cabecilla José Ventura declaró:

> “que ellos no prendían hacer armas contra del Gobierno, sino que cansados como estaban de tantos atropellos de parte de los blancos y sin esperanza de obtener las garantías que necesitan pues que las quejas que ponen ante las Autoridades de sus pueblos nunca son oídas, además de que los mismos blancos en contra de quienes ellos se quenan, (sic) después los persiguen con más saña, habiéndose dado el caso de que en represalia de sus quejas los golpeen y aún han matado algunos tarahumaras, en esta ocasión se estaban reuniendo con el objeto de darse garantías por sí solos, no tratándose de ningún levantamiento en contra del Gobierno, sino en contra de los blancos que viven entre ellos y que tanto los extorsionan.”[401]

Hilario Lerma de Arareco delató al gobernadorcillo de esta misma localidad, Francisco Plasencia, quien estaba comisionado por José Jaris y Ventura Cruz para hacer acopio de pinole para alimento de los que se iban a sublevar con el objetivo de matar a los blancos. En ese momento Plasencia intervino aceptando las declaraciones de Lerma y dijo que de acuerdo con otros gobernadorcillos tenían la intención de dar un escarmiento a los blancos que entre ellos vivían. En seguida habló José Jaris Siguirichic, quien traía aproximadamente 70 indígenas de las regiones de Choguita, Panalachi, Narárachi, Papajichi y Gueguechérare

[401] AHRAN, 23 / 447, Dictámenes, f. 19.

diciendo que él había provocado la reunión de los indios con dos objetos: esperar al ingeniero Carlos Ramírez que mucho los había ayudado para que se les entregara las tierras que les pertenecía y en segundo lugar para hacer una demostración hostil contra los blancos para ver si así obtenían garantías y agregó:

> "queremos la leyes de Benito Juárez este es el único que nos ha dado garantías y que no(s) señaló lo que nos pertenecía nosotros no podemos pelear con ustedes, no tenemos armas y en cambio ustedes tienen muchos cartuchos y muchas carabinas, pero dígame, ¿Es justo que los blancos se cojan lo nuestro, nuestras casas, nuestros animales, nuestras tierras y nos obliguen a trabajar sin pagarnos, nos golppen (sic) y aún abusen de nuestras familias?.- Al decir esto, en la cara del indio se veía la desesperación de la impotencia y gruesas lágrimas surcaron sus mejillas."[402]

La lista de agravios era muy larga, acusaron por igual a presidentes municipales, jueces y caciques de despojo, golpes, amenazas y extorsión; hasta de la imposición de gobernadorcillos para que sirviera a los intereses de los blancos. Después de que manifestaron sus quejas, peticiones y demandas se hacía ineludible que les quedara claro la presencia del Estado como juez supremo y justicialista, así pues se puso de relieve que no podían ni debían hacerse justicia por su propia mano y se les prometió y sentenció "que el Gobierno pondría el remedio y que les invitaba a deponer su actitud hostil, advirtiéndoles que en caso de que ellos siguieran en forma rebelde y trataban de hacerse justicia por su mano, el Gobierno se vería en la penosa necesidad de dominarlos por la fuerza." Los rarámuri prometieron rendir sumisión al gobierno y a conminar a líder San Pedro, quien no acudió a las Conferencias de Creel, a presentarse a las autoridades.

[402] AHRAN, 23 / 447, Dictámenes, f. 19.

La idea de la expulsión de los blancos de los pueblos y rancherías rarámuri no proviene de 1927, es un proceso, ya desde 1919 los escasísimos documentos nos muestran iniciativas y alzamientos sofocados a favor de tal objetivo. Los sucesos de septiembre de 1927 nos dejan ver a José Jaris como la cabeza principal del movimiento y también a su comunidad Norogachi como el centro geográfico. Recordemos que esta comunidad y las aledañas habían sufrido el despojo de las tierras llevada a cabo por la Compañía Asunsolo y Sucesores y de la situación de injusticia descrita por Villalobos en 1919. Todo parece indicar que Jaris también es el líder intelectual y quien inicia o retoma con fuerza la idea de la expulsión de los blancos. El 9 de julio de 1919, poco antes de que Villalobos enviara su carta a Gómez, el jefe de las defensas sociales de Norogachi informaba al presidente del Distrito que: "hace quince días que me dieron en cuenta los indígenas que en varias rancherías de esta sección se preparaban para un levantamiento de tarahumaras en contra de la raza blanca... que los principales jefes de ese levantamiento son Patricio López, Ronda, Aparicio y Pablo todos indígenas, que el plan es exterminar con la raza blanca que habita en esta región."[403]

En ese julio de 1919 los rarámuri que preparaban la rebelión fueron a Guasarachi, Distrito Hidalgo a reclutar gente. El jefe local de las defensas sociales estuvo pendiente del regreso de los cabecillas que ya venían acompañados de más de 50 indios que se les habían unido de diversas rancherías. Cuando se tuvo noticias de que estaban en la región las defensas sociales guiados por los mismos rarámuri salieron no a su encuentro, sino en su persecución y "se logró aprender cuatro indígenas de los que con más empeño reunían maíz y ganado con que abastecer a sus tropas y evitaron que nos pasaran noticias los pacíficos y tomando en consideración la ignorancia de ellos les aplique un pequeño castigo y ofrecieron poner su influencia a fin de someter al orden a todos los

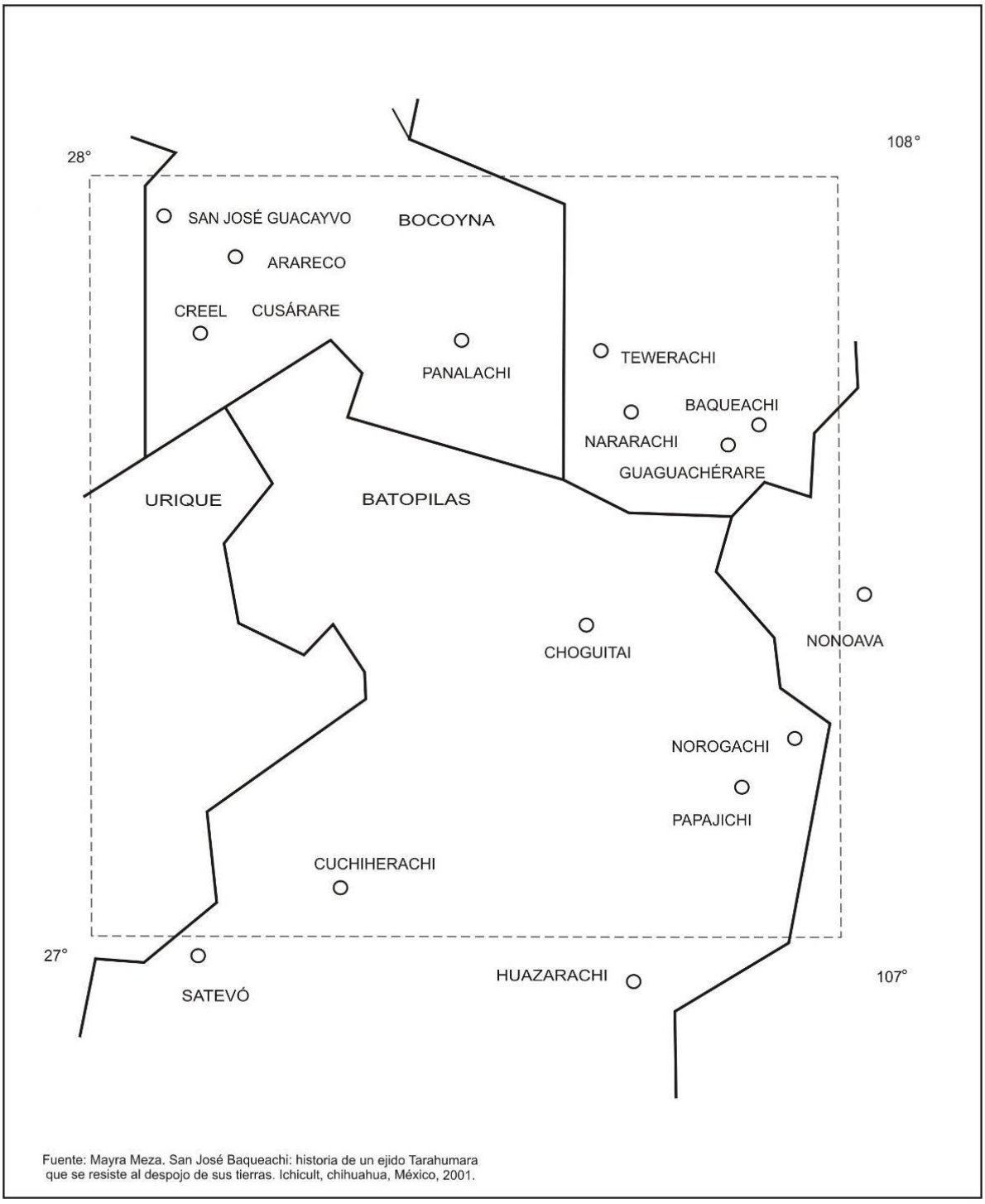
[403] AHMB, caja 166, exp. 18.

sublevados."[404] Los cuatro cabecillas enlistados anteriormente, mencionaba el jefe de las defensas sociales, se habían replegado a la Sierra de Ceguebichi en el Distrito Benito Juárez y a pesar de que algunos rarámuri los esperaban por la región en dos semanas el jefe de las defensas sociales confiaba en que no sería así por haberles aprehendido a sus principales aliados y que ahora estaban de su parte.[405] Aunque Jaris no se menciona en el documento y siendo precisamente de esa comunidad debió haber tenido parte en el movimiento.

La rebelión rarámuri propició que el Estado creara un programa especial para encontrar la solución a los problemas agrarios de la etnia. La agitación, los abusos y atropellos a los rarámuri cuestionaba seriamente la formación del Estado de la posrevolución. La solución se daba por medio de la dotación de ejidos que al final de cuentas resultaba ser una imposición más de la sociedad dominante. A pesar de que muchas comunidades recibieron dotaciones de ejidos ese no era el objetivo primordial de los rarámuri. Todavía en 1928 Patricio Fitzmaurice registraba que el verdadero anhelo de los indígenas era que los blancos se fueran: "La ambición suprema de los tarahumaras, es que ningún blanco viva dentro de su zona. Los títulos los quieren exclusivamente para ese fin. No permitir que el de razón abra una tierra más, ni que tenga un animal y expulsarlo conforme pueda hacerlo, son las ideas dominantes."

[404] AHMB, caja 166, exp. 18.
[405] AHMB, caja 166, exp. 18.

Mapa 1.4.1 Principal área de acción del movimiento armado de José Jaris en 1927



Fuente: Mayra Meza. San José Baqueachi: historia de un ejido Tarahumara que se resiste al despojo de sus tierras. Ichicult, chihuahua, México, 2001.

Fitzmaurice fue comisionado a San José Baqueachi para llevar a cabo uno de los principales ritos de poder del Estado en el proceso de dotación de ejidos a los pueblos que era dar “la posesión definitiva” de las tierras. Definitivamente el derecho natural de los rarámuri a las tierras de la Sierra Tarahumara brota de ser sus habitantes desde antes de la llegada de los blancos. Más este punto no existe en su imaginario social y por lo tanto no se hace presente en su tradición selectiva. El Estado de la posrevolución no reconoce esta fuente de derecho y las expresiones testimoniales indígenas. El dotar de ejidos a los indígenas es más que nada afirmar el poder estatal entre los rarámuri. Al acudir Fitzmaurice a Baqueachi los vecinos de Nonoava, opositores a la dotación, se quejaron de que en la dotación se habían incluido lotes de 500 hectáreas. Pero los lotes mencionados habían sido de los rarámuri. El antecedente era que en 1903 se habían quejado ante el gobierno del Estado por la invasión de las tierras que hacían los vecinos de Nonoava con sus ganados. Aún permanecían las ruinas de los ranchos que habitaron los rarámuri, decía el comisionado, y fueron desalojados por los blancos. Aunque Nonoava, tiene su origen como pueblo rarámuri y para 1862 conservaba este estatus, como lo veremos más adelante, para 1928 era un pueblo mestizo como lo señala Fitzmaurice al afirmar que los de Baqueachi fueron desalojados de los lotes mencionados por los blancos. Por otro lado, decía el comisionado que los blancos tenían entre tres y cuatro años de haberse establecido en el lugar.[1]

Por otra parte, la idea rarámuri de expulsar a los blancos es una utopía que implicaba la misma renuncia del Estado al control del territorio, sus recursos naturales y la propia etnia, hubiera sido como proclamar tácitamente la autonomía territorial étnica. El aspecto racista del estado aflora cuando el mismo comisionado expresa que con respecto a los rarámuri de Baqueachi despojados

[1] AHRAN, 23 / 447, Local, f. 7. Fitzmaurice hizo una visita de inspección a los lotes contenciosos acompañado de los indígenas de ellos solamente cuatro reclamaron su antigua posesión porque los demás posesionarios habían muerto o se habían ido a establecer otros lugares, ibid.

por la gente de Nonoava es justificado el despojo y la presencia blanca argumentando que “debe favorecerse a la población que será el medio principal para cualquier obra de civilización que se quiera emprender y aún para explotar la riqueza de la Sierra de lo que saldrán los recursos con que se procure el mejoramiento de los indios.” Además, decía que los blancos sacarían mejor provecho de la topografía cerril de los lotes que los rarámuri.[2]

La llegada de los blancos a las comunidades rarámuri se daba mediante el despojo de la tierra y además alteraba los procesos culturales internos. Para 1928 había aproximadamente 10 familias de mestizos en Baquechi, según lo expresaba el comisionado, las cuales habían llegado en el año de 1910. Algunos miembros de esas familias venían de Estados Unidos, pero sus familias residían en el lugar o pueblos cercanos. La falta de terrenos de labor en Nonoava y Carichi los había llevado a Baqueachi: “Todos tienen sus parcelas de labor, que han abierto sin perjudicar a nadie, o despojando a los tarahumaras en la forma acostumbrada. La mayoría de las posesiones son bajo esta última forma.”[3]

En la lucha agraria de los rarámuri Benito Juárez es recuperado en la tradición selectiva para enfrentar las amenazas como grupo étnico. Muchos expedientes agrarios hacen mención al indio de Guelatao. Pero la relación no se establece por ser Juárez de origen indio, sino por las disposiciones agrarias que emitió a favor de los rarámuri durante su permanencia en el estado por un poco más de dos años. El papel del ex - presidente es poco conocido en cuanto a la relación que estableció con las etnias en el estado y del impacto de las disposiciones agrarias que emitió en general. En un expediente agrario se mencionaba que Benito Juárez había “reconocido 229 mil hectáreas para los rarámuri de San José

[2] AHRAN, 23 / 447, Local, f. 8. Para Fitzmaurice los blancos explotarían la riqueza de la sierra obteniéndose los recursos para el “mejoramiento de los indios.” Asimismo, no le parecía justo expulsar a nueve blancos para instalar a cuatro tarahumaras, ibid.
[3] AHRAN, 23 / 447, Local, f. 10.

Baqueachi, pero lo data para 1856.[4] Las acciones agrarias de Juárez se dieron a partir de su llegada al estado a finales de 1864. Por otra parte, la ideología liberal en cuanto a la posesión de la tierra era formando la pequeña propiedad individual. La ausencia del sentimiento de la propiedad en el indígena era visto como un lastre para la nación, por eso lo anterior se antoja difícil, pero ante la situación apremiante en cuanto a la defensa de la república y la necesidad de encontrar apoyo, adeptos y recursos tampoco es descartable.

Como sea la presencia de Benito Juárez deja entre los rarámuri profundos significados. Así lo descubrieron Wendell C. Bennet y Robert M. Zingg en su visita a la Tarahumara, quienes realizaron una de las etnografías clásicas de la antropología mexicana. Ellos encontraron que en la comunidad de Samachique Benito Juárez estaba presente no solo en la tradición, sino también como parte de los mitos fundacionales y de interpretación de la realidad. Allí Juárez representaba una especie de semi-santo. La comunidad considera que San José está autorizado para cumplir con algunos planes de Dios en la tierra por intermedio de Benito Juárez, de quien dicen regaló los bastones de mando a los gobernadores. Para los rarámuri de Samachique en los tiempos primitivos se vivía mal ya que no había funcionarios de gobierno. La gente mataba y devoraba a sus propios parientes y sacrificaba niños para bailar el *dutubúri.* Las suplicas de los condenados a ser comidos conmovieron a Dios e intervino para cambiar el orden. Envió a "San José su Cristo" para que mejorara las condiciones de vida, el cual con la ayuda de Benito Juárez instaló el sistema actual.[5]

Uno de los ingenieros de la CNA Patricio Fitzmaurice descubrió que entre los rarámuri de San José Baqueachi la percepción que tenían del Estado estaba vinculada con Benito Juárez:

[4] AHRAN, 23 / 18134, Toca, ff. 239-246.
[5] Wendell C. Bennett y Robert M. Zingg. Los Tarahumaras. Una tribu india del norte de México. INI, México, 1988. pp. 490 - 491.

> "Tienen el concepto del Gobierno como una personalidad desconocida que los ayuda y protege, en algunas partes creen que es un segundo nombre de Benito Juárez, que fue quien les dio ejidos a algunos pueblos y según ellos toda la región donde viven. Son excesivamente respetuosos a todo lo que les manda el "Gobierno". Los blancos que no desaprovechan oportunidad cuando desean obtener alguna cosa o trabajo de ellos y que se resisten; les dicen entonces que es para el "Gobierno", con lo que desaparece la dificultad."[6]

Todavía para 1972 la tradición selectiva de los indígenas de la Sierra recurría a Benito Juárez para enfrentar las adversidades y reclamar justicia. En ese año visitaron al presidente de México Luis Echeverría Álvarez y el gobernador Pascual Ayala del pueblo de Baborigame le expresó que todas las tierras que antes habían sido de los indígenas ahora eran de los blancos y le pedía: "Y ahora queremos que nos haga el favor de ayudarnos; que quede igual otra vez, como me dio don señor Benito Juárez, y las mismas medidas también, y que nos den el título y el plano, una copia. Así estaba anteriormente cuando escribió el señor licenciado Benito Juárez; pero que nosotros no lo conocimos, pero todavía lo oímos y lo respetamos."[7] El surgimiento de una tradición selectiva alrededor del nombre de Benito Juárez fue posible por su estancia en Chihuahua y las disposiciones agrarias que emitió a favor de la etnia.

El siglo XIX es crucial en la formación del Estado mexicano. Después de deshacerse de la tutela de España, las elites encabezadas por el ejército trataron de formar un Estado pero en base a profundas contradicciones. Rechazaron el origen y estatus de su población indígena. Trataron de hacer del país una copia de algún país europeo. La lucha entre caudillos regionales por el poder desgarraba la nueva nación. La guerra de los pasteles, la invasión estadounidense de 1847 y la

[6] AHRAN, 23 / 447. Local, f. 11.
[7] Meza, pp. cit., pp. 85-86.

intervención francesa de 1862 pusieron en crisis la existencia de una nueva nación, pero ganaron para los liberales “el derecho a gobernar.”

Cuando Benito Juárez llegó a Chihuahua por un lado encuentra la lucha que el gobierno del estado libraba contra las incursiones apaches que había constreñido el desarrollo de la economía local. Por otro lado, se vivía la aguda problemática de la opresión, el despojo y los abusos hacia los rarámuri, como lo vivían las etnias del país, producto en gran medida de las disposiciones que los mismos liberales habían fraguado. Era pues necesario tener una entidad pacificada unificando a todos los sectores sociales, hacer la paz con los apaches, satisfacer las demandas de tierras y justicia de las etnias y conseguir los tan necesarios y escasos recursos económicos para sostener la lucha contra los franceses. Los préstamos forzosos que se impuso a cada cantón y la venta de terrenos nacionales mediante la ley de 1863 dieron oxígeno puro al gobierno nacional, pero se convirtieron en una carga fuerte para los habitantes de Chihuahua que si bien muchos estaban dispuestos a sacrificar por la defensa de la república y sea de paso verse beneficiados con tierras, otros no. Los que no estaban de acuerdo no era por falta de patriotismo, sino por una tradición selectiva de relación con el Estado de excepción de impuestos. La venta de terrenos nacionales y la expedición de títulos se realizaron en gran escala que ante la falta de documentos es todavía difícil dimensionar en cuanto a su impacto en la sociedad y en el sistema de tenencia de la tierra. Pero los casos existentes nos dan una visión general en los que apreciamos tanto gratitud como descontento.

El caso de las poblaciones de Nonoava y Humariza, que fueron reducciones de indios rarámuri, empresa jesuita, son muestras de la problemática agraria heredada del virreinato. Al ser expulsados los jesuitas en 1767 las propiedades de las misiones pasaron a poder del rey y más tarde a la nación. El 24 de noviembre de 1734 se expidió título a favor de la misión de Nonoava, naturales y su visita de

22 sitios de ganado mayor en virtud del pago que el misionero Antonio de Yolia hizo de 140 pesos. En el año de 1775 se ventiló entre las autoridades de la época el derecho que los indígenas tenían a los bienes de las extintas misiones jesuitas, ya que "estos los habían adquirido con el sudor y trabajo de aquellos."[8] Así lo alegó el protector de los naturales Francisco Javier del Campo en varios escritos que dirigió a la junta provincial establecida para la enajenación de los bienes expropiados a los misioneros. Muchos pueblos lograron recuperar sus tierras en esta época, pero para otros pueblos de origen misional como Nonoava y Humariza el asunto no se resolvió. Además, los dos casos reflejan en gran medida la problemática agraria que los pueblos indios del estado vivían para la época de la intervención francesa. En el año de 1862 Zoilo Meléndez, como apoderado de los indígenas de las dos poblaciones, presentó los títulos con los que justificaban el reclamo a la tierra. El oficial de la "mesa de terrenos baldíos" estuvo a favor del reclamo y argumentó que la tierra que correspondía a los indígenas no pudo pasar al poder del gobierno aunque estaba en mancomún con los misioneros y que "su derecho ha sido reconocido hasta hoy por las diversas autoridades y gobiernos que ha havido (sic) en el país después de la independencia mexicana." Para el funcionario estaba probado y reconocido el derecho de los indígenas y era necesario averiguar la cantidad de tierra que debían tener. Él mismo convenció a los indígenas y su apoderado de lo tardado y engorroso que sería presentar una demanda para establecer que pertenecía al Estado y que a los indígenas y que debían conformarse con una cantidad de tierra que les asegurara la subsistencia y "los hiciese pequeños propietarios."[9]

Los reclamantes estuvieron de acuerdo en la resolución que tomara el gobierno del estado en base a lo planteado por el oficial de la mesa de terrenos baldíos, quien hizo una propuesta al gobernador del estado para solucionar la cuestión

[8] AHRAN, 276 / 2201, Bienes Comunales (Trabajos Técnicos).

[9] AHRAN, 276 / 2201, Bienes Comunales (Trabajos Técnicos).

agraria de los dos pueblos. El proyecto estaba bajo los lineamientos liberales de la época del fomento a la pequeña propiedad privada individual. Se medirían seis sitios de ganado mayor a los indígenas de Nonoava y dos a los de Humariza “en la circunferencia de los repetidos Pueblos.” Los terrenos se dividirían en lotes iguales según el número de los individuos con derecho. Los terrenos de Nonoava y Humariza no se mezclarían y se sortearían entre los indígenas de cada pueblo. El sorteo representaba un ritual de poder, debía de tener las formalidades y solemnidades legales, es decir, debía estar sancionado por el Estado, para lo cual debían estar presentes el presidente municipal, el juez local, el síndico, el cura párroco, el agrimensor, el apoderado de los indígenas, el gobernador de los indígenas, dos indígenas y dos vecinos nombrados por el presidente municipal. Al terminar el sorteo debía levantarse un acta “en la que se haga constar la legalidad del acto y el número de lote que le tocó a cada individuo.” En seguida se daría posesión de cada lote de lo cual también debía levantarse un acta. A cada nuevo propietario el comisionado de las medidas le entregaría “un pliego de papel del sello tercero” para que lo presentara en la secretaría de gobierno y se le expidiera su título de propiedad. También se expresa en el documento la problemática que se ha apuntado para la época de la reforma agraria de la revolución en cuanto al oprobio hacia los rarámuri, además de la utopía liberal de que al convertir al indígena en un propietario privado de la tierra le traería la prosperidad y la felicidad:

> “Muchos años hace Ciudadano Gobernador que los infelices indígenas son victimas de los hombres de mala fe, y de los tinteretillos, los que para esquilmarlos les promueven denuncios sobre los terrenos que legalmente y con justos títulos les pertenecen: para atajar para siempre la perversidad con que se hacen tales denuncios y para que los indígenas como todos los demás Ciudadanos entren al goce de la propiedad… dará a cada individuo o familia una propiedad que le asegure la subsistencia y entonces exclamará con gusto esto es mío, de mis hijos, de mis descendientes; el trabajo empleado en el

> cultivo me será grato porque me conserva el ser y concervación (sic) de mi familia; ya que no habrá quien me despoje de ella; trabajaré y la tierra que nada producía cultivada, será el manantial de felicidad de mi individuo y de los seres que me rodean… los indígenas que hoy día viven en la miseria serán en lo de adelante unos propietarios."[10]

El gobierno del Estado comisionó a Tomás Irigoyen para realizar los deslindes de las tierras que iniciaron el 18 de junio de 1862 y que poseerían en propiedad privada los indígenas. Las superficies que se destinarían a los indígenas se basaban en las disposiciones de la colección de leyes del estado, así para ejidos se deslindó un cuadro de un sitio y cuarto de ganado mayor dado que la población rebasaba los mil habitantes. Luego se procedió a extender dicho cuadro a siete sitios y un cuarto de ganado mayor, no solo seis como había propuesto el funcionario de la mesa de terrenos baldíos, lo que constituía la superficie total para ejidos y lotes privados de los indígenas de Nonoava. Efectuadas las medidas en Nonoava seguían las de Humariza; a este pueblo se le medirían como ejidos un sitio de ganado mayor más dos sitios para lotes que había acordado el gobierno del estado. Sin embargo, parece que para la época los patrones de asentamiento en los dos pueblos eran diferentes. Nonoava había sido un asentamiento compacto de indígenas que había sido invadido por los mestizos y ahora estaba en vías de convertirse netamente en un pueblo mestizo, mientras que en Humariza los indígenas vivían, como es característico de la gran mayoría de los rarámuri, en rancherías o asentamientos dispersos. Así lo señaló Irigoyen al ver que había indígenas en los alrededores que cultivaban un pedazo de tierra y habían construido su casa, resultaría pues absurdo realizar un sorteo donde muy probablemente a los anteriores les tocaría otro lote y se quedaría sin casa y seguramente con tierras malas. Después de efectuarse las medidas Tomás Irigoyen señalaba que los sitios de ganado mayor deslindados contenían pocas

[10] AHRAN, 276 / 2201, Bienes Comunales (Trabajos Técnicos).

tierras cultivables, además de estar diseminadas. Se determinó que la división en lotes de las tierras perjudicaría a la mayoría de los indígenas ya que si se realizaba el sorteo a unos le tocarían lotes cultivables y a la mayoría terrenos inútiles; así lo hicieron ver los mismos indígenas por medio de su apoderado. Además, aunque Irigoyen no lo apunta, seguramente muchas de las rancherías quedarían fuera de los sitios medidos. Así que Tomás Irigoyen suspendió las adjudicaciones.[11]

Poco después la situación de los rarámuri de Humariza cambiaría con la llegada de Benito Juárez a Chihuahua. En 1977, identificándose como comuneros, escribieron al presidente López Portillo exigiéndole la restitución de 28 762 hectáreas que provenían de la época de Benito Juárez. Lo anterior se debía a que posteriormente, no sabemos en que época, fueron despojados. El gobierno del Estado de la revolución a cargo de Echeverría Álvarez solo les regresó 12 800 hectáreas. Alegaron que Juárez les entregó la cantidad exigida; lo anterior significa que el ex – presidente resolvió la adjudicación de un cuadro de 16 sitios de ganado mayor que seguramente resolvía la mayoría de los problemas que señaló Tomás Irigoyen.[12]

En 1962 los vecinos de Santa Anita del municipio de Batopilas exigían a las instancias agrarias hacer efectiva la entrega de las tierras que como ejidos se les habían dado por mandamiento del gobernador del estado el 22 de noviembre de 1923. Pero también se apoyaban en otro acontecimiento que ahora lo esgrimían para afrontar en presente adverso, buscar justicia y apoyar sus reclamos; decían que las tierras se las había entregado Benito Juárez y que por maniobras de las compañías forestales se había desalojado de esas tierras a muchos indígenas y

[11] AHRAN, 276 / 2201, Bienes Comunales (Trabajos Técnicos).

[12] AHRAN, 276.1 / 2201, Bienes Comunales, (Dictamen).

en la actualidad pretendían desalojar al resto.[13]

Como hemos visto, los títulos que expidió Benito Juárez a los rarámuri no fuero para crear o consolidar formas y expresiones comunales o corporadas de posesión de la tierra como lo haría el estado de la Revolución a partir del ejido. Si bien en un principio se daba el título de propiedad a un grupo social o pueblo, la exigencia era que posteriormente las tierras se dividieran y pasaran a ser propiedad privada individual absoluta, que eran los postulados que los liberales sostenía en cuanto al régimen de la propiedad de la tierra. De allí proviene la contradicción que expresa Jaris cuando mencionado que Juárez les entregó títulos de propiedad tanto ejidal como particular. Sin embargo, no se dieron los resultados que Juárez hubiera esperado; los pueblos beneficiados de esta forma no llevaron cabo la división y titulación y sin quererlo el ex presidente creó un régimen de tenencia corporada que podría clasificársele como de condueñazgo o mancomunidad.

Para la época de la revolución las autoridades agrarias recibieron la protesta de los posesionarios de los predios Barbechitos y Coloradas del municipio de Guadalupe y Calvo porque se había publicado la afectación, el primero por la dotación de ejidos a Nabogame y el segundo a Pino Gordo. Al igual que los indígenas de Humariza se identificaban como una mancomunidad indígena y reiteradamente decían que no querían ser ejidatarios. Fundaban su estatus en “títulos debidamente registrados, otorgados por el C. Don Benito Juárez en el año de 1866.” Consideraban injusta la afectación por ir en contra de sus deseos y porque además había terrenos nacionales para dotar a los pueblos solicitantes sin afectarlos a ellos. Eran una mancomunidad, se concebían como pequeños propietarios y de allí provenía su rotundo rechazo al régimen ejidal.[14]

[13] AHRAN, 23 / 14281, Toca, ff. 52-53.
[14] AHRAN, 23 / 478, Toca, ff. 188-189.

El proceso de crear entre los indígenas pequeños propietarios y sus resultados lo apreciamos en otro documento. En 1908 los indígenas de la comunidad de Dolores del municipio de Guadalupe y Calvo se dirigieron al gobernador de Chihuahua para manifestarle "que por medios injustos y viles se les ha ido despojando de los terrenos." Poco después el jefe municipal, Hilario Nevares, aclaraba al jefe político del Distrito Mina que en "el año de 1866 el C. Benito Juárez… dio orden para que se les midieran los ejidos a este pueblo (Dolores) y se repartieran entre los indígenas… mayores de 18 años de edad, los terrenos cultivables…" En seguida el agrimensor Bernardino García midió y entregó al pueblo un sitio de ganado mayor (1755 hectáreas) y se repartieron las tierras cultivables entre los indígenas. Comentaba Nevares que de 1866 a 1876 los indígenas "quedaron en quieta y pacífica posesión de la suerte de tierra que a cada uno correspondía, pero pasando el tiempo las fueron vendiendo a los vecinos blancos establecidos en el pueblo."

El jefe municipal en plena defensa de los blancos agregaba que no quedaba ni uno de los indígenas agraciados por Juárez en 1866. Despectivamente mencionaba que solo habían de 15 a 20 descendientes de aquellos que se beneficiaron en aquel año, que los demás quejosos no eran vecinos del lugar y que solo acudían "disque" a rezar en la iglesia del pueblo. Para afirmar sus aseveraciones de la venta de las tierras recalcaba que provenían de más de 30 años y que se encontraban cultivadas y muy bien acotadas con cercas de piedra y alambre y plantadas con centenares de árboles de naranjo y de caña de azúcar. Remataba agregando que entre los años de 1881 a 1882 había estado en el pueblo el indígena Miguel Ríos y Carrillo, reconocido en ese tiempo como capitán general de la Baja Tarahumara, quien revisó y aprobó las ventas de los terrenos que habían efectuado los indígenas.[15] Todo lo anterior puede ser cierto, pero ¿bajo qué circunstancias se dio el proceso? Muy probablemente fueron las

[15] AHRAN, 23 / 463, Local, ff. 72-74, expediente de Dolores.

descritas por Guevara unos años más tarde para Papajichi y que vimos anteriormente. Por otra parte, si los indígenas pudieron vender sus parcelas era por el régimen de propiedad privada en que se los había reconocido Juárez. En este caso no se conformó una mancomunidad.

Salvo el caso anterior, los únicos predios que en realidad se convirtieron en propiedad privada fueron aquellos que se denunciaron como baldíos. Los terrenos que se clasificaron bajo este estatus significaban la entrada de los tan necesarios e importantes ingresos al gobierno juarista. Fueron vendidos a particulares y los ingresos significaron la supervivencia de la república. En un título de propiedad dado por Juárez se mencionaba que estando declarada por varias leyes y especialmente la del 2 de julio de 1863 que los terrenos baldíos pertenecen a la nación era conveniente y ventajoso para la población que los terrenos se reduzcan a propiedad particular. Para hacer fácil y expedita su venta el gobierno juarista decretó la ley mencionada. El título referido se expidió en agosto de 1866 para José Escontrias e Ignacio Moreno, quienes denunciaron medio sitio de ganado mayor en el municipio de Carichi y habiendo efectuado previamente su pago.[16]

Muchos de los pueblos rarámuri que recibieron títulos de Benito Juárez no los conservaron y ahora solo está presente en su memoria histórica y asumía, cuando trataban de utilizarla para afirmar o reclamar sus tierras, forma de tradición selectiva. Sobre todo los pueblos indios no tenían la cultura del papel para justificar la posesión de la tierra. En primer lugar no tenían que dar cuenta a nadie de ellas, las habían ganado guerreando con otros pueblos y así las habían sostenido contra otros grupos desde tiempos ancestrales. La fuente de su derecho no derivaba del Estado sino del propio grupo, por eso el título es simplemente un papel sin valor, no simboliza algo, pero para el Estado es la pieza y símbolo fundamental sobre el cual basa su reconocimiento por los usuarios de la tierra. Los

[16] AHRAN, 23 / 415, Local, ff. 91-92, expediente de Dolores.

indígenas no conservan esos papeles como fuente de derecho de las tierras porque no tienen para ellos ningún sentido. Por ello el Estado se empeña en que reconozcan e interioricen los símbolos referentes al reconocimiento de la propiedad, de la posesión de la tierra como un derecho otorgado por el Estado, lo cual se da mediante los títulos.

El Estado no reconoce el derecho natural de ocupación de la tierra por los grupos étnicos, no da crédito a su testimonio en cuanto a la posesión de la tierra; en primer lugar porque no tienen papeles que lo acrediten, o mejor dicho que reconozcan al Estado y en segundo lugar porque el Estado mexicano ha sido profundamente racista. Los sectores rurales que el Estado ha clasificado como campesinos no se les ha reconocido capacidad productiva, en la categoría mencionada entran mestizos e indígenas, donde los segundos ocupan el último lugar de la escala racista del Estado. Por eso también el Estado no reconoce el testimonio de los pueblos indios como fuente de posesión de la tierra, porque sería dejar en manos "incapaces" grandes cantidades de recursos naturales, como lo es, en el caso de los rarámuri, la riqueza forestal de la Sierra Tarahumara. El aspecto racista generalmente ha sido parte del discurso oculto del Estado, aunque muchas veces se ha expresado públicamente.

La comunidad rarámuri de Tehuerichi había sido dotada de ejidos en 1937, pero para 1953 pedían se les adjudicaran tierras que habían estado en su posesión. Las autoridades agrarias les respondieron a través de su representante que: "la petición que hacen para que se les reconozcan superficies que afirman sus representados, les dio el C. Lic. Don Benito Juárez, como Presidente de la República, no pude ser atendida porque nunca han podido encontrase los documentos que acrediten sus aseveraciones y por ello, se les ha concedido DOTACIÓN de tierras."[17]

[17] AHRAN, 23 / 8686, Toca, f. 81, expediente de Tehuerichi.

Por su parte los rarámuri de Sisoguichi se encontraban en la misma situación que los de Tehuerichi. El 24 de marzo de 1921 enviaron al gobernador del estado una carta solicitando la restitución de tres sitios de ganado mayor. Señalaron que en los años de 1865 y 1866 se los había adjudicado el presidente Benito Juárez en el predio que lleva por nombre Huerinima. A pesar de las muchas gestiones que habían hecho nuca se les había deslindado el terreno y poco a poco los habían ido despojando por denuncios o por personas influyentes a pesar de sus protestas. Pusieron de ejemplo el predio Sopechichi enclavado en los tres sitios que se le adjudicó a un personaje de nombre Cipriano González, quien después lo traspasó a Juan F. Treviño. Sin embargo, aquí se presentó un caso raro y excepcional ya que este último entró en arreglos con el gobernador del estado y reintegró a los rarámuri el terreno. Pero había otros casos de despojo y denunciaban que otras personas hacían uso de las maderas sin percibir ellos ningún beneficio.[18]

El 4 de agosto de 1921 enviaron una carta al presidente de la república diciendo que eran dueños legítimos del predio Huerinima de tres sitios de ganado mayor que Benito Juárez les "donó" en el año de 1866. Pero también afirmaban que sus padres "ya vivían en estos terrenos, en pasifica (sic) posesión, sin que nadie los molestara." Sisoguichi es el único caso que hace referencia al derecho natural a la tierra por su prolongada y pacífica posesión. No habían sido molestados en su posesión hasta que la Timber Land realizó los deslindes de las tierras y se presentaron ante los rarámuri diciendo que esas tierras pertenecían a la compañía ya que se las había vendido el gobierno. Los indígenas simplemente fueron ignorados. Tomando elementos de la legislación del Estado se quejaron de no haber tenido conocimiento de la venta ni haberse tomado en cuenta su conformidad que por requisito de ley debía recogerse como afectados o colindantes. Por su parte, la compañía pretendía relocalizar a los indígenas sin siquiera darles la prerrogativa de escoger las tierras; decían los rarámuri que

[18] AHRAN, 23 / 488, Local, f. 2, expediente de Sisoguichi.

quería aprovecharse de lo mejor de sus terrenos, donde habían construido sus viviendas, y darles otros inservibles. Pedían que se deslindaran sus tres sitios de ganado mayor. Seguían apelando a su derecho de vivir en el lugar con más antigüedad y aún más estaban dispuestos a pagarlos: “no creemos de justicia, que por el capricho de una Cia, que nunca a vivido por aquí, se nos localisen (sic) nuestros terrenos, fuera de lo que es realmente, pues si el Gobierno ya no quiere sedernos (sic) el terreno aludido, que nos donara el C. Presidente Dn. Benito Juárez, nos encontramos en la mejor disposición de pagarlo, al presio (sic) que lo adquirió la espresada (sic) Cia.”

El documento fue turnado a la CNA y en su margen se escribió que se les comunicara a los rarámuri que de acuerdo a los requisitos de la ley de 6 de enero solicitaran al gobernador del estado restitución de tierras y que se les mandara un ejemplar de dicha ley.[19] Los rarámuri ya habían solicitado restitución como vimos arriba.

Para septiembre de 1924 nuevamente se dirigieron al presidente de la república, a través de su representante Eligio Fierro, para quejarse de que el gobierno del estado, sin más derecho que la fuerza daba en arrendamiento los bosques ubicados en su propiedad. Su principal preocupación era que el bosque estaba siendo arrasado y que traería como consecuencia tierras faltas de humedad y estériles. Los rarámuri pidieron que cancelara el permiso y contrato que habían dado a Zacarías Gómez para explotar el bosque. Recibieron por respuesta que no podían acceder a sus peticiones, pero en cambio cuando ellos solicitaron cortar árboles se les dijo que lo solicitaran por conducto del inspector de municipios. Consideraban el predio como una propiedad y decían que no habían encontrado garantías en el gobierno del estado por eso recurrían al presidente en busca de ellas.

[19] AHRAN, 23 / 488, Local, f. 1, expediente de Sisoguichi.

Nuevamente argumentaban que su propiedad fue legalizada por disposición del presidente Benito Juárez el 24 de agosto de 1866. Tenían una copia certificada del acuerdo firmado por José María Iglesias, donde se acordó darles tres sitios de ganado mayor. Gran parte de su propia justificación de la posesión iba en torno a esa disposición, pero también recuperan otro elemento que incorporan a su tradición selectiva que es la posesión desde tiempos remotos del lugar: "Pues bien los terrenos mencionados pertenecen a los INDIGENAS, tanto por derecho de posesión como por disposición Presidencial y por ser la raza que desde hace muchos siglos habita esta parte del PAÍS correspondiendo así la propiedad de los terrenos por derecho natural."[20]

En diciembre de 1925 el director de la instancia agraria denominada de aguas, tierras y colonización informó a la dirección forestal que el 27 de agosto de 1925 el inspector forestal había dado posesión a los indígenas del tercer sitio de Huerínima en virtud de que fue concedido a los rarámuri por Benito Juárez desde agosto de 1865. La compañía maderera, que había estado explotando el predio, la Chihuahua Timber Land, se opuso alegando que la propiedad le pertenecía y presentó sus títulos. El director de tierras, aguas y colonización expresaba que el título de la compañía era relativamente reciente y que en él se expresaba que deberían respetarse los predios concedidos a los indígenas. La opinión del director de esa oficina era de que se autorizara a los indígenas la explotación del bosque mientras se deslindaban las tierras, lo cual fue aceptado. Pero la compañía maderera presentó oposición y en noviembre de ese mismo año Eligio Fierro, el representante de los indígenas, solicitaba a la agencia forestal que no se suspendieran los cortes de madera. La suspensión se debía a que la Compañía había solicitado a la Secretaría de Agricultura y Fomento se deslindara el predio

[20] AHRAN, 23 / 488, Local, f. 8, expediente de Sisoguichi. También pedían al presidente de la república que se respetara su propiedad, pero también la de todos los indígenas y que no fuera el gobierno del estado el que celebrara contratos para la explotación de su bosque. La carta fue turnada a la CNA y se le pidió al gobernador informara sobre el asunto. Ibid, f. 9.

Chihuahua Timber Land Co. La propuesta fue aceptada bajo tres condiciones 1.- Los gastos los compartirían la federación y la compañía en un 50 %; 2.- Se respetaría la posesión del tercer sitio de Huenirima según lo había localizado la comisión deslindadora de la secretaría que operó en 1922; 3.- Si resultara una superficie menor a la marcada en los títulos por invasiones o porque los predios interiores resultaran mayores o por compensaciones que tuvieran que hacerse a estos mismos, la secretaría completaría el faltante con terrenos del predio Calabazas. Al comenzarse los deslindes se suspendería el permiso concedido a los rarámuri para explotación forestal.

Era una propuesta que parecía beneficiosa para los indígenas, pero desde el momento en que no los tomaba en cuenta se convertía en un abuso más. De hecho, aún antes de que la empresa contestara se suspendieron los cortes a los rarámuri. Pero no hubo respuesta por parte de la empresa por lo que se ordenó se levantara la suspensión de la explotación forestal.[21]

La actividad que desplegó Benito Juárez en cuanto a los rarámuri provocaron que lo hicieran parte de su tradición selectiva. Sobre todo en el aspecto de la posesión de la tierra, muchos pueblos indios recibieron títulos de las tierras que trabajaban, lo que significó para ellos un acto de justicia. Posteriormente, en los pueblos donde esa posesión fue amenazada y aquellos pueblos despojados recurrieron a un pasado significativo, favorable para enfrentar un presente adverso.

[21] AHRAN, 23 / 488, Local, ff. 156 – 158, expediente de Sisoguichi. Por otra parte, en 1922 operaba la Comisión Deslindadora que estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura y Fomento y que deslindó el predio de Guerinima, la propiedad que los rarámuri decían les había concedido Benito Juárez quedó en el Tercer Sitio según los planos de los deslindes de la Comisión. Ibid, ff. 152 – 155. Más tarde la CNA conformaría la Comisión Deslindadora de la Alta y Baja Tarhumara. Huerinima se encuentra a 25 kilómetros al norte de Sisoguchi,; cuando la CNA efectuó el censo agrario incluyó a los indígenas de los dos lugares en un solo. El error requirió que se realizara un nuevo censo. Según el mandamiento del gobernador los dos asentamientos recibieron por separado los ejidos. Ibid, ff. 184-189.

Benito Juárez también expidió títulos de propiedad en forma individual a los indígenas. En 1936 Fabián Encinas, en defensa de su propiedad, expresaba pertenecer a la "raza indígena" y ser dueño de un predio rústico denominado el Triguito, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en virtud de poseer título expedido por Benito Juárez. Encinas había dado en arrendamiento parte de su propiedad pero el presidente del CPA de Santa Rosalía había impedido que se cultivara. [22]

En 1958 el indígena Jesús Armendáriz se quejaba de que los ejidatarios de Tehuerichi trataban de invadir la propiedad de su madre llamada Rancho de Arriba ubicada en la sección de Temeychi del municipio de Guerrero. El indígena a nombre de su madre y dos hermanos pedía garantía para la propiedad y expresaba que el título lo había expedido Benito Juárez con una extensión de 8 almudes.[23]

La Comisión Deslindadora de la Alta y Baja Tarahumara

Uno de los grandes problemas del Estado era cómo poder explotar la enorme riqueza forestal y mineral de la Sierra Tarahumara. El primer gran obstáculo era la falta de vías de comunicación en una topografía accidentada que hacía que la inversión en caminos fuera excesivamente alta. Otro de los grandes problemas era la presencia de los rarámuri y sus reclamos de tierras, justicia social y expulsión de los blancos de sus territorios. El carácter justicialista y paternalista, pero también racista del Estado de la revolución no podía cerrar los ojos ante los reclamos de los rarámuri, pero tampoco podía dejar en sus manos los recursos naturales. Para dar cuenta del asunto agrario la CNA creó la Comisión

[22] AHRAN, 23 / 478, Local, ff. 296-297, expediente de Santa Rosalía de Navogame.
[23] AHRAN, 23 / 8686, Local, f. 43, expediente de Tehuerichi. La propiedad fue titulada por Benito Juárez al abuelo del quejoso Gumecindo Armendáriz, quien la paso a su hijo Ignacio Armendáriz y finalmente quedó en posesión de Monserrat González, madre del quejoso.

Deslindadora de la Alta y Baja Tarahumara (en adelante CDT). Para 1926 esta comisión ya estaba en funcionamiento y se componía por Carlos Ramírez, Federico Bideau, Armando Ortiz, Florencio Palomo, Patricio Fitzmaurice, Roberto Ortiz y Román Ayluardo. El primero era el jefe y había logrado ganar plenamente la confianza de Patricio Jaris, ya que en la rebelión de abril de 1927 comentó que se habían levantado para expulsar a los blancos y esperaban a Carlos Ramírez. El primer asunto que tuvo claro esta comisión era que el proyecto y las leyes agrarias del régimen de la posrevolución eran inaplicables a la realidad social y topográfica de la Tarahumara. Había que hacer modificaciones técnicas a ese proyecto, pero su fondo seguiría siendo el mismo: el control social y territorial.

A finales de 1926 la comisión se empeñaba en convencer a las autoridades de la CNA que la dotación de ejidos en la Tarahumara tenía que seguir otros patrones para solucionar lo que ellos llamaban el "problema agrario." La comisión tenía la propuesta de que se dotara de una extensión más amplia a las comunidades rarámuri para que quedaran incluidas todas las dispersas rancherías a partir del centro geográfico que ellos reconocían y que era la iglesia. Florencio Palomo propuso a los otros dos comisionados que llevaran una delegación de rarámuri, entre los que se encontraba Patricio Jaris, a la ciudad de México para que "el Gobierno Federal se diera cuenta de la importancia de la resolución del problema Agrario" en la Tarahumara. Los rarámuri liderados por Jaris asintieron a la Secretaría de Agricultura y Fomento y de Educación Pública donde se les ofreció que les arreglarían sus asuntos. Al año siguiente los ingenieros regresaron a la Tarahumara.[24]

Los deslindes que la CDT había realizado en 1926 involucraban una región llena de profundas contradicciones y conflictos; allí se ubicaban los pueblos que habían tenido mucha actividad en el levantamiento de septiembre de 1927; era la principal

[24] AHRAN, 23 / 498, Toca, ff. 88-90.

zona de influencia de Jaris; y allí se ubicaba la compañía latifundista Asunsolo Sucesores. El proyecto que tenían los miembros de la CDT obtuvo el apoyo definitivo del Estado a partir de las revueltas de 1927. Pero no se trataba de un acto de justicia social, sino del proceso de formación del mismo Estado.

Los sucesos de la Tarahumara se habían dado y se daban más por la ausencia y falta de control del propio Estado que por la lucha entre el rarámuri y el mestizo. Había que hacer y tener una presencia fuerte y efectiva, pero eso no se lograría mediante la fuerza armada, la misma presencia militar podía exacerbar los conflictos de la región. La forma más efectiva era el ejido: lograr que los supuestos beneficiarios reconozcan y obedezcan al Estado mediante mecanismos de aparente reivindicación territorial y justicia social.

La propuesta de la CDT hacía evidente la inoperatividad de las disposiciones jurídicas del Estado en el asunto agrario regional. Al no existir abundantes tierras agrícolas, la topografía accidentada y la consecuente dispersión de los rarámuri en ranchos hacían que la disposición de ley de dar 48 hectáreas por beneficiario, lo que llamaban parcela-tipo, se quedara corta. Patricio Fizmaurice como principal artífice de este proyecto decía que los rarámuri se encontraban desparramados en un área de 6 millones de hectáreas en lo más intrincado y abrupto de la serranía; aún cuando se dotaran a los aproximadamente 200 pueblos que se calculaba que existían mencionaba, el comisionado, que se estudió la conveniencia de fijar una extensión que abarcara alrededor de 2 500 000 hectáreas. Tres objetivos principales mencionaba Fitzmaurice y evidenciaban la débil presencia del Estado: 1.- Una vez delimitado el territorio tarahumara frenar el despojo de tierra por parte de los blancos, 2.- Crear una zona forestal que fuera explotada en beneficio de los rarámuri, 3.- “Buscar la incorporación de la tribu a la civilización y al control del gobierno, con la ayuda de las autoridades locales.” [25] El proyecto está pensado en

[25] Vease Meza, op. cit., pp. 89-92.

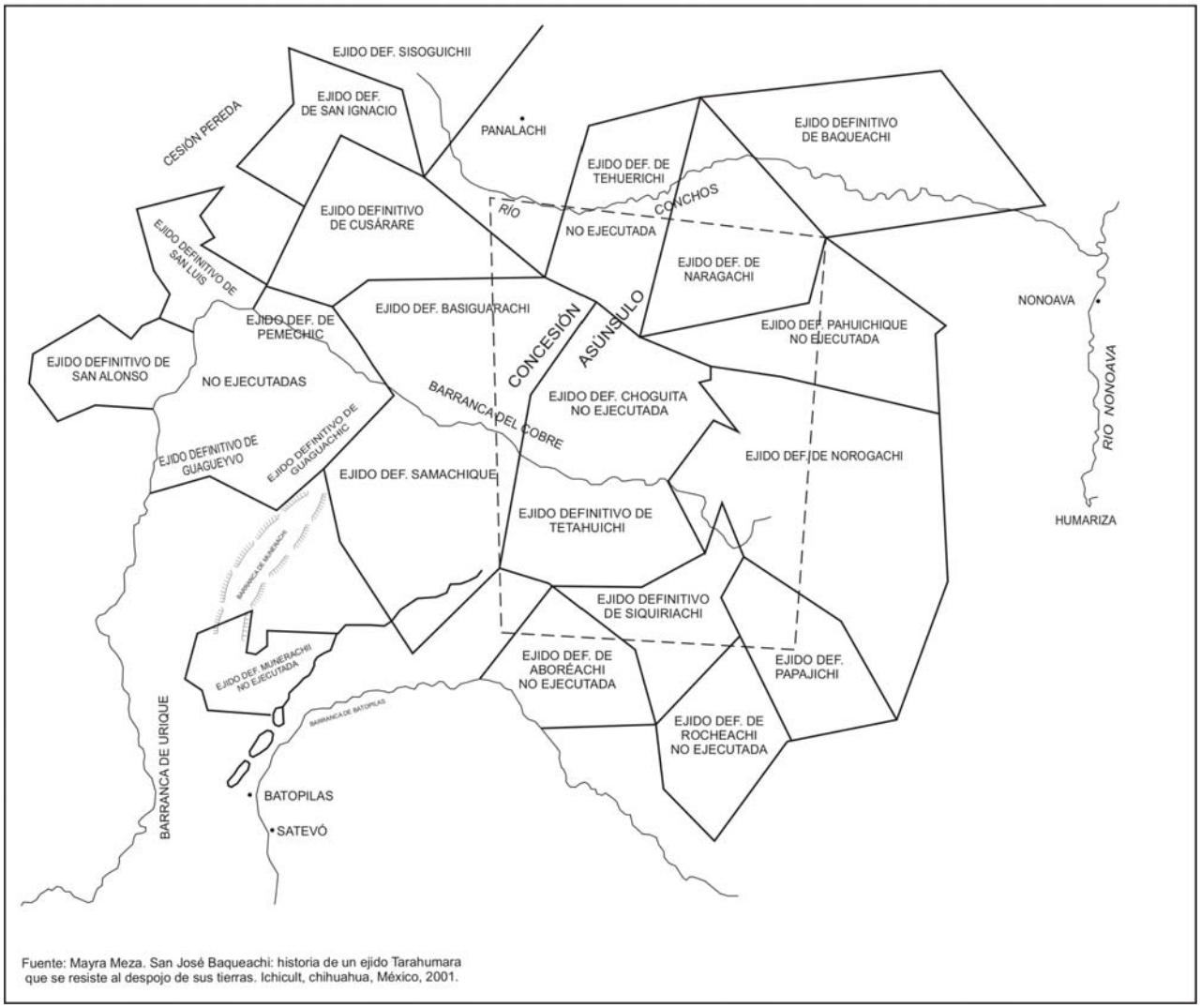
función de la explotación de los macizos forestales de la sierra. Para ello proponía la creación de un banco ejidal que regentearía el negocio. Además, en su estructura estaría una comisión que regularía los permisos para la extracción de madera. Los beneficios serían para los rarámuri a los que se les daría maíz a cambio de construir caminos. Al final de cuentas la explotación sería manejada por los blancos y los rarámuri serían la deseada mano de obra barata para poder extraer la riqueza forestal de la sierra. Aunque se delimitara la extensión señalada se contemplaba dejar a los blancos auque tuviera poco tiempo de avecindados. Para ello se proponía respetar propiedades hasta de 1440 hectáreas que tuvieran sus títulos y posesiones no mayores de 300 de más de 10 años.

Sin embargo, el asunto de la delimitación de las 2 500 000 hectáreas no se llevaría a cabo; cada comunidad sería dotada de ejidos con una extensión amplia a diferencia del común de las dotaciones en el país. Para San José Baqueachi el mandamiento del gobernador había apuntado 7200 hectáreas de dotación, pero la resolución presidencial señaló 44 784 hectáreas para 170 individuos. El área que debía de respetarse como propiedad privada se elevó a 2 mil hectáreas. Aún así se preveía un conflicto al querer hacerse la entrega definitiva de los ejidos. Fitzmaurice solicitó al gobernador le proporcionara tres carabinas argumentando que Baqueachi colindaba con zona habitada con la población blanca y que teniendo entre sus habitantes muchos hombres que habían sido soldados, era el pueblo que más reaccionaba contra los abusos de los blancos. En palabras del comisionado era allí donde se habían dado más represalias y muertes por el anterior motivo teniendo que intervenir en varias ocasiones la autoridad municipal y del estado además de la presencia de las fuerzas federales en dos ocasiones. Planteado así el asunto mejor se envió al capitán Catarino Calderón con diez hombres para apoyarlo en caso de algún percance. [26]

[26] Meza, op. cit., p. 92.

Ante la gran dificultad que representaba el rechazo del indígena al blanco por los abusos que se cometían, se presentaba el gran problema de la conformación de los ejidos y su nuevo aparato administrativo. Para el Estado el asunto de reubicar a los blancos era descartable; así los blancos se convertían en este caso en los reproductores de las formas de control estatal. Eran la primera vía para que los indígenas conocieran y asimilaran los símbolos de la dominación. Una de las posibles soluciones que se planteaban era que las posesiones de los blancos quedaran como propiedades privadas, pero ante lo poco propicio de las tierras para agricultura y ganadería no les era conveniente.

Mapa 1.4.2 Plano elaborado por la comisión deslindadora de la Alta y Baja Tarahumara entre 1926 y 1927



Fuente: Mayra Meza. San José Baqueachi: historia de un ejido Tarahumara que se resiste al despojo de sus tierras. Ichicult, chihuahua, México, 2001.

Cuando Fizmaurice acudió a San José Baqueachi a dar la posesión definitiva del ejido se dio a los blancos la opción de quedar como dueños de 300 hectáreas o quedar como ejidatarios. Por unanimidad prefirieron la segunda opción ya que sabían bien que esa superficie no alcanzaría para suplir todas sus necesidades. Era difícil localizar 300 hectáreas con lotes de cultivo, pastos y montes suficientes. Aunque se les pidió que expresaran su decisión en un acta, se negaron a hacerlo hasta que la CNA resolviera cuál sería su situación con respecto a los rarámuri. El comisionado manifestaba que al hacerse la elección de los comités que debían administrar los ejidos siempre habría problema indistintamente del bando en que recayera. Como los rarámuri eran mayoría serían los directivos del ejido y querrían expulsar a los blancos. Por su parte estos últimos encontrarían el medio propicio para subyugar a los indígenas. Ante tal situación el comisionado tenía una solución salomónica: "que los ejidatarios blancos no dependan de los Comités tarahumaras; sino que dependan directamente de la Delegación de Aprovechamiento de Ejidos o de la Junta de Administración Tarahumara y que mientras no sea en detrimento de alguien, se les de toda clase de facilidades para cultivar la tierra y criar ganado, aunque sea sobregirando las pretensiones de los indios."[27] Contradictoria la propuesta ya que primero decía que no se perjudicara a alguien, pero si se hacía con los rarámuri no importaba. A segundo plano pasaban las aspiraciones de los indígenas y aparte de la imposición que se hacía del ejido también se les obligaría a aceptar en las tierras que antes les pertenecieron a los blancos por ser el medio de "civilización", pero más que nada la vía primaria de llevar las formas de dominación del Estado.

Mientras discurrían los trabajos de la CDT los blancos les aseguraban a los indígenas que no se les entregarían los ejidos; la presencia de personal de la Comisión Nacional de Irrigación creaba incertidumbre en los rarámuri y parecía corroborar las afirmaciones de los blancos. Lo anterior generaba mucha

[27] AHRAN, 23 / 447, Local, ff. 7-16.

intranquilidad en la región por lo que en el mes de junio de 1928 se dio una segunda reunión en el pueblo de Creel, esta vez con los miembros de la CDT, a la que asistieron representantes de muchos pueblos de la sierra (la hemos llamado Segunda Conferencia de Creel, la primera se realizó en 1927 como vimos). Los indígenas plantearon claramente que no creían en el reparto agrario y que si se llegaba a dar sería un arma importante para expulsar a los blancos de sus tierras. En la Segunda Conferencia de Creel se acordó que los rarámuri acudirían a la entrega de los ejidos de Baqueachi y así comprobarlo con sus propios ojos. Fitzmaurice esperaba la asistencia de hasta mil quinientos rarámuri para atestiguar el hecho. Fue entonces que se presentaron los vecinos de Nonoava, que vimos anteriormente, a reclamar derechos sobre lotes de los cuales habían desalojado a los indígenas, además de reclamar la invasión de su territorio por los ejidos de Baqueachi siendo el primer ejido dotado bajo las líneas que la CDT proyectó, pero el área de 2 500 000 hectáreas que se proponía no se realizó.[28]

Habían cejado en su idea de que se desalojara a los blancos de la región, pero sí pedían que los desterraran de su pueblo:

> "Pedimos que de nuestro poblado se expulse a todos los blancos porque materialmente no nos dejan trabajar, pues nos molestan demasiado y tampoco solicitamos carabinas para defendernos porque no nos gusta pelear por ese motivo cuando vemos que la ayuda de nuestras autoridades puede facilitarnos los medios de liberarnos de nuestros opresores."
>
> "Queremos que se gestione un Profesor más, pero que no de la raza blanca, sino algún tarahumara que vaya entre con nosotros para que él conociendo las necesidades del medio en que se crió impulse la educación nuestra y de nuestros hijos, futuros directores de nuestra Colonia"

[28] Meza, op. cit., pp. 94-95.

La presencia de los blancos en el pueblo ya dejaba ver la fractura que en la misma comunidad se veía pues solicitaban que se les unificara porque algunos miembros de la "colonia" tenían en algunas ocasiones la necesidad de "venderse a los blancos" y así se convertían en enemigos de su mismo pueblo, a veces en contra de su voluntad. José Jaris era todavía reconocido como la máxima autoridad entre los rarámuri y como al que únicamente obedecían en la región y como todo su tiempo lo invertía en la organización y gestión comunitaria pedían que se le diera una remuneración de 1 peso diario.

A pesar de haber recibido en dotación las 44 784 hectáreas no estaban conformes y la actualización de la figura de Juárez se seguía dando en sus reclamos a una mayor cantidad de tierra: "Que el número aproximado de agraristas en el poblado es como de quinientos y todos poseemos terrenos, pero no estamos conformes con la superficie que cada quien tiene, sino que necesitamos pase un Ingeniero al poblado a darnos la posesión de los terrenos tal como lo Decretó el Sr. Lic. Benito Juárez Presidente de la República."[29]

El caso de Sisoguchi da cuenta de la aplicación de los nuevos conceptos agrarios que estaban presentes antes de que llegara la CDT pero que cristalizaron con ella para un grupo étnico disperso como los rarámuri. El 17 de septiembre de 1926 el gobernador emitió su mandamiento o acuerdo para dotación de ejidos a Sisoguichi. En los antecedentes se asentó que la petición de restitución la basaban los rarámuri en la donación que les había dado Benito Juárez en 1865. Pero la petición de restitución la hacía una parte de los vecinos de Sisoguichi sobre el predio llamado Huerinima ubicado a 25 kilometros de Sisoguichi, predio que había concedido o vendido Juárez a los rarámuri. Cuando el ingeniero comisionado acudió para realizar los registros propios del proceso que realizaba el Estado, el llamado censo agropecuario incluyó a los vecinos de los predios de

[29] AHRAN, 23 / 498, Toca, f. 72.

Sisoguichi y Huerinima. Pero, se tuvo que realizar de nuevo el conteo dado que en el mandamiento se especificaba que eran comunidades separadas. Los resultados arrojaron que había en Sisoguichi 590 habitantes, 144 familias y 168 individuos con derecho a dotación; mientras que en Huerinima había 107 habitantes y 21 familias.

Para Sisoguichi se determinó que había 139 pequeños propietarios que ocupaban parcelas muy reducidas que les fueron adjudicadas en "el repartimiento de tierras" que se dio a los rarámuri del lugar, efectuada por el gobierno del estado en el año de 1865. Según las hijuelas que mostraron los indígenas se le había dado a cada uno 8 almudes de sembradura. En el mandamiento se especificó que ya teniendo Huerinima reconocida su posesión según los deslindes practicados por la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1922 restaba resolver el asunto de Sisoguichi, según solicitud que habían hecho el 13 de julio de 1921. Dado que ya tenían 1755 hectáreas, que por no tener títulos se les había medido, parece que también se los deslindó la Secretaría de Agricultura y Fomento en 1922, y que la calidad de los terrenos eran malos, pero sobre todo porque la mayoría de las rancherías habían quedado fuera del sitio de ganado mayor debía aplicarse las disposiciones de los artículos noveno y onceavo del reglamento agrario para asignarles la máxima extensión de tierras a cada individuo, o sea de 48 hectáreas. Entonces solo restaba dotarles de 6308 para un total de 8074. Ya que en 1865 les habían adjudicado pequeñas parcelas procedía confirmarles sus derechos sobre ellas, las cuales serían la base para la aplicación del patrimonio ejidal.[30] Confirmarles significaba pues que ellos reconocieran al Estado como la única fuente del derecho y garante de las parcelas que trabajaban.

Muchas comunidades rarámuri fueron dotadas de ejidos, lo que posibilitó que no siguieran siendo desplazados por los blancos, pero no pudieron desalojarlos de

[30] AHRAN, 23 / 488, Local, ff. 184-189, expediente de Sisoguichi.

sus territorios ni impedir que siguieran llegando. Tampoco pudieron apropiarse del proceso de explotación forestal que quedó en manos de los empresarios y capitalistas blancos. Al fin de cuentas lo que les quedaba era su propia fuerza de trabajo que los industriales compraban muy barata. Todavía para 1935 José Jaris se encontraba luchando por el bienestar y justicia hacia los rarámuri. Jesús Núñez y José María junto con Jaris, identificándose como ejidatarios de Norogachi, escribieron al jefe del DA quejándose de que las guardias blancas de las rancherías cercanas a su pueblo no los dejaban trabajar sus propias tierras. Añadían que eran alrededor de 500 agraristas pero que seguían siendo objeto de explotación por los blancos, aún siendo poseedores de los terrenos, y no sabían defenderse porque el 99% de ellos no hablaba español y pedían que el DA les diera "amplias garantías para que podamos vivir contentos." Ahora la imagen del Estado era la del DA. Asimismo solicitaban un profesor para abrir una escuela; se les orientara para formar una cooperativa y establecer una tienda de consumo exclusiva de los rarámuri; alambre para poner un teléfono, ellos ponían la postería; pedían ropa y un comedor público para los niños; un molino de nixtamal para explotarlo en la comunidad.[31]

La resolución presidencial se preparó el 27 de febrero de 1929 y el 7 de marzo se firmó, cuando ya se tenía el antecedente y los efectos de la rebelión rarámuri de 1927. La dotación se condicionó según la accidentada topografía y la dispersión de los asentamientos rarámuri. Aunque previamente en el mandamiento del gobernador se había señalado lo anterior, la ley resultó ser un molde impasable. En la resolución presidencial se citó un informe de Patricio Fizmaurice que hacía ver que se requería dotaciones mucho más grandes. Las 48 hectáreas se quedaban cortas, para Fitzmaurice se requerían al menos 300 hectáreas para

[31] AHRAN, 23 / 498, Toca, ff. 72-73. Dotación a Norogachi. También solicitaron que se hicieran las gestiones necesarias para que se les pagara el salario mínimo de la región a los que trabajaban en la construcción de carreteras ya que se les daba solo 30 centavos diarios. Que se les diera una constancia para comprobar con los miembros de su "Colonia" su presencia en el DA.

cada individuo. La reforma agraria iba contra el derecho natural de los indígenas al no reconocerles su posesión desde antes de la llegada de los españoles y por los gobiernos anteriores. En el resultado tercero se asentó que no procedió la restitución ya que los rarámuri no presentaron los documentos necesarios para justificarla. Las contradicciones e incongruencias de lo anterior se dejan ver en la propia resolución: "la tribu tarahumara, tribu a la que en rigor debería restituírsele los terrenos que les corresponden, pero por carecer de títulos primordiales, a pesar de su posesión indiscutible, y por no llenar los requisitos de que habla la Ley, del 6 de enero de 1915 y artículo 27 Constitucional, deben dársele los terrenos conforme a dicho precepto por dotación."

A final de cuentas se incluyó a Sisoguichi y a Huenirima como un solo pueblo, se les reconoció cuatro sitios de ganado mayor, 7 024 hectáreas y se le dotó con 14 384 para un total de 21 408.[32] En agosto de 1930 Patricio Fitzmaurice acudió a dar cumplimiento al gran rito de entrega definitiva. Se reunieron 63 vecinos, se les leyó la resolución presidencial como si se hiciera lectura de un evangelio; acto seguido se procedió a identificar las tierras para lo cual se dirigieron al cerro de Cusárare y desde su cúspide avizoraron todos los demás puntos que conformaron los vértices del ejido; con el plano en la mano, aprobado por la CNA, se les explicó a todos las líneas dentro de las que quedaban encerradas las tierras que se les entregaban. El último día de ese mes se firmó el acta de entrega de las tierras. El representante y gestor de los rarámuri, Eligio Fierro, quedó como presidente del CPA y a nombre del pueblo declaró que "son de recibirse y se reciben los terrenos con que se ha dotado en definitiva al pueblo." Por su parte, el funcionario de la CNA declaró que: "En nombre del presidente del C. Presidente de la República y en cumplimiento de su resolución … doy posesión definitiva de las tierras que se

[32] AHRAN, 23 / 488, Local, ff. 5-11, expediente de Sisoguichi. Para dotar las 14 384 se afectó con 607 a la Chihuahua Timber Land Company, 324 del predio Huachachic y 13 453 de terrenos nacionales. En la resolución se ordena respetar las propiedades particulares localizadas dentro del perímetro Ejidal: las que no excedieran de 300 hectáreas, poseídas a nombre propio y por más de 10 años y las que abarcaran hasta 2000 hectáreas y estuvieran legalmente tituladas. Ibid, f. 105.

tienen a la vista y que están señaladas en el plano aprobado por la Comisión Nacional Agraria y se hace formal entrega de ellas a este pueblo por conducto de su Comité Particular Administrativo."[33]

Se acababa de realizar un supuesto acto de justicia hacía los rarámuri, del cual el Estado esperaba gratitud y sumisión. Las tierras quedaron demarcadas por los trazos poligonales que se tendieron con los teodolitos, es decir, líneas rectas que se unen en vértices para conformar un polígono irregular, pero nunca se les preguntó cuál era el territorio que ellos mismos reconocían como propio. Así la estructura territorial ejidal quedó superpuesta a la tradicional. También en base al ejido se les impuso una organización ajena a sus usos y costumbres en cuanto a manejo y acceso a la tierra, el CPA que desafiaba la autoridad tradicional y fracturaba las relaciones comunales internas. Según el censo que se realizó había 168 individuos con derecho a dotación, pero solo acudieron 63 al ritual de entrega, de ellos 37 presentaron su inconformidad de que Eligio Fierro fuera el presidente del CPA. Más esas divisiones le son necesarias al Estado para poder intervenir como arbitro supremo. También quedaba cancelada en su tradición selectiva el reclamo bajo el argumento de la posesión ancestral. Aún los papeles y títulos que expidió Benito Juárez no fueron conservados. Bastaba la palabra del presidente y la posesión ancestral de las tierras. Pero el Estado exige reconocimiento y tiene que hacer presencia en la región. Ahora la comunidad existía y tomaba forma porque contaba con documentos o papeles: resoluciones y actas que reconocían que muchas comunidades podían ya reconocer puesto que para ellos se les había impuesto un CPA, pero si no se daba así ya estaban registrados como ejidatarios.

[33] AHRAN, 23 / 488, Local, f. 114, expediente de Sisoguichi. Federico González habló a nombre de los que querían cambió de comité y propuso a Heberto Portillo para el puesto. Se les dijo a los descontentos que su petición se haría efectiva cuando reunieran al número de vecinos y siguiendo los procedimientos que la CNA marcaba, ibid.

Capítulo V: Benito Juárez y las tradiciones selectivas entre los pueblos mestizos

En junio de 1960 los vecinos de Cuchillo Parado escribieron al presidente de la república pidiéndole que reconsiderara el acuerdo presidencial que había declarado ejido su colonia sin que lo hubieran solicitado los verdaderos colonos. El caso de esta colonia tiene muchas semejanzas con el de Namiquipa, también mandaron una solicitud de restitución pensando que era una acción reivindicatoria diferente a la de dotación que respetaba los usos y costumbres locales, así como la autonomía del pueblo. La tradición selectiva de Cuchillo Parado tenía, al igual que Namiquipa, un fuerte contexto en la lucha contra los apaches, pero los primeros también configuraban un presente a partir de la lucha contra los franceses. Los namiquipenses también basaban su tradición selectiva y mitos fundacionales en el bando de Croix y los de Cuchillo Parado en un título expedido por el presidente Benito Juárez en 1865 cuando se refugió en Chihuahua.[34]

Los habitantes de Cuchillo Parado formaron una fuerte identidad de colonos en gran parte por oposición al ejido que el Estado de la revolución trataba de imponerles. En 1964 enviaron un memorial al presidente López Mateos donde asientan en forma vehementemente los aspectos de su tradición selectiva:

> "Que como consta del título de propiedad que a favor de los vecinos de este pueblo de nuestros antepasados expidió el C. Benito Juárez, Presidente de la República en 10 de Diciembre del año de 1865 en premio de los servicios prestados a la Nación en el combate de las tribus de indios que asolaban el Estado y en contra de la imbasión (sic) francesa, recibimos esa propiedad con nuestro carácter de herederos legítimos de nuestros antepasados, ha sido

[34] AHRAN, 216, ff. 10 – 12, expediente de Cuchillo Parado.

causa de innumerables dificultades tanto para aquellos como para nosotros que los hemos sucedido en la propiedad…"[35]

Como lo expresaban los habitantes de Cuchillo Parado, Benito Juárez les había concedido 10 sitios de ganado mayor (17 556 hectáreas) solo que el título que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad tiene de fecha 7 de julio de 1865, dado que ellos afirmaron que fue del 10 de diciembre. Como todos los títulos que expidió Benito Juárez sobre terrenos baldíos se basaba en la ley de 1863 que declaraba que este tipo de terreno pertenecía a la nación y el objetivo era reducirlos a propiedad particular. Los solicitantes pidieron se les adjudicaran 10 sitios de ganado mayor en la margen derecha del río Conchos. Desde el 17 de enero de ese año el ministerio de fomento había ordenado las medidas, de los 10 sitios, que se encomendaron a Juan Carreón. Se expresa en el título que de antemano se les había hecho la sesión gratuita de los terrenos para la formación de una colonia y en este sentido Benito Juárez les concedía en propiedad los 10 sitios en forma gratuita con la condición de que "no queden como ejidos, ni en común, sino reducidos a propiedad particular."[36]

Posteriormente llegó al lugar Julián Muñiz solicitando se le admitiera como colono a cambio de aportar los recursos necesarios para hacer de riego las tierras que hasta entonces eran de temporal. Abrieron un canal de 5 kilómetros de longitud y construyeron una presa rudimentaria de piedra rodada, que sin embargo sirvió para regadío. El compromiso de los colonos fue pagarle a Muñiz su inversión una vez terminados los trabajos con los productos cosechados de la tierra. Pero pronto los costos de la obra rebasaron las posibilidades económicas de Muñiz y suspendió su ayuda a los colonos y como no tenían otros ingresos se negaron a

[35] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 284, expediente de Cuchillo Parado.
[36] AHRPP, Protocolo del notario publico Rómulo Jaurrieta, 1901, f. 113. Como forma de asegurar la división de las tierras se había ordenado que la autoridad política del Cantón Aldama hiciera el reparto de los lotes, asunto que se empezó el 15 de mayo de 1895, pero parece que no se terminó. Ibid.

seguir trabajando. Muñiz obtuvo el apoyo y protección de gobernador, en seguida los colonos, sin ser escuchados, fueron aprehendidos y remitidos a la cárcel hasta la ciudad de Ojinaga, donde permanecieron por tres meses. Para poder ser liberados aceptaron un trato oneroso con Muñiz reconociéndole dos terceras partes de de la propiedad que comprendía la sierra de San Pedro, además de "la labor de arriba de las casas del pueblo que contaba ya con el canal para su irrigación" que abrieron los colonos. A estos últimos se les reconoció derecho sobre la tercera parte de las tierras quedando incluida la labor de debajo de las casas del pueblo, pero para ello cada colono tenía que aportar la cantidad de 50 pesos. Los colonos que no pudieron entregar el dinero perdieron sus derechos y solo quedaron 31. Nuevamente tenían que abrir un canal para poder regar las tierras. El terreno de la sierra de San Pedro tendrían que usarlo en común con Muñiz.[37]

Pronto a Muñiz se le revirtió su proceder y recibió una probadita de su propio chocolate porque le fueron embargadas las tierras y ganado que tenía en Cuchillo Parado. La Casa Muñoz Hermanos metió pleito a Muñiz y embargó para cobrarse crédito que le había proporcionado. Siendo los nuevos dueños los Muñoz, la gente del pueblo narra el siguiente hecho:

> "… uno de los señores Muñoz de nombre Raymundo y que era muy déspota, dio muerte a un aparcero que sembraba en la labor por el solo hecho de presentarse poco tomado ante don Raymundo pidiendo un kilo de café a cuenta del trabajo que se le debía, y en vez de despacharle lo que le pedía le aplicó un garrotazo en la cabeza que le ocasionó la muerte y temiendo sin duda represalias del pueblo, abandonaron sus propiedades e intereses de campo que se perdieron en lo absoluto."

[37] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 284 y AHRAN 23 / 216, ff. 13. expedientes de Cuchillo Parado.

> "… el culpable no se le castigó su crimen debido al respaldo que tuvo de su hermano Lic. Carlos Muñoz que a la sazón era Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien con el poder de que estaba investido comenzó a hostilizar a los vecinos haciéndolos responsables de la pérdida de los intereses de campo que habían abandonado, consiguiendo por último de las autoridades la cita de algunos vecinos a Chihuahua y una vez en aquella Ciudad pidió su encarcelamiento, visto lo cual por el Ciudadano Gobernador del Estado don Luis Terrazas y con el fin de hacer esas arbitrariedades injustas, sugirió al Lic. Muñoz la conveniencia de que vendiera a los vecinos del pueblo sus derechos, cosa que así se hizo, pagando a Muñoz la cantidad de $ 27 500.00 veintisiete mil quinientos pesos que se cubrieron en cuatro anualidades, con lo que terminaron las dificultades."[38]

Para la compra se nombró a Jesús Navarrete apoderado de los colonos de Cuchillo Parado, quien suscribió un convenio con la parte vendedora celebrado en Ojinaga el 12 de agosto de 1881. Pero aquellos colonos que compraron los terrenos de los Muñoz, y formaron una Sociedad Agrícola y así se les identificaba, eran parte del llamado barrio de San Pedro, se erigieron como un vecindario aparte de los de Cuchillo Parado, lo que traería la fractura de las relaciones intragrupales. En el convenio se estipuló que el terreno de pastoreo que debían utilizar era el de la "Sierra de San Pedro para arriba."[39]

Por otra parte, para que los miembros de la Sociedad Agrícola pudieran iniciar la compra de las tierras que estaban en posesión de los Muñoz tuvieron que contar con el apoyo moral y económico del mayor Ciro V. Amarillas. En pago por el apoyo prestado los colonos decidieron venderle a Amarilla tres sitios de ganado mayor. Lo anterior se realizó en 1903 con el liderazgo de un personaje foráneo llamado Ezequiel Montes y el que sería uno de los principales generales de Francisco Villa:

[38] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 284, expediente de Cuchillo Parado.
[39] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 7, expediente de Cuchillo Parado.

Toribio Ortega.[40] El precio de los tres sitios ascendió a 1 500 pesos, de los que ya estaba en posesión Amarillas desde 1897.[41] En 1907 Amarillas vendió los tres sitios a Ana Seijas, viuda de Méyer, en 8 mil pesos y en 1910, a su vez ésta vendió el predio, en la misma cantidad que lo compró, a la casa comercial Krakauer Zork y Moye. Finalmente la propiedad llega a manos de un personaje de nombre Lino Castaño, quien aparte invadió y se posesionó de un terreno susceptible de cultivo dentro de los siete sitios del pueblo.

En el año de 1901 el gobernador del estado, Luis Terrazas, por acuerdo y por oficio mandó protocolizar el título expedido por Benito Juárez a los vecinos de Cuchillo Parado. Ante las quejas que habían llevado a cabo los vecinos y seguramente aludiendo tener título expedido por Juárez, el gobernador mostró gran interes y envió telegrama al presidente municipal de Coyame pidiéndole le enviara el título. Dado que Terrazas había peleado a favor de Juárez en el estado, el documento le pareció de gran valor y se le comunicó nuevamente al presidente municipal de Coyame:

> "… que el uso constante ha comenzado a destruir ese título y que la pérdida de él originaría graves perjuicios al pueblo y a los interesados, el propio primer magistrado… se ha servido disponer se remita ese título a la Notaría… además que por ese medio legal se consigue la conservación de un documento de tanta importancia, poniéndolo a cubierto de un extravío, destrucción o cualquier otro accidente, pueda cada una de las personas a quienes el título confiere algunos derechos, proveerse del testimonio correspondiente." [42]

Luis Terrazas encontró en el título de Cuchillo Parado un buen pretexto para resaltar su propia figura. Cuando la defensa de la república, ante la desocupación

[40] AHRAN, 23 / 519, Toca, ff. 90-93. Buscar la referencia del RPP.
[41] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 131, expediente de Cuchillo Parado.
[42] AHRAN, 23 / 519, Toca, ff. 88-89, expediente de Cuchillo Parado.

de la ciudad de Chihuahua por el ejército francés, Terrazas organizó y dirigió las fuerzas que recuperaron la plaza de Chihuahua, un 25 de marzo de 1866, venciendo a los imperialistas que había quedado a cargo de ella. Así por decreto de 2 de marzo de 1904 se le dio a Cuchillo Parado el nombre de "25 de Marzo".[43] A pesar del juarismo de la gente de Cuchillo Parado nunca aceptaron el nombre y más que nada lo vieron como una imposición. Solo en los documentos oficiales aparecía el nombre de 25 de Marzo, pero la gente del pueblo y aún la del estado siempre se refirieron a él con su primer nombre. Pero a la larga el que en los documentos oficiales apareciera siempre el nombre impuesto oficialmente le ayudaría a la gente del pueblo en contra de las propias afirmaciones del Estado de la revolución, como veremos mas adelante.

Más tarde los colonos de Cuchillo Parado se quejaban diciendo que habían abierto al cultivo tierras de temporal en un lugar llamado el Abrevadero de la que se habían apropiado los miembros de la Sociedad Agrícola (que eran parte del barrio del San Pedro). Ellos fueron acusados de que valiéndose de la influencia de ciertos individuos con el gobernador pidieron el reparto de las tierras del Abrevadero, también a nombre de los colonos de Cuchillo Parado (del lado de afuera de la acequia madre). De pronto se presentó el presidente municipal de Coyame, Manuel Meléndez, acompañado de su cuñado Ezequiel Montes, quien era presidente de la sección municipal de Cuchillo Parado. Los dos les mostraron a los colonos un telegrama donde se autorizaba el reparto del predio el Abrevadero. Los ocupantes del terreno se opusieron y fueron amenazados con ir a la cárcel. Bajo tales circunstancias se retiraron del predio posesionándose los de la Sociedad Agrícola de ellos.[44]

[43] Almada, Diccionario de historia… p. 127 y 525.

[44] AHRAN, 23 / 519, Toca, ff. 7-9, expediente de Cuchillo Parado.

El 31 de mayo de 1925 los vecinos de San Pedro, que se formó con las tierras que compraron a los Muñoz, enviaron al gobernador del estado una carta solicitándole que los pusiera en posesión de las tierras que habían sido despojados. Se asumían como los colonos beneficiados con los 10 sitios concedidos por Juárez. Acusaron a la empresa Krakauer, a la viuda de Meléndez y a un señor de nombre Lino Magallanes. Expresaron que "aún cuando nuestras tierras no son ejidales ni consideradas de mancomún, sino de propiedad privada les fueron arrebatadas a sus legítimos dueños por autoridades de este lugar, como lo fue el mayor Amarillas de las guardias Rurales del Estado." Añadieron que permanecían en absoluta miseria y las tierras de que habían sido despojados habían permanecido incultas, faltándoles el agua hasta para usos domésticos, ya que el canal había sido abandonado por los que se ostentaban como propietarios de las tierras. Paradójicamente en base a la ley del 6 de enero de 1915, no pedían dotación ni restitución de ejido sino que los pusieran en posesión de las tierras que otros habían acaparado.[45]

Pero como la titulación se había hecho a favor de los vecinos de Cuchillo Parado, la Comisión Local Agraria contestó a los vecinos de San Pedro pidiéndoles que aclararan si eran sucesores o causahabientes de los vecinos favorecidos con la donación que hizo Benito Juárez. También les pidieron que la solicitud fuera mandada por los vecinos de Cuchillo Parado, por haber sido los primeros favorecidos con la donación.[46]

Poco después se ratificó la solicitud que se enviaba a nombre de los "vecinos de Cuchillo Parado y del barrio de San Pedro" por 44 vecinos. Pero sucedía algo muy parecido a lo ocurrido en Namiquipa en la etapa de cabildeo para decidir si se enviaba una solicitud, no sabían con exactitud la naturaleza y las posibles

[45] AHRAN, 23 / 519, Local, f. 1, expediente de Cuchillo Parado.
[46] AHRAN, 23 / 519, Local, f. 130, expediente de Cuchillo Parado.

consecuencias de solicitar la intervención del Estado en los problemas agrarios que tenían. En la ratificación de la solicitud se nota una clara desconfianza hacia las leyes agrarias estatales en dos sentido: el peligro del cambio de régimen de propiedad privada a comunal y la pérdida de autonomía local. La desconfianza era tal que el gobernador envió a un comisionado para que platicara con ellos acerca de que enviaran la solicitud suscrita también por los vecinos de Cuchillo Parado:

> "Que habiendo dejado solucionadas las dificultades que entre nosotros mismos habían surgido debido a que algunos de nosotros no habíamos comprendido el espíritu de la Ley, para dotarcenos (sic) de las tierras indispensables a nuestra susistencia (sic) y cuyo espíritu nos ha sido ampliamente explicado por el enviado de ud. (sic) para el efecto; nos permitimos ratificarle nuestra anterior solicitud, acogiéndonos a lo que dispone el artículo 27 de la Constitución, y en tal virtud, pedimos que desde luego quede instaurado el Expediente respectivo, y se nos haga el repartimiento de las tierras de labor que ya nos pertenecen por la titulación que a nuestro favor hizo el Señor Presidente Juárez, que actualmente y desde hace quince años están en completo abandono o indivisas..."[47]

Por abandono de las tierras se referían a que permanecían sin sembrar ya que especificaban que habían sido despojados de ellas. Pero además pedían se les dotara de las necesarias para pastos y montes para disfrutarlas en común. El repartirse las tierras laborables entre ellos significaba en propiedad privada. Pero seguramente el comisionado no cuestionó ni dijo nada que contradijera su sentir de propietarios privados y su autonomía.

Posteriormente, 31 vecinos que se asumían como los herederos de los terrenos titulados por Juárez se opusieron a la solicitud de dotación y restitución de tierras solicitada por la acción unificada de los vecinos de Cuchillo Parado y San Pedro.

[47] AHRAN, 23 / 519, Local, f. 9, expediente de Cuchillo Parado.

La CLA con la intervención de la presidencia municipal citó a una reunión de notables de los bandos involucrados. Se reunieron con las autoridades 10 personajes: 5 por Cuchillo Parado, 4 por San Pedro y 1 por los 31 vecinos decidentes de la solicitud. Parecía que los vecinos de los 10 sitios habían zanjado sus diferencias. Los notables dirigieron un escrito a las autoridades agrarias donde decían que después de las explicaciones que les había dado el comisionado daban su absoluta conformidad con las gestiones de los vecinos encaminadas a conseguir las tierras que necesitaban todos. Pero agregaban que lo anterior debía ser sin perjuicio de sus pequeñas propiedades y en beneficio de todo el pueblo. [48] En realidad Cuchillo Parado y los del barrio de San Pedro no estaban articulados como un solo pueblo.

Pero en los documentos que los tres bandos enviaron (los vecinos unificados de Cuchillo Parado y San Pedro, los 31 decidentes y los 10 notables) se expresan ideas diferentes, en uno solo se menciona que quieren que se les ponga en posesión de la tierra, en otro se menciona la dotación y en el restante se añade la restitución, lo que nos habla de la poca claridad que había no solo en Cuchillo Parado sino en los pueblos del estado en cuanto a la naturaleza de las dotaciones y restituciones que el Estado implementaba. Por supuesto que los comisionados en las explicaciones que daban no contravenían el sentir local vinculado a sus relaciones de asociación con el Estado. Prácticamente se les convencía diciéndoles que las dotaciones y restituciones estaban de acuerdo al uso, relación, concepción y percepción con respecto a la tierra local.

En 1926 los colonos de Cuchillo Parado pidieron a la CNA que “se nos ampare y proteja en nuestra propiedad conforme lo mandaba el C. Presidente de la República” (Benito Juárez). Lo anterior en relación al conjunto de los 10 sitios. No obstante haber coincidido los intereses de Cuchillo Parado y San Pedro en

[48] AHRAN, 23 / 519, Local, f. 10, expediente de Cuchillo Parado.

relación a la creencia de la reivindicación de la tierra por parte del Estado, aunque sin conocer su naturaleza, los primeros acusaron a los segundos del despojo del predio el Abrevadero. Lo curioso es que los grupos incorporaron la figura de Juárez para tratar de reivindicar tierras.[49]

En julio de 1929 el gobernador dio su veredicto, se disponía la restitución de 5 266 hectáreas que estaban en manos de la empresa Krakauer para que con los 7 sitios que poseían los colonos sumaran 17 556 hectáreas. En noviembre del mismo año el Estado realizó el rito de la llamada posesión provisional. En 1937 Mariano Márquez como apoderado de la empresa Krakauer, Cork Co. imputaba la legalidad de la solicitud de restitución de Cuchillo Parado. Para este año se le había dado gran impulso al ejido por el Estado, el gobierno de Lázaro Cárdenas entregó miles de hectáreas a los sectores rurales, para conseguir el apoyo de la gente del campo, en el contexto de su disputa con el expresidente Plutarco Elías Calles. Se había conformado en el pueblo una organización llamada "Agrupación Agraria 25 de Marzo."

Para la defensa Márquez acudió a la misma tradición selectiva del pueblo; primero citó partes del título que expidió Benito Juárez al cederles las tierras con el objetivo de formar una colonia agrícola. Por lo tanto, afirmaba que los terrenos no podían considerarse como ejidos en ningún tiempo, sino propiedad particular. Márquez alegó, con razón, que los tres sitios que en un principio habían dado por 1500 pesos a Amarilla y que después de varios traspasos había llegado a la Krakauer, Cork Co. no había sido mediante el despojo, por lo tanto la solicitud de restitución era injustificada. Pero la empresa sí estaba dispuesta a vender los tres sitios, ya que Apolonio Montes como representante de algunos habitantes de

[49] AHRAN, 23 / 519, Local, ff. 7-8. Además de pedir la desocupación del predio el Abrevadero solicitaban que se pagara una indemnización. Los ocupantes habían conseguido escrituras para las tierras que ocupaban, las cuales eran desconocidas por los de Cuchillo Parado, Ibid.

Cuchillo Parado, que no tenían tierras, había solicitado, por medio de la ley local agraria de colonias, que les vendieran las ocupadas por la krakauer.[50]

El asunto de Cuchillo Parado se fue alargando y no se emitía resolución presidencial. En junio de 1947 Luis G. Alcerreca, vocal consultivo por el estado de Chihuahua, pidió a la oficina jurídica de la CNA un dictamen donde se analizara si para los efectos de restitución debía considerarse despojo una operación de compra venta hecha a favor de Ciro V. Amarillas. El documento recibió el visto bueno de Lucio Mendieta y Nuñez, quien en esa época era oficial mayor de la CNA. Según las disposiciones jurídicas del Estado, que al final de cuentas resultan ser meros formulismos, pues como hemos dicho el Estado impone los procedimientos, resoluciones o negaciones según una serie de factores que conllevan a que la hegemonía opere, se estableció que la restitución no procedía en los pueblos que como Cuchillo Parado habían enajenado legalmente sus tierras a un particular que no fuera una compañía deslindadora. Se llegó a la conclusión que sí procedía la dotación, pero solo a favor de los vecinos carentes de tierras dentro de los siete sitios de ganado mayor en extensión mayor a la unidad de dotación. Otro problema, según los funcionarios de la CNA, era que "con seguridad" muchos de los vecinos de Cuchillo Parado poseían una extensión de tierras superior a la pequeña propiedad, por lo tanto eran afectables.[51] Los vecinos de Cuchillo Parado buscaban que les devolvieran las tierras que habían quedado fuera de su dominio, para ellos la restitución significaba que podían lograr lo anterior y nunca aceptarían tales argumentos. Además, para ellos no era un invento o mentira, para conseguir la restitución, del despojo por Amarillas, en su entender sí había sido un despojo aunque se hubiera pagado y hecho la

[50] AHRAN, 23 / 519, Toca, ff. 104-106 y 129-139, expediente de dotación a Cuchillo Parado.
[51] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 137, expediente de Cuchillo Parado. En el documento se menciona una carta de un vecino de Cuchillo Parado de apellido Meléndez de enero de 1926 donde afirma que la colonia se constituyó con 160 derechos o acciones y que era falso que las tierras hubieran estado abandonadas como lo afirmaban en sus escritos los peticionarios de la restitución, Ibid, f. 131.

traslación de dominio. Todo hace pensar que el Amarillas sacó ventaja de la necesidad y deseos de los colonos de quedar reivindicados ante aquellos que valiéndose de la fuerza los habían despojado. Las circunstancias y la forma moral en que se procedió para que Amarillas se quedara con los tres sitios sí era para ellos un despojo, que se hace más evidente cuando vende las tierras a alguien totalmente ajeno a la colonia.

En febrero de 1951 el representante de los colonos de Cuchillo Parado, Benito G Rivera envió una carta al presidente de la república donde le decía que desde 1925 el pueblo había "venido gestionando el reconocimiento de los derechos que se nos fueron concedidos por el entonces C. Presidente de la Republica Lic. Benito Juárez en el año de 1865." Informó que de los 10 sitos concedidos habían sido despojados de 3 por Amarillas y que no obstante sus gestiones no se les habían reintegrado y después de varias compraventas permanecían en poder de un personaje llamado Lino Castaño. Hacía alusión a la restitución que en provisional dictó el gobernador restituyendo los tres sitios y reconociéndoles los siete restantes. Sin embargo, no se había ejecutado la disposición. Para ellos la restitución significaba recuperar los tres sitios y continuar trabajando, organizándose y poseyendo la tierra como lo habían hecho desde que Juárez les concedió las tierras, así lo expresan cuando dicen "que tememos derecho a recobrar a favor de nuestro pueblo, la superficie equivalente a diez sitios de ganado mayor, conforme la titulación que a nuestro favor hizo el Presidente de la Republica C. Lic. D. Benito Juárez."[52]

Rivera fue escuchado por el presidente, la resolución presidencial se emitió el 17 de octubre de 1951. Pero no se dio en la forma que lo esperaban los colonos. En el papel se escribió que: "los solicitantes no comprobaron plenamente estar en posesión de las tierras, ni demostraron la fecha y forma del despojo de las

[52] AHRAN, 23 / 519, Toca, ff. 192-193, expediente de Cuchillo Parado.

mismas cuya restitución pretenden… resultaron afectables los terrenos que pertenecen pro-indiviso a los colonos que constituyen el poblado de Cuchillo Parado y a la Razón Social Krakauer Cork y Moye." Se declaró improcedente la restitución y se revocó el mandamiento del gobernador y se dotó al poblado 25 de Marzo con 16 173 hectáreas.[53] El fallo nunca fue aceptado por los colonos, quines primeramente se concebían como pequeños propietarios y no querían cambiar de régimen y ser tutelados por el Estado. Hay que señalar que aunque se hubiera dado la restitución los efectos hegemónicos del Estado hubieran sido los mismos como ya lo vimos en el caso de Namiquipa y Cruces. A partir de la emisión de la resolución su tradición selectiva se radicaliza para enfrentar o resistir la amenaza.

En febrero de 1956 Lino Castaño se quejaba con el jefe del DA de que los colonos lo habían amenazado con tomar sus tierras a la "brava." Castaño mencionaba que al darse la resolución presidencial se afectó a la Krakauer, Zork y Moye y en 1953 el DA había resuelto respetarle 800 hectáreas, que Castaño reclamaba como algo suyo, ya que él había comprado los tres sitios a esa razón social. Ahora era Castaño quien solicitaba se ejecutara la resolución presidencial pues veía en ella la posibilidad de quedar con las 800 hectáreas y no ser expulsado por los colonos. Castaño decía que sería conveniente que se mandara a ejecutar nuevamente la resolución presidencial, lo que nos refiere que en su momento fue rechazada por los colonos. [54]

En el año de 1960 el presidente de la república, Adolfo López Mateos emitió un "acta de posesión definitiva virtual del ejido veinticinco de marzo (antes Cuchillo Parado)" ¿De qué se trataba ese asunto de lo virtual? López Mateos estuvo en el poblado de Galeana desde donde quiso hacer efectiva una afirmación más del

[53] AHRAN, 216 / 23, ff. 15-16.
[54] AHRAN, 23 / 519, Toca, f. 235, expediente de Cuchillo Parado. Castaño pidió el amparo del gobernador ante la amenaza de los colonos de apoderarse por la fuerza de las tierras que le reclamaban.

Estado. Se dice en el documento que estuvieron presentes por Cuchillo Parado el comisariado ejidal y “la mayoría de los campesinos beneficiados”[55]

En 1960 los colonos de Cuchillo Parado expresaron su rotundo rechazo al ejido. Enviaron una carta al presidente de la república donde primero hicieron un recuento histórico de las dificultades que habían sostenido para conservar sus tierras. Expresaban así su tradición selectiva:

> “Que en el curso del año de 1865 y en ocasión de la estancia del Gobierno Federal en la Ciudad de Chihuahua, representado en aquélla época por el Benemérito de las Américas, Lic. Don Benito Juárez, para premiar los servicios prestados a la Nación por nuestros abuelos y bisabuelos en la campaña de los indios bárbaros y contra la invasión francesa, les concedió la propiedad DIEZ SITIOS DE GANADO MAYOR... para la formación de una colonia...”[56]

Narraron como Muñiz y los Muñoz se habían apoderado de las tierras, la compra que hicieron de los tres sitios por 27 500 pesos, la donación de tres sitios que hicieron a Amarillas (ya vimos que en realidad fue una venta por un precio muy bajo, 1500 pesos, pero los colonos siempre lo manejaron como donación). Que en 1926 habían solicitado los vecinos del poblado de San Pedro, perteneciente a la misma colonia, la restitución de los tres sitios de ganado mayor y en vista de la carencia de tierras los de Cuchillo Parado no tuvieron inconveniente en apoyar la solicitud. Después la CNA resolvió que no cabía la restitución sino la dotación; en lugar de restituirse los tres sitios que se pedía, se declaró como dotación agraria todo el predio, alrededor de 16 mil hectáreas “que no quiso aceptar el grupo por el carácter de Ejidos que se le dio.” Pero a continuación expresaban otra parte importante de su tradición selectiva que habían desarrollado a partir de su

[55] AHRAN, 216 / 23, f. 19, expediente de restitución de Cuchillo Parado.
[56] AHRAN, 216 / 23, f. 10, expediente de restitución de Cuchillo Parado.

participación en la revolución, además de expresar que ésta había sido robada, apropiada o usada por Lino Castaño para lograr sus objetivos:

> "que según sabemos el señor Castaño compró los tres sitios materia de la donación que se le hizo al señor Amarillas, tomando en cuenta para ello, si es posible, los meritos de nuestros padres e hijos que en su mayoría tomamos parte en el movimiento Revolucionario proclamado por Don Francisco I Madero, el cual se anticiparon los nuestros haciendo el movimiento en este pueblo el 14 de Noviembre, bajo el mando del Señor Toribio Ortega, nuestro convecino, en vez de hacerlo el día 20 fijado por el Señor Madero para el movimiento, así como por los servicios prestado por nuestros ascendientes (abuelos y bisabuelos) en la campaña contra los bárbaros y combatiendo a las fuerzas invasoras Francesas..."[57]

Sobre la base de esos incuestionables y gloriosos méritos, de defensores y conformadores del régimen en turno, sobre la base de su tradición selectiva expresaron "Por todas las condiciones señaladas anteriormente, Señor Presidente, estamos rogándole de la manera más atenta y respetuosa, se sirva reconsiderar el acuerdo Presidencial por medio del cual se ha declarado Ejido nuestra Colonia sin haberlo solicitado los verdaderos colonos, no ya todo el predio sino únicamente los siete sitios exceptuando de los diez que en total componen la Colonia"[58]

Cuatro años después los colonos enviaron otra carta al presidente López Mateos expresando los mismos elementos de su tradición selectiva. Nuevamente iniciaron diciendo que en 1865 Juárez les había expedido título a favor de sus antepasados

[57] AHRAN, 216 / 23, f. 12, expediente de restitución de Cuchillo Parado.
[58] Ibid, Los colonos de Cuchillo Parado decían que debido a las gestiones de Lino Castaño la CNA había dado la dotación sobre todo el predio con excepción de las pequeñas propiedades con lo que había logrado se le declarara pequeño propietario de un predio denominado La Ruidosa, el cual le disputaron y lograron que el mismo Castaño se los solicitara en arrendamiento, pero no se realizó el trato, Ibid.

en premio a los servicios prestado a la nación combatiendo a los apaches y en contra de la invasión francesa. Mencionaron haber participado en la revolución en contra del porfirismo, orozquismo y huertismo bajo las órdenes de Toribio Ortega. En cuanto a la solicitud de restitución decían que se rechazó por habérseles dado con carácter de dotación. Sin embargo, que habían advertido que de otra manera no lograrían el dominio de las tierras se decidieron a aceptar provisionalmente el ejido, pero no se había resuelto el asunto. En base a lo anterior decían que "no hemos querido aceptar el terreno comprado a sacrificio y el que se nos concedió con carácter de Ejido por no convenir a nuestros intereses... por lo que pedimos a Ud. con todo respeto se sirva si a bien lo tiene, modificar y volver a su primitivo estado el carácter de nuestra propiedad."[59]

En abril de 1964 el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó que se deslindaran las 16 173 hectáreas con que se dotaba a Cuchillo Parado, solo para localizar los ranchos de cada uno de los 161 colonos que poseían esos terrenos. Los comisionados Hugo Reynoso y Raúl Tapia acudieron al lugar y en asamblea realizada el 11 de julio dijeron a los colonos que era conveniente hacer ejido la colonia ya que así lo había determinado el Cuerpo Consultivo Agrario. Los colonos deliberaron por cinco largas horas el asunto. Al final decidieron votar; la mayoría acordó rechazar el ejido y seguir gestionando para que se les reconocieran sus derechos sobre los diez sitios de ganado mayor que les había concedido Juárez. Los colonos quedaron en regresar a sesionar con los comisionados después de la comida, pero únicamente acudió la mesa directiva de la colonia y los dos comisionados por lo que se dio por terminada la asamblea. Se elaboró un documento llamado "acta circunstanciada" con la resolución tomada y la firmaron los directivos y los dos comisionados. Por su parte los enviados por el Cuerpo Consultivo Agrario informaron que dado que a la asamblea acudieron 96 colonos de Cuchillo Parado y quedaron excluidos los de San Pedro, pero no se

[59] AHRAN, 216 / 23, f. 284, expediente de restitución de Cuchillo Parado.

precisa la causa. Terminaron diciendo que dado que no se les prestaba ayuda optaron por regresar. [60]

Posiblemente la gente de San Pedro no estuvo presente porque a diferencia de los vecinos de Cuchillo Parado habían optado por el ejido. En 1938 los habitantes de San Pedro solicitaron dotación de ejidos; en 1967 el Estado dictó afirmación con la resolución presidencial dándoles más de 11 850 hectáreas de terrenos nacionales; en 1969 se realizó el rito de la entrega definitiva de las tierras.[61] Pero desde entonces se crearía un conflicto entre los dos pueblos, ya que los de Cuchillo Parado alegaban que se había invadido una parte de los 10 sitios. En 1973 Rivera escribía al presidente de la república que a finales del mes de abril el delegado agrario en Chihuahua y el secretario de la liga de comunidades agrarias se presentaron en el pueblo y citaron a asamblea para informar que tenían órdenes del presidente de la república de respetar los 10 sitios. Los visitantes les dijeron que iban a tramitarles un título de mancomunidad para los terrenos de pasto y medir los lotes de siembra de cada integrante de la colonia para tramitarles los títulos individuales. Pero se quejaban de que no se había realizado lo ofrecido y solicitaban se hiciera una investigación por la invasión que sufrían por parte de los ejidos de San Pedro y La Paz de México.[62]

La gente de Cuchillo Parado logró salir avante de todos los embates para convertir en forma real la colonia en ejido. En 1974 un funcionario de las instancias agrarias, el revisor, informó que en 1964 acudieron los ingenieros Reynoso y Tapia para confirmar el ejido, pero los del pueblo se negaron

[60] AHRAN, 216 / 23, f. 41, 58, 42, expediente de restitución de Cuchillo Parado. En agosto del mismo año el representante de la colonia, Benito G. Rivera solicitaba a las instancias agrarias que le informaran de las peticiones que habían realizado, siempre apoyándose en su tradición selectiva, hablaba en nombre de 161 jefes de familia de Cuchillo Parado y San Pedro, resaltaba la lucha de sus abuelos contra la intervención francesa y la posesión de un título expedido por Benito Juárez, Ibid, f. 277.
[61] AHRAN, 23 / 7384, Toca, f. 79, expediente de dotación de San Pedro.
[62] AHRAN, 23 / 216, ff. 60-61, expediente de restitución de Cuchillo Parado.

rotundamente a aceptarlo; en 1967 se le ordenó a un personaje llamado Vidal Olivares hacer trabajos topográficos, pero extrañamente en el expediente no había documentación referente a ello; para 1969 se comisionó a Esteban Delgado para ejecutar la resolución presidencial, pero también se percató de que nada estaba registrado; en 1970 se había encargado a Juan Santos una investigación sobre queja de invasión, pero como en los demás casos ni había datos en el expediente.[63]

Entre más reciente es la historia de Cuchillo Parado más escasos son los documentos. La siguiente referencia a su lucha la encontramos hasta 1984 cuando enviaron una carta al gobernador del Estado agradeciéndole su presencia en el pueblo el 14 de noviembre para conmemorar el comienzo de la revolución, iniciada precisamente por sus antepasados. También le pidieron que la resolución presidencial de dotación de ejidos se ejecutara en terrenos nacionales y se respetaran las propiedades privadas. Es decir, querían conservar sus tierras bajo el régimen de propiedad privada, pero a su vez que se les dotara de ejidos de tierras contiguas. En marzo del mismo año fue comisionado Javier Hernández para realizar la localización del anteproyecto de afectación de los terrenos concedidos, desde 1951, como ejidos a Cuchillo Parado. El comisionado se dirigió al pueblo, citó a asamblea y explicó el motivo de su visita. Los colonos simplemente le dijeron "que no aceptarían en ningún momento trabajos relacionados con la acción de Dotación de Ejidos, en virtud de que ellos siempre han reconocido los terrenos que usufructúan como Colonia." Dado lo anterior el comisionado procedió a formular acta circunstanciada del rechazo que era ya la segunda en la historia del pueblo:

> "Que no es necesario la elaboración del Plano motivo de la comisión, en virtud de que la Resolución Presidencial de que se trata... nunca ha sido reconocida

[63] AHRAN, 23 / 216, f. 57, expediente de restitución de Cuchillo Parado.

> ni aceptada por estos miembros que integramos la Sociedad agrícola y ganadera Colonia Cuchillo Parado... toda vez que mediante testimonio de fecha 7 de Julio de 1865 expedida por el en ese entonces Presidente de la República Lic. Benito Juárez, nos concedió como propiedad 10 sitios de ganado mayor y a la fecha la conservamos como Colonia y no como Ejido como se pretende, así mismo manifestamos que se anule la Resolución Presidencial y sea reconocida nuestra Colonia legalmente."[64]

El comisionado pidió informes a la sección de colonias de gobierno del estado y resultó estar registrada como colonia basada su existencia en el título que les expidió Juárez. Finalmente en su informe el enviado explicó que los colonos se oponían rotundamente a que se continuara con tanta insistencia el llevar a cabo la ejecución de ejidos y querían que la Secretaría de la Reforma Agraria viera la forma que eliminar la resolución presidencial ya que no los beneficiaba.[65]

Hemos visto formas de resistencias tan inverosímiles, tan creativas para rechazar el poder del Estado. Los namiquipenses llegaron a decir que se les había olvidado cómo firmar, los cruceños no ayudaban a los comisionados en los trabajos técnicos que debían desarrollar. Pero, lo que al último utilizaron los habitantes de Cuchillo Parado es de lo más surrealista, desaparecieron u ocultaron al pueblo y a la gente a la que se refería la resolución presidencial de 1951. Los deseos de ya no verse molestados no se cumplían para los habitantes de Cuchillo Parado. En 1990 se presentó otro comisionado del Estado para ejecutar la resolución presidencial. Esta vez la gente de Cuchillo Parado no usó el enérgico y rotundo no aceptamos el ejido porque somos colonia, o el que se invalide la resolución presidencial, esta vez fueron sutiles, finos, si se pudiera decir. Nuevamente refrendaron una identidad como colonos, basaban sus derechos en el título que les había expedido Juárez a sus antepasados. Así que en diciembre de 1990 se

[64] AHRAN, 23 / 216, f. 68, 113, 118-120, expediente de restitución de Cuchillo Parado.
[65] AHRAN, 23 / 216, ff. 110-111, expediente de restitución de Cuchillo Parado.

firmó por tercera vez un acta circunstanciada exponiéndose las razones de no efectuarse la ejecución de ejidos. Cinco puntos son los que soportan el objetivo del pueblo. a) Se enlistó en el acta a todos los que se encontraban en posesión del predio, un total de 99, y se asentó que ninguno de ellos venía como beneficiado en la resolución presidencial, b). La titulación que hizo Juárez en 1865, c) El comisionado informó a sus superiores que los habitantes constituyeron la Colonia Agrícola y Ganadera que denominan Cuchillo Parado; que está fuera del régimen federal de colonias pero reconocida por el gobierno del estado. d) La autoridad municipal seccional y dos testigos de asistencia, nombrados por la misma autoridad, Benito Quiñónez y Brígido Márquez, le dijeron al comisionado que las personas consideradas como capacitadas en la resolución presidencial ninguno de estos vive o ha vivido en los terrenos del predio Cuchillo Parado, e) porque "mucho menos que exista o haya existido un poblado que se denomine 25 de Marzo como consta a la Autoridad Municipal Seccional que suscribe como también le consta [a] los campesinos que se apuntaron en la presente acta."[66] Firmaron el acta el comisionado, los dos testigos y el presidente seccional. Así, un fetiche que generalmente utiliza el Estado como expresión de poder ritualizado, ahora se usaba como medio de safarse de sus afirmaciones. Simplemente, para ellos 25 de Marzo no existía o no era su pueblo.

La defensa de la república en la tradición selectiva de las colonias de Croix

Hemos visto como Benito Juárez generó tradiciones selectivas tanto en los rarámuri como en pueblos mestizos. La base de esas tradiciones fue la titulación, entrega y venta de tierras. Al revisar los expedientes de las cinco colonias creadas por el bando de Croix, la presencia de referencias a la figura de Benito Juárez prácticamente no existían, no en la documentación generada por los mismos pueblos. Era extraño ya que era una coyuntura en la que Juárez

[66] AHRAN, 23 / 216, f. 105, 106, 108, expediente de restitución de Cuchillo Parado.

necesitaba de todo el apoyo posible y en ese contexto los pueblos podían conseguir títulos o que se les defendiera en contra de las pretensiones de verse despojados.

Estando Benito Juárez en la ciudad de Chihuahua los franceses enviaron una expedición para desalojarlo. El jefe de la primera división del cuerpo expedicionario francés, general Armando Castangy, desde su base militar establecida en la ciudad de Durango, quería arrojar a Juárez de la última capital que quedaba en poder de la república.[67] A finales de julio el general Brincourt se encontraba ya en territorio chihuahuense. Nos dice Nugent que mientras los franceses encontraron resistencia en Chihuahua durante la intervención, pero tampoco el gobierno de Benito Juárez fue capaz de asegurarse la incomprometida lealtad de muchos chihuahuenses.[68] En las dos entradas que los franceses hicieron al estado pueblos del Cantón Guerrero y Galeana formaron la "Coalición de Pueblos" para combatir a los republicanos. Eran parte de la Coalición Namiquipa, Galeana y Cruces, hombres de este último pueblo participaron en la persecución y muerte del general republicano y entonces gobernador de Chihuahua Manuel Ojinaga en Arisiachi. ¿Por qué las antiguas colonias de Croix combatían al gobierno de Juárez? Decir que eran imperialistas es lo más sencillo, pero también lo que menos nos deja comprender el asunto. Simplista también es la aseveración de Almada de que agentes enviados por los invasores se introdujeron en el Cantón Guerrero para soliviantar a sus habitantes y que se adhirieran al imperio. La Coalición se integró con los pueblos mencionados, además de los de Yepomera, Temosachi, Santo Tomás y otros pueblos y ranchos de los valles del Papigochi y Santa María.

Antes de que se formara la Coalición hubo gran desconten to en la región por la asignación de impuestos a los pueblos del Cantón Guerrero por el jefe político,

[67] Francisco R. Almada, Resumen de historia del estado de Chihuahua, Libros Mexicanos, México, 1955, p. 275.
[68] Nugent, 1993, op. cit., p. 54.

Ignacio Orozco, a principios de 1965. La contribución extraordinaria exigida por la república de 7 de marzo provocó malestar general en los pueblos de Temósachi, Matachí, Santo Tomás, Yepómera, Namiquipa y Cruces. Los afectados, en varias ocasiones, insistieron ante el jefe político que les rebajaran las cuotas asignadas, pero fue en vano y a finales de abril se amotinaron. Orozco movilizó tropas, los sometió y los obligó a pagar una parte de las contribuciones que se les había impuesto.[69]

Desde la década de 1850 los namiquipenses habían repoblado Cruces. Uno de los grandes colaboradores de ese repoblamiento, Jesús María Vásquez fue acusado por Nicanor Ortega, que vivía en Cruces, de simpatizar con la invasión francesa. Para Nugent Vásquez fue uno de los muchos hombres del Distrito de Guerrero que resintieron esas exacciones. El autor mencionado también comenta la posibilidad que especialmente en el valle del Papigochi los conflictos agrarios impulsaron la participación popular en la Coalición de Pueblos. Otras posibles causas fueron los impuestos y en pueblos como Namiquipa la revalidación militar y de privilegios honoríficos que ellos habían disfrutado durante el Estado colonial.[70] Todo lo anterior es parte del descontento de los pueblos de la Coalición, que se integran en una concepción del Estado, una percepción de la posesión de la tierra, formas de autonomía regional que se sintetizan en relaciones de asociación.

Cuando los franceses entraron por primera vez al estado, Almada también expresa claramente que los pueblos del Cantón Guerrero se resistieron a las órdenes de Ojinaga para cubrir las cuotas personales que les tocaban de la última contribución extraordinaria decretada por el gobierno de Juárez y empuñaron las

[69] Francisco R. Almada. Diccionario de historia geografía y biografía chihuahuenses. UACh, México, p. 102.
[70] Nugent, 1993, op. cit., p. 54.

armas.[71] La dirección del movimiento la asumió José Antonio Real y Vázquez y José de la Luz Miranda, el mando militar fue asumido por el mayor Feliciano Enríquez. Se apoderaron de algunos cañones y pertrechos de guerra en la hacienda de Providencia; en Temosachi derrotaron a la columna republicana que se había mandado a someterlos; enviaron a los capitanes Rafael Quezada y Reyes Orozco a atacar al gobernador Ojinaga que estaba en Guerrero, el cual la evacuó pero fue alcanzado y muerto en el pueblo ya mencionado.

En los primeros capítulos de este trabajo ya hemos visto como los namiquipenses eran especialmente renuentes al pago de impuestos. Cuando Reyes Ortiz quiso hacer efectivo lo dispuesto en la circular 51 de la CNA referente a recabar el 15 % de la producción para integrar una cooperativa lo vieron como la imposición de un impuesto por el Estado, pero también como una intromisión que relajaba sus formas asociativas. Además para ellos, como claramente lo expresaron, la imposición de ese impuesto significaba que el Estado pretendía confederar sus tierras, es decir, apropiarse de ellas. Después de todo cuando se fundaron los pueblos del bando se les concedió exenciones de todo tipo de impuestos. También habían peleado contra los apaches y no habían abandonado las tierras a costa de derramamiento de sangre sin la ayuda del gobierno federal. Tanto para la gente de Namiquipa como la de Cuchillo Parado el pago de impuestos extraordinarios era una flagrante violación a sus principios de asociación.

El general Brincourt confirmó a Enríquez en el mando y lo autorizó para levantar fuerzas en los cantones de Guerrero, Rayón, Galeana y Abasolo. En octubre sometió a los vecinos de Buenaventura que se habían declarado en contra del imperio. En noviembre entró en pláticas con Terrazas para reconocer a los republicanos, pero puso por condición que los pueblos de la Coalición fuera segregados del cantón Guerrero. La segunda entrada de los franceses al estado

[71] Almada, 1955, op . cit., p. 278.

rompió las pláticas y la Coalición de Pueblos volvió a atacar al gobierno de Juárez. En Namiquipa, Cruces y Galeana se firmaron actas de adhesión al imperio.

La pesada carga de impuestos fue una de las causas del descontento de los namiquipenses en contra del gobierno de Juárez, pero lo anterior se ligaba a que tampoco habían obtenido de su administración el reconocimiento de sus 64 sitios. En realidad, en la disputa que sostenían los namiquipenses con Enrique Muller, el gobierno republicano dio su respaldo a este último. El 21 de febrero de 1865 manifestó ante el ministerio de justicia y fomento del gobierno de Juárez establecido en Chihuahua que el 9 de julio de 1855 adquirió la hacienda de Santa Clara, el 1 de junio de 1861 la de Ortega y el 31 de noviembre de 1863 la de Nuestra Señora del Carmen de Namiquipa. Solicitó que se fijaran los linderos de la primera hacienda alegando que según la escritura tenía doce sitios y tres cuartos, pero consideraba que no era exacto ya que los límites demarcados eran mayores a los señalados en la misma. Muller acudió “al Supremo Gobierno de la Nación, a fin de que en uso de sus facultades, se legalicen los límites de sus propiedades.” El asunto era que con linderos que Muller señalaba se invadían casi la mitad de los 64 sitios de Namiquipa y serían la base del plano elaborado por Marión en 1871.

El 29 de marzo de 1865 el jefe de hacienda del estado de Chihuahua, facultado por la Secretaría de Fomento, vendió a Muller las demasías que con el carácter de baldíos pudieran haber dentro de los linderos de las haciendas de Santa Clara de Ortega, la de Nuestra Señora del Carmen de Namiquipa y del rancho de Aranzazu, lo cual le costó a Muller 1950 pesos. Lo anterior fue sancionado por Benito Juárez: “y por lo que el C. Presidente de la República tuvo a bien acordar se declare, como se declaró, sin perjuicio de terceros que mejor derecho

represente."[72] Los namiquipenses de ninguna forma quedarían tranquilos con la anterior resolución, pero de las reclamaciones que hacían se expresó lo siguiente:

> "La Declaración hecha por la Secretaría de Agricultura y Fomento, por disposición del C. Presidente de la República, como se les dijo que al celebrarse el 10 de marzo de 1865 con el Sr. Muller, composición por los predios de Santa Clara de Ortega, El Carmen de Namiquipa y Rancho de Aranzazu, se expresó que no había datos para saber si hay contradicción entre los límites fijados por las escrituras de venta de dicho señor y la designación que hizo de los terrenos, que el señalamiento de los linderos hecho conforme a la solicitud del interesado, era sin perjuicio de los terrenos que legalmente pertenecen a otro dueño y que en consecuencia debían ellos [los vecinos de Namiquipa] exponer, llegado el caso, ante la autoridad judicial competente, los derechos de propiedad y de posesión que emanen de los documentos presentados y de los demás que tengan en su poder"[73]

Por su parte los habitantes de Galeana enviaron, el 17 de marzo de 1865, una carta relacionada con sus tierras. No sabemos con exactitud su contenido, pero el 27 de marzo de 1865 el ministro de Justicia e instrucción Pública, José María Iglesias, les respondió según el acuerdo del presidente Benito Juárez, lo siguiente:

> "…de que las cuatro leguas que ha tenido hasta aquí como ejidos esa Villa de Galeana, quede solamente con ese carácter una legua y cuarto, repartiéndose las dos leguas tres cuartos restantes, entre los vecinos de la misma población, a fin de que conforme a los prevenido por las leyes vigentes, sustituya la propiedad particular a la comunidad, cuyos graves inconvenientes no permiten su continuación."[74]

[72] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 70, expediente de restitución de Namiquipa.
[73] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 104, 122, expediente de restitución de Namiquipa.
[74] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 9, expediente de restitución de Namiquipa.

Lo anterior implicaba la reducción de las tierras de Galeana a sus más estrechos límites, ya que la resolución se refería a un cuadro de cuatro leguas, no era ni siquiera un cuadro de cuatro por cuatro que dieras 16 leguas cuadradas. Parece ser que los vecinos de Galeana hablaban en la carta que enviaron a Juárez de cuatro leguas, pero se confundió lo que debió entenderse por cuatro leguas por viento, es decir un cuadro de ocho leguas por lado, por un cuadro con una superficie de cuatro leguas. Lo anterior fue capitalizado por el mismo Enrique Muller que era dueño de la hacienda colindante Santa Ana del Torreón. Como sea, los galeaneses estaban profundamente descontentos y se unieron a la Coalición de Pueblos para combatir a Juárez. En 1867 el gobernador y comandante general de Chihuahua ordenó al jefe político del Cantón que se abstuviera de hacer repartimiento de tierras más allá de las cuatro leguas que le correspondían a Galeana, lo anterior a propósito de una queja que presentó Muller. Ante las presiones del hacendado, en 1868, el ministerio de fomento ordenó a al gobernador de Chihuahua delimitar las cuatro leguas de Galeana; al no realizarse insistió en 1870 ante el gobierno de Chihuahua y después volvió a sus pretensiones en 1886. Ese mismo año, los vecinos de Galeana solo pedían se les respetaran 8 sitios de ganado mayor dentro de un rectángulo de cuatro por dos leguas, quedando en esta superficie las labores de los vecinos. En 1895 un ingeniero enviado desde Chihuahua realizaba el deslinde de la hacienda de Muller y se citó a los vecinos colindantes. La autoridad municipal de Galeana no solo no se presentó, sino que envió una nota “intimando a que se suspendiera la medida, alegando en apoyo de tan temeraria orden, el derecho que pretenden tener sus administradores a toda la extensión de la hacienda”. A pesar de ello el deslindador continúo con sus trabajos.[75]

Todo lo anterior nos muestra la versión selectiva de la tradición de Namiquipa, Cruces y Galeana. Al presentarse Benito Juárez en sus historias particulares como

[75] AHRAN, 24 / 432, Local, f. 9, 75, 91, 92, expediente de restitución de Namiquipa.

un enemigo al que combatieron, pero exaltado por la sociedad nacional por la defensa que hizo de la república, no es seleccionado en las tradiciones de los pueblos mencionados. Por su parte, la gente de Cuchillo Parado lo selecciona por haberse visto beneficiados por él, y pretenden restablecer una situación y enfrentar una amenaza enarbolando en su tradición selectiva la figura de Benito Juárez.

San Antonio de los Arenales (Cuauhtémoc)

El término de la revolución, la pacificación de los grupos disidentes y la reconstrucción económica traen a Chihuahua la necesidad de plantear reformas estructurales en el campo. Por un lado encontramos el proyecto estatal, el del gobernador Ignacio C. Enríquez, que planteaba el fraccionamiento de la gran propiedad pero sobre todo el de imponerle un límite. El planteamiento local llevaba intrínseco el dar acceso a todos los sectores sociales demandantes de tierra. Los terratenientes podían conservar parte de ellas, aunque no todas las que habían poseído hasta antes de la revolución; las clases sociales emergentes de la revolución podrían comprar los excedentes de las que los latifundistas pusieran en venta según la ley agraria estatal; y los pequeños agricultores podrían formar colonias agrícolas. Enríquez soñaba con el surgimiento de una clase media rural fuerte y productiva, donde el pequeño agricultor, desdeñado en el proyecto federal, estaba incluido.

Pero para que este objetivo se cumpliera el gobierno debía de crear y facilitar los medios necesarios como la construcción de sistemas de riego y el establecimiento de bancos para otorgar créditos agrícolas. Condición primordial para todo lo anterior era la posesión de la tierra en régimen de propiedad privada e individual.

El gobierno federal, hasta antes del cardenismo, plantea otro proyecto para los pequeños agricultores. Veía el problema agrario como un asunto de producción,

no de despojo ni de acaparamiento de tierras. Bajo esta visión la tensión social en el campo era producto de la carencia en la oferta de empleos por los hacendados. La modernización de las unidades de producción existentes se convirtió en la prioridad federal. La queja hacia los terratenientes que utilizaban métodos y técnicas de producción obsoletas era constante. El pragmatismo del grupo sonora planteó la necesidad de una reconciliación social sobre la base de la buena voluntad de las partes en conflicto. Para conseguir la estabilidad en el poder opusieron una clase social con otra.

Indudablemente que las bases de la reforma agraria se plantean durante la revolución y el gobierno Obregón, pero siempre imponiéndole las limitantes necesarias para tener el control de todos los procesos rurales estableciéndose el centralismo agrario en detrimento de proyectos estatales como el de Enríquez.

En este contexto hacemos una revisión del inicio de la lucha agraria en la hacienda de Bustillos y anexas y la llegada de los menonitas a esas tierras. Las propiedades mencionadas que conformaron alrededor de 600 mil hectáreas pertenecieron a Carlos Zuloaga, quien las heredó a sus hijos: las señoras Martha Zuloaga de Lujan, Carmen Zuloaga de Kraft, Luz Zuloaga de Madero, María Zuloaga de Muñoz y Pedro y Leonardo Zuloaga. El arribo de los menonitas se inserta en la fiebre de colonización que caracterizó el proyecto rural de los sonorenses para el norte de México y la entrada al mercado de tierras de los dueños de la hacienda de Bustillos y anexas. Para Obregón y Calles estos extranjeros eran trabajadores, industriosos pero además poseían algo de capital. Los Zuloaga se cuentan entre los pocos terratenientes de Chihuahua que después de la revolución decidieron vender sus fincas rústicas. La venta de las tierras a los menonitas se realizaría no sin ciertos tropiezos con los demandantes de tierras ubicados en la misma hacienda y con el gobernador Enríquez que rechazaba abiertamente la colonización menonita y la dotación de ejidos.

Los primeros menonitas entraron a Chihuahua en marzo de 1922. El convoy que los llevaba se dirigió a Bustillos, iban 215 de ellos, que con su maquinaria agrícola ocupaban 20 carros de carga y dos coches de pasajeros. Para agosto del mismo año habían entrado a Chihuahua 29 coches con 1 406 menonitas, 147 carros con implementos agrícolas, 42 con caballos, 16 con ganado, 6 con vacas, 5 con caballos y vacas y 2 con gallinas.[76] Para diciembre de 1922 se habían establecido en Chihuahua 2 661 menonitas. A principios de 1923 llegaron a El Paso 194 menonitas más en cuatro carros de pasajeros y en 23 de carga traían sus implementos agrícolas muebles y demás bienes.[77]

Uno de los principales grupos demandantes de tierras lo constituían los vecinos de San Antonio de los Arenales (hoy ciudad Cuauhtémoc). El asentamiento había cobrado importancia y crecido gracias al paso del Ferrocarril Noroeste de México. Este poblado había sido elevado a la categoría de Sección Municipal de la Laguna en 1921, llegando a tener 590 habitantes agrupados en 143 familias. Entre los aspectos ya mencionados que contribuyeron al crecimiento del poblado también se encuentra el asunto de la repatriación de mexicanos radicados en Estados Unidos por la depresión de la posguerra. En abril de 1921 los vecinos de San Antonio liderados por Belisario Chávez solicitaron la formación de un centro agrícola. Para septiembre del mismo año Enríquez emitió su resolución dotando a San Antonio, con extrema generosidad, de 7 323 hectáreas. Los Zuloaga promovieron inmediatamente un juicio de amparo.

Enríquez accedió a dotar generosamente a este núcleo agrario ya que los Zuloaga se oponían al fraccionamiento del latifundio y la creación de colonias según su proyecto rural.

[76] Luis Aboites Aguilar. Norte precario: poblamiento y colonización en México (1760-1940). El Colegio de México / CIESAS, México, 1995. p. 165.
[77] Alonso Domínguez Rascón. La política de reforma agraria en Chihuahua, 1920-1924: sus efectos hasta 1940. Plaza y Valdés / INAH, México, 2003. p. 68.

En noviembre de 1921 Alberto Madero como representante de los Zuloaga solicitó a Enríquez se le devolvieran las tierras a los Zuloaga para fraccionarlas y venderlas a los interesados bajo el argumento de que:

> "...creando la pequeña propiedad particular y evitando la mancomunidad, ya que los resultados bajo esta base no han sido nada satisfactorios.
>
> En virtud de todo lo expuesto, los miembros del intestado de Dn. Carlos Zuloaga, deseando cooperar con las ideas del Gobierno en lo que se refiere al reparto de las tierras... solicitamos su apoyo a fin de que se nos devuelva la posesión de dichos terrenos, para proceder inmediatamente a su fraccionamiento."[78]

Los Zuloaga cederían gratuitamente a cada familia del lugar una parcela de 10 has. A los extraños y avecindados en la hacienda de Bustillos se les venderían tierras que solicitaran a 30 pesos por hectárea.

La Comisión Nacional Agraria objetó la propuesta al considerar que al componerse el asentamiento de una gran cantidad de mexicanos repatriados y sólo de 10 a 12 peones de la hacienda sólo se regalarían de 100 a 150 has. Además la propuesta de la venta de tierras a 30 pesos la hectárea era inaceptable ya que el valor comercial del recurso en la región era de 12 pesos por hectárea.[79]

Pero el principal obstáculo para la casa Zuloaga lo representaba la presencia de algunos arrendatarios en las tierras que habían vendido a los menonitas y que se negaban a abandonar. Alegaron que sus ascendientes habían sido soldados de

[78] AHRAN, 23: 381, Toca I, f. 52.
[79] AHRAN, 23:381, Toca I. ff. 47-49.

Pedro Zuloaga “el cazador de apaches” y por lo tanto les asistía el mismo derecho que a los hacendados de seguir viviendo allí.[80]

Se trataba de 50 familias que ocupaban los terrenos denominados Ojo Caliente, Moyote, Napavechi y Arroyo de Dolores. Para librarse del problema los Zuloaga prometieron darles tierras en San Antonio, indemnizarlos y hacer grandes inversiones para convencerlos de trasladarse a dicho poblado. El representante de la casa Zuloaga, Guillermo Porras envió un escrito a Enríquez donde le pedía que se revocara la expropiación y las tierras volvieran a posesión de los antiguos dueños. Los propietarios se obligaban a venderlos y colonizarlos exclusivamente con mexicanos y dedicarlos únicamente a la existencia del pueblo; se venderían lotes de agricultura y pastizales a los que allí se establecieran. También se comprometían a ceder gratuitamente hasta 1 500 hectáreas de terreno de agricultura en San Antonio a los arrendatarios de Napavechi, Rincón del Arroyo, Dolores, Ojo Caliente y Moyote.

Los vecinos de estos ranchos podían también elegir cambiarse a la colonia agrícola Rubio. Las hectáreas que ellos ocuparan allí gratuitamente serían deducidas de las 1500 de San Antonio. El nombre del poblado debía cambiar al de “Villa Zuloaga” en honor a Carlos Zuloaga. Otro compromiso era la inversión de hasta 50 mil pesos en mejoras materiales de la siguiente forma: a) Construcción de una presa en el arroyo de San Antonio 25 mil pesos, b) Aprovisionamiento de agua 5 mil pesos, c) Construcción de una escuela - granja con costo máximo de 10 mil pesos, d) Reconstrucción de la presa sobre el Bajío del Burro 1 500 pesos, e) Terminación de la escuela en construcción mil pesos, f) Cercado de alambre para los terrenos de cultivo 5 mil pesos g) otras mejoras materiales 2 500 pesos. La casa Zuloaga también se obligaba a obtener el establecimiento de un banco

[80] Pedro Castro Martínez. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Crónica de su fundación. CONACULTA / UAM, México, 2000. p. 69.

reaccionario en San Antonio con un capital inicial de 25 mil pesos para ayudar a los agricultores de la región.[81]

Todo lo que estaban dispuestos a ceder los Zuloaga nos revela, en cierta parte, la magnitud del negocio que habían propalado con los menonitas, mismo que a toda costa trataban de que no se esfumara. Para mediados de 1922 los extranjeros habían formalizado la compra de dos porciones de la hacienda de Bustillos de 31 440 y 31 288 hectáreas cada una. La primera con un costo de 632 676 dólares y la segunda de 629 582. Se habían dado por adelantados 190 mil dólares por cada porción y se pagaron dos abonos de 22 500 dólares al momento de la firma del testimonio de venta en octubre del mismo año. Restaban de cada porción 420 176 y 417 182 dólares respectivamente que se pagarían en diez anualidades con un interés del 6 % sobre el saldo insoluto. Los menonitas pagaron 40 pesos por cada hectárea, cuyo valor real se calculaba en dos o tres pesos.[82]

Pero los menonitas estaban dispuestos a pagar. Se calculaba que cada jefe de familia poseía por lo menos un capital de 10 mil dólares y que el trasporte de Canadá a la frontera con México había tenido un valor más alto que el de su equipaje, animales e implementos de labranza.[83] Cada convoy costó aproximadamente 30 mil dólares.[84]

La colonia Rubio la habían creado los Zuloaga en su hacienda del mismo nombre bajo la exigencia de Enríquez para que allí se concentraran los aparceros que fueran desalojados de las tierras vendidas a los menonitas. Enríquez llegó a declarar públicamente que la prioridad deberían ser los agricultores mexicanos desafiando el proyecto impulsado por Obregón. Antes de unirse a Carranza en la

[81] AHRAN, 23:381, Toca I. ff. 145-146. Dotación de ejidos a Cuauhtémoc.
[82] Aboites, op., cit., 1995, p. 189.
[83] Domínguez, op., cit., 2003, p. 66.
[84] Walter Schmidehaus. Los menonitas. Cuauhtémoc, Chih., s. e., 1973. p. 15.

revolución, Enríquez, de profesión agrónomo, cuyos estudios los realizó en Estados Unidos, había trabajado con los Zuloaga y precisamente en la hacienda de Rubio.

En esta ocasión los Zuloaga sí supieron entender el proyecto de Enríquez. La propuesta iba muy a tono con los lineamentos que el gobernador había fijado para el campo chihuahuense que contemplaba la creación de colonias y todo este asunto de los medios necesarios para garantizar su subsidencia como obras de irrigación y bancos refaccionarios. Los lotes que los Zuloaga planeaban vender se pagarían a 20 años y con un interés del 5 % anual, lo cual era considerado lo óptimo por Enríquez en la creación de colonias y que de hecho así lo plasmaría en su Ley Agraria de 1922. La propuesta fue aceptada por el ejecutivo en lo general en octubre de 1923.[85] Los vecinos de San Antonio también aprobaron la propuesta de los Zuloaga.[86]

Sin embargo, pocos días después Guillermo Porras envío al presidente de la Comisión Nacional Agraria una carta donde trataba de socavar el carácter legal de la solicitud y dotación de tierras a San Antonio. Se basaba en dos aspectos que se convertirían en el blanco tradicional de los ataques de los terratenientes contra los agraristas: los censos y la categoría política de los pueblos. Porras alegó que el censo levantado con efectos de la dotación era falso ya que se aumentaba el número de los pobladores. El levantamiento de población arrojó 585 habitantes agrupados en 144 familias de agricultores. Porras alegó que al momento de efectuar el censo, en 1921, sólo había en San Antonio 37 personas, entre ellos los empleados en la estación del Ferrocarril Noroeste de México, los empleados de la Casa Zuloaga y algunos arrendatarios de terrenos de cultivo y pastizales. Así en caso de proceder la dotación el número beneficiarios sería exagerado. En cuanto

[85] AHRAN, 23:381. Local I, f. 171. Dotación de ejidos a Cuauhtémoc. También véase en Informe Especial, f. 13.
[86] AHRAN, 23:381. Informe Especial, f. 14.

a la categoría política del asentamiento declaraba que no era pueblo, ni ranchería, ni congregación, ni condueñazgo, ni comunidad, ni hacienda abandonada por lo que la dotación de ejidos no procedía conforme a las leyes federales. Que tampoco procedía la fundación de un centro agrícola, esto con relación a la Ley Agraria de Chihuahua, ya que el poblado carecía de agua y solo la obtenía de que se le surtía por medio del ferrocarril.

Finalmente hacía la misma proposición que le había presentado a Enríquez. Conscientes los Zuloaga de que la región se convertiría en un centro agrícola y comercial importante querían sacar mejor tajada.[87]

Sin embargo, la Comisión Nacional Agraria falló en diciembre de 1923 modificando la resolución de Enríquez para dotar a San Antonio de 2 747 hectáreas.[88] Ahora Guillermo Porras se dirigió a la Comisión Nacional Agraria solicitando se revocara, no el fallo de dicha instancia sino el de Enríquez.

En febrero de 1924 Porras presentó a la Comisión Nacional Agraria una nueva propuesta: se dotaría a San Antonio con 2 024 hectáreas del mejor terreno laborable y ofrecía en donación 1 476 hectáreas para los vecinos de Ojo Caliente, Napavechi, Arroyo de Dolores y El Moyote. Reducida la dotación con relación a las 7323 autorizadas por Enríquez a las 2024 propuestas más las 1476 de donación los Zuloaga se comprometían a formar una colonia agrícola con el resto de los terrenos fraccionándolos y enajenándolos según la Ley Agraria del estado de Chihuahua vendiendo sólo a agricultores mexicanos sobre la base de 20 pesos la hectárea de cultivable.[89]

[87] AHRAN, 23: 381. Local I, ff. 152-155.
[88] AHRAN, 23: 381. Local I, f. 345.
[89] AHRAN, 23: 381. Local I, ff. 345-350.

Era urgente para los Zuloaga sacar a los arrendatarios de las tierras vendidas a los menonitas ya que se estaban presentando conflictos fuertes entre los dos grupos. En junio de 1923 los aparceros mandaron una carta al Congreso del Estado quejándose de que los Zuloaga, con autorización de Enríquez, habían formado acordadas particulares como la de Julián Pérez. También habían conseguido del gobernador que los protegiera con un piquete de rurales encabezados por Alberto Orozco. Los rurales mencionados habían aprehendido al aparcero José María Legarda en el rancho El Sapo porque había impedido que unos menonitas hicieran uso de las tierras que él había preparado para sembrarlas.[90]

Pronto Obregón envió una comisión para tratar de solucionar el problema, se dirigieron a Chihuahua los ingenieros Francisco Salido (tío de Obregón) Director de la Comisión Nacional de Irrigación y Toribio Corbalá, Director de Tierras y Colonización de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Pero Enríquez deseaba crear otra colonia con esos arrendatarios, dos veces fue a Bustillos a entrevistarse con las partes en conflicto y sugirió a los menonitas que les vendieran a los arrendatarios las tierras que tenían ocupadas.[91]

En septiembre de 1923 los comisionados se reunieron con los aparceros, el representante de los Zuloaga, un representante de los menonitas, Belisario Chávez en representación de San Antonio y los aparceros. Resolvieron que se gestionaría la devolución de parte de las tierras dotadas a San Antonio a los Zuloaga, quienes se comprometían a destinar esos terrenos a la existencia del pueblo y venta a agricultores; a donar las 1500 hectáreas para los arrendatarios. Belisario Chávez se comprometió a obtener la desocupación de los aparceros de los terrenos pertenecientes a los menonitas y a su traslado a San Antonio. Los

[90] AHRAN, 23: 381. Local I, f. 108.
[91] Castro, op., cit., pp. 72-73.

aparceros recibirían 10500 pesos como ayuda. También se les ofreció proporcionarles, por dos meses, un lugar donde se alojaran. Poco después los aparceros se comprometieron a desalojar las tierras para el 31 de marzo de 1924. Los Zuloaga les ofrecieron tierras gratuitamente en San Antonio o en la colonia agrícola Rubio.[92]

Al no resolverse la situación, a principios de 1924, los aparceros amenazaron a la Comisión Nacional Agraria, afirmando que si para el 10 de febrero de 1924 no se resolvía sobre los terrenos que tenían en posesión ya no los devolverían porque procederían a sembrarlos. Un ingeniero de la Comisión, Marte R. Gómez, propuso que se mandara un telegrama a Guillermo Porras para comunicarle que estaban dispuestos a resolver el expediente de San Antonio dotándolo con 4 mil hectáreas en el entendido que 2500 se considerarían como dotación y 1500 como donación y que se reconcentrarían en dicho pueblos los aparceros. Por las 3 323 hectáreas que se deducirían según el total que les había entregado Enríquez los Zuloaga se comprometían a invertir en mejoras materiales, según sus propias propuestas, por hasta 50 mil pesos.[93]

Finalmente se firmó la Resolución Presidencial en agosto de 1924. La Comisión Nacional Agraria no quiso entender o fue error de pluma ya que en su segundo punto resolutivo dotaba a San Antonio con 4 000 hectáreas y en el punto resolutivo número 6 aceptaba la donación de las 1 476. En el punto resolutivo cuatro se aclaraba que la casa Zuloaga se obligaba a donar 10 500 pesos para el traslado de dichos aparceros a San Antonio; a construir la presa del arroyo de San Antonio, invirtiendo 25 mil, dando agua gratuitamente al pueblo para el riego de 50 hectáreas; a construir la presa del Bajío del Burro que costaría 1 500 pesos y entregarla al Comité Administrativo de San Antonio; a hacer las obras de

[92] AHRAN, 23:381. Local I, ff. 263-264.
[93] AHRAN, 23:381. Informe Especial, f. 18.

aprovisionamiento de agua potable para abastecimiento de la población con un costo de 5 mil pesos; todo en supervisión de la delegación en Chihuahua de la Comisión Nacional Agraria. Se había pedido a la casa Zuloaga un fiador para garantizar la ejecución de dichas obras fungiendo como tal Pedro Zuloaga.[94] No todo lo que los Zuloaga había ofrecido a los arrendatarios aparecía en la resolución presidencial.

Para la ejecución de la resolución presidencial se envió al oficial mayor Francisco García Robledo, quien se reunió con los representantes de los Zuloaga y los arrendatarios. Los últimos protestaron porque no se contemplaba todo lo acordado para que ellos se trasladaran a San Antonio. Además, pidieron una indemnización de 350 pesos para cada familia y que les permitieran seguir en sus tierras durante el año de 1925 para poder construir sus casas en San Antonio y abrir las tierras al cultivo. Los Zuloaga ofrecieron 16 manzanas con cuatro solares cada una; facilitarles tierras, gratuitamente, para sembrar en 1925 y en el lugar de su traslado un lote de 30 hectáreas. Al final García Robledo fue desautorizado y a mediados de 1925 los arrendatarios empezaron a desocupar las tierras. Fueron conocidos popularmente como “los doscientos” porque la mayoría recibió ese número en pesos por indemnización al desocupar las tierras que habían trabajado. Así se cerró este capítulo que es una porción de la historia agraria de Bustillos.[95]

Lo primero que hay que destacar, para el siglo XIX, es la insistente determinación del pueblo de Villa López para recuperar las tierras. La Junta Municipal se constituyó en la primera línea de defensa de los ejidos. Lo anterior tiene que ver con la forma en que los miembros de la municipalidad se integran en relación con la tierra y como perciben al ejido.

[94] AHRAN, 23:381. Local I, ff. 345-350.
[95] Castro, op., cit., pp. 86-87.

La Junta Municipal en realidad representa al colectivo social y a su vez este se ve representado en tal autoridad. Es el colectivo el que delega la autoridad en la Junta Municipal, de ese colectivo ha surgido. Por eso en la defensa o recuperación de la tierra la Junta Municipal no lo concibe como un mero asunto administrativo o de beneficio para ella misma. Va más allá, no solamente se trata de la defensa o recuperación del ejido, sino en sí del colectivo llamado pueblo. El colectivo social es el pueblo, pero también lo es el ejido, este es una parte inseparable del pueblo. El ejido se concibe a partir del pueblo y también toma significado a partir de él, pero lo mismo sucede a la inversa: el pueblo se concibe y toma significado a partir del ejido. El ejido es como un eje integrador: agrupa y organiza socialmente.

El ejido colonial y el ejido de la época independiente presentan diferencias. En la Colonia los mismos misioneros o los procuradores de los pueblos eran los encargados de la defensa de las tierras, pero en el siglo XIX esta función parece desplazarse a las Juntas Municipales. En la Colonia y el siglo XIX el ejido no tiene forma jurídica y social por sí mismo y no tiene una vía de relación directa con el Estado como lo tendrá el ejido de la posrevolución. En la Colonia y en el siglo XIX el ejido, la Junta Municipal y el pueblo están integrados. En la posrevolución el ejido se convierte en una instancia separada o autónoma de la autoridad municipal y del conglomerado social o pueblo. El Estado determina quién puede ser ejidatario y quién no, se crea una estructura de cargos y autoridades ejidales que ahora pueden tener relación directa con él. De allí que surge la categoría social de ejidatario. El ejido puede ser parte del pueblo, pero no todo el pueblo parte de éste.

Los análisis sobre ejidos para antes de la revolución son mínimos. Partimos casi de un absoluto desconocimiento del tema. Ya sabemos que en la posrevolución el ejido se convirtió en una moda historiográfica. Entre otros aspectos se buscaba

justificar el agrarismo estatal, por ello la gran producción sobre el tema no deja de tener su carga ideológica que ha obscurecido lo que en realidad fueron los procesos sociales con relación a la tenencia de la tierra. Así se convirtió en una moda el decir que las haciendas despojaron a los pueblos, posiblemente así fue, pero tales afirmaciones parten de esa justificación. El problema es que se ha dado por hecho y no se ha estudiado.

El régimen de la posrevolución nos va a mostrar, en la necesidad de su consolidación, que los procesos de legitimación de la posesión de la tierra pasan invariablemente por el Estado, por eso en última instancia la tierra pertenece a la nación. Aunque en la Posrevolución los gobernadores podían emitir una resolución provisional de dotación de tierra, era el presidente de la república quien sancionaba, aprobaba o negaba. Tanto en la Colonia como en la posrevolución las instancias legitimadoras eran el rey o el presidente.

En 1901 la Gaceta Municipal erigiéndose como garante y defensor de la municipalidad escribía:

> "Y debemos decirlo con toda franbuesa, (sic) raros son los Ayuntamientos que se han preocupado en determinar legítimamente y repartir los terrenos que los pueblos de su Municipio posee a título de Egidos; puede asegurarse, que ni un cinco por ciento de nuestras poblaciones rurales han llegado a legitimar sus terrenos, los cuales bienen (sic) transmitiéndose de padres a hijos sin ninguna formalidad legal, expuestos en todo tiempo á ser denunciados muchos de ellos como baldíos, y originan una serie interminable de litigios que existen de pueblo á pueblo y de cada pueblo con los hacendados limítrofes".[96]

Si bien las tierras de los pueblos estaban expuestas a la usurpación por la carencia de las formalidades legales y del reconocimiento del Estado, lo cierto

[96] La Gaceta Municipal, t. II, No. 2, México, febrero 28 de 1901. p. 1.

también es que muchos pueblos poseían sus tierras sin deberle nada al propio Estado, es decir, las habían ganado con la fuerza de las armas y combatiendo contra indios indómitos, aquí se dio un proceso de apropiación del territorio por parte de los pueblos sin el apoyo del Estado. Pero, un Estado que se precia de serlo tiene que transferir esa apropiación hacia sus instancias de control, es decir es el Estado el que tiene que legitimar, controlar, regular mediante diferentes mecanismos la propiedad territorial. Los pueblos que habían ostentado las tierras por su propia fuerza y sus propias armas tenían una visión y relación con el Estado como asociados, no como agrupaciones tuteladas. Y no se reconocían, en muchos casos, los símbolos de sujeción al Estado como un papel (título) para ejercer el dominio y control sobre la tierra, esto se había dado por meritos propios. Lo anterior pasa con estados débiles y que al estilo de la colonia delegaron la expansión y apropiación del territorio a empresas financiadas por militares-empresarios o simplemente empresario (mineros o hacendados), es decir, la apropiación fue una empresa privada más que estatal.

Conclusiones

Uno de los rasgos esenciales en la formación del Estado en la época de los borbones fue la apropiación real del territorio. La historia cultural en esta época, a partir de la apropiación del territorio, muestra la transmisión de un sistema de símbolos por medio del cual los indígenas tenían que interiorizar una serie de códigos occidentales que perfilaban una forma específica de percibir, interpretar y actuar. El Estado no solo trata de marcar aspectos normativos socialmente, sino también la vida cotidiana, por eso hablamos de que no solo se crean categorías sociales uniformes sino también formas uniformes de pensamiento.

Para la apropiación real del territorio el Estado impulsó la colonización y les dio a los colonos autonomía, lo que Margarita Urías denomina como propietarios agrícolas - milicianos avecindados, que desarrollaron una relación militar con la tierra. El aspecto más palpable de dicha relación son las tierras de defensa o milpa grande de comunidad, que por otra parte nos muestra la mezcla de diversas formas de posesión de la tierra que van de la privada a la comunal, hasta llegar a expresiones comunistas. Para el poblamiento la división de la tierra es fundamental, los procesos de acaparamiento debilitan la expansión del propio Estado. Uno de los grandes problemas para la apropiación real del territorio era la escasa población, aunque los españoles habían crecido en número los habitantes indígenas habían disminuido. A la disminución de la población se le agregaba el problema de su concentración en las villas más seguras y la escasa llegada de nuevos pobladores, por lo tanto el proceso de poblamiento en el siglo XVIII, en la práctica, consistió básicamente en tratar de lograr una mejor redistribución de los habitantes ya existente en la Nueva Vizcaya. En la tarea de concentrar más población en áreas estratégicas para la apropiación del territorio y la lucha constante contra los pueblos indios relajó la cerrada y jerárquica sociedad colonial disminuyendo en ella los factores raciales.

En los procesos de larga duración los sistemas políticos y regimenes imprimen sus propias modalidades políticas y administrativas. Pero lo que es una constante es que cada régimen ha de hacer ver y sentir a sus gobernados que el derecho a la tierra es una concesión del Estado. Por eso los títulos de posesión de la tierra no son de una vez y para siempre. El título es un fetiche utilizado por el Estado para ejercer poder sobre la tierra y así sobre sus concesionarios.

Como lo hemos visto anteriormente, antes de la Revolución el ejido era un genérico para referirse a una diversidad de tierras con usos diferenciados por los pueblos. No tiene un contenido social por sí mismo y no tiene una relación directa con el Estado como lo tendrá el ejido de la posrevolución. En la época colonial y el siglo XIX el ejido, la junta municipal y el pueblo están integrados, de allí que cuando se daba alguna usurpación o despojo de tierras ejidales los ayuntamientos eran los primeros en asumir la defensa de las tierras, tal y cual lo hemos visto en el caso de Villa López. En la posrevolución el ejido pasa a ser una estructura separada o autónoma de la autoridad municipal. En cuanto al pueblo, socialmente hablando, el ejido puede ser parte del pueblo, pero no todo el pueblo parte de él. Ahora el ejido es una instancia controlada por el Estado y sanciona hasta sus aspectos más cotidianos. La imposición del ejido también inició y guió un ataque consistente y sistemático no solo contra los pueblos, sino también contra la municipalidad, cuya soberanía quedó hecha polvo.

Por otro lado, el Estado necesitaba las formas comunitarias de apropiación y solidaridad para una mejor defensa del territorio. Las estructuras comunales son más sólidas para la pelea, por eso las colonias militares tienen rasgos corporados de regulación y acceso a la tierra, también bajo una amenaza externa se vuelven extraordinariamente sólidas. Cuando el Estado busca fortalecerse divide la propiedad como lo hicieron los borbones y el Estado de la Posrevolución. En los dos casos la gran propiedad impedía la colonización y la movilización; con los

borbones se tenía que efectuar una apropiación real del territorio y en la posrevolución había que colonizar tierras antes ocupadas por extensos latifundios.

La concepción sobre la tierra que la corona española y los misioneros trasmitieron en el norte de la Nueva España se enlaza con la percepción que tenían sobre la forma de gobernar y ejercer el poder político propio basado en la propia experiencia ibérica, así como de la percepción y concepción que tenían de las etnias norteñas. La consideración social de los grupos indios norteños de bárbaros y salvajes “Pueblos sin Dios, sin ley y sin Rey”.

La tarea era pues construir una sociedad civilizada y lograr una apropiación real del territorio, esos eran los dos objetivos primordiales del Estado español. Civilizar significaba imponer los referentes culturales propios de la lengua, la religión, un uso específico de la tierra que conllevaba la interiorización del valor, sentimiento y sentido de la propiedad privada, pero además era infundir el respeto a la propiedad ajena. Civilizar es prácticamente un sinónimo de formación del Estado.

La apropiación real del territorio más allá del poblamiento y la colonización tenía como objetivo lograr una administración territorial eficaz y explotar las riquezas naturales, y su mano de obra. El poblamiento y colonización requería de buenas tierras y garantías, por eso se dio una política de combate a la gran propiedad y de fomento a la pequeña y mediana propiedad.

Las reformas borbónicas conllevan una concepción del individuo, una forma de organizar la sociedad, de ejercer el poder e indefectiblemente el objetivo es la formación de un nuevo tipo de Estado, más centralizado, más poderoso. Por su parte los indígenas tuvieron que adaptar y adoptar los símbolos de las formas de apropiación de los españoles de la tierra al empezar a hacer uso de ellas en la forma occidental, ya que carecían de una simbología con esos usos.

Símbolos del poder: dominio político y administrativo a través de los cuales se ejerce un dominio territorial, donde todos los sujetos están sometidos a las disposiciones y autoridades. Sujetos con una conciencia de súbditos; la base real para ello es el dominio que el Estado ejerce sobre la tierra que se traduce en un tributo una renta, un impuesto; es decir, exacciones fiscales –en este caso las colonias- prohibición de abandonar la colonia y usar áreas en forma comunal. Por eso el Estado siempre ejerce el dominio y se da los atributos de dar o quitar la tierra y ejercer sobre ella impuestos.

La lucha con los apaches creó formas de solidaridad comunitarias y hasta posiblemente rasgos de comunidades corporativas cerradas. Siempre se trataba de sumar alguien más a la lucha. Tierras de frontera propician una relación militar con la tierra. La tierra no es de quien la trabaja, sino de quien hace prevalecer su posesión con el rifle y sobrevive para contarlo. Guerra apache fue un factor extragrupal para crear lazos comunitarios. El avance de las relaciones capitalistas son un factor extragrupal para crear relaciones individualistas de uso y concepción de la tierra.

El desarrollo de las sociedades norteñas se da en este contexto de constante guerra, precariedad y zozobra. El estado no es un protector y garante de la seguridad de los pobladores, ellos mismos tienen que estar claros y concientes de ello. Su principal premio es un nuevo estatus como propietarios de la tierra, que es el principal ofrecimiento del Estado además de concesiones como un pago y la excepción de impuestos. Todo ello va a generar en los pueblos relaciones de asociación. Cuando los namiquipenses se expresan de sí mismos como baluartes de la civilización y defensores del Estado en el siglo XIX no es una concepción que se genera espontáneamente y en el contexto de la aguda crisis por la guerra con los apaches en esa época, sino de símbolos presentes en su imaginario que

los remite a una tradición selectiva de lucha por la sobrevivencia desde la llegada de sus antepasados a esas tierras.

Los cimientos del Estado mexicano de la revolución descansan sobre la reforma agraria. En la recuperación, adecuación, pero también en la imposición política, jurídica, militar, pero sobre todo cultural de un nuevo modelo de ejido que retoma elementos de la tradición popular. Coincidimos con Mallon cuando afirma que la cultura popular es la base de la construcción del Estado mexicano. El ejido forma parte fundamental de la tradición popular de uso y relación con la tierra del campesinado mexicano. A pesar de las diferencias regionales de uso, relación y concepción de la tierra, el Estado tomó elementos esenciales de la tradición agraria ejidal y los refuncionalizó para crear un nuevo modelo de ejido que consolidó en las disposiciones legislativas y aplicó uniformemente en todo el país.

Así pues, la reforma agraria es un rasgo fundamental para entender el proceso de formación del Estado mexicano, reforma que implicó formas sociales uniformizantes y homogeneizantes, es en este sentido que el ejido es una invención del Estado. Hemos tratado de ver la formación del Estado mexicano no como esa visión clásica que lo visualiza desde una revolución armada, sino como una revolución cultural. Lo anterior implicó verla en forma relacional con las culturas rurales dominadas. La premisa para lo anterior es que la base del poder del Estado no está en el consenso de los dominados, sino en las formas y órganos normativos y coercitivos del propio Estado que definen y crean cierto tipo de sujetos e identidades mientras niegan y excluyen a otros. Insistente y sistemáticamente se logra por medio de funcionarios y sus rutinas, sus procedimientos, formularios y registros. En el norte ejidatario y campesino son categorías sociales que más que expresar contenidos culturales expresan relaciones políticas con el Estado.

El ejido es una imposición cultural porque a través de éste el Estado crea lazos de subordinación; se incrusta en las tradiciones selectivas rurales, las rufuncionaliza y las impone; reordena las relaciones sociales en los pueblos y comunidades; transforma los usos, la percepción y la relación de pueblos y comunidades con la tierra; fija las formas y rituales para acceder a ser escuchados por el propio Estado; socava autonomías; transforma las relaciones sociales internas y externas; y crea nuevas categorías clasificatorias. La reforma agraria y su instrumento el ejido son ritos de poder sacralizados. El Estado a través de la reforma agraria llevó a cabo una revolución cultural masiva que se erigió en el pilar de su base hegemónica, así la formación del Estado implicó una amplia y profunda revolución cultural.

Pero en el norte de México también había arraigado otra forma de uso y concepción de la tierra: la colonia. La reforma agraria y su instrumento, el ejido, tuvieron sesgos diferentes en el norte. En Chihuahua el Estado enfrentó una situación diferente en comparación con los estados sureños, los pueblos no solicitaban dotaciones ni restituciones. Los usos y formas de apropiación de la tierra toman sentido y se materializan en algo llamado colonia cuyos rasgos principales son la propiedad privada y la autonomía. No estamos haciendo una oposición binaria colonia - ejido, autonomía - tutelaje, es decir, en la segunda forma de uso y apropiación de la tierra probablemente hay fuertes expresiones autonómicas. Pero en Chihuahua había un ambiente de desconfianza hacia el programa de reforma agraria que emprendía el Estado de la revolución. Ya la historiografía nos ha mostrado cómo los usos y apropiación de la tierra vía colonia se expresan militar y políticamente a través del villismo y enriquismo.

Los dos movimientos recogieron la tradición selectiva en Chihuahua, pero ambos fueron derrotados. Así que cuando el Estado inicia la reforma agraria, a partir del ejido, hay reticencias en los sectores rurales que debían ser beneficiados. No es

que las formas ejidales estén excluidas del imaginario colectivo de los sectores rurales chihuahuenses, pero no tiene la misma fuerza y raigambre cultural que la colonia. Es por eso que el Estado tuvo que hacer una fuerte campaña en Chihuahua para promocionar el ejido y tratar de borrar esa desconfianza y una cierta moral que veía mal que les dieran tierras arrebatadas a sus propietarios y sin costo alguno. En el imaginario social de los chihuahuenses la colonia como forma de uso, apropiación y relación con la tierra contiene símbolos densos cuyos códigos y significados remiten a las grandes dificultades de un proceso de poblamiento como la inicial apertura de las tierras al cultivo en medios agroclimáticos difíciles y su posterior defensa con las armas. El proceso histórico-cultural marca la pauta para el desarrollo de relaciones de asociación de estos pueblos con el Estado. La base es la apropiación de la tierra, es una relación dialéctica propiedad individual y expresiones corporadas. La gran desconfianza hacia el Estado y su programa agrario al pensar y creer con razón que se trastocarían las relaciones de asociación y de apropiación de la tierra, ya que eran parte fundamental de su identidad. Los namiquipenses no desconocen al Estado, ni se aíslan, saben que está allí, pero su relación es muy independiente, es decir, establecen relaciones de asociación con él.

Las expresiones locales de la SCP de Namiquipa y de la gente de Galeana en cuanto a constituir organizaciones que por sí y para sí manejaran las tierras no son formas culturales aisladas o excepcionales en cuanto al uso, concepción y relación con la tierra. Forman parte de un contexto cultural regional caracterizados por pautas identitarias sobre la base de relaciones de asociación con el Estado, apropiación privada y autónoma de la tierra, su defensa con las armas y tierras de frontera. Aspectos culturales que también perfilaron rasgos corporados de organización social de las colonias militares al enfrentar un enemigo poderoso como los apaches, además de la carencia de desarrollo de relaciones capitalistas

por la ausencia de un mercado de tierras producto de la gran inestabilidad por la misma guerra.

Pero el naciente Estado de la revolución no estaba dispuesto a permitir la consolidación o resurgimiento de formas regionales autónomas de apropiación de la tierra. Enfrenta a Namiquipa y Cruces y no acepta las pretensiones de Galeana en cuanto sus aspiraciones de manejo de la tierra por sí solos. El objetivo no está únicamente encaminado al dominio y control de estos pueblos, sino socavar expresiones, rasgos y pautas culturales regionales que conforman una tradición selectiva, misma que se visualiza como una latente amenaza en la formación del Estado.

Por otra parte, el caso de Casas Grandes nos muestra como el Estado afirma, da largas a su asunto agrario, impone ritmos, tiempos y procedimientos vestidos en un aura de legalismo, racionalismos técnicos y la necesidad de estudios para aclarar la situación. La excesiva y asfixiante burocracia y los ritmos lentos de los órganos coercitivos del Estado no se podrían definir como la ineptitud y nepotismo, sino como afirmaciones o formas de dominación. Como tampoco lo son los conflictos por linderos, ya ello mismo da la pauta para la intervención del Estado. Todo lo anterior lleva a la inseguridad en la posesión de la tierra que es una de las principales armas del Estado para controlar sectores disidentes.

La dominación del estado hacia los pueblos ni es total ni todo poderosa, siempre habrá formas creativas por medio de las cuales los grupos opositores presenten resistencia, evadan las formas de dominación, las reviertan, cuestionen las afirmaciones o confronten directamente al Estado. En un principio pueblos como Namiquipa y Cruces rechazaban abierta y directamente la restitución de ejidos porque veían en ello un cambio en las formas de relación con el Estado. En estos casos el rechazo era por no querer quedar en una posición tutelada contra su

tradición de asociación. Lo que posibilitó la intervención e intromisión del Estado en estos pueblos fue en primer lugar el conflicto por los linderos con los hacendados vecinos, la división interna de quienes estaban a favor del ejido y quienes la rechazaban, que por otra parte es el mismo Estado que promueve e impulsa la fractura interna de un pueblo o grupo social para que su intervención pueda ser más sutil. El delegado de la CNA en Chihuahua expresaba que tanto en Cruces como en Namiquipa se habían formado grupos agraristas y antiagraristas siendo los segundos los más numerosos.[97]

Aunque en un momento dado el Estado logra imponer la refuncionalizada estructura ejidal con su cuerpo administrativo y sanciona la renovación periódica de este con miembros que no sean renuentes a seguir las directrices marcadas, no se pueden sepultar del todo las tradiciones autonómicas de asociación. Estas buscarán formas creativas de seguir presentes y el Estado igualmente buscará formas creativas para socavarlas siempre intentando eliminarlas del todo. Ahora la clave en esto será la utilización de miembros del mismo grupo o de los mismos sectores rurales opositores para enfrentarlos entre sí. La resistencia no está allí y la dominación allá; el Estado vive y tiene sentido a través de los sujetos por eso las formas de resistencia y de dominación no se dan en forma separada y monolítica como si fueran entes de vida independiente de una para con la otra.

La dominación y la resistencia no son formas estáticas, sino que en un marco de acción se influyen, corresponden, chocan, cuestionan una con el objetivo de imponer la subordinación y la otra de sacársela, esto es el especto relacional del que hemos venido hablando. Los errores de las interpretaciones más recientes de los estudios de la resistencia y la dominación han sido percibirlos como estáticos. Asimismo, ver al propio Estado y a las culturas rurales opositoras enfrentados como entes monolíticos. De allí derivan dudas y ciertas afirmaciones de que el

[97] AHRAN, 23/434, Toca, f. 132.

Estado mexicano no ha sido hegemónico o no ha logrado establecer un marco discursivo común. En un lado vemos al secretario de Estado, Antonio Villarreal, de la cartera de agricultura y fomento enfrentado con Álvaro Obregón, presidente en turno; o cómo el gobernador de Chihuahua desafía al Estado central retomando la tradición selectiva norteña de las colonias para enfrentarla al proyecto centralizado de ejidalización de los sectores rurales. Pero también tenemos a un Estado que utiliza a los sectores rurales bajos para oponerlos unos contra otros, así como a las clases sociales unas contra otras. Así vemos a aparceros, peones de las haciendas, labradores y a pueblos enfrentados unos a favor del ejido y otros a favor de la colonia.

Cuando Israel Loya se enfrenta a la CLA para expulsar del ejido de Cruces a Reyes Ortiz, el delegado se quejaba amargamente de que Loya no tomaba en consideración sus indicaciones y pedía a sus superiores que le enviaran un oficio apoyando las decisiones de su oficina para que Loya mostrara “respeto y condimento necesario”. En otras palabras que, ya que el Estado les había otorgado benevolentemente la restitución ejidal ahora debían ser sumisos y acatar las instrucciones de las instancias agrarias. Ninguna autoridad ejidal debía decidir u obrar al margen de la CNA al grado de permear los procesos locales y cotidianos de administración de la tierra. Sus procesos eran sacralizados y por lo tanto incuestionables. Y ya que los ejidatarios eran simples concesionarios de la tierra y el verdadero dueño el Estado, entonces podía intervenir socavando procesos locales de disidencia e impulsando aquellos que refuerzan su presencia y dominio. Pero precisamente esa disidencia de la gente de Cruces no es una reacción momentánea, una coyuntura o un momento de exacerbación de los ánimos, sino parte de su propia identidad.

Sin embargo, el proceso de transformación de las relaciones de asociación a tutelares no inicia con la reforma agraria, sino más bien con el término de la guerra

apache. Ya que el Estado no necesita a los pueblos para combatirlos, ahora trata de modificar sus relaciones. El Estado deja a los pueblos el proceso de apropiación real de la tierra combatiendo a los apaches, ahorrándose el enorme gasto del financiamiento de la guerra con el ofrecimiento de la tierra como propiedad indiscutible, crea formas de autonomía social y política en los pueblos. Ya sin el peligro de una amenaza el Estado ve en esas formas autonómicas un desafío para sus afirmaciones y su objetivo será socavarlas.

El lado radical de esas formas se expresa muy claro en la SCP, quien administraba las tierras de Namiquipa: asignaba, distribuía, sancionaba, dirimía disputas y quitaba lotes. Son formas de total autonomía en el manejo y el ejercicio de los derechos corporados de los namiquipenses sobre la tierra. La contraparte de ésta va a ser el CPA, la instancia local, con gente del pueblo pero dependiente de la CNA.

El concepto que tienen los namiquipenses de la propiedad es la base de las relaciones de asociación que detenta con el Estado. La forma en que ellos conciben la propiedad no es propiamente propiedad privada absoluta o una forma comunal, es una mezcla de las dos, ya que cada miembro de la comunidad tiene conciencia de propietario privado pero también coexiste con las formas corporadas de tenencia de la tierra.

Los namiquipenses numeran como base fundamental de su tradición selectiva el bando de Croix, la guerra apache y el tiempo de posesión de la tierra. Acostumbrados a tener relaciones de tú a tú con el Estado y el orgullo brota de sus poros cuando se dicen baluartes de la civilización y que a los vecinos se les ha impuesto el respeto hacia sus tierras. Ellos han ganado por sí solos el derecho a la posesión de la tierra que detentan y nadie tiene facultad para cuestionarlo.

A partir del ejido el Estado recuerda cotidianamente a los beneficiarios que si disfrutan las tierras es por su paternal bondad ya que se las ha quitado a sus opresores para entregárselas. El Estado maneja un discurso justicialista, dirigido a los oprimidos del campo, que se construye en oposición a los terratenientes. Poco a poco los namiquipenses fueron aceptando la imposición del ejido, primero pasivamente y luego en forma activa. Cuando se establece el CPA, al cual la mayoría no reconoce pero al que el Estado le da poder sobre la tierra, el grupo mayoritario queda relegado y sin capacidad de interlocución. Cuando se hace la entrega definitiva de tierras al CPA en 1925, pasan casi dos años para que setenta y siete namiquipenses mandaran una carta al gobernador solicitándole se realizara nueva elección del CPA. Más que aceptar la imposición querían sacar a Reyes Ortiz de presidente de la nueva instancia administradora de las tierras. Pero al hacerlo reconocen tácitamente la imposición del nuevo régimen de tierras y de la jurisdicción que ejerce la CNA a partir del CPA sobre las tierras de Namiquipa. Aunado a lo anterior también cuando utilizan las mismas leyes del Estado para rebatirlo y así se conforma un marco discursivo común donde los dominados expresan la aceptación o la negación de las afirmaciones en los términos del propio Estado.

Pero en forma compleja, aunque se haya establecido tal marco discursivo común, no se eliminan las formas disidentes que también se manifiestan cotidianamente. En su proceso de formación el Estado avanza socavando formas de expresión autónoma, derruyendo las relaciones de asociación establecidas en un proceso de larga duración entre pueblos y Estado. Conforme el proceso hegemónico impuesto por el Estado avanza, su presencia se hace más fuerte y en ocasiones se vuelve asfixiante. Más esa hegemonía no es todo poderosa, los dominados creativamente crean formas de resistencia que van desde la ironía, la simulación, el disimulo hasta el rechazo abierto. Ya vimos el humor insolente que despliega Velia Muñoz, o cuando los namiquipenses dicen burlonamente a los funcionarios de la CNA que

se les ha olvidado como se llamaban cuando de firmar las actas se trataba, la ayuda que los cruceños se niegan a dar a los ingenieros cuando realizaban los trabajos técnicos ejidales a aquella tan inverosímil de la Gente de Cuchillo Parado que esconde el mismo pueblo al Estado.

Así leyendo los expedientes agrarios, los registros, procedimientos, las resoluciones, los dictámenes etc. se nos hace como algo participativo de la vida cotidiana, algo tan normal o natural, sobre todo porque está envuelto en un discurso justicialista de reivindicación hacia los supuestamente más desfavorecidos. Las antiguas colonias nos ponen al descubierto el discurso oculto del Estado, su resistencia al ejido nos deja ver como se dan esos registros, rutinas y formas del Estado que se llegan a convertir en algo cotidiano y en verdaderos procedimientos de poder. Namiquipa, Cruces y Cuchillo Parado nos muestran como el Estado se forma contra aquello que se le opone, por su parte también nos señalan que las formas del Estado no son todopoderosas, los dominados recrean formas creativas de resistencia.

Que el Estado crea categorías sociales y socava otras lo vemos claramente en el mismo ejido. Hasta antes de la implementación del ejido en Chihuahua, nadie se identificaba como ejidatario. Es con el Estado de la revolución que surge esta categoría. Antes los habitantes de las colonias se referían a sí mismos como labradores. Es con el Estado de la revolución que esa palabra empieza a operar refiriendo a una categoría social rural cuya principal característica es sostener relaciones de tutelaje con el propio Estado. Por otra parte el uso de la palabra ejidatario no marca el fin de una tradición selectiva, sino a una incorporación de elementos discursivos del Estado como estrategia de resistencia o de mejorar sus condiciones de vida. Así parte de las peticiones con el Estado se dicen ejidatarios pero ante la sociedad siguen siendo rancheros.

En la posrevolución el asunto del ejido se convirtió en moda historiográfica, se buscaba justificar el programa de reforma agraria iniciado por el Estado. De allí que exista una gran cantidad de estudios sobre el tema, pero que conllevan una gran carga ideológica, lo que ha obscurecido lo que en realidad fueron los procesos sociales con respecto a la tenencia de la tierra. El agrarismo se convirtió en una moda y se dio por sentado el despojo y la iniquidad de los despojadores de las tierras. El gran problema es que darlo por hecho impide profundizar en los aspectos cotidianos de esos procesos. Lo anterior se ha dado porque se ha partido del lenguaje universalizante del propio Estado. Los lenguajes universalizantes del Estado penetran las formas académicas. La reforma agraria se justificó académicamente, así como se hizo con el indigenismo. Los intelectuales como Tannenbhaum, McBride, Eyler Simpson entraron a ser parte del lenguaje hegemónico del Estado. Se creó una gran fantasía: el ejido.

Pero si bien los pueblos usan formas creativas para tratar de rechazar la dominación, no son menos creativas las formas que el Estado utiliza para dominar. Aspectos tan sencillos, tan sutiles pero que sistemáticamente se vuelven rutina hasta hacerse cotidianos y van a conllevar un gran poder de dominación, por ejemplo, los mismos formatos de solicitud de tierras por medio de los cuales los solicitantes van a expresar los términos en que el propio Estado quiere que se efectúen los procesos de relación. Los formatos de solicitud de tierra son clave para entender los procesos cotidianos de la formación del Estado, así como las instrucciones de los ingenieros de la CNA y la CLA. Cuando se llenaba un simple formulario siempre se tenía que aludir a los fundamentos legales de la ley del 6 de enero de 1915 y a las reglamentaciones agrarias. Al hacerlo así se aceptaba tácitamente un reconocimiento del Estado, de su autoridad, se aceptaba la sujeción, su paternalismo. El asunto era que los pueblos aludieran a su necesidad de tierras para su subsistencia y no a ningún tipo de tradición, derecho o fuerza para pedir la reivindicación de la tierra.

Asimismo, las palabras expresan relaciones y poderes materiales, el Estado puede imponer ciertas palabras para afirmar, para nombrar, para etiquetar. Pero además puede utilizar ciertas palabras para no reconocer o para ocultar símbolos densos de relación y uso con la tierra de las culturas subalternas, ese es el propósito al referirse a los pueblos con el impersonal y frío marbete de núcleos agrarios. El objetivo era quitar toda una carga social, histórica, cultural de relaciones sociales, de dominación, era quitar la tradición. Así los pueblos se vieron desprovistos de sus tradiciones, historias y redes sociales en el contexto de la reforma agraria. Primero: Aceptar la dotación y la imposición de estructuras administrativas estatales. Segundo: Reconocerse como hijo del régimen: ejidatario. Tercero: Depender totalmente de una oficina agraria para cualquier trámite relacionado con el uso de la tierra.

Una de las grandes estrategias del Estado para su propia consolidación fue oponer a las clases o sectores sociales y así apropiarse del poder. Aquí reside la clave del Estado posrevolucionario, no solo de oponer una clase o sector a otro, sino también de dividirlos y enfrentarlos. ¿Cómo los divide y cómo los contrapone? Se incrusta y apropia de sus tradiciones, su cultura propia, sus símbolos y los incorpora en su discurso y sus procedimientos normativos. Cuando encuentra comunidades que se oponen férreamente a sus afirmaciones usa otra serie de estrategias: Utiliza a los elementos internos que están dispuestos a ser sus agentes a cambio de ciertos beneficios. Aprovecha los conflictos que hay con los vecinos colindantes, también se incrusta en los conflictos entre pueblos y haciendas como sucedió con Namiquipa y la hacienda de Santa Clara. El conflicto fue el gran propósito para que el Estado se pueda erigir como arbitro y juez supremo y poder intervenir en los procesos internos de la comunidad. Una vez emitida la solicitud de restitución por algunos namiquipenses el Estado interviene tratando de cambiar el régimen de propiedad privada a ejido, para imponerle una estructura organizativa interna totalmente dependiente de la CNA. La síntesis de

esta lucha es el enfrentamiento que se da entre la SCP y el CPA por el control de las tierras. La SCP representa los símbolos densos de los namiquipenses de autonomía, de defensa de la tierra con las armas en contra de los apaches, de su estatus de asociados con el Estado y no como tutelados. Poco a poco la CNA va relajando y quebrando la oposición de los namiquipenses más recalcitrantes.

Las comunidades tienden a evitar que gente externa penetre la estructura comunal. Los derechos a la tierra son comunales, tienden a la endogamia. Cuando agentes externos penetran la comunidad se producen fracturas y la comunidad se debilita. Mas aún cuando se apoderan de las estructuras organizativas internas como es el caso de Namiquipa. El Estado solo aprovecha esta situación, generalmente los namiquipenses más inclinados a acatar las disposiciones del Estado son aquellos que al finalizar la guerra apache llegan al pueblo como es el caso de Reyes Ortiz.

Para la los inicios de la reforma agraria la Sierra tarahumara era una autentica olla de presión a punto de estallar por la situación de opresión e injusticia social que vivían los rarámuri. Las vejaciones y despojos que sufría la etnia habían provocado la posibilidad de un eminente levantamiento armado rarámuri. En su lucha contra la injusticia y opresión evocaron la figura de Benito Juárez y la época de su estancia como un evento justicialista, de honor y orgullo. Exigieron el mismo trato y el respeto a sus propiedades y formas culturales.

Se ha narrado los aspectos épicos de la estancia de Juárez en Chihuahua, las grandes batallas y los grandes hechos, pero los aspectos cotidianos no. Las acciones que Juárez emprendió en el estado para conseguir recursos y el apoyo de la mayoría de los chihuahuenses provocaron la afiliación de unos y la animadversión de otros. Sobre todo a partir de sus disposiciones agrarias y la disposición de impuestos. Los pueblos que pudieron hacerse de tierras por las

disposiciones del gobierno juarista más tarde incluirían al presidente en su tradición selectiva. Los pueblos del Distrito de Guerrero que se levantaron en armas lo hicieron en contra de Juárez, no de la república y obedecía no a la falta de patriotismo, sino a una tradición selectiva en relación a la excepción de pago de impuestos. Como hemos visto los pueblos fundados por Croix recibieron esa prerrogativa de manera amplia a cambio de luchar a favor del Estado, no veían por que ahora tenían que pagar impuestos. En la relación con el Estado muchos pueblos de Chihuahua, en épocas de crisis y guerra se les había concedido la excepción de diversos aranceles y en su visión el Estado no se los había otorgado, sino que los habían ganado.

Por otro lado, la grave situación que se presentaba en la Sierra Tarahumara en la década de los veinte descrita en el presente trabajo se relaciona con la débil presencia del propio Estado en la región. Por otra parte para hacer sentir su presencia el Estado no reconoce el derecho natural de los grupos étnicos de la Sierra a la tierra y por lo tanto no da crédito a la información testimonial cuando hablan de la posesión de la tierra desde sus antepasados. Los sectores rurales campesinos y sobre todo a los indígenas no se les da crédito para hacer producir la tierra en los momentos que el Estado busca la reconstrucción nacional y no se confía en ellos. En la escala racista del Estado los grupos étnicos ocupan el primer lugar como seres inferiores y menos capacidad de producción. Lo anterior es un factor de porque el Estado no reconoce la información testimonial como fuente de derecho.

Sin embargo, unido a lo anterior tenemos que los pueblos no exigen que la posesión ancestral de las tierras sea reconocida como fuente de derecho, de los casos que se enlistaron solo Sisoguichi recurre a este argumento y lo convierte en una tradición selectiva. Por alguna razón no se encuentra en el imaginario social y por lo tanto no se hace presente en su tradición selectiva.

Vimos como la visión del Estado de los rarámuri se centra en la figura de Juárez, ya que el en persona dispuso la entrega o venta de las tierras a los rarámuri. Con la llegada de la reforma agraria son las instituciones agrarias las que van a suceder a Juárez en esa visión.

En la Primera Conferencia de Creel el Estado de forma implacable amenaza y obliga a desistir a los rarámuri de su pretensión de expulsar a los blancos. Se les advierte claramente que no deben hacerse justicia por ellos mismos si no se les castigará, bajo la promesa de poner remedio a su situación de opresión y agravio. La rebelión propicio que el Estado creara un programa especial de dotación agraria para los grupos étnicos de la Sierra Tarahumara. Lo anterior no tiene que ver con una posición justicialista, pero así se le hace ver, sino que la situación y la rebelión armada cuestionan el mismo proceso de formación del Estado.

La exigencia de la expulsión de los blancos, por parte de los rarámuri, de sus tierras es una utopía porque en la visión del Estado implicaba renunciar a su propio proceso de formación ya que era renunciar al control sobre el territorio, sus recursos y la misma etnia, hubiera sido como proclamar la autonomía territorial étnica. La dotación de ejidos a los rarámuri posibilitó que no siguieran siendo, en cierta medida, despojados de la tierra, pero no pudieron impedir que los blancos siguieran llegando.

Es también interesante ver como la mancomunidad indígena de Barbechitos y Coloradas del municipio de Guadalupe y Calvo rechazaban el ejido que el Estado quería imponer, al igual que Namiquipa y Cuchillo Parado al concebirse como pequeños propietarios. Pero de la misma forma que los casos anteriores peleaban por una autonomía e independencia del Estado.

Hemos creído encontrar en el concepto de relaciones de asociación una herramienta explicativa sólida para la formas, rasgos y pautas culturales de los pueblos que no deben obediencia y sumisión al Estado, sino que exigen un trato precisamente de asociados de dignidad y respeto y no de tutelaje. No sienten que le deban su supervivencia al Estado, sino a su propia comunidad y a su valentía de sostener la propiedad de la tierra con las armas. Lo hemos visto en el contexto de larga duración que nos presenta precisamente una lucha constate por sostenerse en sus tierras través del tiempo donde se generan símbolos que formaron parte de su esencia identitaria.

Por otra parte hemos visto que la tradición selectiva en este caso opera mejor con la definición que se ha propuesto como un cúmulo de símbolos que refieren a un pasado significativo, que se recuperan, actualizan o reinterpretan según el contexto presente para enfrentar un amenaza, afirmar un presente y proyectar un futuro. La tradición selectiva no tiene que ver con la veracidad, la fidelidad o la "verdad" de los hechos del pasado, tiene que ver con la interpretación, la significación y la refuncionalización de símbolos socialmente presentes y compartidos que son definitorios de identidad. Por eso la figura de Juárez es un símbolo significativo en muchos pueblos rármuri ya que se le ve como un personaje que reconoció su dignidad y esencia de pueblos reconociéndoles la posesión de la tierra. En cambio Juárez no está presente en la tradición selectiva de los habitantes de las que fueron las antiguas colonias de Croix ya que no les favoreció en sus reclamos y lucha por la tierra.

Fuentes

Bibliografía

Aboites Aguilar, Luis. Norte precario, poblamiento y colonización en México (1760-1940). El Colegio de México / CIESAS, México, 1995.

Almada, Francisco R. Resumen de historia del estado de Chihuahua, Libros Mexicanos, México, 1955.

---------- La ruta de Juárez. Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua.

---------- Diccionario de historia geografía y biografía chihuahuenses. Impresora de Ciudad Juárez, Cd. Juárez, 1968.

---------- "La peregrinación del presidente Juárez a Chihuahua." Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, t. XI, No. 6, diciembre de 1964 - enero-febrero de 1965.

Álvarez, Salvador. Tendencias regionales de la propiedad territorial en el norte de la Nueva España siglos XVII y XVIII. en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada, Cd. Juárez, Chihuahua, 1990.

Bennett, Wendell C. y Robert M. Zingg. Los Tarahumaras. Una tribu india del norte de México. INI, México, 1988.

Castro Martínez, Pedro. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Crónica de su fundación. CONACULTA / UAM, México, 2000.

Córdoba, Arnaldo. La ideología de la revolución. Era, México, 1992. p. 277.

Corrigan, Phill y Derek Sayer. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution, Londres, Basil Blackwell, 1985. pp. 187-188.

Cramaussel, Chantal. "Evolución de las formas de dominio del espacio colonial las haciendas de la región de Parral." en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, Chihuahua, 1990.

Cramaussel, Chantal. Evolución de las formas dominio del espacio colonial. Las haciendas de la región de Parral. Actas del segundo congreso de historia regional comparada, Cd. Juárez, Uacj, 1990.

Domínguez Rascón, Alonso. La política de reforma agraria en Chihuahua, 1920-1924: sus efectos hasta 1940. Plaza y Valdés / INAH, México, 2003.

Fabila, Manuel. Cinco Siglos de Legislación Agraria, 1493-1940. CEHAM / SRA, México, 1990.

Florescano, Enrique y Margarita Menegus. La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808), en Historia General de México, El Colegio de México, México, 2000. pp. 365-372.

Farriss, Nancy. Crown and clergy in colonial Mexico 1759- 1821. The crisis of ecclesiastical privilege. The Athlone press Londres, 1968.

Gerhard, Peter. La frontera norte de Nueva España. UNAM, México, 1996.

Geertz, Clifford. “Descripción densa: hacia una teoría intepretativa de la cultura”, en Bohannan P. Y M. Glazer, Antropología. Lecturas, McGraw-Hill, Madrid, 1992.

Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent. Cultura popular y formación del Estado en el México revolucionario. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002.

Gómez Antillón, Pedro. Crónicas chihuahuenses. México, 1992.

Iglesias, José María. Revistas históricas sobre la intervención francesa en México. t. III, Imprenta del Gobierno, México, 1869.

Katz, Friedrich. Pancho Villa. Era, México, 1998.

Kight, Alan. Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002.

Knowlton, Robert J. El ejido mexicano en el siglo XIX. Historia Mexicana, V. XLVIII, No. 1, julio-septiembre, 1998.

Kuper, Adam. Cultura. La versión de los antropólogos. Paidós, España, 1999.

Lemus García, Raúl. Derecho agrario mexicano, Porrúa, México,1996, p. 74.

Ley Agraria del 6 de Enero de 1915 y el Decreto del 19 de Septiembre de 1916. Imprenta del Gobierno del Estado de Chihuahua. s/f.

Lloyd, Jean-Dale. “Rancheros y revoluciones en el noroeste de Chihuahua.” en, Historia de la cuestión agraria mexicana. Siglo XXI, México, 1988. t. III.

---------- Cinco ensayos sobre cultura material de rancheros y medieros del noroeste de Chihuahua, 1886-1910. Universidad Iberoamericana, México, 2001.

Mallon, Florence. Reflexiones sobre las ruinas: formas cotidianas de formación del estado en el México decimonónico. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002. p. 108.

McCutchen McBride, George. The land systems of Mexico. American Geographical Society, New York, 1923.

Mendieta y Núñez, Lucio. El problema agrario de México. Porrúa, México, 1979.

Meza, Mayra. San José Baqueachi: historia de un ejido tarahumara que se resiste al despojo de sus tierras. ICHICULT / CONACULTA, Chihuahua, 2001.

Navarro García, Luis. Don José de Gálvez y la comandancia general de las provincias internas del norte de Nueva España. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla, 1964.

Nugent, Daniel. Spent cartridges of the revolution. University of Chicago Press, Chicago, 1993.

Nugent y Alonso. Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: Cultura popular y formación del estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua. en, Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002.

Pacheco, Carlos (comp.). Disposiciones sobre designación y fraccionamiento de los ejidos de los pueblos. Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 1889.

Rocha Islas, Martha Eva. Las defensas sociales en Chihuahua. México, INAH, 1988.

Roseberry, William. Hegemonía y lenguaje contencioso. en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002.

Rossi, Ino y Edward O´Higgins. Teorías de la cultura y métodos antropológicos. Anagrama, Barcelona, 1981.

Salcedo, Nemesio. Instrucción reservada de don Nemesio Salcedo y Salcedo comandante general de Provincias Internas a su sucesor. Introducción y notas por Isidro Vizcaya Canales. Centro de Información del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 1990.

Sayer, Derek. Formas cotidianas de formación del estado: algunos comentarios disidentes acerca de la "hegemonía." en, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. Era, México, 2002.

Schmidehaus, Walter. Los menonitas. Cuauhtémoc, Chih., s. e., 1973.

Scott, James. Weapons of the weak. Everyday forms of the peasant resistance. New Haven, Yale University Press, 1985.

Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia. Era, México, 2000.

Simpson, Eyler N. El ejido: única salida para México, en Problemas agrícolas e industriales de México, No. 1, Vol. IV, México, 1952.

Tamayo, Jorge L. Juárez en Chihuahua. S/e, México, 1970.

Thompson, John. Ideología y cultura moderna. UAM-Xochimilco, México, 1994.

Urías Hermosillo, Margarita. Rarámuris en el siglo XVIII. en Derechos culturales y derechos indígenas en la Sierra Tarahumara. UACJ, Cd. Juárez, 1994.

Urquidi, María. "Agustín de Urquidi, un hombre del siglo XVIII en Chihuahua. Semblanza política, económica y social". en Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada. UACJ, Chihuahua, 1990.

Valadés, José C. Historia general de la revolución mexicana. Ediciones Gernika, México, 1985.

Vázquez León, Luis. Ser indio otra vez. La purepechización de los tarascos serranos. CNCA, México, 1992.

Williams, Raymond. Marxismo y literatura. Península, Barcelona, 1980.

Wolf, Eric. Las comunidades corporativas cerradas de campesinos en Mesoamérica y Java central. Nueva Visión, Argentina, 1977.

Wolf, Eric. Una tipología del campesinado latinoamericano. Nueva Visión, Argentina, 1977.

Plano “Que muestra la propiedad privada y ejidal hasta 1971”, director técnico: Jesús Heiras Arzolarza.

Archivos

AHRAN: Archivo Histórico del Registro Agrario Nacional
AHRPP: Archivo Histórico del Registro Público de la Propiedad
AHMJ-FPJ: Archivo Histórico Municipal de Janos – Fondo Presidio de Janos
AHMB: Archivo Histórico Municipal de Batopilas
AHMJ: Archivo Histórico Municipal de Jiménez

Hemerográficas

El Correo de Chihuahua

La Gaceta Municipal
El Republicano
La República

Anexo I. Poblamiento de San Jerónimo

NOMBRE	PROCEDENCIA	EXTENSIÓN	RANGO MILITAR
Don Miguel Molinares	Natural del Valle de San Bartolomé.	60 varas por cada viento. Rancho o casa que tenia hecha antes de que se le hiciese el repartimiento como vecino.	
Don Miguel González de la Rosa.	Natural de Conchos.	60 varas por cada viento.	Capitán del cuerpo de Dragones Provinciales del Príncipe.
Don Andrés Peñaloza	Natural de Guimilpa Jurisdicción de Querétaro.	60 varas por cada viento.	

Don Gregorio del Campo	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 60 de fondo	
Antonio Molinares	Natural del Valle de San Bartolomé	30 varas de frente y 60 de fondo	
Don Pedro Massias	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 60 de fondo	
Rafael Carreon	Natural de Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
Francisco Espinoza	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 60 varas de fondo	
Antonio Fernández	Natural del Valle de San Bartolomé	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
Polonio Cepeda	Natural del Puerto de Santa Anna	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
Don Felipe Martínez Fernández	Natural de la Ciudad de Burgos en Castilla	30 varas de frente y 60 de fondo	
Francisco Molinares	Natural de Villa de San Bartolomé	30 varas de frente y 60 varas de fondo	
José Antonio Rubialcava	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
Juan González	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
Don Francisco Culevra	Natural de asqueña en los Reinos de Castilla.	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
José Maria Rubialcava	Natural de San Jerónimo.	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	

Baltasar Torres	Natural de Santa Anna	30 varas de frente y 60 varas de fondo.	
Don Francisco Fernández	Natural de la Villa de LLanes del Principado de Asturias en los Reinos de Castilla	30 varas de frente y 30 varas de fondo.	
Don Juan de Puertas	Natural de Caloveño, Consejo de la Villa de Llanes del Principado de Asturias en los Reinos de Castilla	30 varas de frente y 30 varas de fondo.	
Don Miguel Rey	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Don Francisco Sánchez Dozal (No lo aceptó, se le dio el terreno al Sr. Carlos Porras)	Natural de la Villa de Valparaíso	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Vicente Lechuga	Natural de Babonoyaba Jurisdicción de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Cayetano Rico	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo.	
Gregorio Soto	Natural de Conchos	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Don Atanasio Oyaca	Natural de Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Nicolás Caravajal	Natural de Santa Isabel	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
José Vejarano	Natural del Rancho de Laxas	30 varas de frente y 30 varas de fondo	

Mateo Esparza	Natural del Valle de San Buenaventura	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Livorio Pineda	Natural de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Marcelo Rubialcava	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Paula Rubialcava	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Facundo Grijalva	Natural de San Antonio de Julimes	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Bernardo Rangel	Natural de San Antonio de Julimes	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Pablo Rubialcava	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Joaquín Ortega	Natural de Tabalopa Jurisdicción de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Lucas Lemus	Natural de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Vicente García	Natural de Julimes	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Juan Graviel Orrantia	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Pedro Peñalosa	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Don Miguel Robles (No acepto el	Natural de la Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	

terreno)			
Francisco Molinar	Natural del Valle de San Bartolomé	60 varas de frente y 30 varas de fondo	
Ysidro Zambrano	Natural de Santiago Papasquiaro	60 varas de frente y 30 varas de fondo	
Felipe López	Natural de la Villa de Chihuahua	60 varas de frente y 30 varas de fondo	
Luciano Fernández	Natural de San Geronimo	60 varas de frente y 30 varas de fondo	
Don Albino Peñasola	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Juan Fraire (No lo acepto, se le dio el terreno al Sr. Ramón Acosta)	Natural de Chihuahua	35 varas de frente y 60 de fondo Un pedazo de tierra de100 varas por cada viento, y agua necesaria para hacer una huerta.	
Matías Rubialcava	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
José Herrera	Natural de San Geronimo	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Don Francisco del Toro (No lo acepto, se le dio el terreno al Sr.Juan Ignacio Porras)	Natural de la Villa de San Miguel el Grande	30 varas de frente y 60 varas de fondo	
Ramón Acosta	Natural de la Villa de Chihuahua	35 varas de frente y 60 de fondo Un pedazo de tierra de100 varas	

		por cada viento, y agua necesaria para hacer una huerta.	
José Manuel Peres	Natural del Real de Ynde	60 varas de frente y 30 varas de fondo	
Carlos Porras	Natural de Villa de Chihuahua	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Gervasio Molinares	Natural del Valle de San Bartolomé	60 varas de frente y 30 varas de fondo	
Juan Ignacio Porras	Natural de Julimes	30 varas de frente y 60 varas de fondo	
Rita Carrasco	Natural del Valle de San Bartolomé	30 varas de frente y 30 varas de fondo	
Iglesia y Casa del Cura		Manzana de 60 varas de frente por cada viento para que se fabrique dicha iglesia y casa cuya manzana esta situada en la plaza en el frente que mira al sur, siendo sus linderos por los 4 vientos en las calles publicas de esta villa.	
Nuevas Colonias	Varios indios y otras castas, que estaban presos	2 manzanas de 60 varas cada una por cada viento.	
Plano de una cuadra en escala mayor	2 familias de indios	2 casas situadas en un ángulo de una cuadra.	
Don Miguel Molinares	Natural del Valle de San Bartolomé	6 suertes de tierra, señaladas con los No 41,42,43,44,45,46	

		y 47	
Don Miguel González de la Rosa	Natural de Conchos	6 suertes de tierra, señaladas con los No 50,51,52,54,55 y 56	Capitán del Cuerpo de Dragones Provinciales del Príncipe.
Don Luciano González	Natural de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra, señalada con el No 80	Alferes del Cuerpo de Dragones Provinciales del Príncipe
Don Andrés Peñalosa	Natural de Guimilpa, Jurisdicción de Querétaro	2 suertes de tierra, señaladas con los No 6 y 64	
Don Gregorio del Campo	Natural del Valle de San Bartolomé	3 suertes de tierra, señaladas con los No 30,33 y 34	
Don Pedro Masias	Natural de la Villa de Chihuahua	2 suertes, señaladas con los No 31 y 32	
Rafael Correón	Natural de la Villa de Chihuahua	2 suertes de tierra, señaladas con ,los No 61 y 62	
Francisco Espinosa	Natural de Santa Rosa de Cusiguriachic	1 suerte de tierra, señalada con el No 21	
Antonio Fernández	Natural del Valle de San Bartolomé	2 suertes de tierra, señaladas con los No 36 y 85	
Polonio Cepeda	Natural del Puerto de Santa Anna	1 suerte de tierra, señalada con el No 59	
Francisco Molinares	Natural del Valle de San Bartolomé	2 suertes de tierra, señaladas con los No 44 y 48	
José Antonio Rubialcava	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra, señalada con el No 28	
Juan Gonzales	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra, señalada con el No 8	
Don Francisco	Natural de	2 suertes de tierra,	

Culebra	Asqueña en los Reinos de Castilla	señaladas con los No 89 y 90	
José Maria Rubialcava	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra, señalada con el No 12	
Baltasar Torres	Natural de Santa Anna	2 suertes de tierra, señaladas con los No 35 y 91	
Don Francisco Fernández	Natural de la Villa de Llanes del Principado de Asturias, en los Reinos de Castilla	6 Suertes de tierra, señaladas con los No 65,66,67,68,69 y a mas el pedazo de tierra que hay de la No 67 hasta el rió	
Don Juan Puertas	Natural de Calduelo, Cencejo de la Villa de Llanes, del Principado de Asturias, en los Reinos de Castilla.	6 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 70,71,72,73,74 y 75	
Don Miguel Rey	Natural de la Villa de Chihuahua	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 22 y26	
Don Francisco Sánchez Dozal (No acepto, se le dio el terreno al Sr. Don Francisco Fernández)	Natural del Valle de Valparaíso	1 suerte de n tierra de riego, señalada con el No 81	
Cayetano Rico	Natural den la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 9	
Gregorio Soto	Natural de Conchos	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 5	
Don Atanasio Oyaca	Natural de la Villa de Chihuahua	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los	

		No 49 y 53	
José Vejarano	Natural de Laxas	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 19	
Mateo Esparza	Natural de San Buenaventura	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 20	
Liborio Pineda	Natural de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 11	
Marcelo Rubialcava	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 7	
Paula Rubialcava	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 84	
Facundo Grijalva	Natural de San Antonio de Julimes.	1 suerte de tierra para riego, señalada con el No 40	
Bernardo Rengel	Natural de San Antonio de Julimes	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 13	
Pablo Rubialcava	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 24	
Joaquín Ortega	Natural de Tabalaopa, Jurisdicción de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 23	
Lucas Lemus	Natural de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 17	
Vicente García	Natural de San Antonio de Julimes	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 16	
José Gabriel Orrantia	Natural de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 88	
Pedro Peñalosa	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 60	

Don Miguel Robles (No acepto, se le entrego el terreno al Sr. Vicente Lechuga)	Natural de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con le No 29	
Francisco Molina	Natural del Valle de San Bartolomé	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 27	
Ysidro Zambrano	Natural de Santiago Papasquiaro	2 suertes de tierra de riego, señalada con los No 57 y 58	
Felipe López	Natural de San Geronimo	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 38 y 39	
Luciano Fernández	Natural de San Geronimo	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 37	
Don Albino Peñalosa	Natural de San Geronimo	2 suerte de tierra de riego, señalada con los No 10 y 63	
Juan Fraire (No acepto, se le dio el terreno al Sr. Ramón Acosta)	Natural de Chihuahua	4 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 76,77,78 y 79	
Propios de la Villa	Fondos para propios de la Villa	4 suertes de tierra de riego de 400 varas de largo y 200 de ancho, cada una, y estan señaladas con los No 1,2,3 y 4	
Párroco que administre y viva en la Villa		2 suertes de tierra de riego, de 400 varas de largo y 200 de ancho c/u y señaladas con los No 86 87	
Don Francisco del Toro (No acepto las	Natural de la Villa de San Miguel el Grande	4 suertes de tierra de riego, señaladas con los	

tierras)		No 92,93,94y 95	
Ramón Acosta	Natural de la villa de Chihuahua	4 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 76,77,78y 79	
José Manuel Pérez	Natural del Real de Ynde	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 14 y 25	
Don Felipe Martínez Fernández	Natural de la Cd. De Burgos en Castilla	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 15 y 18	
Carlos Porras	Natural de la Villa de Chihuahua	1 suerte de tierra de riego, señalada con el No 81	
Don Francisco Fernández	Poblador de esta Nueva Villa de San Geronimo	6 suertes de tierra de temporal	
Don Juan de Puertas	Poblador de esta nueva Villa de San Geronimo	6 suertes de tierra de temporal.	
Vicente Lechuga	Natural de Babonogava Jurisdicción de Chihuahua	1 suerte de tierra d riego, señalada con el No 29	
Gervasio Molinares	Natural del Valle de San Bartolomé	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 94 y 95	
Juan Ignacio Porras	Natural de Julimes	2 suertes de tierra de riego, señaladas con los No 92 y 93	
40 Indios de San Geronimo	San Geronimo y Santa Anna	A cada uno de los dichos 40 individuos di un pedazo de tierra de riego, de 300 varas de largo y 150 de ancho	
Hermanos Carrizos y mas	Villa de San Geronimo	Pedazo de tierra de 600 varas de	

		largo y 300 de ancho, (señalamos oto pedazo de 1000 varas de largo y 500 de ancho para que siembren la comunidad los 28 individuos restantes)	